Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Doctorado en Desarrollo Rural

La disputa por el territorio comunitario y sus bienes comunes en la Costa Montaña de Guerrero

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

DOCTOR EN DESARROLLO RURAL

PRESENTA:

M.C. ALFREDO MÉNDEZ BAHENA

DIRECTOR: DR. CARLOS CORTÉZ RUÍZ

CIUDAD DE MÉXICO **ENERO DE 2018**

Agradecimientos

Quiero empezar agradeciendo a las autoridades y líderes comunitarios de la Montaña, a quienes les tocó parir y fortalecer el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y cuyo esfuerzo fue fundamental para resguardar el territorio en manos de las comunidades: Teodoro Tomás y Tomas García (Iliatenco), Inocencio Navarro, Taurino Carrasco y Sebastián Ramírez (Malinaltepec), Apolonio Cruz (Santa Cruz del Rincón), Maurina Cantú y Saúl Morán (La Ciénega), Agapito Cantú (San Miguel Del Progreso), Samuel Arriaga y Simeón Arriaga (San José Vista Hermosa), José López (Paraje Montero) y Pedro Galeana (Pueblo Hidalgo), Cirino Plácido Valerio (Buenavista), Melitón Santillán Cantú y Francisco Javier Sánchez Cruz, párrocos de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlapa.

A todos los compañeros con quienes compartimos estos años de trabajo y acompañamiento: Lucio Díaz, Rosa Isela Méndez, Anna Domínguez, Graciela López, Luis Fernando Pérez, Nicefora Olibera, Alfonso Nava, Hermelindo Álvarez, Tranquilina Morales, Alí Aguilera, Manuel López, Silvia Carbone, Ana Nahmad, Jesús Espinobarros, Fermín Espíndola, Fátima Espinobarros, Saturnino Agustín, Alejandro Candia, Araceli Sierra, Caritina Castro, Marcelino Galeana (de lo que alguna fue la Unisur), Miguel Mijangos y Armando Campos (Tlachinollan), Luisa Guzmán y Zarel León (Centro de Estudios Ecuménicos), e Iván Oropeza (UIEG-IMA).

Obviamente este tipo de esfuerzos siempre son colectivos y requiere de un soporte emocional y valoral. Por no dejar de impulsarme agradezco infinitamente a mi familia en Chilpancingo: Gilita, Rosi y Lovani, Araceli, Carlos y Karla, Norma y Liber, Alberto y Alejandra, Gina, José Luis, Diana, Alba y Laura; mi familia en CDMX: Anna y Tamara, Benjamín, Gina, Omar y Marco; y mi familia en el Rincón: Cata, Apolonio, Luz, Narce, Conchis y Chico.

Agradezco a Carlos Cortéz por haber aceptado acompañar esta investigación, por sus consejos y orientaciones. A mis sinodales Carlos Rodríguez, Miguel Meza y Gabriela Contreras por sus comentarios y aportaciones. Agradezco particularmente a Luisa Paré, con quien además de compartir otras luchas, desde el primer momento me demostró gran interés por el trabajo y cuyos consejos fueron por demás valiosos.

A lo largo de estos años diversas personas acompañaron el proceso, leyendo los avances, acercando materiales, discutiendo conmigo: Anna Domínguez, Benjamín Méndez, Norma Elena Méndez, Esperanza Ignacio, Guadalupe Sauceda, Manuel Espinoza, Adriana Lozano, Antoine Libert, Saúl Ángel. Valoro mucho el apoyo de Elizabeth Díaz, Carmen Xochitla, Zitlali Solano y Luis Fernando Pérez para la realización de los mapas que aquí se presentan.

Particularmente quiero agradecer a Apolonio Cruz Rosas y Cirino Plácido Valerio, personajes centrales para entender la Montaña y los procesos que ahí ocurren, por las largas horas de reflexión en las que con mucha paciencia compartieron su sabiduría y experiencia.

Agradezco mucho a mis colegas y grandes amigos Francisco Maradiaga, Elizabeth Beltrán, Germán Urbán, Carlos Almazán, Rosa Isela Méndez, Eugenia Flores y Amalia Vences por su apoyo. Haber podido realizar este trabajo sin gozar de descarga laboral no hubiera sido posible sin su ayuda desinteresada y solidaria.

Finalmente, quiero reconocer al colectivo de profesores del posgrado en Desarrollo Rural y al colectivo de la 7ª generación del doctorado. Las experiencias compartidas y las largas sesiones de discusión enriquecieron mucho mi formación.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 1
INTRODUCCIÓN. LA DISPUTA POR EL TERRITORIO EN LA COSTA – MONTAÑA DE GUERRERO 4
Planteamiento del Problema 5
Metodología 11

PRIMERA PARTE. LA COSTA MONTAÑA: UNA LARGA HISTORIA DE ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA 17

CAPÍTULO 1. LA COSTA MONTAÑA: UNA LARGA HISTORIA DE ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA 18
Antecedentes de la lucha social en la región 22
El movimiento indígena 24
La lucha por el proyecto comunitario 27
La lucha por el proyecto educativo 30
El Consejo de Autoridades por la Paz y la Reconciliación 35
El territorio regional 36
Población y Condiciones Socioeconómicas 41
Tenencia de la tierra y Sistemas productivos 46

SEGUNDA PARTE. CONSERVACIONISMO Y EXTRACTIVISMO MINERO: DOS PROYECTOS DE DESPOJO 52

CAPÍTULO 2. EMPRESAS MINERAS VS PUEBLOS INDÍGENAS. LA DISPUTA LOCAL EN UNA GUERRA GLOBAL POR EL TERRITORIO 53
Extractivismo, el colonialismo del Siglo XXI 53
Recursos estratégicos 57
Manual para facilitar la entrada de la gran minería trasnacional 63
Primer paso: Elimine obstáculos en el marco legal 64
Ley Agraria 66
Ley Minera 70
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 74
Ley de Aguas Nacionales 76
Segundo Paso: Restrinja los derechos agrarios 78
Las áreas voluntarias para la conservación 79
El proyecto de Reserva de Biósfera 85
Tercer Paso: Debilite la organización comunitaria 96
La ruptura en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias 97
La UNISUR y la UIEG 104
El control militar 107

TERCERA PARTE. . LA DEFENSA DEL TERRITORIO COMUNITARIO Y SU PROYECTO DE VIDA 114
CAPÍTULO 3. EL INICIO DE LA MOVILIZACIÓN 115
Introducción 115
La reserva de biosfera y las concesiones mineras: detonante de la movilización 116
Los actores sociales en la conformación del Consejo Regional de Autoridades Agrarias 123

CAPÍTULO 4. LA FORMACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO 131
Los Foros Regionales en Defensa del Territorio 134
El significado de los Foros Regionales 159
CAPÍTULO 5. LA DEFENSA DEL TERRITORIO COMUNITARIO 167
La defensa legal 173
El proceso contra las concesiones mineras 173
El proceso contra la Reserva de la Biosfera 178
La defensa política 180
Balance de los logros 187
CAPÍTULO 6. HACIA UN PROYECTO COMUNITARIO DE FUTURO 193
La visión a ras de suelo: la restitución del derecho colectivo y la defensa del territorio 194
La dimensión ambiental-territorial dentro del proyecto comunitario 197
Los primeros pasos para un Proyecto regional de manejo y conservación comunitaria 200
Propuestas para fortalecer un buen manejo de los bienes comunes 207
CONCLUSIONES 214
REFERENCIAS 222
Fuentes Bibliográficas 222
Fuentes Hemerográficas 229
Fuentes Documentales 230
Entrevistas 232
Fuentes Electrónicas 233
ANEXOS 235
Anexo 1. Declaración de Cochoapa el Grande 235
Anexo 2. Boletín de Prensa CRAADT. Abril 2013 238
Anexo 3. Respuesta de la CONANP a la Declaración de Cochoapa 241
Anexo 4. Respuesta de la Secretaría de Economía a la Declaración de Cochoapa 244
Anexo 5. Comunicado de Prensa CRAADT. Agosto de 2014 246
Anexo 6. Declaración de San José Vista Hermosa 248

Índice de Mapas, Cuadros y Figuras

MAPAS

Mapa 1. Polígono del proyecto Reserva de la Biósfera de la Montaña 7
Mapa 2. División regional y municipal del estado de Guerrero 18
Mapa 3. Ubicación de la Costa – Montaña en el estado de Guerrero 20
Mapa 4. Municipios y núcleos agrarios considerados en el estudio 21
Mapa 5. Hipsometría de la región Costa Montaña 37
Mapa 6. Hidrología en la Costa Montaña 38
Mapa 7. Vegetación y uso del suelo en la Costa Montaña 39
Mapa 8. Porcentaje de población en situación de pobreza por entidad federativa 43
Mapa 9. Población en situación de pobreza por municipio 45
Mapa 10. Población en situación de pobreza extrema por municipio 45
Mapa 11. Tenencia de la tierra en la Costa Montaña 50
Mapa 12. Geopolítica de la minería en la Montaña de Guerrero 59

CUADROS

Cuadro 1. Población regional según el censo de 2010 42
Cuadro 2. Distribución de la población por su condición de pobreza por entidad 43
Cuadro 3. Servicios disponibles en las viviendas de la Costa Montaña 44
Cuadro 4. Principales minas en explotación de minerales metálicos en Gro. 60
Cuadro 5. Volumen de la producción de minerales metálicos en Guerrero 61
Cuadro 6. Concesiones mineras en la Costa Montaña de Guerrero 61
Cuadro 7. Predios certificados entre 2007 y 2011 por CONANP como AVDC 83
Cuadro 8. Integración de la primera mesa directiva del CRAADT 138
Cuadro 9. Actas de rechazo a la minería y la reserva de la biosfera 174

FIGURAS

Figura 1. Panorámica desde la parte alta de la Montaña 17
Figura 2. Derrumbe en la carretera federal Tlapa - Marquelia 19
Figura 3. Restricciones al uso de RN vinculadas con PSA 40
Figura 4. Crecimiento poblacional por municipio en la Costa Montaña 42
Figura 5. Bosques de Pino-Encino en la parte alta de la Montaña 52
Figura 6. Visita de autoridades agrarias a la minera de Carrizalillo 111
Figura 7. Foro Regional en Defensa del Territorio, Colombia de Guadalupe 114
Figura 8. Manta de bienvenida al primer Foro en Defensa del Territorio 137
Figura 9. Toma de protesta a la Mesa Directiva del CRAADT 139
Figura 10. Foro Regional en Defensa del Territorio, San José Vista Hermosa 166
Figura 11. El problema de la estrategia política 188
Figura 12. Toma de acuerdos el Foro en Defensa del Territorio en La Ciénega 192
Figura 13. Vivero de UNISUR para el Festival del Árbol, el Agua y la Vida Comunitaria 204
Figura 14. Presentación de la propuesta agroecológica de la UNISUR a las autoridades agrarias en el Foro de San José Vista Hermosa 205

PRESENTACIÓN

El estado de Guerrero se encuentra inmerso en una coyuntura sumamente compleja y convulsionada, caracterizada por un notable dinamismo en los procesos sociales. En ese contexto, algunos de estos procesos sociales tienen su origen en conflictos de tipo socioambiental y territorial, originados por proyectos de naturaleza neoextractivista que, al privilegiar intereses externos (privados o públicos) atentan contra los derechos de las comunidades dueñas de los territorios en disputa. Algunos de los casos más emblemáticos al respecto son las explotaciones mineras de Carrizalillo y Media Luna (en operación), la construcción de la presa La Parota (suspendido), el proyecto minero Corazón de Tinieblas (suspendido) y el intento por decretar la reserva de la biosfera de la Montaña (RBM) (cancelado).

La presente investigación se refiere precisamente a estos últimos dos casos, pues como se mostrará además de haberse proyectado sobre el mismo territorio, están muy relacionados. Ambos proyectos tienen al despojo como elemento común; uno para favorecer el interés privado (expresado en las concesiones mineras) y el otro, un supuesto interés público conservacionista (expresado en el proyecto RBM). Ambos proyectos intentaron pasar sobre el interés social de las comunidades y sus derechos agrarios y como pueblos indígenas, por lo que la población respondió con un amplio movimiento por la defensa de su territorio. La idea del estudio es justamente analizar el conflicto que surge ante proyectos antagónicos que buscan concretarse en un mismo territorio, entender ambas posturas, sus enfoques y actores involucrados en cada uno.

En la introducción se explicita el proceso de construcción metodológica, desde la construcción del problema de investigación, su delimitación y definición de objetivos, hasta el diseño metodológico.

La primera parte presenta un rápido recorrido por la región, para conocer la diversidad de actores involucrados, así como el complejo contexto social, cultural y biofísico que caracteriza a la región. Inicia con un breve recuento de la historia reciente en la región que permita captar la historicidad de la coyuntura a estudiar. Posteriormente se describen las principales riquezas naturales para entender el papel estratégico de la región y los intereses que provoca la apropiación de este territorio. Esta información será un referente fundamental para entender los dos capítulos subsiguientes, en los cuales se explicita la

naturaleza, los actores y mecanismos de acción de dos modelos de desarrollo contrapuestos, que se disputan el territorio de la Costa Montaña.

Teniendo como escenario el contexto regional, la segunda parte se dedica a explicar la lógica, operación y consecuencias de esta nueva fase del capitalismo conocida como extractivismo imperialista, y la forma en que se expresa en México y, con más detalle, en la Montaña de Guerrero. Se analizan algunos proyectos enarbolados desde agencias multilaterales, dependencias de gobierno y/o empresas privadas, que desde el discurso de incorporar la región al desarrollo estatal y nacional, promueven iniciativas injerencistas encaminadas a explotar y expoliar los recursos hídricos, mineros y de paisaje, así como la mano de obra de la población local.

Se trabaja con la idea de que existe una estrategia nacional, en este caso expresada en la Costa Montaña, para facilitar los procesos de despojo y de acumulación del capital. Dicha estrategia considera tres obstáculos a vencer por las empresas: el marco legal, los derechos agrarios sobre la tierra, y la organización comunitaria. Para cada uno se describe cómo ha operado y se analizan sus consecuencias.

La tercera y última parte está destinada a expresar la voz de las comunidades indígenas de la región, describiendo su modo de vida y aspiraciones, entendiendo sus formas de organización y las tensiones que existen a su interior, pero sobre todo cómo la reacción defensiva frente al intento de despojo se ha convertido en un movimiento social. Por ello se analiza como la identidad y los procesos organizativos previos fueron fundamentales para su surgimiento y, enseguida se analizan las dificultades para mantenerse funcionando como movimiento.

Se hace un esfuerzo por sistematizar lo que en diversos espacios regionales se menciona como el proyecto comunitario de desarrollo, para entender por qué y cómo se defiende el territorio como espacio fundamental para su reproducción social. Hacia el final se examina críticamente la estrategia política y jurídica adoptada, en función de su efectividad para salvaguardar el territorio y para fortalecer el tejido intercomunitario.

Se intenta plasmar con el mayor detalle posible la tensión que genera la existencia de dos proyectos distintos y contrapuestos de desarrollo para la región, explicitando los mecanismos a través de los cuales se disputa el control ideológico y político de la región.

Finalmente, se arriba a los aprendizajes sobre el proceso. Dado que en la coyuntura actual, somos testigos de la gestación de una nueva institución de carácter regional, que pretende llenar el hueco que no cubren las instituciones locales ni regionales existentes, en la defensa de los territorios comunitarios.

La participación a lo largo de este tiempo, permitió documentar y estudiar la conformación del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, y pretende aportar elementos para: a) comprender hasta donde el Consejo se constituye en una institución capaz de enarbolar la lucha por la autodeterminación de los pueblos, frente a proyectos hegemónicos que buscan anteponer intereses externos, restringiendo sus derechos ancestrales de uso y disfrute del territorio y sus recursos; b) promover a través de una serie de acciones la prevalencia de una visión del territorio y sus recursos como bienes de uso común; c) analizar la complementariedad o antagonismo que pueda ofrecer este Consejo Regional respecto de las instituciones de escala local (comunitaria), como lo son las comisarías agrarias, en la promoción de una visión que desde la lógica de bienes comunes, promueva la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro del territorio comunitario.

Siendo ésta una lucha que se libra en numerosos escenarios de México y el mundo, ha sido relevante participar en el proceso, ayudar a sistematizar la experiencia para reflexionar colectivamente sobre los aprendizajes necesarios que puedan quedar no sólo para la región, sino para comunidades de otras latitudes que enfrentan coyunturas similares.

INTRODUCCIÓN. LA DISPUTA POR EL TERRITORIO EN LA COSTA – MONTAÑA DE GUERRERO

La región conocida como la Costa Montaña no corresponde con ninguna de las regiones administrativas formalmente reconocidas en el estado de Guerrero. Se trata de un espacio construido y referido por la propia gente, que sin tener límites precisos resulta importante como referente identitario; normalmente su uso refiere a la serranía y lomeríos de la vertiente Pacífico de la Sierra Madre del Sur, que es el territorio de los pueblos *Me'phaá* (Tlapaneco) y *Na savi* (Mixteco). Con la denominación Costa – Montaña, en esta investigación me referiré particularmente al territorio integrado por los municipios de Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Ayutla, Cochoapa, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas.

Esta región, que será examinada en el primer capítulo, históricamente ha sido uno de los puntos menos comunicados de la geografía guerrerense, como se mostrará en los mapas correspondientes, lo cual ha influido de forma importante en delinear su estado actual: constituye el asentamiento más importante de población indígena en la entidad[1], existe una importante riqueza de recursos naturales sin explotar e, incluso, sin explorar aún (Méndez *et al*., 2009), y su población presenta los índices de desarrollo humano más bajos de todo el país.

En este escenario, el momento actual parece estar marcado por proyectos contradictorios e incluso antagónicos. Por un lado, diversos actores externos –sobre todo gubernamentales- vienen planteando desde hace algunos años la *deuda histórica* con la población indígena, y con ello justifican proyectos injerencistas encaminados a explotar y expoliar los recursos hídricos, mineros y de paisaje, disfrazados bajo un discurso de incorporar la región al desarrollo estatal y nacional.

En el lado contrario, las comunidades indígenas en la Costa Montaña del estado de Guerrero han sido actores de diversos proyectos encaminados a atender la diversidad de problemas y necesidades que enfrentan cotidianamente. Desde los años noventa, estas comunidades indígenas han sido participes en la construcción de instituciones y proyectos regionales para el desarrollo de infraestructura, para procurar la seguridad y la justicia

[1] Según los datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), estos 10 municipios concentran el 33.4% de la población indígena del estado de Guerrero.

para la población, para acercar oferta educativa o bien para proteger su territorio frente a la delincuencia organizada (Flores, 2007; Flores y Méndez, 2012; Sierra, 2013; Domínguez, 2015; Méndez *et al*., 2015). Todas estas iniciativas dan cuenta de una intensa organización comunitaria que desde la fortaleza de sus instituciones locales exploran una diversidad de opciones para enfrentar de forma creativa y autogestiva la compleja situación que vive la región.

La más reciente de estas iniciativas es el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que nace en octubre de 2012 en respuesta a la iniciativa de los gobiernos estatal y federal por decretar una reserva de la biosfera, restringiendo su autodeterminación sobre el territorio, como se mostrará en el capítulo 2. Esta situación ha sido interpretada como de cierta gravedad, toda vez que las comunidades resisten desde hace varios años, la presión de empresas mineras por autorizar la explotación a cielo abierto de diversos minerales metálicos, principalmente oro y plata.

Esta instancia regional, está generando las condiciones para impulsar iniciativas encaminadas a la defensa de los territorios comunitarios frente a una serie de amenazas externas y replantear su gestión con una visión de largo plazo. No debemos olvidar que, como afirma Mançano (2009) ninguna clase social se realiza en el territorio de otra, los territorios indígenas, los territorios del gobierno y los del capital son diferentes, promueven modelos diferentes de desarrollo y, por ende, establecen relaciones sociales también distintas. Este es el origen de la disputa territorial en la Costa Montaña.

A continuación se aborda la construcción metodológica de la investigación, desde el planteamiento y delimitación del problema, la definición de los objetivos, hasta el diseño de la metodología que será empleada en los diferentes momentos de este trabajo.

Planteamiento del Problema

La Costa Montaña de Guerrero constituye un área estratégica en la geopolítica de los recursos naturales. Su notable riqueza de recursos hídricos, maderables, mineros y de biodiversidad (Méndez *et al.*, 2009), la hacen un botín apetitoso para diferentes empresas e instituciones de gobierno. Por ello, no es de extrañar que en la región confluya una miríada de actores de distinta naturaleza y con intereses muy disímiles.

Desde hace varios años empresas mineras canadienses han buscado entrar a la zona y hacer válidas las concesiones otorgadas por el gobierno federal para aprovechar oro y plata, entre otros minerales (Ramírez, 2013). Hace algunos años, el núcleo agrario de Paraje Montero (municipio de Malinaltepec) otorgó un permiso para la exploración

minera en el proyecto conocido como "Corazón de tinieblas", decisión que fue cuestionada por el resto de núcleos agrarios de la región que, a través de sus autoridades comunitarias han presentado una fuerte resistencia a permitir la entrada a la actividad minera. Las asambleas informativas en sus pueblos, la movilización, la denuncia en la prensa y el acercamiento con otras comunidades afectadas por la minería, han sido parte de la estrategia de resistencia.

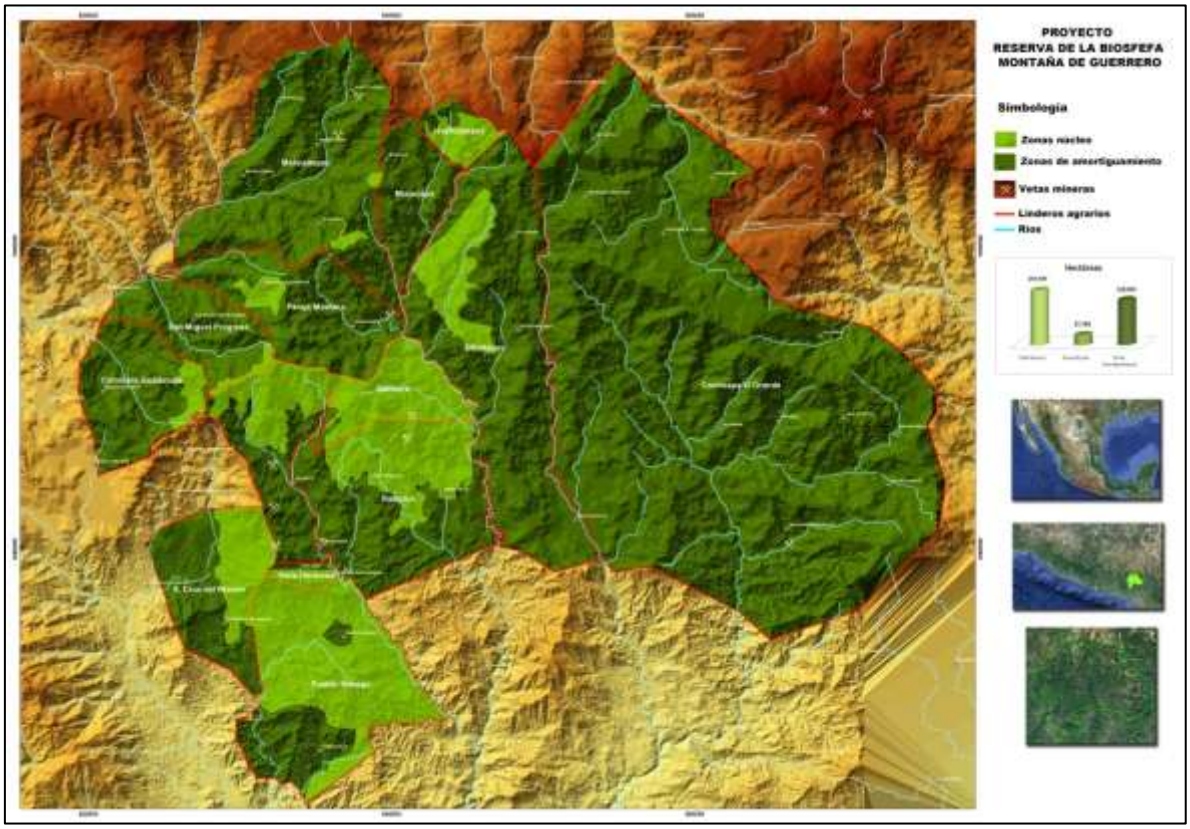
En el caso concreto de la Montaña de Guerrero, el interés por establecer proyectos de minería a cielo abierto constituye un referente obligado para analizar la actuación de un intrincado complejo de actores (empresas trasnacionales, agencias multilaterales, dependencias de gobierno e individuos, supeditados a la lógica del mercado global) y una red de complicidades a lo largo de los últimos años. Sin este referente, las acciones parecen inconexas, incluso fortuitas, pero articulados en torno a este proyecto hegemónico, es posible entender y evidenciar su organicidad.

Sin embargo, los proyectos mineros encontraron en la región la resistencia de las comunidades, amparadas en la propiedad social de la tierra y haciendo uso de formas de organización comunitaria ya ensayadas previamente. Siendo la minería a cielo abierto uno de los grandes negocios mundiales de la actualidad, y conociendo la riqueza de las reservas en oro y plata que existen en la Montaña[2], no es de extrañar que se articulen acciones diversas y que desde el poder se pongan en juego nuevas trampas y mecanismos de despojo, que buscan enajenar por medio de decretos, certificaciones, concesiones y dependencia tecnológica o monetaria. Se recurre a programas de gobierno con intenciones no explícitas, que imponen áreas naturales protegidas, que ofrecen subsidios que comprometen la gobernabilidad y posesión de los territorios al otorgar de *facto* derechos a dependencias o empresas (De Ita *et al*., 2012), promueven el abandono del cultivo de granos básicos por productos agroforestales a través de la llamada *reconversión productiva*, imposición de esquemas de uso de la tierra que restringen las formas tradicionales de manejo campesino, entre muchos otros. Todos estos programas ponen en peligro la autodeterminación de los pueblos y su soberanía alimentaria.

Algunos de los programas que más claramente amenazaron el territorio comunitario, fueron los de corte conservacionista impulsados de forma combinada por la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado (SEMAREN), que luego de años promoviendo Áreas Voluntarias para la Conservación (AVDC) y Pago por Servicios Ambientales (PSA), dieron a conocer su

[2] La empresa Vedome Resources Corp., en su página web presenta un informe donde detalla la riqueza mineral de la región: www.vedomeresourcescorp.com/

intención de establecer la Reserva de la Biósfera de la Montaña Alta de Guerrero. El proyecto incluye 13 núcleos agrarios (ninguno de los cuales había sido consultado) y abarca un total de 157,707 ha (de las cuales 27,784 ha corresponderían a áreas núcleo y 129,923 ha a áreas de amortiguamiento) (CONANP, 2012).



Mapa 1. Polígono del proyecto Reserva de la Biósfera de la Montaña. Fuente: Tlachinollan.

La información sobre el proyecto trascendió en septiembre de 2012 con la firma de un convenio entre CONANP, SEMAREN y la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero "Ignacio Manuel Altamirano" (UIEG-IMA), provocando un malestar generalizado, movilizó a la población y llevó a conformar el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, instancia que asume su responsabilidad como conjunto de autoridades agrarias y, por ende, responsables de salvaguardar los territorios de sus respectivas comunidades.

Es así como inician una serie de Foros (Ferrer, 2012a) que, convocados por este Consejo, de forma itinerante en diferentes comunidades de la región, abrieron la discusión sobre el proyecto gubernamental de decreto y sus implicaciones para los núcleos agrarios involucrados. Después de intensas discusiones en estos foros regionales, de consultar a las respectivas asambleas comunitarias y regresar a los foros a fijar la posición de cada núcleo

agrario[3], se llega al punto de acordar de forma unánime el rechazo al proyecto de decreto, de formalizar dicho rechazo ante la autoridad federal agraria y delinear mecanismos de resistencia para impedir que el gobierno ejecute el acto de autoridad (Ferrer, 2012b). Entre los principales motivos para el rechazo estuvo el análisis detallado del marco jurídico, que permitió detectar que ciertos resquicios en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas (ANP) abren la puerta a las empresas mineras eludiendo la autoridad agraria de la comunidad, al otorgar facultades a un director de la reserva, nombrado por el gobierno federal[4].

De manera paralela a la discusión cuyo inicio fue la defensa del territorio, se empezó a definir que el objetivo central es la reflexión y definición de lo que se ha llamado el *proyecto comunitario*, es decir, una propuesta de desarrollo para las comunidades indígenas en el contexto del siglo XXI que se ha venido impulsando y delineando hace dos décadas. Dentro de ello, se fueron perfilando eje de reflexión en torno la necesidad de definir e impulsar conjuntamente, una estrategia comunitaria de conservación y manejo sustentable de los territorios comunitarios y sus recursos naturales[5], pero también la definición de un modelo educativo capaz de potenciar la cultura y visión de los pueblos de la Montaña.

A través de las asambleas en diferentes núcleos agrarios y de los propios foros regionales, se han venido expresando necesidades, problemas y preocupaciones relacionadas con la protección de sus territorios frente a intereses externos y la conservación de los recursos naturales como forma de garantizar condiciones para la reproducción social de las comunidades indígenas y su existencia a largo plazo.

Es así como se va definiendo un escenario de disputa territorial, que en el fondo es la larga batalla entre el modelo hegemónico impulsado en un lado por el gobierno y las empresas trasnacionales, que se orienta a la reproducción del capital, y en el otro lado el estilo de vida indígena y campesino que busca la reproducción social de las comunidades, que les garantice su permanencia y viabilidad como pueblos.

---

[3] Acta del Tercer Foro en Defensa del Territorio. 1o de diciembre de 2012. Mixtecapa, mpio de San Luis Acatlán, Guerrero.

[4] El reglamento de Áreas Naturales Protegidas (derivado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) es el instrumento que regula tanto las áreas *certificadas* como *decretadas* con fines de conservación. En sus Arts. 81, 89, 94, 95 y 96, establece los mecanismos administrativos que permiten la exploración y el aprovechamiento minero dentro de áreas que se supone han sido destinadas a la conservación, donde incluso se encuentran prohibidos los diferentes tipos de manejo campesino como la agricultura de montaña o la extracción doméstica de recursos del monte, como la leña.

[5] Acta del Sexto Foro en Defensa del Territorio. 09 de marzo de 2013. Huehuetepec, mpio. de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero.

Para el momento en que inicia este proceso, yo tenía varios años en la región colaborando como docente voluntario en la Universidad de los Pueblos del Sur y más recientemente como asesor en temas ambientales y territoriales de los Comisariados de Bienes Comunales de Santa Cruz Del Rincón, Tlaxcalixtlahuaca y Pascala del Oro; es así como me involucro desde el primer Foro el 6 de octubre del año 2012, ofreciendo opinión y asesoría, y posteriormente se me pidió coadyuvar en un proceso encaminado a definir una estrategia comunitaria de alcance regional, para garantizar la autodeterminación sobre los territorios agrarios involucrados.

Así nació mi interés por acompañar, documentar y estudiar es el proceso de creación y/o consolidación de instituciones comunitarias (de nivel local, como las autoridades agrarias - Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales-, y de nivel regional, como el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio), en su lucha por la defensa de los territorios comunitarios frente a proyectos externos que pretenden limitar su capacidad de autodeterminación.

Tal es el caso de las empresas mineras que no sólo buscan apropiarse de los recursos de la región, sino que también amenazan la salud y calidad de vida de la población a través del uso de sustancias altamente tóxicas para el beneficio del mineral y de la alteración de sus ecosistemas por las técnicas extractivas que pretenden emplear (minería a cielo abierto). En el mismo sentido se encuentran aquellos proyectos gubernamentales que pretenden imponer esquemas conservacionistas incompatibles con el modo de vida indígena y campesino[6], no sólo por proscribir modos de producción ancestrales esenciales para la reproducción social (como la agricultura de montaña), sino también al sobreponer sobre el territorio comunitario una legislación (LGEEPA) diferente a la Ley Agraria y, con ello introducir una autoridad externa (SEMARNAT) con capacidad legal para decidir sobre los territorios certificados o decretados, lo cual restringe los derechos de las comunidades y las deja vulnerables frente a los intereses de las empresas mineras[7].

Desde mi posición como colaborador de las comunidades involucradas en este proceso de defensa del territorio comunitario en la Costa Montaña de Guerrero, me parece relevante no sólo acompañar y coadyuvar en las tareas que se van definiendo, sino también abonar a la comprensión del proceso mismo. Considero que la reflexión colectiva que se pueda

[6] El Certificado de Área Natural Protegida a la comunidad de Santa Cruz Del Rincón, con la categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, expedido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) prohíbe, por un periodo de 30 años, dentro de la zona de conservación (1,044 ha) cualquier actividad no relacionada directamente con la preservación de la flora y fauna, la educación ambiental y el ecoturismo.

[7] Como se analiza en el capítulo 2, la puerta de entrada legal a las empresas mineras, sin pasar por el acuerdo de las asambleas comunitarias, es otorgar facultades a una autoridad distinta, lo cual ocurre a partir de una ley diferente, en este caso la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

desarrollar en los diferentes espacios que implica este proceso, ayuda a clarificar el rumbo de la lucha y también como una manera de hacer más eficientes las acciones y garantizar la consecución de las metas propuestas.

Por ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las características en términos del marco legal, actores involucrados y estrategias de acción, que hacen antagónicos los proyectos del gobierno y empresas transnacionales, por un lado, y comunidades, por el otro, en el conflicto que hoy existe por el territorio y el acceso a sus bienes comunes en la Costa-Montaña de Guerrero?

A partir de aquí se define el objetivo central de esta investigación: Evaluar el origen y estado actual del conflicto que hoy enfrenta en la Costa-Montaña de Guerrero a dos proyectos en torno al territorio y el acceso a los bienes comunes, diferenciando a los grupos de actores sociales que intervienen y las estrategias usadas por ellos.

De ahí se desprenden las preguntas que guían el proceso:

- ¿Cuáles son los proyectos exógenos impulsados en la Costa Montaña, que amenazan con despojar o restringir la autodeterminación de las comunidades sobre su territorio y sus recursos naturales?
- ¿Cuáles son sus características, cómo se han tratado de implementar y qué actores los promueven?
- ¿Qué elementos culturales, organizativos y económicos permitieron crear y mantener el CRAADT como la institución responsable de defender como bienes comunes el territorio comunitario y sus recursos naturales, reivindicando la autodeterminación frente a proyectos de despojo que pretenden imponer un modelo hegemónico de desarrollo?
- ¿Cuál ha sido la estrategia comunitaria para la defensa de su territorio y qué resultados ha tenido?
- ¿Podrá el Consejo Regional consolidarse como una institución que apoye y complemente a las comisarías agrarias para defender el territorio comunitario y promover el adecuado gobierno de los bienes comunes desde la autodeterminación como pueblos originarios?

Metodología

Como mencioné anteriormente, desde hace años participo activamente acompañando varios de los procesos sociales de la región. Desde una perspectiva ética mi posición ha sido apoyar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, posición que reafirmé en la presente coyuntura, al involucrarme y ofrecer mis servicios al Consejo Regional de Autoridades Agrarias. Es desde esta condición que planteé el presente estudio, mismo que desarrollé mientras acompañaba esta lucha particular en mi doble papel de militante y de investigador, que no asumí como una dicotomía sino más bien como una relación dialéctica entre ambos papeles, lo cual dio sentido no sólo a la interacción con los demás participantes, sino al esfuerzo mismo por comprender la problemática y el proceso de lucha de una forma más profunda, de generar un tipo de conocimiento que difícilmente se podría lograr desde otro posicionamiento metodológico. Esto significó asumir conscientemente la necesidad de mantener una vigilancia metodológica para no dejar de analizar el accionar de los sujetos desde una perspectiva crítica.

Por ello, reconociendo que no podía permanecer indiferente ante la situación problémica ya descrita[8], considero adecuado plantear su abordaje desde la *investigación acción participativa* (IAP), asumiendo con claridad que era parte del proceso, que tenía y tengo interés en su devenir y que establecí un compromiso al lado de esta naciente institución regional y de las personas a las que representa.

Elegí este enfoque metodológico justamente porque la IAP pone el acento en el conocimiento práctico y la capacidad de reflexión de los actores de la comunidad (Cortéz, 2014), ya sean individuos, grupos o instituciones con los cuales el investigador "trabaja", aportando su propia formación y experiencia para promover con dichos actores un proceso de reflexión-acción-reflexión-acción (Vizer, 2002).

> "Es un proceso que asocia la acción con la reflexión (auto-reflexión) y la teoría con la práctica. El término praxis para los griegos se refería a la acción realizada a través de una práctica reflexiva y crítica, y la investigación-acción puede encontrar sus antecedentes en Aristóteles cuando propone la autorreflexión como un modo de adquirir conocimiento sobre las propias prácticas para su mejoramiento. La praxis, como relación dialéctica entre la acción y la comprensión, implica la reflexión constante sobre:
>
> a) la propia naturaleza de la acción, como es entendida por los actores, b) las consecuencias de la propia acción y c) el contexto en que se la realiza. Esta reflexión

[8] Interesantes discusiones sobre las implicaciones metodológicas que tiene el posicionamiento del investigador se pueden encontrar en: Tecla, Alfredo. 2001. El método ante la incertidumbre. Ediciones Taller Abierto. México. p. 53-55; Sautu. Ruth. 2003. Todo es teoría. Lumiere. Argentina. pp. 21-25.

> debe transformar el núcleo de conocimientos del (o los) actor(es) para guiar acciones futuras.
>
> La praxis implica asimismo una profunda disposición moral hacia una acción que contribuya a la verdad y la justicia. La noción de praxis involucra etapas interrelacionadas de un proceso: primero la identificación de un objetivo social, el que surge a partir de problemas específicos que efectivamente existan o puedan llegar a producirse. Segundo, el examen crítico de las propias prácticas sociales. En tercer lugar la búsqueda de explicaciones y de alternativas para las prácticas que deberían ser modificadas. Cuarto: la experimentación de modos alternativos de hacer las cosas. En quinto lugar la revisión de las estrategias empleadas. Y por último realizar nuevas experiencias y reflexionar sobre las mismas hasta obtener un resultado positivo (Vizer, 2002).

Por ello, se tuvo que estar atento en aspectos como ¿quién y través de qué mecanismos se define lo que se hará en cada una de estas etapas? ¿Cómo se desarrolla la actividad? Y ¿qué finalidad tiene dicha actividad?

Asumiendo que la complejidad del contexto y del problema bajo estudio requería una diversidad de formas para recolectar datos (Vasilachis, 2006), fue preciso reconocer la existencia de diferentes espacios de acción, a diferentes escalas e involucrando actores distintos, por lo cual el estudio se apoyó en técnicas etnográficas, documentales, hemerográficas y de análisis cartográfico.

Las primeras dos escalas son de tipo regional; una está constituida por 10 municipios de la Costa Montaña en cuyo territorio existen concesiones mineras y en el cual el trabajo fue de tipo documental, hemerográfico y cartográfico; la segunda escala fueron los 13 núcleos agrarios que se verían afectados por la reserva de biósfera y que son quienes integran el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio; aquí me mantuve colaborando con los Foros Regionales, como eventos masivos e itinerantes, en donde se consensaron posicionamientos y acciones. Este fue un espacio fundamental, porque al informar y discutir colectiva y abiertamente se genera conciencia, se fortalece el tejido comunitario y se van creando condiciones para el accionar colectivo.

Se hizo una revisión documental sobre diversos programas de gobierno (términos de referencia, reglas de operación, concesiones, decretos, certificaciones, programas operativos, etc.) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como de las empresas mineras con intereses en la zona. Esta información fue organizada, analizada y compartida con las autoridades en las reuniones previas y con las comunidades en las asambleas, por lo cual

se le dio un formato que permitiera presentarla con términos sencillos y evitando en la medida de lo posible los tecnicismos.

Se realizó una entrevista con la persona que en ese momento fungía como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno estatal, buscando explicitar la naturaleza de los proyectos enarbolados y su opinión sobre lo ocurrido en la región.

Con la información recopilada, se hizo la revisión y análisis de los proyectos gubernamentales relacionados con la temática, que se han implementado en los últimos años o que se pretende implementar; se explicitaron sus objetivos, filosofía y forma de operación, y se evaluó su impacto (positivo o negativo) sobre las iniciativas locales de desarrollo. Respecto a los *Certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación*, se recopilaron los documentos vigentes en la región, se analizaron sus implicaciones jurídicas y sociales, se reflexionó sobre los procesos que generaron en las comunidades y, se coadyuvó en la búsqueda de opciones técnicas y legales que salvaguarden los intereses comunitarios. La presentación de toda esta información, su análisis y reflexión en las asambleas fue el mecanismo que los propios actores definieron como el válido para la toma de decisiones.

Otro espacio lo constituyeron las autoridades que representan el Consejo Regional, que son los presidentes de los respectivos Comisariados Ejidales o de Bienes Comunales, quienes además se hicieron acompañar de otros actores, tanto de su propia comunidad como de organizaciones aliadas entre las que se encuentran el Grupo de Estudios Ambientales A.C. (GEA), el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), párrocos de la región aglutinados en torno a la Pastoral Social de la Diócesis de Tlapa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Enlace Comunicación y Capacitación A.C., y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Este tercera instancia se reunió periódicamente para coordinarse y organizar las tareas; al confluir las mismas personas permitió dar mayor continuidad a la reflexión, haciéndola más profunda y colaborativa; por ello, considero que, en cierto sentido, se constituyó en una comunidad de aprendizaje con la que se logró establecer una agenda particular, cuyos productos de una u otra forma se vieron reflejados también a nivel de las respectivas asambleas o comunidades de donde proviene cada autoridad. Por supuesto, esto ocurrió en la medida que cada uno de los participantes pudo involucrarse y asumir compromisos claros de trabajo.

Se asistió a diversas Asambleas Regionales y Comunitarias en las que se ventilaron los temas relacionados, en las cuales se contó con autorización para realizar registros de audio y/o video. Participé también en reuniones preparatorias de dichas asambleas, así como en los talleres específicos que se convocaron para abordar la temática. Todos los

registros y materiales producidos en el proceso han sido puestos a disposición a través de los miembros del Consejo Regional. También pude conversar con actores clave de la región (autoridades, líderes, párrocos) para abundar en la reflexión de algunos temas. Todos estos espacios (asambleas, reuniones de trabajo y charlas) fueron considerados como espacios de co-teorización, para contrastar y compartir formas paralelas de observar el fenómeno, analizarlo y conceptualizarlo (Rappaport, 2007).

En estos espacios conjuntos se buscó desentrañar la historicidad del proceso, por un lado en su vertiente de cómo las empresas y el gobierno han intentado aumentar su injerencia en la región, y por el otro en la vertiente de cómo las comunidades pretenden mantener la autodeterminación sobre su territorio.

Como parte de esta participación, se colaboró con las autoridades agrarias en acciones concretas para dar seguimiento a la problemática y operar la estrategia de defensa del territorio comunitario; esto se tradujo en coadyuvar en la revisión de sus Estatutos Comunales y aprovechar el marco de la Ley Agraria para buscar frenar estos proyectos, levantar actas de asamblea y promover un pronunciamiento del cabildo, se organizaron ruedas de prensa, se redactaron manifiestos y se acompañó a las autoridades a entregarlos ante las dependencias respectivas; todo ello encaminado a rechazar los proyectos de reserva de biosfera y minería, que lesionarían el interés colectivo.

Con la autorización de las autoridades comunitarias en el área de influencia del Consejo Regional de Autoridades Agrarias, se documentaron y se ayudó en la sistematización de algunas ideas y esfuerzos que confluían hacia la definición de un Plan local/regional de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales comunitarios. Para ello se buscó colaborar en las asambleas, talleres, foros y reuniones de trabajo que se convocaron para discutir y consensuar las propuestas encaminadas a definir y operativizar el mencionado proyecto local y regional.

En resumen, para este trabajo se visualizó un ciclo donde a) la reflexión de la problemática y del contexto social, ambiental e histórico que la determinan, b) condujo a la generación de conocimiento en el sentido de entender la historicidad del proceso, de visualizar opciones y ponderarlas para definir las que se potenciarán como un proyecto colectivo, c) encaminado a la transformación de la realidad en el sentido del buen vivir para las comunidades de la región, fortaleciendo su capacidad de autodeterminación y haciendo frente a las iniciativas externas que lesionan dicha capacidad y pretenden enajenar su territorio y/o sus bienes.

Toda esta primera etapa de intensa participación e interacción *in situ* y de reflexión conjunta, se mantuvo desde octubre de 2012 hasta mediados de 2015, momento en que las condiciones de inseguridad en la región se agudizaron de tal forma que hicieron imposible mi permanencia y la de varios otros compañeros. A partir de entonces inicié otra fase, en la que se terminó de sistematizar la información, se profundizó en la reflexión teórica y se redactó el informe. En este periodo se procuraron espacios para reunirse con algunos miembros del movimiento e irles mostrando los avances, comentando sobre lo que ocurre en la región y analizando de forma conjunta sobre lo abordado en la tesis.

Para la fase de análisis se utilizó la triangulación, pues permitió la comparación entre los datos obtenidos a través de técnicas diferentes, aumentando así el grado de validación de los resultados (Marradi *et al*., 2011). Vale la pena aclarar que este análisis de triangulación en algunos momentos se efectuó en forma colectiva, aprovechando las visitas que algunos líderes o participantes en el movimiento acudían a la capital por algún motivo, toda vez que la intención final es que sirva para retroalimentar el proceso mismo (Cortéz, 2014).

Más allá de esta triangulación de datos, para la interpretación de la información que llevó a la generación de conocimiento sobre el proceso se realizó una triangulación recursiva, que permitió contrastar y analizar conjuntamente tres elementos de la investigación:

a) Los fenómenos que constituyen el proceso de estudio;
b) Un cuerpo teórico, o dispositivo epistemológico, que en este caso está constituido por la teoría de la acción colectiva (principalmente Melucci, 1991 y 1999; Munck, 1995; Tarrow, 1997), el papel del sujeto social (Zemelman, 2004) y el control cultural (Bonfil, 1983); la teoría de los bienes comunes y las instituciones de acción colectiva como mecanismo en la regulación de recursos de uso y acceso común dentro de un grupo humano (Ostrom, 2000, 2001; Merino, 2004 y 2008), así como algunos referentes de ecología política (Toledo, 1992; Delgado, 2011; Svampa, 2012; Harvey, 2014);
c) Los valores y la praxis de la investigación. Los tres aspectos implicados en el proceso de conocimiento se integran en un mismo proceso de triangulación recursiva.

El criterio de validez fue la adecuación entre los tres elementos, dentro de un plan o dispositivo estratégico orientado a la búsqueda de un objetivo de cambio y de aprendizaje entre los actores involucrados, porque la sistematización de esta experiencia busca fomentar un aprendizaje de lo andado y mejorar las estrategias de lucha de las comunidades. A nivel local, el proceso de lucha promovió la formación de actores locales,

como las autoridades comunitarias y los jóvenes que participaron alrededor de este movimiento, principalmente; pero sin menoscabo de la tarea formativa que a escala de comunidad pudo significar la realización de foros y asambleas. Se espera que, en conjunto, todas estas tareas hayan contribuido a fortalecer el tejido comunitario y regional, y se espera también que esta investigación contribuya de alguna manera en ese proceso formativo.

Considero que esta propuesta colaborativa de trabajo, en la medida que responde a necesidades de indagación de los propios sujetos, que se establecen conjuntamente las prioridades y las formas de trabajo, que el análisis y la reflexión sobre el proceso pueda ser dialógico y que el conocimiento generado tiene como público principal a los propios sujetos (Cortez, 2014), pueda constituirse como un proceso liberador y descolonizador, en los términos propuestos por Fals Borda (1979). Pues como afirma Rivera Cusicanqui "Si en este proceso se conjugan esfuerzos de interacción consciente entre distintos sectores, y si la base del ejercicio es el mutuo reconocimiento y la honestidad en cuanto al lugar que se ocupa en la `cadena colonial´, los resultados serán tanto más ricos (…). Por ello, al recuperar el estatuto cognoscitivo de la experiencia humana, el proceso de sistematización asume la forma de una síntesis dialéctica entre dos (o más) polos activos de reflexión y conceptualización, ya no entre un `ego cognoscente´ y un `otro pasivo´, sino entre dos sujetos que reflexionan juntos sobre su experiencia y sobre la visión que cada uno tiene del otro", lo cual lo convierte en un ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el investigador como para su interlocutor (Rivera, 1990).

Por eso considero que la participación alrededor del proceso de lucha, se ha constituido en un espacio formativo de gran valor para las comunidades, cuya experiencia acumulada puede potenciar varios otros procesos. En este breve periodo desde el surgimiento del Consejo, los diversos foros y talleres han sido espacios propicios para la participación de ciudadanos y de autoridades locales, quienes han venido tomando conciencia sobre la necesidad de organizarse para defender su territorio y su modo de vida. Pero también porque la experiencia y reflexiones aquí generadas pueden servir para inspirar otras luchas, toda vez que las amenazas que se enfrentan en la región, están lejos de ser particulares, sino más bien, constituyen parte de toda una estrategia para expoliar los recursos en los territorios indígenas y campesinos. Obviamente, siendo el motivo de esta investigación un proceso social vivo, en plena lucha de resistencia, resulta complicado establecer *a priori* los alcances del mismo, que necesariamente se irán definiendo a lo largo del proceso.

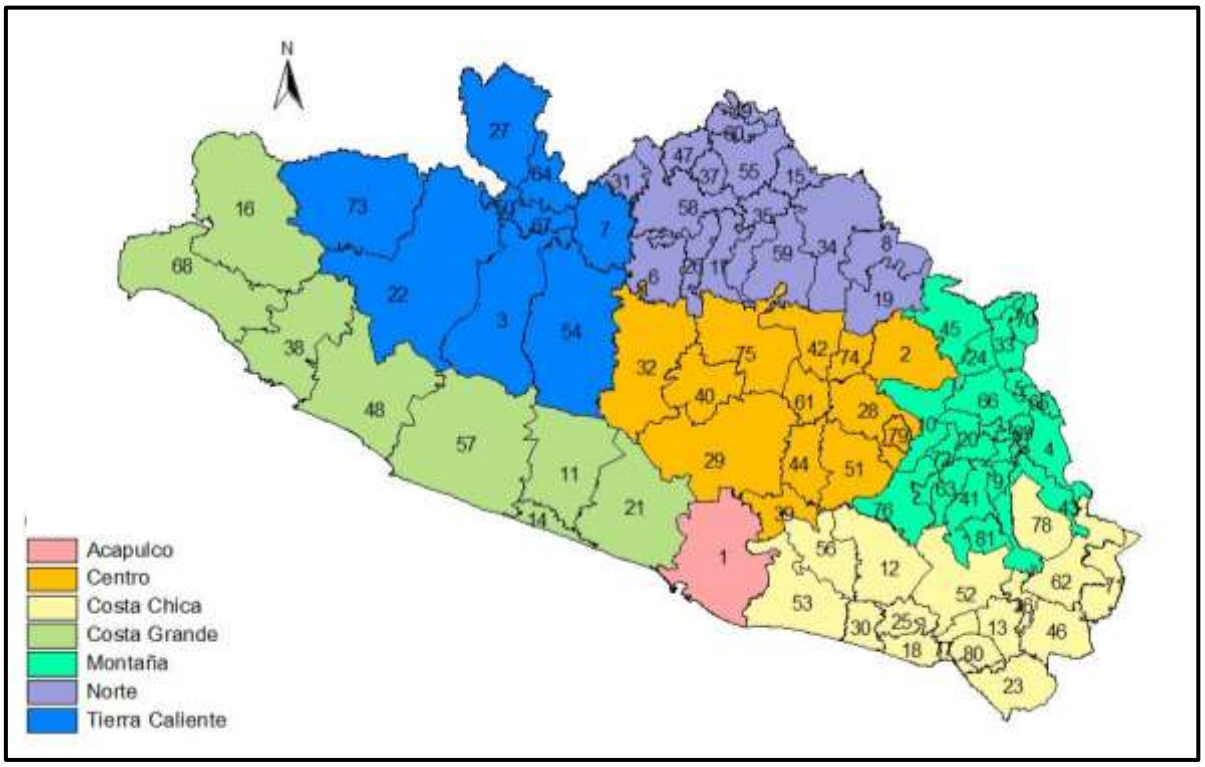
PRIMERA PARTE. LA COSTA MONTAÑA: UNA LARGA HISTORIA DE ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA



Figura 1. Panorámica desde la parte alta de la Montaña.

Capítulo 1. La Costa Montaña de Guerrero: Una larga historia de organización y resistencia

Como ya he planteado, la Costa Montaña –como se conoce en Guerrero- no corresponde con ninguna de las regiones administrativas formalmente reconocidas en la entidad. Es más bien un referente social para nombrar a los territorios indígenas ubicados en la parte alta de la Costa Chica y la porción de la Montaña ubicada en la vertiente Pacífico de la Sierra Madre del Sur. Esto permite diferenciarla de las planicies costeras donde se asienta la población afromexicana y mestiza, y de la vertiente interior de la Sierra Madre, aunque sigan siendo territorios fundamentalmente indígenas. En el mapa 2 se muestra la división municipal y en regiones administrativas.



Mapa 2. División regional y municipal del estado de Guerrero. Fuente: Elaboración propia.

Es imposible entender ningún territorio sin comprender las relaciones de poder que lo conforman, la soberanía que lo configura. Por ello es importante diferenciar y analizar tipos de territorio. Lo que se han denominado como *primer territorio* está formado por los espacios de gobernancia a diferentes escalas: nacional, regional, provincial, municipal, distrital. El *segundo territorio* está formado por los diferentes tipos de propiedades particulares: individual y colectiva (ManÇano, 2009). Por eso desde la lógica sólo de la gobernancia, este territorio pertenecería a dos regiones administrativas diferentes (la

Montaña y la Costa Chica), pero la propiedad colectiva de la tierra, la identidad étnica y la historia de lucha han llevado a conformar la Costa Montaña como un espacio que reivindica otra identidad, y esta construcción social entra en conflicto con la visión de gobernancia de los gobiernos estatal y municipales involucrados.

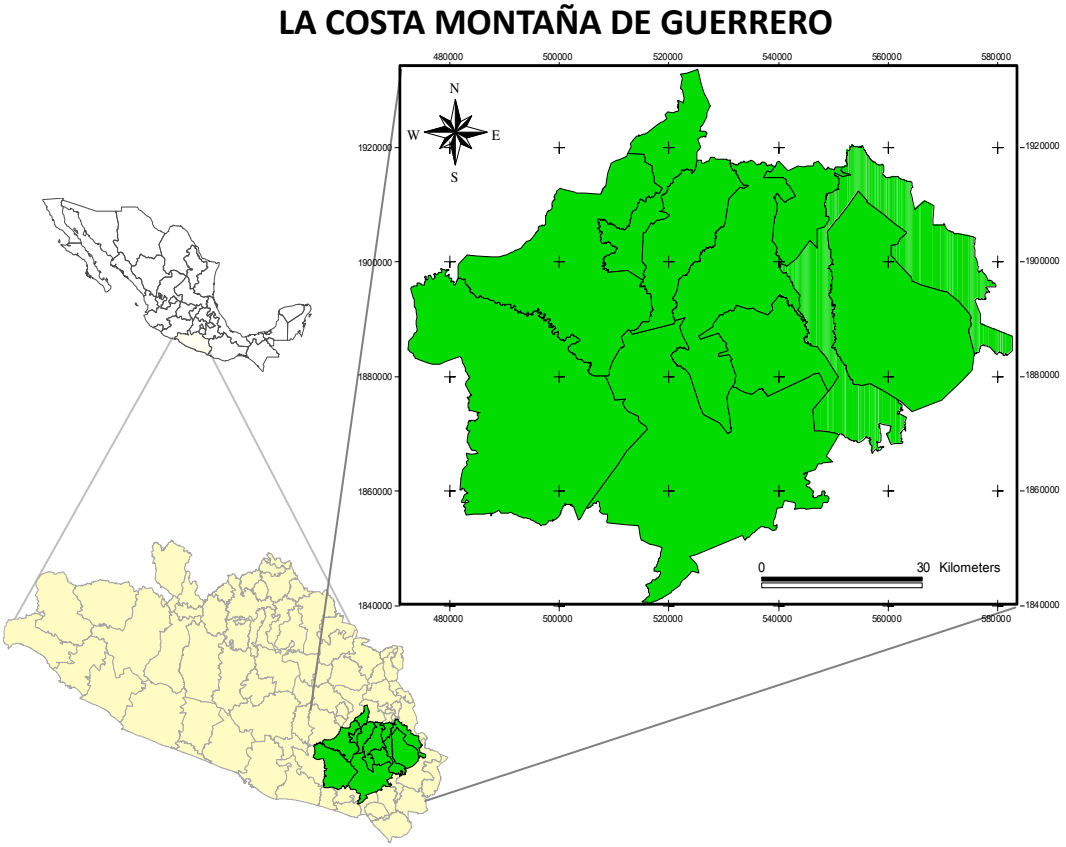
> Siendo la soberanía una propiedad de todos los tipos de territorios, las comunidades de esta región crean sus propias instituciones y establecen autoridades dentro de su jurisdicción, que se sobrepone y entra en cierta contradicción con los otros niveles de gobierno. Es así como para algunos aspectos funcionan los límites territoriales del municipio, para otros la lógica del estado o la federación, y en algunos la circunscripción territorial responda sólo a la dinámica de las comunidades. En cada uno de esos casos, el territorio resultante constituye una totalidad con sus dimensiones política, económica, social, cultural y ambiental; en cada uno de esos casos, el territorio expresa una soberanía que, aunque se interrumpa, está siempre presente mediante los conflictos por la disputa territorial Esta "conflictividad, concebida como el conjunto de conflictos que constituyen un proceso generador e inseparable del desarrollo en la lucha por el territorio, es un proceso de enfrentamiento permanente que explica las contradicciones y las desigualdades del sistema capitalista, evidenciando la necesidad el debate constante, en planos teóricos y prácticos, respecto del control político producido por espacios y territorios heterogéneos" (ManÇano, 2009).



Figura 2. Derrumbe sobre la carretera federal "pavimentada" Tlapa - Marquelia.

La conformación “extraoficial” de esta región tiene sus razones. Históricamente ha sido una región habitada por diversos pueblos indígenas, principalmente *Nauas*, *Me’phaá* y *Na Savi* por lo que la región, más que por lógicas administrativas o políticas, se ha construido por un entramado de identidades, subjetividades y relaciones sociales. Entre estas identidades, una muy reciente, es que se trata de la región que fundó la Policía Comunitaria a mediados de los años 90 (mapa 3).

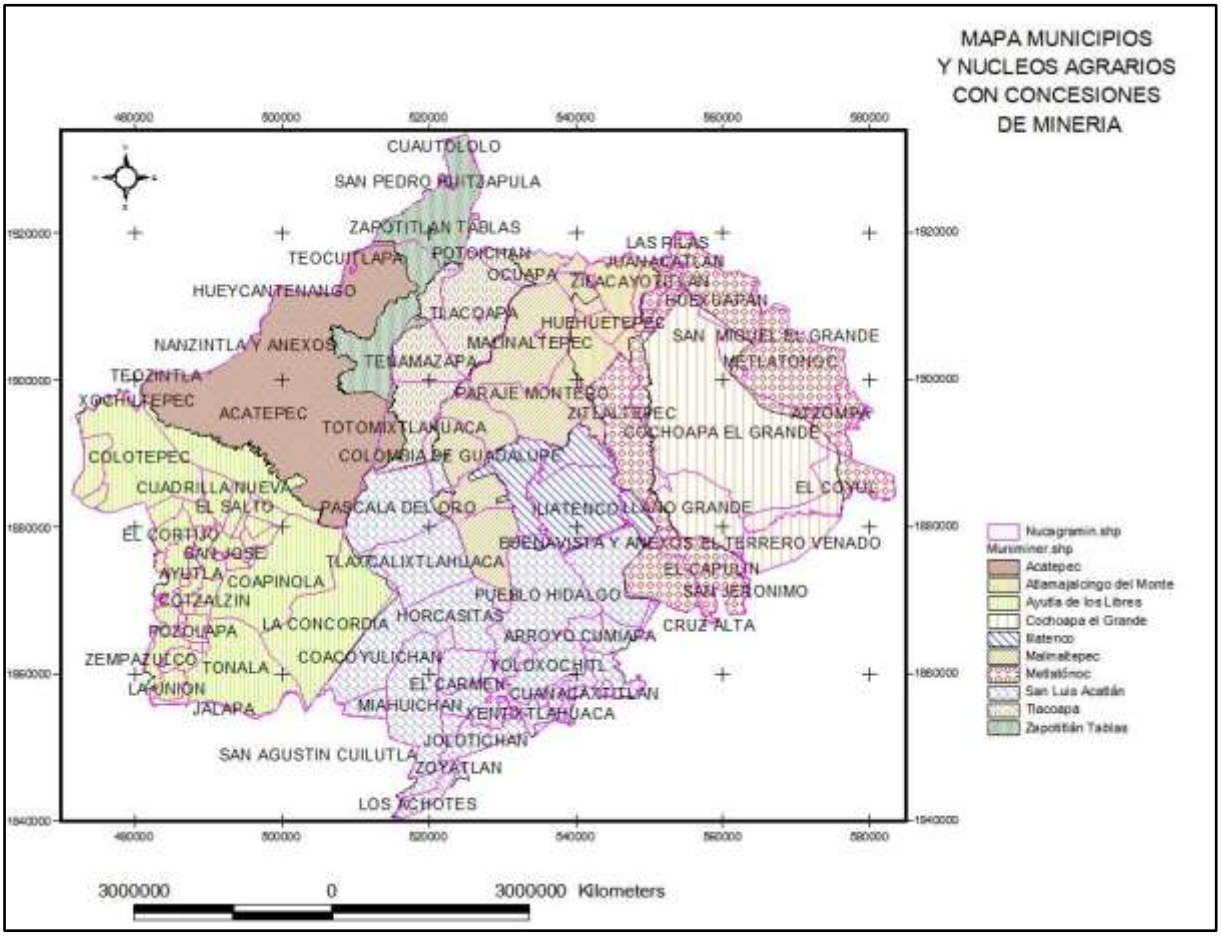
Además, la región ha tenido una escasa comunicación con el resto de la entidad, en gran medida como consecuencia de la accidentada topografía que le confiere la Sierra Madre, que en esa región alcanza los 3,000 m de altitud. Esta situación ha separado y aislado las comunidades de la vertiente interna o norte, que se vincula más con la economía de Puebla y Oaxaca, de aquellas ubicadas en la cara externa o sur, cuya relación histórica ha sido con San Luis Acatlán, Azoyú y Ometepec (Mijangos, 2001).



Mapa 3. Ubicación de la Costa – Montaña en el estado de Guerrero. Fuente: Elaboración propia.

La comunicación en la región es por demás precaria. La más antigua de las carreteras asfaltadas, la Tlapa – Marquelia se inauguró apenas a mediados de los 90's; sin embargo, los problemas en su construcción hacen que cada año el tránsito de vea interrumpido por los derrumbes, poniendo en peligro la integridad de las personas. Los demás caminos con asfalto son más recientes y articulan sólo algunas porciones del territorio; la mayoría de los caminos siguen siendo terracerías en mal estado.

Ahora bien, reconociendo que dos de los proyectos que moldean la problemática abordada en este estudio son el de la Reserva de Biosfera de la Montaña y el de las concesiones para el aprovechamiento minero, he procurado delimitar espacialmente sus alcances de manera que logre incluir las áreas de ambos proyectos. Por ello, he tomado como área de estudio los territorios comprendidos por los municipios de San Luis Acatlán y Ayutla (de la Costa Chica), y Malinaltepec, Iliatenco, Metlatónoc, Cochoapa, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec y Tlacoapa (de la Montaña), como se puede observar en el Mapa 4.



Mapa 4. Municipios y núcleos agrarios considerados en el estudio. Fuente: Elaboración propia.

Antecedentes de la lucha social en la región

Desde los tiempos de la Colonia, los habitantes de la región han tenido que hacer frente a diversos actores y procesos orientados a saquear las riquezas de la región y explotar a la población. En la región se libraron importantes batallas en las guerras de independencia y de la revolución. En la época moderna, las profundas asimetrías y la terrible miseria en que se encontraba sumida la población generó procesos de resistencia contra los caciquismos, los abusos de poder y la discriminación; algunos de esos procesos desembocaron en la lucha armada como la vía para intentar transformar las condiciones de pobreza y exclusión históricas. Al respecto, Bartra (1996) afirma:

> Guerrero es uno de los estados donde la historia reciente ha tenido una fuerte y muy significativa presencia de grupos armados, que surgen en un estado donde la pobreza y la miseria son visibles a cada paso, un lugar donde todavía en el siglo XX se vivían (y se siguen viviendo) condiciones semejantes al porfiriato donde el hacendado tenía sojuzgados a los campesinos a su merced.

Por ello, uno de los referentes importantes para la historia de la región, lo constituye la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), formada a finales de los años 50's del siglo pasado, por un conjunto de profesionistas y estudiantes guerrerenses radicados en la ciudad de México. Dicho grupo se forma ante el descontento que empezaba a generalizarse en Guerrero, por el autoritarismo con que el gobernador Raúl Caballero Aburto impuso una política económica y social que aceleró el deterioro de la calidad de vida en el estado. La ACG realizó reuniones en diversos puntos de la entidad, ante lo que el gobernador respondió encarcelando a sus dirigentes Genaro Vázquez y Darío López Carmona en 1960 (Contreras, 2011).

El activismo de la ACG confluye con el movimiento universitario que pugnaba por mejores condiciones de estudio y la autonomía de la institución, por lo que los estudiantes estallaron en huelga el 21 de octubre de 1960. Nuevamente la respuesta del gobernador fue la represión, "…la mañana del 25 de noviembre de 1960 militares y policías sitiaron la Universidad de Guerrero, en Chilpancingo, donde miembros de la ACG estaban en plantón; cuando los soldados ya gentes entraron al recinto golpearon a los manifestantes con un saldo de tres heridos y 200 detenidos" (Hernández, 2016: 64), agudizando la tensión en la capital del Estado y aumentando el malestar en otros sectores sociales.

> Estos sucesos hicieron que la lucha de la ACG se radicalizara. Genaro Vázquez se reunió con integrantes del Frente Zapatista de Chilpancingo y normalistas encabezados por Cabañas: vestidos de campesinos posaron con escopetas de caza para una foto que se publicó en el periódico La Prensa. Hasta entonces el movimiento armado se reducía a esa imagen pero el gobierno federal estaba muy preocupado, no había precedentes de guerrilla en el México moderno (Hernández, 2016:64).

Ante la persistencia en las protestas, el punto más álgido fue la matanza del 30 de diciembre en Chilpancingo cuando "a petición del gobierno guerrerense los soldados

abrieron fuego contra un grupo de civiles que se encontraba en las inmediaciones en protesta por el asesinato de un electricista a manos de un militar. Murieron al menos 13 personas, entre ellos tres mujeres y tres menores de edad." (Hernández, 2016: 64), con lo cual la indignación creció lo que finalmente precipitó la desaparición de poderes y la expedición del decreto de autonomía para la universidad.

El activismo político de Genaro Vázquez y otros miembros de la ACG, en los próximos años los lleva a conformar la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARS-EZ) en 1963, que a su vez crea la Unión de Productores Independientes de Café (UPIC), la Unión Libre de Asociaciones Copreras (ULAC), y la Unión de Productores Independientes de Ajonjolí (UPIA). Genaro Vázquez es detenido nuevamente en 1966 y recluido en el penal de Iguala donde intentaron asesinarlo en varias ocasiones, y de donde es liberado por un comando armado en 1968 para fundar la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), organización político-militar que convocaría a la toma del poder mediante el uso de las armas, a través de su programa de cuatro puntos: 1.- El derrocamiento de la oligarquía formada por los grandes capitalistas y terratenientes pro imperialistas gobernantes; 2.- El establecimiento de un gobierno de coalición compuesto por obreros, campesinos, estudiantes, e intelectuales progresistas; 3.- Lograr la plena independencia política y económica de México; 4.-La instauración de un nuevo orden social de vida, en beneficio de las mayorías trabajadoras del país. (Contreras, 2011).

Ante el clima de violencia que seguía prevaleciendo en la entidad, particularmente hacia los líderes sociales "Cabañas fundó la organización política Partido de los Pobres (PDLP) y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA). Con el fin de alentar el descontento contra el gobierno y al mismo tiempo obtener recursos, los guerrilleros efectuaban secuestros de alto impacto (…)" (Hernández, 2016: 65), siendo el más sonado el del senador priista y candidato a gobernador Rubén Figueroa Figueroa en 1974.

En respuesta el gobierno federal desplegó intenso operativos militares para capturar a los dos líderes guerrilleros y diezmar sus movimientos armados, dando lugar a la llamada *guerra sucia*, que constituye uno de los episodios más oscuros del siglo XX en nuestro país.

> La *guerra sucia* en Guerrero duró una década: se ha fechado de 1971 a 1981. La llevó a cabo el ejército, principalmente: hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas fueron víctimas de violaciones sexuales, detenciones en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias en las que incluso se arrojaban los cuerpos al mar, entre otras atrocidades que agraviaron desde entonces a muchas familias campesinas de la entidad (Hernández, 2016:67).

La *guerra sucia* marcó violentamente a la entidad, en particular a la Costa Grande y la Costa –Montaña; aún hay familias que siguen sufriendo las secuelas. Movimientos con el de la Normal Rural de Ayotzinapa reivindican los principios y luchas de ambos guerrilleros.

Aún hoy en día, en comunidades de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlán, sigue fresca la memoria de Genaro y su lucha por la causa de los más pobres.

El movimiento indígena

Desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, las comunidades indígenas de la región Costa Montaña de Guerrero han sido protagonistas de un intenso proceso de organización y participación ciudadana. Las históricas condiciones de marginación y pobreza en que se encuentra la región, aunado al abandono institucional, fueron generando la conciencia de que sólo a través de la organización y la conjunción de fuerzas sería posible transformar la lacerante realidad que enfrentan las comunidades *Me'phaá* y *Na Savi*.

En el marco de una Campaña Continental que protestaba contra la celebración del "Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos", diversos pueblos indígenas elevaron la voz para reivindicar sus derechos y denunciar la discriminación, el genocidio y despojo de sus territorios de que han sido objeto desde la conquista. Es así como en 1990 se crea el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia India y Popular, con representaciones en algunas entidades, como fue el caso del Consejo Guerrerense, en torno al cual se aglutinaron las luchas de varias organizaciones. Más adelante, en respuesta al planteamiento de los participantes guerrerenses se convierte en el Consejo 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular. Algunas de las organizaciones guerrerenses más representativas fueron la Alianza de Organizaciones Autónomas de Guerrero, el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB), la Organización Campesina Independiente de Comunidades Indígenas de Chilapa (OCICI), el Consejo Regional Mixteco- Tlapaneco 500 años de Resistencia Indígena, el Consejo Regional de la Montaña 500 años de Resistencia Indígena, la Unión de Comuneros Nahuas de Atzacoaloya de Chilapa, la Confederación de Pueblos Indígenas Amuzgos de la Costa Chica, el Consejo de Pueblos Tlapanecos de la Montaña de Guerrero y el de los Pueblos Mixtecos y Negros de la Costa Chica, además de la participación del magisterio disidente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), periodistas agremiados al Sindicato de Redactores de la Prensa y párrocos de la Pastoral Social (Flores, 2007).

La experiencia de confluir en torno al Consejo Guerrerense, las reflexiones y reivindicaciones generadas en ese espacio, tendrían cierta influencia para que en esta región de la Costa Montaña, en 1992 se empezara a reflexionar sobre la necesidad de crear una instancia para atender la problemática regional y para que, finalmente en 1994 se creara el Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), que devino posteriormente en la

conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC -PC).

El segundo elemento fundamental para la conformación del CAIN es el papel de la iglesia católica, en particular de la Diócesis de Tlapa a través de su Pastoral Social. En la década de los 60´s llega a Santa Cruz del Rincón un párroco de la región y hablante de la lengua *Me'phaá*, Inocencio Basurto Carrasco, con el que inicia un lento proceso de *mestizaje* entre la tradición católica y la religiosidad indígena; a finales de los 80's el párroco Bernardo Valle promovió la realización de rituales autóctonos, como los rituales propiciatorios de lluvia el 25 de abril y la celebración de la misa de año nuevo en lo alto del Cerro Nixtamal, además de dar mayor relevancia al papel de los cantores y catequistas. Pero es en 1992, con la creación de la diócesis de Tlapa que se hace más notoria la presencia de párrocos originarios de la región, por lo que conocen a sus feligreses y hablan su lengua, además de involucrarse activamente en los problemas de las comunidades. Ese mismo año y en ese contexto llega Mario Campos Hernández a esta parroquia del Rincón, con lo cual se inicia un intenso proceso de organización que conduciría a construir una perspectiva de vida distinta para la región (Flores, 2007). Apoyado en las hermandades, los cantores y otros cargos relacionados con la iglesia, se inicia el proceso de reflexión que lleva en noviembre de 1992 a la conformación del CAIN. La estructura parroquial del Rincón, integrada por más de 20 comunidades[9], fue la base de la organización y es, hasta la fecha, el *núcleo duro* del proyecto comunitario en la región.[10]

CAIN fue una organización que se construyó a escala regional buscando solucionar problemáticas añejas que repercutían de forma negativa en la calidad de vida de la población. A través de reuniones de trabajo y asambleas comunitarias, la reflexión colectiva permitió ir delineando un *Proyecto Integral* para el desarrollo de la región, en el que se distinguían diversos ejes de acción: vías de comunicación, salud comunitaria, producción, cuidado del medio ambiente, seguridad y justicia, educación, en torno a los cuales de pretendía incidir en un mayor bienestar social.

La reflexión que impulsaba CAIN, buscaba enraizar en la conciencia de las personas, para que se movilizaran; por ello, en las reuniones se trabajaba en mesas temáticas, en las que se discutían diversas problemáticas de la región. Por ejemplo, en el caso de educación se

[9] Las comunidades integradas a la parroquia de Santa Cruz del Rincón son Alchipahuac, Arroyo Cumiapa, Arroyo San Pedro, Buenavista, Camalotillo, Cerro Tejón, Cerro Zapote, Cruztomáhuac, El Aserradero, Hondura Tigre, Iliatenco, Jicamaltepec, Llano Perdido, Llano Silleta, Loma de Cuapinole, Ojo de Agua, Pajarito Grande, Portezuelo del Clarín, Potrerillo del Rincón, Potrerillo Cuapinole, Pueblo Hidalgo, Río Iguapa, San José Vista Hermosa, Tlahuitepec, Tlaxcalixtlahuaca, Tierra Colorada y Tuxtepec; pertenecen a los municipios de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlán.

[10] Otras parroquias, como Chiepetlán, Tlacoapa o Malinaltepec, han sido importantes en otros momentos de la lucha, pero el inicio de la organización recayó en el trabajo realizado desde la parroquia del Rincón.

planteó la necesidad de tener una escuela para formar y certificar a los profesores de la región; en aquel entonces quienes tenían ganas de estudiar para alcanzar el nivel de licenciatura tenían que ausentarse frecuentemente de sus escuelas para asistir a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con sede en Acapulco. Es así que se decide hacer la gestión para tener una subsede de la UPN en la región y así los maestros podrían estudiar sin tener que trasladarse. Estratégicamente se pide que se coloque en Santa Cruz del Rincón, ya que se consideraba que era la mejor ubicación, en donde podrían llegar profesores de otras comunidades. El Prof. Apolonio Cruz nos platica que como resultado de esta gestión, en septiembre de 1995 se inaugura la subsede en El Rincón:

> En la mesa de trabajo de educación se discutía, "¿Cómo estamos ahorita?" "No, pues los maestros son borrachos, los maestros no trabajan, son pleitistas, no saben hablar, no saben expresarse" "¿Y qué clase de maestros queremos? ¿Queremos maestros preparados? ¿Las aulas? que no tenemos aulas, aquí avanzamos éstas, pero por cooperación de los padres de familia ¿Canchas, caminos? ¿Cómo va a haber educación si no hay caminos? ¿Cómo quieren que eduquen a sus hijos si los profes se emborrachan, se pelean, se quedan tirados en la calle?" (…) Y eso nos llevó horas de discusión, para tomar la decisión fue en Pueblo Hidalgo. (…) Hasta que la asamblea decidió: ¿Por qué no formamos una comisión que se encargue de investigar cómo se puede traer esa escuela UPN acá a donde estamos nosotros para que estudien los maestros? Sale, que se nombre la comisión", y como yo era Comisario que me nombran a mí. Ahí vamos a Chilpancingo [...] ¿Qué dicen los maestros, sí le entramos? A ver, cada comisario que llegue a su pueblo y convoque a asamblea los maestros y que traiga la relación de los maestros que vayan a estudiar. Vamos a Chilpancingo esta es la relación, cuando llegamos, "sí se va a echar a andar la UPN, ahí va la autorización". (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, diciembre 2015)[11]

Sin embargo, el plan de trabajo que se habían fijado tendría que modificarse ante el grave problema de violencia e inseguridad que se vivía en la región, lo que obligó a ponderar dentro del Proyecto Integral, el tema de la seguridad. Es así como la gravedad de los acontecimientos llevan, en octubre de 1995, a la creación de la Policía Comunitaria. El profesor Apolonio Cruz narra cómo se presentó la problemática y cómo se organizaron para darle solución:

> Y nosotros seguimos en nuestro proceso de las reuniones. También jerarquizamos problemas, la educación era problema serio, la delincuencia era otro problema serio "¿Cómo van a llegar obras, cómo van a llegar beneficios al lugar si no hay seguridad?" Venían los carros de las empresas eran asaltados, venían los carros de la CONASUPO eran asaltados, las cosechas de los campesinos eran robadas, los ganados eran robados, los viajeros del Rincón a San Luis eran asaltados, las mujeres eran violadas. Entonces, ¿qué seguridad? [...]. A partir de esas reuniones se fue suavizando el ambiente caliente de los partidos políticos, aquí hay que llevarnos bien, el problema común que tenemos es la marginación histórica, la pobreza extrema, el abandono, el sistema de gobierno ese es nuestro problema común de todos. No, tú que eres perredista o tú que eres priista, el enemigo fuerte está allá. Ahí se resolvieron esos casos. Y así se seguían

[11] Entrevista con el Profr. Apolonio Cruz Rosas, Comisariado de Bienes Comunales y ex – Comisario Municipal de Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec; en su momento fungió como Secretario del Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), fue fundador de la CRAC-PC y también Presidente Municipal de Malinaltepec. Fue el primer Secretario del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, de 2012 a 2015.

> dando temas. Así llegamos a la asamblea del 15 de octubre del 95 en el Rincón, con la noticia que el día 11 habían violado a una niña de Pueblo Hidalgo en el camino del Potrerillo a San Luis Acatlán, en donde está el módulo, fue de conocimiento de toda la región. Llega la gente a la asamblea en la Comisaría de Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón, "miren ya no vamos a tratar el orden del día, vamos viendo el caso de la niña ¿Qué vamos a hacer?" Y todo el mundo concluyó lo mismo, "hay que tratar este asunto". Fue una asamblea larga que empezamos a las 11 del día y eran las dos de la mañana y estábamos en discusión, hasta que acordamos finalmente [...]. Así que se levanta el acta, que se forma la policía comunitaria ¿Por qué la policía comunitaria? Porque va a ser la policía que no va a trabajar sola, va a trabajar con la comunidad, va a trabajar con la autoridad de la comunidad. Y así está el acta que se levanta y se lleva a certificar ante el notario público, y decirle al señor gobernador y a sus achichincles que hemos decidido esto. Porque antes de esto también se le estuvo pidiendo apoyo al gobernador, al procurador, al Tribunal Superior de Justicia, que vieron el problema y nunca fuimos atendidos. Ahora, como no nos atendieron ellos, ahora decidimos hacer esto y que no se metan con nosotros, y se va la comisión a entregar, venimos a hacerles el conocimiento, no venimos a pedirles permiso. Hasta ahí nace la policía comunitaria, el acuerdo fue en Santa Cruz del Rincón, que fue para todas las comunidades que estaban participando en ese proceso de reunión regional. Todo mundo estaba sediento de justicia, la gente se proponía para ser policía comunitario, aún aquellos que ya habían sido autoridades o los que eran maestros, se pusieron la etiqueta de policía, mucha gente se apasionó. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, diciembre 2015).

Desde 1995, la CRAC-PC ha sido un referente obligado para hablar de instituciones indígenas, de seguridad y justicia comunitaria, pues la experiencia representó un hito en la historia del país, no sólo por lo novedoso y eficiente de su operación, sino porque el hecho de que una organización civil controle su territorio a través del uso de las armas, condicionando e incluso restringiendo el accionar de las instituciones gubernamentales, ha significado un reto mayúsculo al estado mexicano. La operación de la CRAC-PC representó un freno para la delincuencia y para los abusos de las propias corporaciones policiacas y militares.

La lucha por el proyecto comunitario

Obviamente la creación y consolidación de la CRAC-PC no ha sido algo sencillo; por el contrario, han tenido que librarse fuertes batallas en diferentes momentos. En un primer momento, la lucha fue por trascender el sojuzgamiento en que los caciques priistas locales tenían sumida a la población, lo que significó cuestionar los "liderazgos" autoritarios, la "participación" circunscrita a las jornadas electorales, pero también oponerse y resistir lo violentos embates de las gavillas de bandoleros al mando de dichos caciques y de las corporaciones policiacas y militares. En ese proceso, como ya se dijo, fue fundamental el papel de algunos párrocos de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlapa, particularmente del presbítero Mario Campos Hernández. No es casual que desde entonces y aún hoy, las comunidades que sostienen el llamado "sistema comunitario" pertenezcan al territorio parroquial del Rincón o sean aledañas a éste. Esta primera batalla rompió el monopolio

del estado para ejercer control armado sobre el territorio, ganando legitimidad para el lado de las comunidades.

El funcionamiento de la Policía Comunitaria poco a poco disuadió el accionar de algunos maleantes, restableciendo cierta seguridad a la región. Pero los delincuentes que eran capturados por la PC y entregados a la Agencia del Ministerio Público, en muchas ocasiones salían rápidamente por "falta de pruebas" o por "inconsistencias en la conformación de sus expedientes", para volver a la región no solamente a seguir delinquiendo, sino también a vengarse de quienes lo habían detenido. Ello motivó nuevas reflexiones y, finalmente, la decisión de ya no entregar a los infractores, sino juzgarlos *in situ* desde una lógica diferente a la del Estado. Para ello, además de la Policía Comunitaria hubo que formar el Consejo Regional de Autoridades Indígenas (CRAI), que sería el órgano encargado de procurar justicia dentro del territorio comunitario. Con ello, se libró una segunda batalla, pues significaba no sólo asumir ante la ineficacia las funciones de justicia de otro de los poderes, el Judicial, sino que así también al incorporar los conceptos de *reparación del daño* y *reeducación*, cuestionan la pertinencia en la conceptualización del trabajo de dicho Poder Judicial. El Prof. Apolonio Cruz platica:

> Pasaron dos años y en una asamblea regional en Potrerillo Cuapinole dijeron los policías comunitarios "ya estuvo bueno de trabajar para el ministerio público, estamos trabajando para ellos, para que les cobren por volver a liberarlos, aquí están nuestras armas", y es entonces que dice la asamblea "ya no hay que entregarlos". La asamblea discutió "mejor hay que formar nuestra propio sistema de justicia", y se viene la discusión fuerte "y ¿con qué derecho? ¿Tu ley dónde está? ¿Tu presupuesto?" [....]. "Oigan ¿por qué no regresamos a los tiempos de antes? No había agencia de ministerio público, ni había juez, pero había método de justicia" (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, diciembre 2015).

Sin embargo, el problema mayor estaba por venir; cuando se captura y se juzga por abigeato a un mestizo de San Luis Acatlán con nexos políticos importantes. La decisión estratégica de transformarse de Coordinadora Regional de Autoridades *Indígenas* a Coordinadora Regional de Autoridades *Comunitarias*, significó explicitar que se trata de una instancia regional que aglutina autoridades que ejercen sobre un territorio concreto, por lo que tienen facultades para hacer cumplir sus acuerdos no sólo con los habitantes permanentes de dicho territorio, sino con aquellos de circulan por ahí.

> Los policías comunitarios se plantaban en las veredas en donde pasaban los abigeos y ahí los pescaban con todo y animal, los planteaban en la asamblea, y decían "éste nos los encontramos acá" y eso veían los demás y ándale a hacer trabajo comunitario. Ahí nació el proceso de reeducación cuando todavía no se llamaba CRAC, sino CRAI Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas. Cuando empiezan a caer los mestizos de San Luis Acatlán dice el presidente municipal Díaz Acevedo Rojas, "miren, suelten a estas personas, ustedes los indios trátense ustedes, esa ley es de los indios no de los mestizos" y esto se informa a la asamblea regional, por eso cambió el término, entonces que no sea CRAI sino CRAC Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y así caben más (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, diciembre 2015).

A través de este tipo de reflexiones, de poner en práctica y comprobar o corregir el rumbo, de dar voz a las personas, de acordar en colectivo, es que paulatinamente se fueron definiendo las características de lo que ahora se conoce como el proyecto comunitario: todos los cargos (desde los policías hasta los coordinadores) son nombrados en asamblea, que es la máxima autoridad; ocupar un cargo es un honor y una responsabilidad por la que no se recibe pago alguno; lo importante no es castigar sino reeducar y tratar de reparar el daño causado.

Sin embargo, hablar del proyecto comunitario implica mucho más que policías indígenas resguardando su territorio y detenidos que son reeducados para que aprendan a vivir en comunidad. En realidad se trata de un planteamiento político que desde la cosmovisión indígena, desde su ser y estar en el mundo, cuestiona profundamente la forma en que se hace política en el país.

Reivindicando su derecho como pueblos originarios a definir sus formas de organización y crear sus propias instituciones, los pueblos *Me'phaá* y *Na savi* han venido generando propuestas para enfrentar la difícil situación que viven. Dichas propuestas se han sustentado en la legislación –internacional, nacional y estatal- vigente pero, sobre todo, en la legitimidad que le otorga la transparencia de emanar de asambleas públicas. A pesar de ello, trascender la discusión legalista es una batalla permanente, con ella los detractores –locales y foráneos- han pretendido deslegitimar el proyecto comunitario a lo largo de estas dos décadas. Como se muestra en las páginas subsecuentes, esta discusión ha estado presente en cada una de las vertientes de la lucha, tanto en la CRAC cuando se planteó la credencialización, en la relación UNISUR-UIEG con el papel que se asigna a la capacidad para expedir títulos, o en los temas ambientales cuando las comunidades cayeron en la trampa de certificar "voluntariamente" sus áreas de conservación.

El proyecto comunitario en su conjunto, camina todo el tiempo en la tensión entre la legitimidad que le otorga el respaldo de las comunidades y la tentación de cumplir con la legalidad del marco normativo nacional para poder acceder a algún beneficio, real o ficticio; en ocasiones se tienen claros algunos riesgos de querer sujetarse a lineamientos creados desde la lógica del gobierno, otra veces se aceptan cosas sin pensar y las consecuencias los toman por sorpresa; siempre hay voces que hablan a favor de una u otra postura; a veces prevalece una postura y más tarde la coyuntura hace dominante a la otra; la tensión entre legalidad y legitimidad permea a muchos aspectos de la vida comunitaria.

La lucha por el proyecto educativo

Entre los temas del Proyecto Integral que se habían planteado años atrás estaba el educativo. Si bien se había logrado desde 1995 la instalación de una subsede de la Universidad Pedagógica Nacional, a donde acudían profesores de toda la región que poco a poco lograban nivelar su nivel de estudios a licenciatura, la demanda de formación estaba muy lejos de encontrarse resuelta. En las asambleas comunitarias y regionales, de vez en cuando se reflexionaba sobre la necesidad de contar con un espacio formativo propio, que permitiera abrir el abanico de formación hasta ahora limitado a la formación de docentes, pero sobre todo que respondiera a una lógica de los propios pueblos originarios, pues quedaba claro que la subsede de UPN que tanto esfuerzo costó obtener, había llegado con su organización y sus planes de estudio ya elaborados, y que su personal no era receptivo a los procesos organizativos de la región.

Es así como se empieza a hablar del proyecto para crear una universidad indígena, capaz de formar los cuadros comunitarios para dar un nuevo empuje a las demandas y aspiraciones de los pueblos originarios. El interés era tal, que llegaron a existir varias iniciativas, cada una con diferente grado de reflexión y desarrollo. Una de ellas, que había nacido alrededor del trabajo con profesores bilingües en la subsede Chilapa de la UPN, fue creciendo y convocando a más actores, hasta lograr confluir diversos esfuerzos a partir de los llamados "Congresos Estatales de Educación Intercultural". El primero de estos eventos, realizado en Chilapa en el año 2003, había logrado acordar la naturaleza de la futura institución como un espacio para recuperar, sistematizar y desarrollar las culturas y conocimientos de los pueblos indígenas de Guerrero, como punto de partida para promover procesos de desarrollo comunitario más incluyentes e igualitarios. Con un fuerte respaldo del magisterio bilingüe, este evento puso gran énfasis en los temas de las lenguas y las culturas indígenas, que no han encontrado cabida en las universidades convencionales. Se inicia un estudio de factibilidad para dar forma al proyecto a partir de las diferentes inquietudes vertidas.

Una vez que el gobierno anunció la intención de crear una serie de universidades indígenas en todo el país, el tema adquirió aún más relevancia. Se creó una oficina en la Secretaría de Educación Pública federal encargada de promover tales instituciones[12] llamada Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB). En Guerrero el recién electo gobernador "de izquierda"[13] en su discurso de toma de protesta asumió

[12] La CGEIB fue la encargada de promover no sólo la creación de las universidades interculturales, sino de promover la incorporación de contenidos interculturales en el resto del sistema educativo.

[13] En 2005 tomó posesión Zeferino Torreblanca Galindo, primer gobernador no postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Ganó las elecciones bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, por un amplio margen, en una jornada electoral caracterizada por la amplia y combativa partición de los guerrerenses, animados ante la posibilidad real de un cambio político. Empresario acapulqueño, ex alcalde

públicamente su compromiso de crear la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR). Luego de años de ser ignorado, el tema de la educación superior para los pueblos indígenas se volvió parte de la agenda de los gobiernos federal y estatal.

Pero lejos de ayudar, esto complicó el proyecto. Se formó la llamada Comisión Intersecretarial para la Creación de la Universidad Intercultural, constituida por los impulsores originales del proyecto y avalados por el Primer Congreso Estatal, a quienes se sumaron representantes de los gobiernos estatal y federal, para facilitar el proceso; sin embargo, los representantes de la CGEIB y de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en todo momento pusieron obstáculos, objetaron la propuesta de institución acordada en el Congreso Estatal y, finalmente intentaron imponer un modelo académico con planes de estudio previamente diseñado por ellos, sin ninguna pertinencia para el contexto sociocultural de los pueblos indígenas de Guerrero. Prediseñado desde la ciudad de México, este modelo no retomaba elementos culturales propios de estos pueblos, no reconocía su tradición organizativa, ni tenía como base las necesidades formativas de la región.

Tratando de atajar la imposición por parte de las instancias de gobierno, los impulsores de la UNISUR conjuntamente con diversas organizaciones sociales y autoridades comunitarias, en octubre de 2006 convocan en Chilpancingo al Segundo Congreso Estatal de Educación Intercultural, en donde se discuten y aprueban los avances que hasta la fecha se tenían en la Comisión Intersecretarial: funcionar en cinco sedes, con planes de estudio propios, con órganos de gobierno dirigidos por representantes de los pueblos originarios y buscar la autonomía del gobierno.

A pesar de la representatividad de los Congresos Estatales y de los exhortos hechos por el Congreso del Estado, luego de un año de trabajo conjunto de esta Comisión y a pesar de los acuerdos tomados en su interior, el Secretario de Educación José Luis González de la Vega anunció de forma unilateral la creación de la universidad intercultural en un lugar diferente al que se había acordado en la Comisión, a pesar de no contar el estudio de factibilidad. Con esto se rompen los trabajos de la Comisión y el gobierno estatal inicia en la prensa una campaña de difamación contra los impulsores de la UNISUR.

Parte del magisterio que respaldaba la propuesta se repliega ante la intimidación de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG); es entonces cuando la CRAC asume la responsabilidad de cobijar el proyecto. Es así como, en mayo de 2007 se convoca, ya en

---

del puerto, repartió algunos puestos entre la militancia perredista –partido que lo postuló-, pero mantuvo una línea de gobierno más de tipo empresarial y una línea de represión a los movimientos sociales, particularmente los opositores a la construcción de la presa La Parota y al sector disidente del magisterio aglutinado en torno a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

Santa Cruz del Rincón, al Tercer Congreso Estatal de Educación Intercultural. En medio de un clima de mucha confrontación con el gobierno, el congreso logra reunir más de 500 delegados en representación de comunidades y organizaciones indígenas y sesiona resguardado por la Policía Comunitaria. Luego de dos días de deliberación se acuerda abrir la UNISUR con el respaldo de los pueblos originarios y exigir al Estado el reconocimiento de la institución. Se nombran representantes de los cinco pueblos originarios para constituir los órganos de gobierno y se les toma protesta ahí mismo.

Es así como en agosto de 2007 se inauguran las primeras tres sedes de la UNISUR (Santa Cruz El Rincón, en Malinaltepec; Xochistlahuaca y Cuajinicuilapa), y unas semanas después también se inaugura la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero Ignacio Manuel Altamirano (UIEG-IMA), en La Ciénega, municipio de Malinaltepec (González, 2007).

La UNISUR se definió a sí misma como *la universidad de los pueblos para los pueblos*, representaba una aspiración y un logro del movimiento indígena en Guerrero, por lo que su apertura fue motivo de fiesta en las tres sedes y lograron reunir a representantes de diversas organizaciones sociales estatales y nacionales. Las comunidades acordaron aportes en especie para garantizar la alimentación de profesores y estudiantes provenientes de muchos lugares distintos, destinaron los edificios históricos en el centro de cada localidad y, en algunos casos, asignaron profesores locales para acompañar el proceso. Se convocó a la solidaridad para fortalecer la naciente institución comunitaria; organizaciones respondieron con donaciones de libros o materiales educativos y de papelería; numerosos académicos respondieron ofreciendo gratuitamente sus servicios como docentes, conferencistas, talleristas o en el diseño curricular. Sus sedes se ubicaron en sitios estratégicos para abrevar de y colaborar con las luchas de los pueblos indígenas y afromexicano, se intentó involucrar a sus autoridades civiles, agrarias y religiosas, y se indagó sobre las culturas e historia locales para incorporarlas al trabajo docente. Se diseñó con un modelo que promoviera la profunda vinculación con la problemática regional, poniendo en el centro de la formación un concepto de interculturalidad que cuestionaba las relaciones de poder subyacentes a las condiciones de marginación e inequidad, y promovía la revaloración de las culturas propias, promoviendo la equidad epistémica dentro del aula.

A pesar de las movilizaciones, de los exhortos por parte del Congreso Estatal y Federal[14], de las cartas públicas firmadas por connotados intelectuales y defensores de los derechos

[14] En abril de 2010, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó exhortar "al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero a reconocer a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur como un organismo público de educación superior y a brindarle el apoyo económico correspondiente"

humanos, el gobierno nunca accedió al reconocimiento de la institución[15], por lo que paulatinamente la falta de recursos, pero sobre todo, el no contar con reconocimiento de validez oficial de los estudios, fueron mermando su operación. La cuantiosa matrícula de los primeros años disminuyó drásticamente; la campaña gubernamental logró reemplazar la imagen de *legitimidad* que tenía la UNISUR, por la de *ilegalidad,* al no gozar del reconocimiento gubernamental.

Por su parte, la UIEG-IMA en el escenario político estatal representaba la imposición del gobierno, un intento por mediatizar las aspiraciones de los pueblos indígenas y promover un modelo formativo que no abonaba a su lucha. Físicamente se ubicó lejos de los sitios con tradición organizativa; por la premura con que se inauguró, tuvo que iniciar en condiciones muy precarias; cuando se etiquetaron recursos construyeron una infraestructura que contrasta fuertemente con el contexto de pobreza y marginación; Abad Carrasco su primer rector fue formado en el Instituto Lingüístico de Verano, institución con financiamiento estadounidense cuyos egresados han promovido procesos de aculturación en diferentes regiones indígenas del país y del continente; a lo largo de los primeros años la institución se convulsionó entre denuncias de racismo, corrupción y nepotismo; la rectoría ha sido manejada como un botín político más. La formación que promueve ha evadido la discusión política sobre las relaciones de poder y ha privilegiado un enfoque de tipo más técnico.

La fuerte inversión en infraestructura, la imagen de legalidad al ser oficialmente reconocida y la llegada de funcionarios con mayor oficio político -como sería el caso de Rafael Aréstegui a la rectoría acompañado por Pablo Guzmán, paulatinamente cambió la imagen; se usó parte del presupuesto en cooperaciones para las fiestas patronales o para financiar las bandas de música de algunas localidades, lo que ayudó a vencer el estigma como institución del gobierno y empezó a incorporarse a la vida cotidiana de las comunidades en la parte alta de la Montaña. Los apoyos económicos fueron un importante incentivo para jóvenes provenientes de familias en pobreza extrema y la matrícula creció paulatinamente. Guzmán se encargó de entrevistarse con los líderes comunitarios que apoyaban a UNISUR buscando socavar su base social.[16]

[15] Como parte del procedimiento administrativo para justificar la creación de la UNISUR, en septiembre de 2011 se presentó el proyecto de institución a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), misma que avaló los Planes de Estudio, el diseño institucional y la propuesta de presupuesto. En consecuencia, en diciembre de ese mismo año, el entonces Subsecretario de Educación Media Superior y Superior Marcial Rodríguez Saldaña, acudió a Santa Cruz del Rincón para entregar públicamente una constancia de que la UNISUR cuenta con el Aval de la dependencia para su creación.

[16] Versiones similares fueron comentadas por separado por líderes como el Pbtro. Mario Campos Hernández y el Profr. Apolonio Cruz Rosas.

Durante casi una década en la región se libró una batalla sorda por legitimar uno u otro modelo educativo. Más allá de las virtudes o miserias de personajes en particular, el debate de fondo es ¿qué modelo de educación superior promover? A lo largo del proceso de gestión y planeación de la UNISUR, diversos líderes comunitarios plantearon la necesidad de contar con un espacio para formar a los jóvenes de acuerdo con la cultura de los pueblos originarios, desde y para las comunidades, es decir, formar a los intelectuales orgánicos de las comunidades. Algunos de los fundadores de la CRAC-PC sostenían enfáticamente que ellos se habían formado en la lucha, que les había costado muchos años y que esa falta de formación los había llevado a cometer muchos errores. Por ejemplo, Cirino Plácido Valerio solía explicar la necesidad de crear una universidad diciendo que ¡"los empresarios tienen sus escuelas, los banqueros tienen las suyas, hasta hay escuelas para enseñar a los policías! ¡Y en todas ellas les enseñan como chingar al pueblo! Pero más jodido al indio, que casi nunca puede estudiar y cuando lo logra es en escuelas donde sólo le enseñan a afrontarse de su pueblo y de su lengua". Desde esas reflexiones fue surgiendo la claridad de que era preciso crear una institución propia, que era necesario preparar el recambio generacional de los liderazgos, que era indispensable disponer de un espacio para formar a los jóvenes de forma que pudieran apuntalar y potenciar los procesos organizativos de la región. Esto significaba pensar en la escuela no como un asunto individual, sino como parte de una estrategia familiar y sobre todo comunitaria. Este fue el reto con el que nació UNISUR y justamente es la visión que desde un inició se trató de mediatizar con la creación de la UIEG, que se promocionaba diciendo que formaría estudiantes con capacidad para "bajar" recursos de los programas gubernamentales para promover el desarrollo y combatir la pobreza.

En este estado de cosas, la reflexión sobre qué tipo de educación universitaria promover, se transformó en el dilema por definirse en torno a dos posiciones antagónicas, que más tarde quedaría claro, se corresponden también con las posturas respecto a la Policía Comunitaria, a la Reserva de la Biosfera y a los proyectos mineros: ¿Una educación superior que preserve el *status quo* mediatizando el discurso intercultural, convirtiendo la educación en una aspiración personal para promover la *movilidad social* a través de la expedición de títulos con la falsa expectativa de incorporarse a la nómina gubernamental, para dejar de ser campesinos, para promover una perspectiva exógena del desarrollo? O por el contrario, ¿Una educación que cuestione el *status quo* y forme para su transformación participando en las luchas existentes como espacio formativo, donde lo importante no es el título que permita buscar chamba, porque no se trata sólo de una aspiración personal, sino de un derecho colectivo consagrado en la Constitución, que potencie los procesos organizativos, que aproveche la riqueza natural y cultural de la región y permita soñar un futuro más digno para la gente?

En la segunda parte, cuando se analiza la estrategia para favorecer la entrada de las mineras y la ruptura del tejido social en la región, se abre un apartado puntual para analizar lo ocurrido posteriormente en el ámbito de las instituciones educativas.

El Consejo de Autoridades por la Paz y la Reconciliación

Durante septiembre de 2012, se desarrollaron algunos hechos que conmocionaron a la población y desencadenaron un nuevo caso de organización intercomunitaria. El caso se deriva de un viejísimo conflicto agrario entre las comunidades de Tilapa y Tierra Colorada, que no había sido atendido por el gobierno federal ni estatal; el recrudecimiento del conflicto en 2009, llevó a Tilapa a cortar líneas eléctricas y cerrar la carretera, afectando no solo a su contrincante Tierra Colorada, sino a varias otras comunidades, como fue el caso de Pascala del Oro, quien tuvo que abrir una brecha alterna en muy malas condiciones. Durante años, hubo agresiones mutuas con arma de grueso calibre, que afectaron a población inocente que cruzaba la zona; pero en 2012, iniciaron secuestros y asesinatos que ocurrieron ya no en los territorios de dichas comunidades, sino en tierra de sus vecinos, lo que generó la alarma al interpretarse como una escalada de violencia que involucrar a las demás comunidades. Los primeros días del mes una maestra originaria de Tierra Colorada se presentó en la Comisaría de Santa Cruz del Rincón para denunciar que habían intentado secuestrarla al cruzar por esta comunidad, cuando se dirigía a su hogar acompañada de otro profesor; ella pudo escapar pero desafortunadamente su acompañante no lo logró. El Comisario convocó de forma urgente a una asamblea en la que acuerdan cerrar inmediatamente la carretera Tlapa – Marquelia para exigir la intervención del gobierno del estado y para evitar el paso libre a los delincuentes.

> En la parte baja de municipio [de Malinaltepec], en Santa Cruz, hubo un hecho lamentable, en donde secuestran a un ciudadano de Tierra Colorada, pero que no era un caso único, sino que había muchos otros, con eso fue el colmo, porque lo secuestran y lo desaparecen, casi en el patio del pueblo, entonces reacciona el pueblo y cierran la carretera; se acerca Iliatenco y pregunta porqué cerraron la carretera, entonces nos sumamos; se acerca a preguntar Colombia, Pascala, San José Vista Hermosa, Iliatenco, Potrerillo y al saber las razones se van sumando al movimiento; entonces de forma el Consejo de Autoridades Comunitarias por la Paz, y la gente dijo "ya basta", tantos años Tilapa y Tierra Colorada nos tienen secuestrados: balaceras en la carretera, heridos ,muertos y el miedo de todo el mundo; entonces ese Consejo se integra por autoridades agrarias y municipales, y se vienen a pelear con el gobierno, casi pelear porque el gobierno le estaba dando por su lado a Tilapa, no querían intervenir, pero cuando se les exigió si tuvieron que aceptar, la gente dijo no vamos a levantar el plantón hasta que no resuelvan el problema. ¡Y sí se resolvió el problema, hasta ahorita hay paz! Se firmaron minutas con acuerdos de detener la violencia y se encontraron mecanismos para solucionar el problema agrario. Un 24 de septiembre de 2012, nos concentramos en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, con la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Gobierno del Estado y autoridades de todos los pueblos afectados; se asumió el compromiso de respetarnos y mantener la paz, que hasta la fecha se ha cumplido: ya no hay balazos en la

> carretera. Pero esto ocurrió hasta que el problema lo tomamos los pueblos. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, noviembre de 2015).

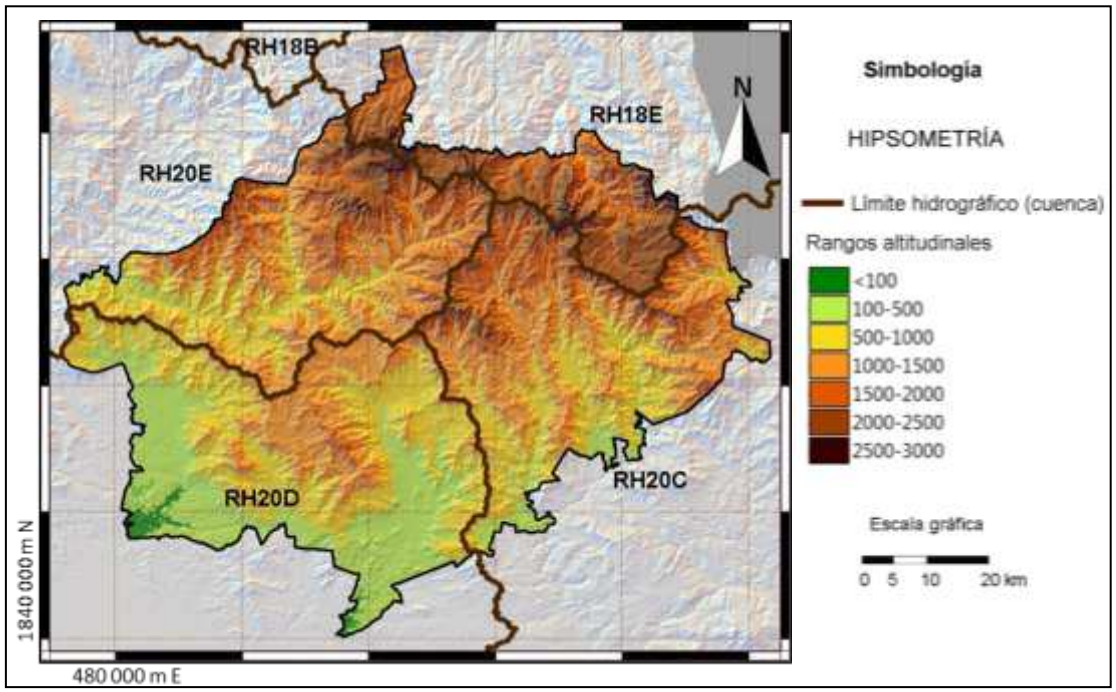
La pronta reacción de los vecinos del Rincón, fue rápidamente secundada por varias otras comunidades, generando una fuerte presión política hacia el gobierno, que tuvo que enviar representantes a atender la problemática. En un primer momento las autoridades de Tilapa se negaban a negociar, por lo que las medidas se recrudecieron cuando las comunidades movilizadas decidieron cortarles el suministro de electricidad; un par de días más tarde, logró instalarse una primera mesa de negociación entre Tilapa y Tierra Colorada, con la mediación del gobierno y la presencia siempre vigilante de las autoridades comunitarias organizadas en torno al Consejo Regional por la Paz y la Reconciliación. La presión de dicho Consejo obligó no sólo a abrir el espacio de diálogo entre las comunidades rijosas, sino que obligó también al gobierno a derivar los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones correspondientes, indispensable para concretar los acuerdos.

La estrategia seguida demostró su efectividad, pues se logró hacer causa común entre varias comunidades que desde años venían siendo afectadas por el conflicto agrario y la violencia a él asociada, resguardó a la población frente a la ola de inseguridad que venía creciendo a consecuencia del litigio, forzó a las comunidades en conflicto para entablar el diálogo, y forzó también al gobierno del estado a ejercer su papel y aportar los recursos necesarios para concretar los acuerdos.

Esta forma de proceder a partir de las asambleas y coordinarse entre autoridades comunitarias no sólo volvió a mostrar su efectividad, sino que evidenció otra vez la negligencia dolosa por parte de los funcionarios gubernamentales, que provocan que los conflictos entre comunidades crezcan y escalen en intensidad.

El territorio regional

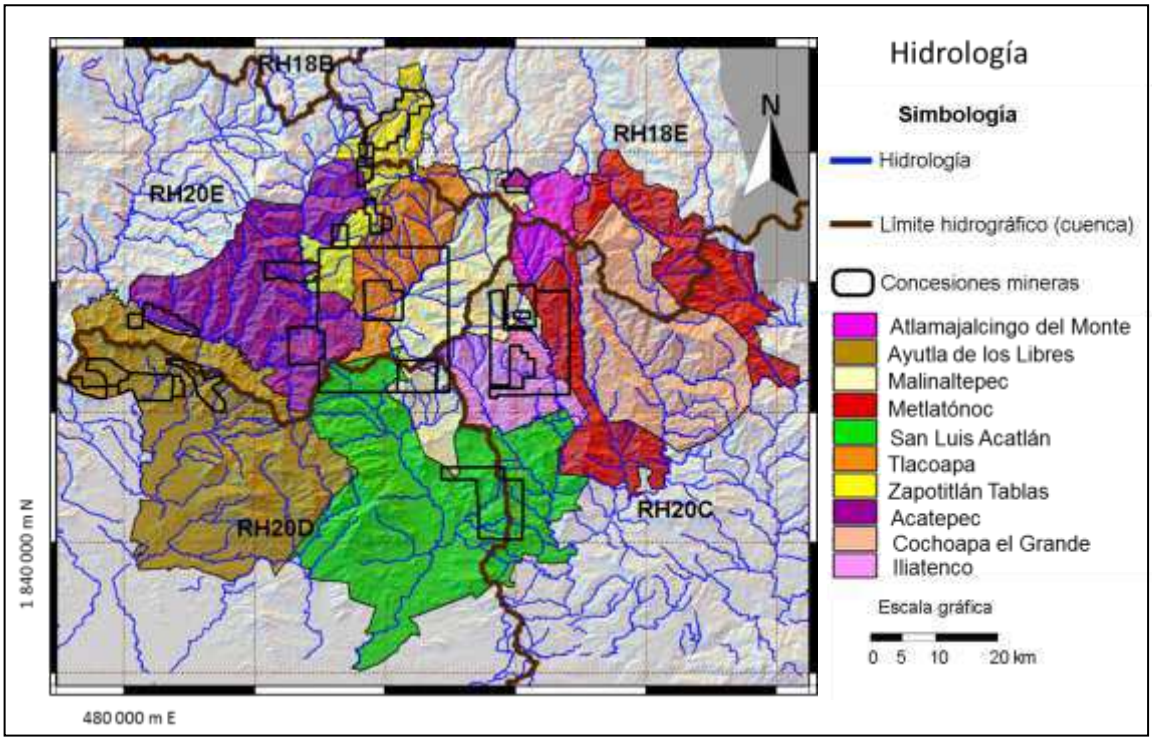
Como ya se ha mencionado, la región se ubica en la porción oriente de la Sierra Madre del Sur, muy cerca de los límites con el estado de Oaxaca; posee un paisaje dominado por terrenos montañosos de fuerte pendiente, algunas zonas de lomeríos y pequeños valles intermontanos. La altitud varía de los 500 msnm en las partes bajas de Ayutla y San Luis Acatlán, hasta los 3,100 msnm en el filo de la Sierra, en los municipios de Tlacoapa, Malinaltepec y Metlatónoc (ver Mapa 5)



Mapa 5. Hipsometría de la región Costa Montaña. Los valores indican la altitud en metros sobre el nivel del mar. Elaboración propia en base a información digital del INEGI.

Su elevación y cercanía con el mar confieren a la región una abundante humedad, con promedios de precipitación anual que pueden alcanzar desde 1,500 mm en la parte baja hasta 2,500 mm en las más elevadas. La diferencia en la elevación, hace variar la temperatura media anual desde 28^{o} en los alrededores de Ayutla y San Luis Acatlán, hasta 14^{o} C en las cumbres de la Sierra Madre, cerca de Tlacoapa y Metlatónoc. El clima varía desde el cálido subhúmedo con lluvias en verano (de humedad intermedia), hasta el templado subhúmedo (el de mayor humedad). Este gradiente altitudinal y climático se traduce en una importante diversidad de ecosistemas y de sistemas de manejo que aprovechan una variedad de recursos diferentes.

La abundante aunque estacional precipitación combinada con la abrupta topografía, forman durante la temporada caudalosas corrientes de alta energía, que en su trayecto hacia el océano Pacífico cada año ocasionan inundaciones y deslaves que afectan las vías de comunicación, viviendas y actividades productivas (Mapa 6). La vegetación dominante en la región corresponde a bosques de clima templado, principalmente bosque de Pino, bosque de Pino-Encino y, en menor medida bosque de Encino-Pino. En cañadas protegidas de la insolación existen manchones de bosque mesófilo de montaña. En las partes más bajas, existe selva baja caducifolia y en las barrancas selva mediana subcaducifolia (mapa 7).



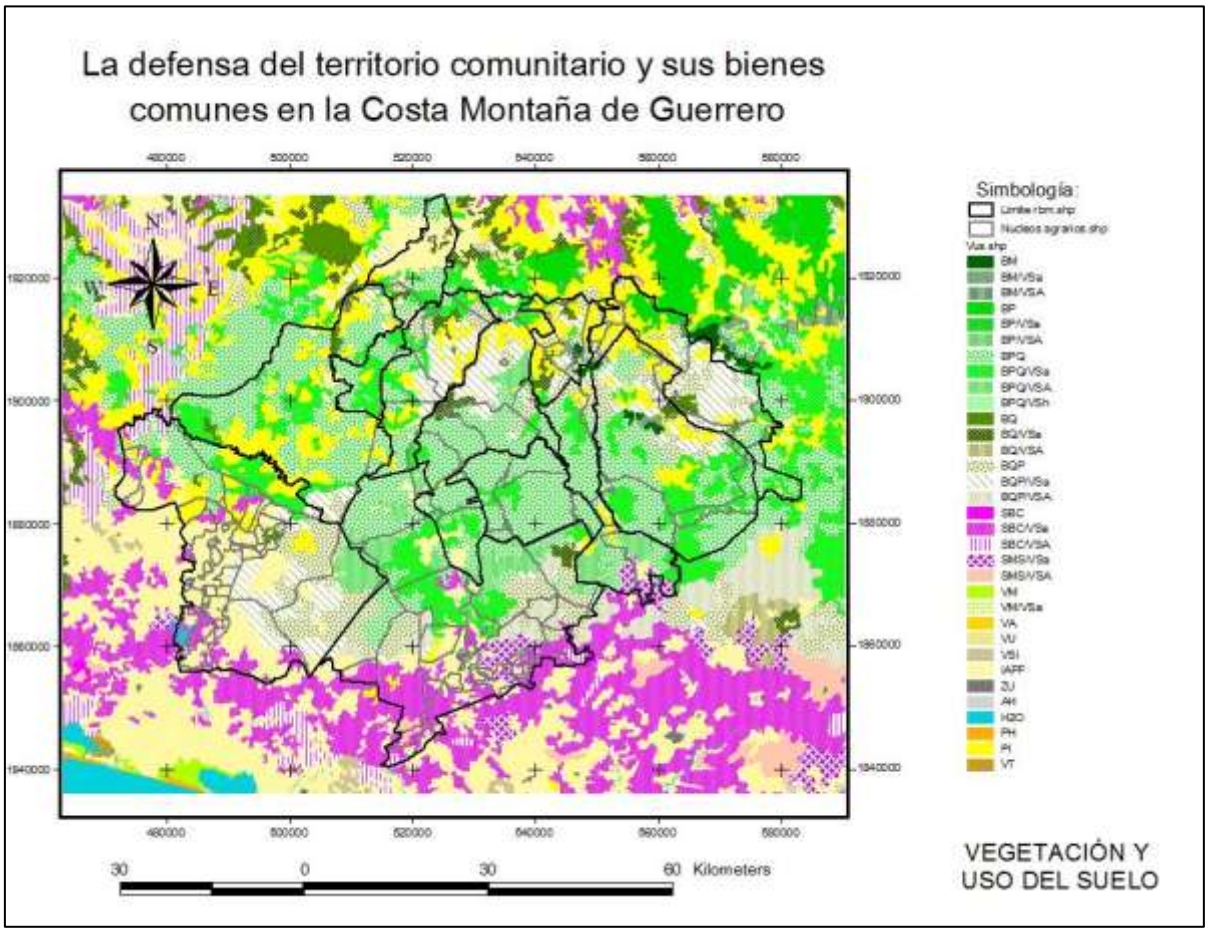
Mapa 6. Hidrología en la Costa Montaña. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía de INEGI.

Las comunidades aprovechan estos ecosistemas en diferente grado de intensidad. Algunas de ellas tienen o han tenido permisos para el aprovechamiento de madera de pino, pero la mayoría sólo aprovecha a escala local, lo que necesitan para construir su vivienda o morillos para las cercas. El encino es muy apreciado para la leña, pero la mayoría de las comunidades tienen acuerdos en el sentido de aprovechar sólo madera muerta. En las cañadas con bosque mesófilo o selva mediana, la vegetación más baja suele reeemplazarse para establecer cultivos de café que crecen bajo la sombra del dosel. También es común la recolecta de diversos productos no maderables, como frutas, plantas medicinales, así como la cacería de aves, y algunos mamíferos medianos y grandes.

Cerca de los asentamientos humanos, de las carreteras y a las orillas de los ríos, es común encontrar agricultura, potreros para el ganado y numerosos frutales, entre los que destaca el plátano como elemento característico de estos paisajes. La típica agricultura de montaña o tlacolol produce un mosaico con parcelas en uso o en descanso, hasta por muchos años, dando lugar a los *cuamiles* o vegetación secundaria con diferentes grados de desarrollo.

Normalmente las comunidades restringen el desmonte en ciertas áreas, por su pendiente, por ser zonas de recarga de agua o por ser considerados sitios sagrados, lo que en los hechos se traduce en que siempre existen ciertas zonas de conservación. En la

cosmovisión de estos pueblos, los cerros más altos son lugares sagrados, donde habitan las deidades, por lo que en ellos se desarrollan ceremonias religiosas, como las asociadas a la petición de lluvias y buen ciclo agrícola (a fines de abril y principios de mayo), o bien para agradecer los favores recibidos (el 31 de diciembre).



Mapa 7. Vegetación y uso del suelo en la Costa Montaña. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía de INEGI.

Sin embargo, la lógica campesina de tener un manejo diversificado (diverso en el tiempo a través de parcelas rotativas, y diverso en el espacio por el aprovechamiento diferenciado de diferentes unidades de paisaje o el cultivo combinado de diversos productos), no empata con la visión de las dependencias, en la que pareciera que cada porción de tierra sólo pudiera dedicarse a un tipo de uso. Como se verá más adelante, esto tiene profundas implicaciones cuando se pasa de los flexibles y adaptativos esquemas de manejo comunitario a los rígidos esquemas gubernamentales, como ocurre en la certificación de Áreas Voluntarias de Conservación (AVDC), en el pago por Servicios Ambientales (PSA) y más aún con los decretos de Áreas Naturales Protegidas (ANP).



Figura 3. Restricciones al uso de RN vinculadas con pago por servicios ambientales.

Las diferencias de criterio y de valor otorgado a los elementos culturales o del paisaje son el reflejo de dos lógicas diferentes, alimentadas en gran medida por dos cosmovisiones, es decir dos formas distintas de ser y estar en el mundo. Pero esas diferencias se explican también en términos de la relación con el territorio; las comunidades lo perciben como su espacio de pertenencia y de reproducción, y reconocen su interdependencia, pues asumen que de las decisiones que tomen depende su futuro y el de su familia, en lo inmediato y en el largo plazo. Uno de los señores *principales* afirmó durante el 2º Foro Regional en Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec: "Nosotros tenemos muy claro que la tierra no se vende, la tierra se hereda, como nos lo enseñaron nuestros abuelos." Agrega otro señor:

> Para nosotros aquí (…) seguir el ejemplo de nuestros antepasados, que supieron administrar sus tierras, sin necesidad de la asesoría de algún técnico (…) pero cuando se nos dice que ahora viene el proyecto de la reserva de la biosfera y que ningún campesino va a tener derecho a meter mano ora sí de su parcela, pues como que no nos parece bien esa propuesta por parte del gobierno, porque si es que existen estos bosques actualmente acá en la Montaña, es porque hemos sabido cuidar, no es necesariamente hasta que el gobierno nos enseñe, nosotros ya sabemos cuidar nuestros bosques. (Testimonio de un señor *Me'phá́á* originario de Colombia de Guadalupe, II Foro Regional, octubre 2012).

Por su parte, el funcionario lo percibe *desde lejos*, pues su sobrevivencia y calidad de vida no depende de lo que ocurre en ese espacio; por ello lo percibe fundamentalmente desde la perspectiva de las políticas ambientales diseñadas a otra escala y con otros intereses en juego. Esa diferencia es claramente percibida por la gente:

> Ese rector [Rafael Aréstegui] no es de la zona, no le interesa el aire que vamos a respirar en la Montaña ni el agua que vamos a tomar, lo que le interesa al rector es el dinero, es formar pobres para explotar a los pobres. (Testimonio Prof. Teodoro Tomás Galeana, Comisariado Ejidal de Iliatenco, 2o Foro Regional, noviembre de 2012). [17]

Esas diferencias tienden a producir un desencuentro, la comunicación y el acuerdo suponen una gran dificultad, pues cada actor parte de una racionalidad muy diferente, al igual que sus intereses y necesidades. Sin embargo, el mayor obstáculo consiste en que el gobierno actúa desde el poder, por ello el certificado de AVDC, la declaratoria de ANP o la concesión a la empresa minera se ejecutan como *actos de autoridad*.

> Nosotros estamos organizando la lucha para oponernos a un decreto federal de creación de una reserva de la biosfera, que no es más que un proceso de despojo y de expropiación de nuestras tierras; ¿cómo personas que ni tan siquiera los conocemos van a venir a decidir, gentes extrañas a decidir, a prohibir y a limitar nuestra relación con la madre tierra, por dónde si podemos caminar, por dónde si podemos andar, por dónde no? Cuando la madre tierra y el territorio de estos pueblos milenarios, originarios han sido siempre libres, libre como nosotros. Nuestros ancestros por muchos años han cuidado la vegetación y el bosque, por eso es que se conservan estos recursos naturales, por eso esta lucha que estamos dando ojalá que lo entendamos, que es una lucha de todos y todas, que es necesario hermanar nuestra lucha, porque no nada más es nuestro, hoy nos tocó vivirlo a los que estamos en la Montaña, pero también lo viven campesino e indígenas de otros lugares (…).(Testimonio Prof. Saúl Morán, 1er Foro Regional, octubre de 2012)[18]

Población y Condiciones Socioeconómicas

La región que aquí se ha denominado como Costa Montaña tiene una población cercana al cuarto de millón de habitantes y una composición predominantemente indígena, perteneciente al pueblo *Me'phaá* (Tlapaneco) y *Na Savi* (Mixteco). La excepción es el Municipio de Ayutla de los Libres en que representa una tercera parte. Esta composición poblacional, hace de la región uno de los principales enclaves de población indígena del país (Cuadro 1).

La población regional ha crecido en los últimos años, pasando de 208,733 en el año 2000 a 243,916 habitantes en 2010, lo que representa un incremento de 16.9%. A nivel municipal

[17] El Profr. Teodoro Tomás Galeana, era en ese momento el Comisariado Ejidal de Iliatenco y Presidente del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de octubre de 2012 a abril de 2015.
[18] El Profr. Saúl Morán, era en ese momento Comisario suplente de La Ciénega, miembro del Centro de Formación Permanente de la Montaña y uno de los principales impulsores del CRAADT.

los que presentan el mayor crecimiento poblacional son Cochoapa el Grande, Acatepec y Malinaltepec, mientras que el menor se presenta en Zapotitlán Tablas, Tlacoapa e Iliatenco. La figura 4 muestras las tendencias, aunque debe tenerse en cuenta que antes de 2005 Iliatenco aún formaba parte de Malinaltepec y Cochoapa el Grande formaba parte de Metlatónoc por lo que, en el censo del 2000 aún aparecían unidos.

Clave Mun	Municipio	Pob Total	Pob Masc	Pob Fem	Pob Ind Total	Pob Ind Masc	Pob Ind Fem	% Pob Ind
009	Atlamajalcingo del Monte	5,706	2,728	2,978	5,203	2,470	2,733	91.2
012	Ayutla de los Libres	62,690	30,706	31,984	20,735	10,064	10,671	33.1
041	Malinaltepec	29,599	14,110	15,489	25,000	11,903	13,097	84.5
043	Metlatónoc	18,976	9,014	9,962	17,045	8,055	8,990	89.8
052	San Luis Acatlán	42,360	20,867	21,493	21,596	10,635	10,961	51.0
063	Tlacoapa	9,967	4,734	5,233	7,896	3,716	4,180	79.2
072	Zapotitlán Tablas	10,516	5,037	5,479	8,392	3,990	4,402	79.8
076	Acatepec	32,792	16,070	16,722	29,206	14,263	14,943	89.1
078	Cochoapa el Grande	18,778	8,945	9,833	16,838	7,957	8,881	89.7
081	Iliatenco	10,522	5,075	5,447	8,867	4,271	4,596	84.3
	Costa Montaña	241,906	117,286	124,620	160,778	77,324	83,454	66.5
	% del Estado	7.14	7.13	7.15	33.42	33.55	33.29	
	Guerrero	3,388,768	1,645,561	1,743,207	481,098	230,441	250,657	14.2

Cuadro 1. Población en la región Costa Montaña según el Censo de Población y Vivienda 2010. Nota: los datos de población indígena consideran sólo a las personas mayores de tres años, lo que representa un sesgo de entre 6 y 10% según el municipio de que se trate. Fuente: INEGI, 2010.

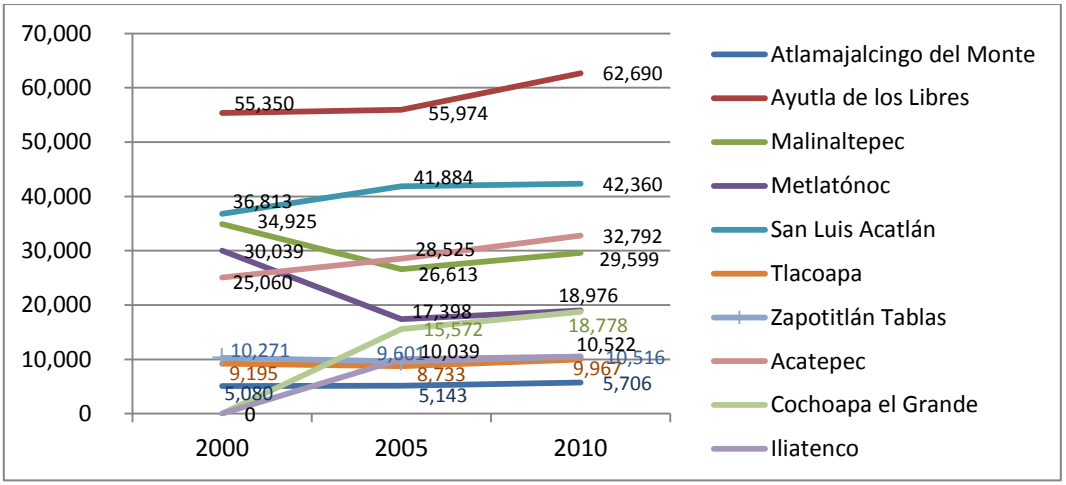
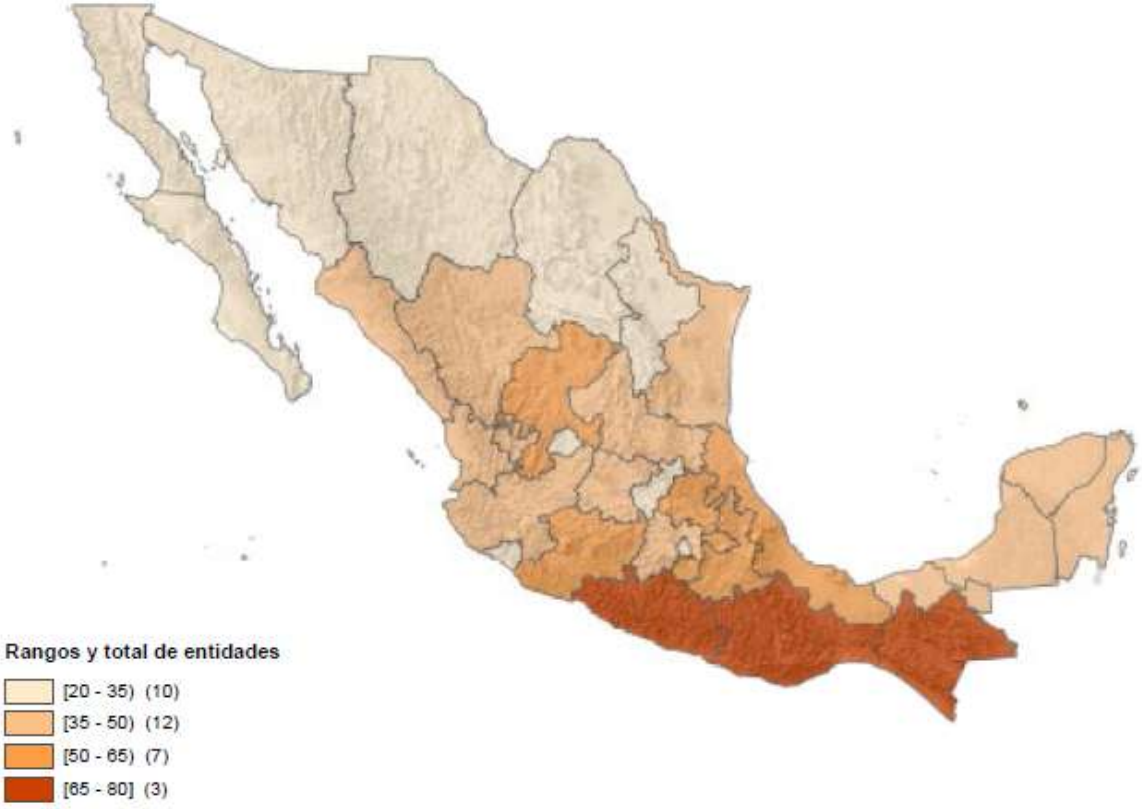


Figura 4. Crecimiento poblacional por municipio en la Costa Montaña. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Entidad federativa	Pobreza				Pobreza moderada				Pobreza extrema			
	Porcentaje				Porcentaje				Porcentaje			
	2010	2012	2014	2016	2010	2012	2014	2016	2010	2012	2014	2016
Nuevo León	21.0	23.2	20.4	14.2	19.2	20.8	19.0	13.6	1.8	2.4	1.3	0.6
Baja California	31.5	30.2	28.6	22.2	28.1	27.5	25.5	21.1	3.4	2.7	3.1	1.1
Baja California Sur	31.0	30.1	30.3	22.1	26.4	26.4	26.3	20.5	4.6	3.7	3.9	1.6
Media Nacional	*46.1*	*45.5*	*46.2*	*43.6*	*34.8*	*35.7*	*36.6*	*35.9*	*11.3*	*9.8*	*9.5*	*7.6*
Guerrero	67.6	69.7	65.2	64.4	35.7	38.0	40.8	41.4	31.8	31.7	24.5	23.0
Oaxaca	67.0	61.9	66.8	70.4	37.7	38.6	38.4	43.5	29.2	23.3	28.3	26.9
Chiapas	78.5	74.7	76.2	77.1	40.2	42.5	44.4	49.0	38.3	32.2	31.8	28.1

Cuadro 2. Distribución de la población por su condición de pobreza por entidad federativa. Fuente: CONEVAL, 2016.



Mapa 8. Porcentaje de población en situación de pobreza por entidad federativa. Fuente: CONEVAL, 2016.

Ahora bien, cuando se revisan los indicadores de marginación y pobreza, las cifras para la región son alarmantes y muestran en toda su crudeza la ineficacia de un Estado mexicano cuyas políticas no han procurado la equidad ni el bienestar de la población. Según los datos del CONEVAL (2016), Guerrero junto con Oaxaca y Chiapas son las tres entidades

con los mayores indicadores de pobreza, muy lejos de la media nacional; por el contrario, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur son las tres entidades con el menor porcentaje de población en situación de pobreza (Cuadro 2 y Mapa 8).

Si ampliamos la escala para analizar los patrones dentro de la entidad, encontramos que los municipios que consideramos como región Costa-Montaña presentan los índices más bajos, es decir, son los pobres dentro de los pobres, alejándose aún mucho más de los promedios nacionales de calidad de vida. En lo referente a educación, un tercio de la población regional mayor a 15 años es analfabeta, con un total que rebasa los 41 mil habitantes, alcanzando hasta 67% y 53% en Cochoapa y Metlatónoc, respectivamente. Como suele ocurrir, el grado de rezago es mucho más marcado entre las mujeres. De los mayores de 15, en la región el 73% no pudo terminar la primaria, cifra que se eleva a 89% en Metlatónoc y 94% en Cochoapa (CONEVAL, 2016) [19]. El promedio de escolaridad es de apenas quinto grado de primaria, es decir dos años menos que la media estatal. Nuevamente el indicador muestra una desventaja de poco más de un año para las mujeres respecto de los varones (INEGI, 2010).

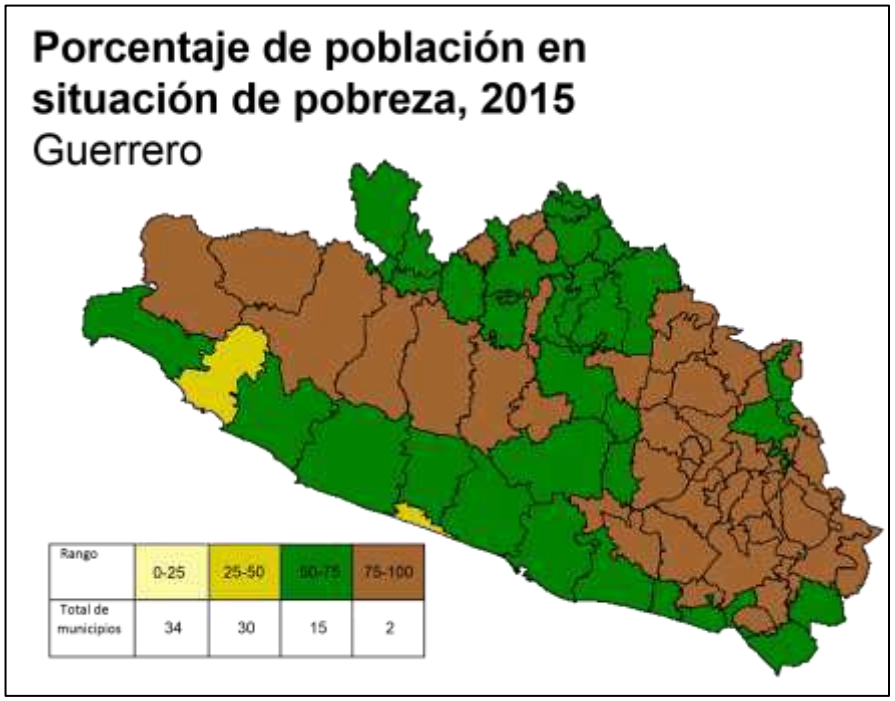
Municipio	Servicios en la Vivienda								
	Con Luz	Sin Luz	Con Agua	Sin Agua	Con Sanitario	Con Drenaje	Sin Drenaje	Luz,Agua, Drenaje	Ninguno
Atlamajalcingo del Monte	997	85	718	376	531	251	838	198	441
Ayutla de los Libres	11,057	1,368	8,987	3,435	5,850	5,535	6,848	4,558	3,118
Malinaltepec	4,772	878	1,345	4,327	2,763	1,566	4,076	385	1,750
Metlatónoc	2,933	430	2,408	961	1,389	516	2,844	414	1,743
San Luis Acatlán	6,846	1,508	4,630	3,735	3,573	2,841	5,507	2,043	2,736
Tlacoapa	1,438	601	603	1,450	1,162	793	1,253	247	916
Zapotitlán Tablas	1,907	319	1,688	543	1,471	954	1,275	732	1,017
Acatepec	3,927	2,527	4,070	2,391	4,109	1,948	4,473	1,101	3,769
Cochoapa el Grande	2,489	830	1,528	1,791	303	204	3,120	155	2,163
Iliatenco	1,442	586	812	1,229	1,146	774	1,248	389	734
Costa Montaña	37,808	9,132	26,789	20,238	22,297	15,382	31,482	10,222	18,387
%	5	27	5	7	3	2	17	2	26
Guerrero	767,090	33,656	496,276	303,915	648,034	615,830	181,550	426,806	69,650

Cuadro 3. Servicios disponibles en las viviendas de la Costa Montaña. Fuente: INEGI, 2010.

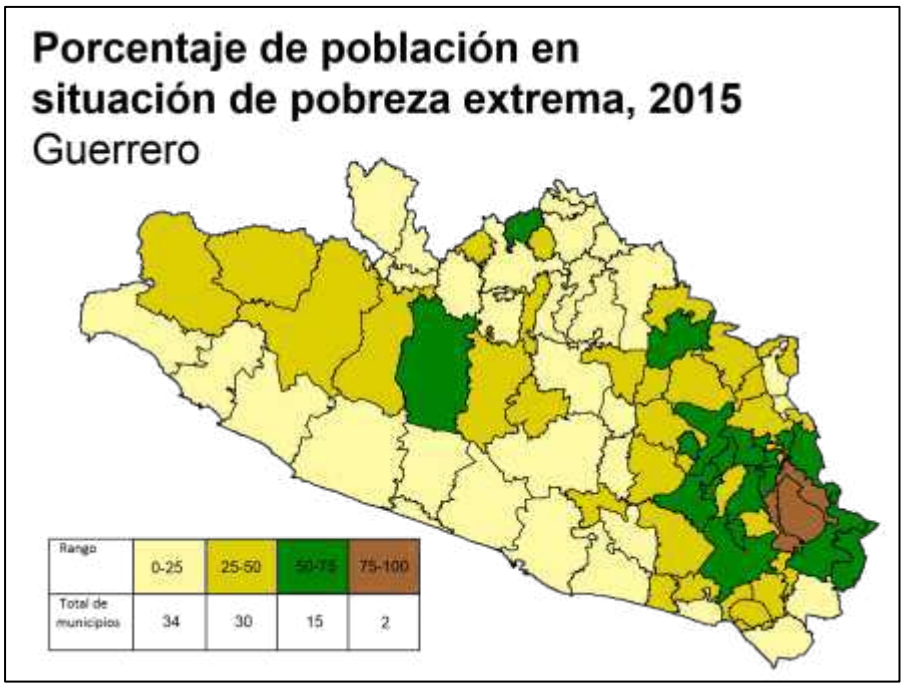
Del total de viviendas en el estado que carecen de servicios, un altísimo porcentaje se encuentra en esta región: sin luz (27%), sin drenaje (17%) y sin ningún servicio (26%). Por

[19] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Fecha de consulta 20 de enero de 2018. http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx

el contrario, las viviendas que cuentan con los tres servicios básicos representan apenas el 2% del total estatal (Cuadro 3).



Mapa 9. Población en situación de pobreza por municipio. Elaboración propia. Fuente: CONEVAL, 2016.



Mapa 10. Población en situación de pobreza extrema por municipio. Elaboración propia. Fuente: CONEVAL, 2016.

Al analizar los indicadores se puede apreciar que casi toda la Montaña (con excepción de Tlapa, Alpoyeca y Huamuxtitlán) tienen más del 75% de su población en situación pobreza, lo mismo que la Costa Chica, con excepción de la franja costera (Mapa 8). En todos los municipios considerados como Costa Montaña para este estudio, la población en condición de pobreza[20] supera el 75%. Cuando el indicador es pobreza extrema[21], Cochoapa y Metlatónoc sobresalen, con más del 75% de su población, mientras que la mayoría de municipios de la región tienen entre 50 y 75% de su población, exceptuando Tlacoapa e Iliatenco que tienen poco menos del 50% (Mapa 9).

Aún dentro de las profundas carencias económicas y materiales de la región, se pueden percibir diferencias en el grado de marginación, que muestra un gradiente en aumento conforme las comunidades quedan más lejos de la costa y más cerca del parteaguas de la Sierra Madre.

La visión de conjunto, muestra en toda su crudeza la forma tan precaria en que vive la población de esta región, en condiciones solo comparables a las del África subsahariana. Esta situación es resultado de un histórico abandono gubernamental, que ha soslayado su obligación de procurar la equidad y el bienestar para toda su población.

Esta panorámica permite dimensionar la importancia de los procesos organizativos en la región, que han permitido gestionar y exigir inversiones mínimas en infraestructura para paliar un poco las carencias, pero sobre todo que han permitido resolver de forma autogestiva problemas históricos de seguridad, justicia, educación, comunicación comunitaria y defensa de su territorio frente a los proyectos de despojo.

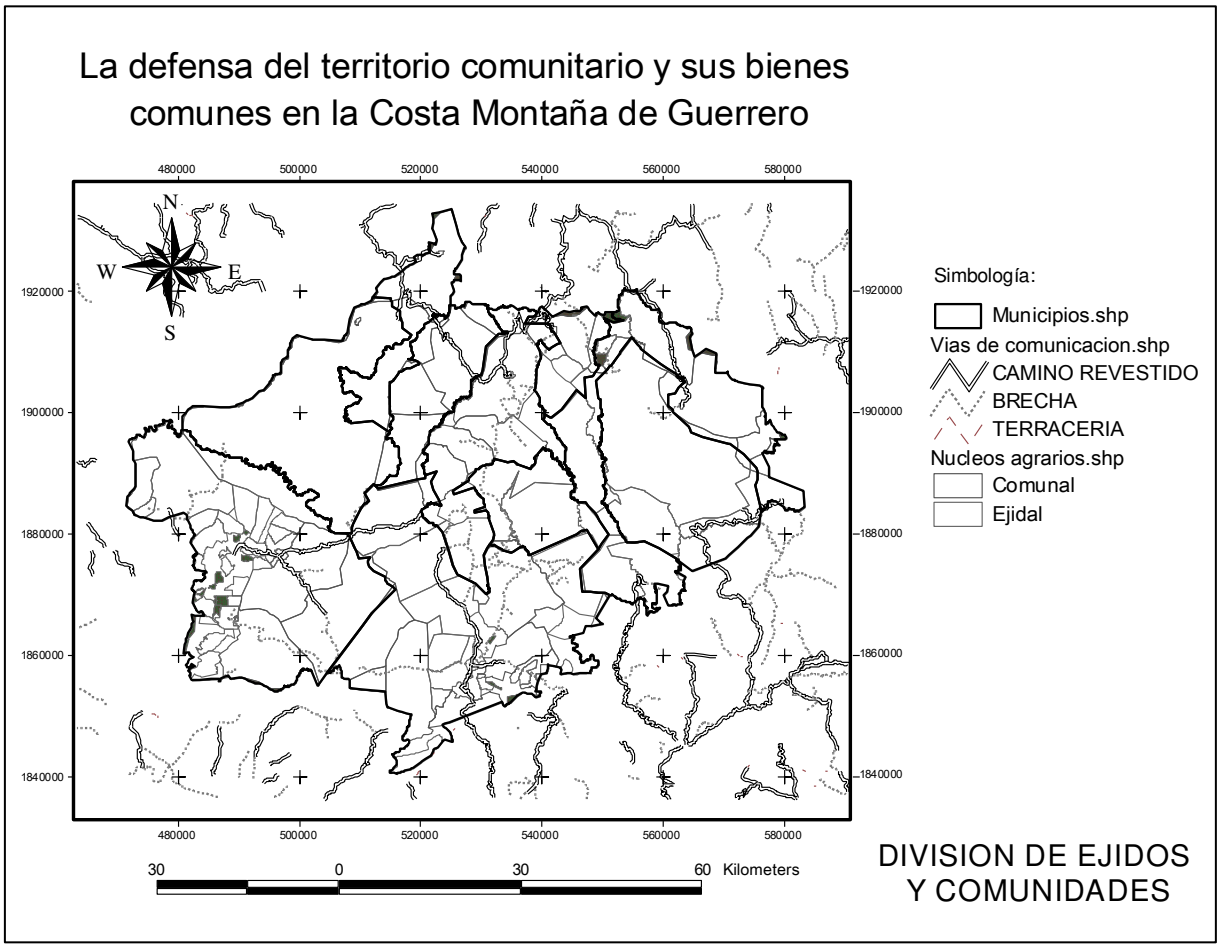
Tenencia de la tierra y Sistemas productivos

La tenencia de la tierra en la región es preponderantemente social, con un claro predominio de los bienes comunales y en menor medida ejidos. Los predios bajo propiedad privada ocupan una superficie mucho menor. Según las cifras que arroja la cartografía realizada (Mapa 10), para la región los Bienes Comunales representan

[20] *Ibid*. (p. 5) "Una persona se encuentra en situación de **pobreza** cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias."

[21] *Ibid* (p. 5) **"**Una persona se encuentra en situación de **pobreza extrema** cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Quien se encuentra en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicara por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana."

370,557.25 ha (69%), los Ejidos suman 132,886.75 ha (24.7%) y la Propiedad Privada 33,603.02 ha (6.3%), de la superficie total considerada en este estudio. Este dato es muy importante, pues según el artículo 99 de la Ley Agraria, existe una "protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables…", aunque siempre queda latente la posibilidad de una expropiación, también considerada en esta Ley, y que se analizará en el capítulo siguiente.



Mapa 11. Tenencia de la tierra en la Costa Montaña. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía de INEGI.

La tenencia de la tierra es un dato relevante también a nivel socio-cultural. En general, se puede decir que las formas colectivas de propiedad de la tierra refieren y promueven formas comunitarias de organización social, porque no se trata de que el Estado les *imponga* esa forma, sino que de origen, estas formas de propiedad se plantearon para restituir las tierras usurpadas a los pueblos originarios y significan el reconocimiento a una forma de organizarse en colectividad para administrar los recursos. La existencia de instituciones y autoridades locales encargadas de administrar la tierra y los recursos en ella existentes, supone la posibilidad de establecer mecanismos de gobernanza capaces de imponer la prevalencia del interés colectivo sobre el individual. Esta característica es

fundamental, pues se relaciona con la cosmovisión de los pueblos originarios, entre cuyos componentes se encuentra un mayor grado de vinculación con el entorno natural y un sentido de bienestar muy ligado a la vida en colectividad, lo que se refleja en la tradición de realizar trabajo colectivo y no remunerado o, como en este caso, la posibilidad de generar proyectos desde las comunidades ya sea para la educación, para brindarse seguridad o para defender su territorio.

Sin embargo, no se debe obviar que este aspecto es muy dinámico y que en los últimos años el gobierno federal ha promovido una lógica más individualista en la gestión de la tierra; en el Capítulo 3 se abordará como el PROCEDE, FANAR y otros programas que otorgan subsidios para proyectos han privilegiado al individuo sobre la colectividad.

Históricamente la agricultura ha sido la principal actividad productiva, teniendo al maíz como su principal producto, muchas veces asociado con frijol y calabaza, y ocasionalmente con chile. Las fuertes pendientes y suelos delgados condicionan que el sistema predominante sea el tlacolol o agricultura de montaña[22], orientado al autoconsumo. Sólo en las escasas planicies aluviales se logra cultivar a través de barbecho. En las partes más bajas (Ayutla y San Luis Acatlán), se produce también jamaica y piña, destinadas sobre todo a satisfacer el mercado local y regional.

La topografía ha limitado también la actividad ganadera mayor; sólo ha tenido relevancia la cría de chivos a través de las llamadas "*haciendas volantes,* grandes rebaños trashumantes que durante su paso pastoreaban a cambio de una renta" (Mijangos, 2001). A nivel familiar es muy común la cría en traspatio de ganado menor, el cual se concibe como un ahorro para tiempos difíciles, para resolver imprevistos u ocasionalmente para algún festejo.

En la región tiene importancia el cultivo del café, sobre todo en la parte alta (Malinaltepec, Tlacoapa, Acatepec, Metlatónoc e Iliatenco). Han existido dos empresas

[22] De acuerdo con la caracterización realizada por Moreno-Calles, Toledo y Casas (2013), el *tlacolol* de Guerrero puede haber sido una de las primeras y más importantes prácticas agroforestales en Mesoamérica (Whitmore y Turner II, 2001) que podría tener una antigüedad de 4,500 años (Rojas Rabiela, 1991). Actualmente este tipo de sistemas se distribuye en terrenos montañosos de laderas muy pronunciadas, principalmente en el bosque tropical caducifolio de los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Michoacán (Rojas Rabiela, 1991; Toledo *et al*., 2003). A grandes rasgos consiste en (a) que al realizar el aclareo o roza de la vegetación, suelen dejarse en pie árboles y arbustos silvestres o sus tocones que pueden rebrotar, lo que facilita la recuperación del bosque y el aprovechamiento de las especies que se dejan en pie (Rojas Rabiela, 1991); generalmente se usa el fuego para incorporar nutrientes al suelo. (b) se alternan uno o dos ciclos agrícolas de temporal, con un descanso largo que permite la recuperación del bosque y la fertilidad del suelo, y que durante los períodos de barbecho algunas especies son promovidas en la sucesión de la vegetación (Whitmore y Turner II, 2001). Suelen sembrarse diversas variedades de maíz, frijol y calabaza. El *tlacolol* se ha asociado a climas cálido subhúmedo y templado, dominados principalmente por bosque tropical caducifolio, y en menor cantidad por bosques de encinos y de pino-encino.

sociales destinadas a la comercialización del café (La Luz de la Montaña y Productores Rurales de la Montaña de Guerrero [ARIC]), pero los problemas políticos y la falta de transparencia en el manejo las han llevado al fracaso. En la actualidad, la mayor parte de la producción está siendo adquirida directamente por la empresa trasnacional Nestlé.

La diversidad de hábitats en la región permite el cultivo de una amplia gama de frutales, desde coco, mango y cítricos en la parte baja, hasta manzana, pera y durazno en la parte alta. Se ha documentado el cultivo de más de 40 tipos de frutales, la mayoría de los cuales son para el autoconsumo y en menor medida para el mercado local. En décadas pasadas el cultivo del plátano tuvo gran relevancia; la baja productividad en el cultivo del maíz ocasionaba hambrunas recurrentes, que eran mitigadas con una alta ingesta de esta fruta, que se usaba hasta en la elaboración de tortillas para hacer rendir el maíz; con la entrada masiva de los fertilizantes químicos la importancia de este cultivo decayó y en la actualidad algunas de sus variedades están en peligro de perderse.

Uno de los cultivos importantes en la región es, sin duda, la amapola. La intrincada topografía y la difícil comunicación históricamente favorecieron su cultivo, que ha representado para muchas familias la posibilidad de complementar sus ingresos en el contexto de pobreza y marginación que ha caracterizado a la región. Sin embargo, a diferencia de otras regiones, su cultivo no produjo la escalada de violencia en que se encuentra sumido el resto del estado. Probablemente la razón sea el tejido social y las regulaciones comunitarias que podrían estar manteniendo esta actividad dentro de los márgenes de convivencia. De cualquier manera, el tema resulta muy delicado, de gran complejidad y rebasa los objetivos de esta investigación

De manera general, se puede afirmar que la región presenta una serie de condiciones geográficas y ambientales que dificultan el desarrollo de actividades productivas distintas al aprovechamiento forestal. En primer lugar, la topografía preponderante es de sierras y laderas fuertes, por lo que la mayor parte de la superficie presenta pendientes muy inclinadas. Este factor es potenciado por el efecto de las lluvias, que caen con abundancia pero concentradas en una corta época del año, por lo que potencial erosivo en la región es muy alto, y solamente es amortiguado por la cobertura vegetal. La producción de alimentos a través de sistemas agroforestales como el *tlacolol*, ha sido la opción en esta difícil topografía, aunque en la actualidad se enfrentan algunos problemas tales como el acortamiento de los períodos de descanso; la pérdida paulatina de prácticas agroforestales como los cercos vivos, árboles aislados y bordes de vegetación; la disminución de las prácticas de manejo de las especies toleradas, fomentadas o protegidas; disminución de la cobertura vegetal; el uso de agroquímicos para suplementar

a los cultivos; y la pérdida de variedades de cultivos específicos para el sistema (Moreno-Calles *et al.*, 2013).

En este capítulo se intentó mostrar el territorio de la Costa Montaña no sólo como un mero espacio geográfico, sino como una apropiación de la gente, como una construcción social. Por ello, además de ofrecer algunos elementos del medio físico y biológico tendientes a contextualizar al lector, se ha puesto énfasis en la historia de organización y lucha social de los pueblos que ahí habitan, reconociendo que no es posible entenderlo sin aludir a las relaciones de poder que lo conforman, a las diferentes formas de apropiación material y simbólica que lo configuran, y que responden a una lógica distinta a la de la gobernancia. Por esta razón no debe sorprender que no corresponda con ninguna de las regiones administrativas formalmente reconocidas en la entidad. La Costa Montaña se constituye con la parte alta de la Costa Chica y la porción de la Montaña ubicada en la vertiente Pacífico de la Sierra Madre del Sur. Esto permite diferenciarla de las planicies costeras donde se asienta la población afromexicana y mestiza, y de la vertiente interior de la Sierra Madre, que aunque sigan siendo territorios fundamentalmente indígenas, el aislamiento geográfico ha sido un factor importante para la diferenciación.

Para aproximarse a la comprensión de este territorio, se usa la propuesta teórica de Agnew (1987, cit. por Oslender, 2002) quien define el concepto de lugar desde su constitución por tres elementos: 1) localidad, 2) ubicación, y 3) sentido de lugar. Se refiere a la localidad no sólo como los escenarios físicos dentro de los que ocurre la interacción social, sino que éstos están concretamente utilizados de manera rutinaria por los actores sociales en sus interacciones y comunicaciones cotidianas. Para este caso, la localidad estaría constituida por el paisaje montañoso y abrupto del que han aprendido a usar sus recursos y conocer sus ritmos, en el cual realizan su reproducción social y que es apropiado también en lo simbólico a través de fiestas y ceremonias en las que se honran a diferentes deidades, se piden y se agradecen favores

La ubicación es definida “como el espacio geográfico concreto que incluye la localidad que está afectada por procesos económicos y políticos que operan a escalas más amplias en lo regional, lo nacional y lo global” (Oslender, 2002: p. 7). Desde este elemento la Costa Montaña se percibe como un espacio de alta pobreza y marginación, donde se concentra la mayor parte de la población indígena estatal, origen de miles de jornaleros que año con

año acuden a los campos agrícolas del noroccidente del país; a este espacio suelen destinarse programas asistencialistas de “combate a la pobreza” y que son usados con la finalidad de mantener la clientela política para cada proceso electoral, pero que recientemente ha cobrado mayor interés dadas las reservas en recursos hídricos, mineros y de biodiversidad.

Finalmente el tercer elemento incluido en el concepto es el sentido de lugar, expresa la orientación subjetiva derivada del vivir en un lugar particular, hacia el que individuos y comunidades desarrollan profundos sentimientos de apego a través de sus experiencias y memorias. Este sentido de pertenencia a un lugar particular en la región se expresa por ejemplo al asumirse como habitantes de la Montaña y en las diferentes reivindicaciones sobre los territoriales ancestrales y la obligación de mantenerlos en resguardo para las futuras generaciones. Este sentido de pertenencia como pueblos de la Montaña, se ha afianzado a través de la historia de organización y lucha en que se han involucrado, con cada enfrentamiento contra la policía o el ejército para defender sus instituciones, con cada logro que consiguen arrancar al sistema gubernamental.

Los tres elementos mencionados (localidad, ubicación y sentido de lugar) se encuentran estrechamente vinculados. Lo que ocurre en la localidad, la forma en que se vive y se apropia el espacio -en lo productivo y lo simbólico-, está fuertemente influido por el sentido de lugar o sentido de lo comunitario en este caso; ambos elementos son influidos por las políticas públicas y estructuras de poder que se manifiestan en la ubicación. Lo importante de esta forma de concebir la espacialidad es el énfasis sobre las subjetividades y formas individuales y colectivas de percepciones y apropiación del espacio y de la vida social misma, que llevan a la conformación de identidades sociales particulares y situadas.

Esto cobrará particular importancia cuando en el Capítulo 3 se analice el papel de la identidad en la conformación del Consejo de Autoridades. Por ello, es de vital importancia entender la relación dialéctica entre territorio e identidad, y reconocer sin fundamentalismos que las identidades son específicas de cada lugar, por lo que siguiendo la idea de Agnew (1987, cit. por Oslender, 2002) hay que entenderlas como constituidas por los tres elementos de localidad, ubicación y sentido de lugar. Tales identidades movilizan redes culturales que emergen de la vida cotidiana, y que son las que nutren los movimientos sociales (Melucci, 1991).

SEGUNDA PARTE. CONSERVACIONISMO Y EXTRACTIVISMO MINERO:

DOS PROYECTOS DE DESPOJO



Figura 5. Bosques de Pino-Encino en la parte alta de la Montaña.

Capítulo 2. Empresas mineras vs pueblos indígenas. La disputa local en una guerra global por el territorio

Extractivismo, el colonialismo del Siglo XXI

Una revisión de la prensa, las estadísticas oficiales o la literatura especializada, permite rápidamente percatarse del creciente flujo comercial de materias primas y manufacturas poco elaboradas, viajando de un lugar a otro del mundo antes de configurar un producto final; es posible también seguir el rastro de poderosos capitales allanando el camino de extracción, tráfico, ensamblaje, comercialización y disposición final de los residuos derivados, sin importar las consecuencias ambientales ni sociales que ocasionen con ello. En el marco de los cambios en la geopolítica a consecuencia la globalización de los capitales y las mercancías, algunos de los recursos naturales estratégicos son la energía en sus diversas fuentes, los minerales, la diversidad biológica y el agua.

Este fenómeno, conocido como extractivismo de enclave contemporáneo se trata de un modelo económico-político que impulsa actividades primarias, altamente extractivas de recursos naturales, para su venta en el mercado internacional sin generar *in situ* encadenamientos productivos con mayor contenido tecnológico, impidiendo así darles mayor valor agregado en su propio lugar de origen. Dichos bienes al convertirse en materia prima de productos más elaborados –manufacturados y ensamblados muchas veces en etapas y lugares diferentes-, promueven un comercio desigual e inequitativo que acentúa la tendencia a empobrecer a los países del Sur. Este esquema fue muy importante durante la época colonial, tuvo otro auge importante en la segunda mitad del siglo XIX, uno más como producto de la demanda de materias primas durante la Segunda Guerra Mundial y hasta 1970. En el caso de América Latina desde los últimos años del siglo XX, este modelo de expoliación-acumulación volvió a tomar importancia, intensificando notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado (Delgado, 2010; Svampa, 2013).

> …el volumen de exportaciones de AL ha aumentado desde 1980 hasta 1995 en un 245%. Entre 1985 y 1996 se habían extraído y enviado al exterior 2,706 millones de toneladas de productos básicos, la mayoría de ellos no renovables. El 88% corresponde a minerales y petróleo. Haciendo una proyección hacia el 2016 se calcula que el total de exportaciones de bienes materiales de AL hacia el Norte sería de 11,000 millones de toneladas (Schatan, 1999; citado por Delgado, 2010, p. 23).

Estos enormes flujos de materiales y energéticos tienen tras de sí un intenso proceso de apropiación de tierras, incluyendo los recursos naturales contenidos en ella y, muchas

veces incluso la fuerza de trabajo de las personas que allí habitan. Este proceso es similar al de los *enclosures* estudiado por Marx cuando describió la acumulación originaria del capital, y ha dado lugar al concepto de *acumulación por desposesión* (Harvey; 2014) que se ha usado para explicar el papel que tiene para dinamizar los procesos actuales de acumulación del capital. Esta acumulación ha sido posible a partir de la disolución de la propiedad social de la tierra y de los demás bienes comunes en ella contenidos, estableciendo un doble despojo: el de los bienes comunes y el del trabajo.

Esta dinámica de los grandes capitales globales, ha ocasionado en todo el tercer mundo procesos de despojo a la población local; ya sea a través de la apropiación de tierras para los cultivos comodín, que sirven como alimentos/energía/forraje (maíz, caña, palma africana, jatropha) o de cultivos no alimenticios como la celulosa para papel; sea para la explotación de minerales energéticos y no energéticos; o bien a través de la *apropiación verde* de las tierras (*green grabbing*) con fines conservacionistas, donde se incluyen desde el establecimiento de áreas naturales protegidas, privadas o públicas, que excluyen a la gente; hasta la instrumentación de proyectos de mitigación frente al cambio climático a través de mecanismos REDD y REDD+ (Fairhead, Leach y Scoones, 2012; Borras *et al*., 2012; citados en Delgado, 2014).

Este proceso ha sido nombrado también como neoextractivismo o "Consenso de los *Commodities*[23]", y marca el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el *boom* de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, a quienes les genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de sus reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas (Svampa, 2013).

Aunque el pillaje y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, desde el punto de vista económico y social, la demanda de *commodities* ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Al respecto, son ilustrativos los datos que ofrece Delgado

[23] Maristella Svampa (2013: 31-32) utiliza el concepto de *commodities* en un sentido amplio, como «productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente», o como «productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento». Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina, la demanda de *commodities* está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros)

(2011) sobre el aporte tan diferente de la minería aurífera en la economía mexicana y estadounidense:

> …a pesar de indicadores mayores en la productividad minera, la participación del sector en el PIB nacional es muy baja y además ha sufrido una reducción paulatina desde 1983 al pasar de 1.63 % a 1.1 % de PIB en 2008. Se suma el hecho de que el empleo formal ronda los 270 mil trabajadores, esto es, alrededor del 0.2 % de la población nacional y menos del 0.1 % de la población económicamente activa [Cámara Minera de México, 2009]. El salario mínimo profesional ronda entre los 50 y los 80 pesos diarios, dependiendo de la zona económica y el tipo de trabajo [INEGI, 2009] (Delgado, 2011, p. 5).
>
> Así, en México, el grueso de la producción de pequeña y mediana escala genera mineral en polvo (extrae roca mineral y la maquila). Luego se envía a grandes fundidores nacionales para su posterior exportación. Por su parte, el capital extranjero extrae cantidades importantes de mineral que funde en México (actividad que tiene los costos energéticos y de generación de contaminantes más importantes de la cadena de valor) y que purifica y transforma en el extranjero. El gran negocio metalmecánico no es mexicano sino fundamentalmente metropolitano, sobre todo de EU, que es el que adquiere más de la mitad de las exportaciones nacionales [Gobierno Federal, 2009]. Basta precisar la importancia de ese negocio que, en 2006, representó un valor añadido al PIB de EU de unos 2.1 billones de dólares. Además, generó 1.5 millones de empleos en ese país [National Research Council, 2008] (Delgado, 2011, p. 6).

Esto trae consigo diversas repercusiones adversas. Una de ellas es la tendencia a la pérdida de soberanía alimentaria, a consecuencia de la exportación de alimentos en gran escala para consumo animal o la producción de biocombustibles. En algunos países esto ha generado o agudizado una profunda crisis alimentaria, que en opinión de diversos autores constituye una de las dimensiones más urgentes de la crisis del sistema capitalista. La especulación financiera, resultado de la liberalización de los mercados financieros y de productos impulsada por las políticas neoliberales como parte de un nuevo modelo de acumulación de capital ha sido responsable de la hambruna creciente en diversos países del tercer mundo.

Otras de las expresiones del neoextractivismo o "consenso de los *commodities*" son la megaminería a cielo abierto, la expansión de la actividad petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o *shale gas*, con la tan cuestionada tecnología del *fracking*) y la construcción de grandes represas hidroeléctricas, actividades todas que generan gran resistencia de la población, por los altos costos sociales y ambientales que implican (Svampa, 2013).

Según Svampa (2012) las principales características del extractivismo pueden resumirse en: a) su gran escala, (son actividades que implican uso intensivo del capital, pero no intensiva de trabajo); b) los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones trasnacionales); c) la especialización productiva (*commodities*) y d) los

impactos y riesgos que representan en las dimensiones sociales, económicas y ambientales.

Esto es particularmente importante de discutir, porque forma parte de una lógica a la que ni siquiera los gobiernos calificados *de izquierda* o *progresistas*, han logrado sustraerse. En América Latina, gran parte de las izquierdas y del progresismo populista suelen sostener una visión productivista del desarrollo, que privilegia una lectura en términos de conflicto entre capital y trabajo y minimiza o, incluso proscribe, las nuevas luchas sociales concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes (Gudynas, 2011). En este marco político-ideológico tan cegado por la visión productivista hacia los principios del paradigma ambiental, la actual dinámica de desposesión se convierte en un punto ciego, por lo que las problemáticas socioambientales son consideradas como una preocupación secundaria o sacrificable, comparadas con los graves problemas de pobreza y exclusión de las sociedades latinoamericanas.

Es así como aún esos gobiernos *de izquierda*, ante la necesidad de recursos para sus programas de promoción de mayor equidad social o de combate a la pobreza, se han aliado con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor, lo cual limita claramente la acción del Estado nacional, que en diversos rubros se ven forzados a plegarse a las "recomendaciones" del capital trasnacional. Existen algunas diferencias en el papel que se asigna al Estado en la forma de instrumentalizar esta nueva fiebre extractiva (algunos se manejan desde la ortodoxia macroeconómica liberalizando su economía a las empresas, y otros realizan directamente la explotación a través de empresas paraestatales) y en la forma de distribuir los excedentes captados por dicha actividad. Pero lo que todos defienden es el crecimiento económico como sinónimo de desarrollo, lo cual sólo se logra aumentando las exportaciones y maximizando las inversiones (Gudynas, 2011).

Los escenarios latinoamericanos más paradójicos del "neoextractivismo progresista" son los que presentan Bolivia y Ecuador, pues a pesar de tomar distancia de los procesos de transnacionalización y subordinación del estado, no logran sustraerse a la apropiación masiva de la naturaleza y la inserción global subordinada que se traduce en un fuerte apoyo a los sectores extractivos (minería e hidrocarburos, principalmente), medio indispensable para lograr el crecimiento a través de las exportaciones. Y como los recursos generados – sea por la vía de cobros arancelarios mayores a las trasnacionales o recolección directa de regalías a través de paraestatales- son usados para financiar planes de ayuda a los sectores más pobres, políticamente justifican y legitiman los costos sociales y ambientales generados. La paradoja no es menor, toda vez que ha sido justamente en estos países donde, en el marco de fuertes procesos participativos, se han ido naturalizando nuevos conceptos-horizonte como los de descolonización, Estado

plurinacional, autonomías, «buen vivir» y derechos de la naturaleza (Gudynas, 2011; Svampa, 2013).

El escenario actual parece indicar que, ya sea en el lenguaje crudo de la desposesión (neodesarrollismo liberal) o en aquel que apunta al control del excedente por parte del Estado (neodesarrollismo progresista), el actual estilo de desarrollo se apoya sobre un paradigma extractivista, se nutre de la idea de "oportunidades económicas" o "ventajas comparativas" proporcionadas por el «Consenso de los *Commodities*», y lava sus pecados impulsando programas de reciclaje de materiales, ahorro de energía o inclusión de sectores vulnerables.

Más allá de las diferencias político-ideológicas de uno a otro país, tales posiciones reflejan la tendencia a consolidar un modelo de apropiación y explotación de los bienes comunes con catastróficas consecuencias ambientales–agotamiento de manantiales, contaminación de agua y suelos con metales pesados y otros tóxicos, extinción de numerosas especies de flora y fauna-, que han sido ya vastamente documentadas, por lo que ahora me interesa más llamar la atención sobre las repercusiones sociales.

El neoextractivismo se impone desde una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso desarticula las economías regionales y profundiza el proceso de acaparamiento de tierras, sea a través de la desposesión o el mero despojo de tierras, vulnera los sistemas ecológicos amenazando con ello las formas de reproducción social; con todo ello genera la expulsión o desplazamiento de numerosas comunidades campesinas o indígenas, violentando procesos de decisión ciudadana y haciendo añicos avances en procesos de democracia participativa que costaron años impulsar; produciendo nuevas formas de dependencia y dominación, e inaugurando un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos y criminalización de la lucha social (Svampa, 2013).

Recursos estratégicos

Dentro de la diversidad de recursos naturales que intervienen en los innumerables procesos industriales y de acumulación de capital, algunos reciben particular atención. Los recursos estratégicos "son aquellos valores de uso que definen o estructuran materialmente la producción de la tecnología de punta, o aquellos que juegan un papel decisivo en la producción de los elementos básicos para la reproducción material de la estructura fundamental del aparato productivo o para la reproducción de la fuerza de trabajo" (Barreda y Ceceña, 1995).

En el mismo sentido, Delgado (2011) considera que

> (…) el carácter estratégico de los recursos radica, sobre todo, en el hecho de que las reservas existentes, su localización, cantidad y/o calidad, están cambiando; producto ciertamente de crecientes patrones de consumo y contaminación, a lo que se suma, efectos del cambio climático y sus sinergias. No obstante, un *recurso natural estratégico* es aquel que es clave en el funcionamiento del sistema capitalista de producción y/o para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial. Puede además ser escaso o relativamente escaso, sea debido a las limitadas reservas existentes o como producto de relaciones de poder establecidas que limitan, en ciertos contextos sociohistóricos, el acceso, gestión y usufructo del mismo (Delgado, 2011, p. 9).

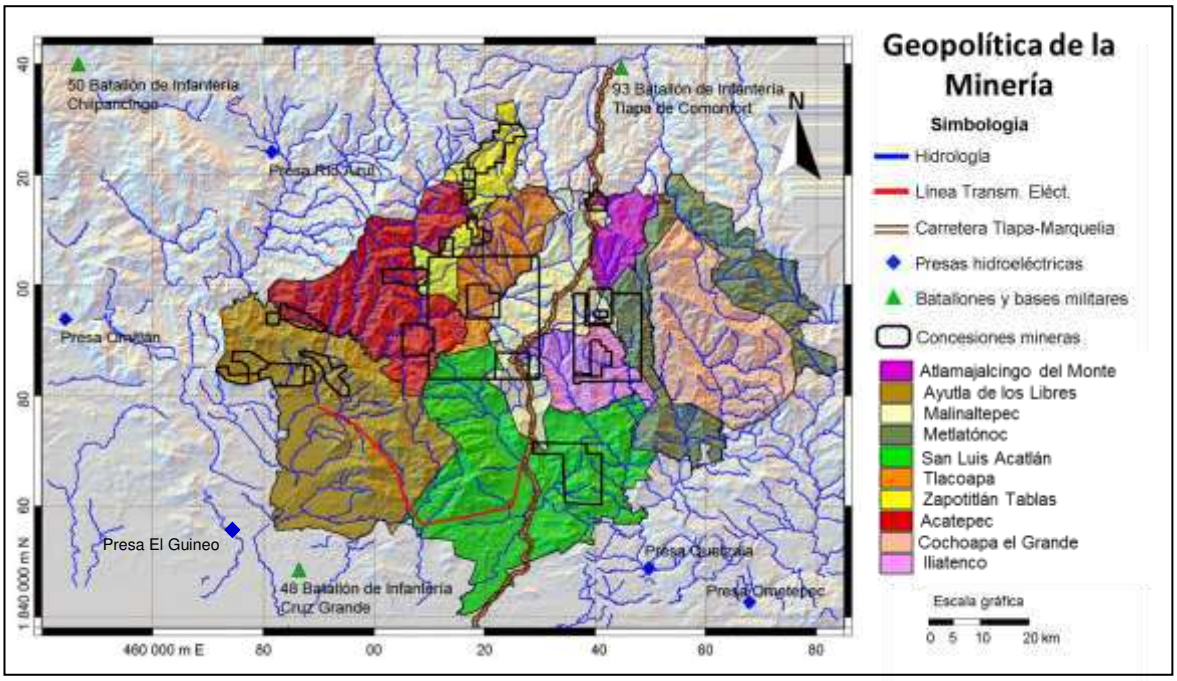
Entre los recursos naturales que por su carácter estratégico buscan ser apropiadas por los procesos contemporáneos de acumulación del capital, destacan los hidrocarburos, los minerales metálicos y no metálicos, el agua y la biodiversidad (Espinosa, 2010). El agua y la biodiversidad son dos componentes de los ecosistemas naturales íntimamente ligados, interdependientes, y cuya calidad y disponibilidad para el consumo humano depende en gran medida de la salud de los ecosistemas, por lo que son muy sensibles a los procesos de deterioro antropogénico. En el caso de la Costa – Montaña, ambos recursos son abundantes y codiciados, aunque, en el tema de aprovechamiento comercial de la biodiversidad existe poca información; pareciera que el interés sigue muy centrado alrededor de la madera y algunas especies silvestres de recolección.

En el caso del agua, la dinámica es muy diferente; en primer lugar porque los volúmenes que se producen en las partes altas alimentan cuatro grandes cuencas: Balsas, Papagayo, Nexpa y Quetzala (ver Mapa 6. Hidrología). Este líquido se suministra para el consumo humano en Acapulco, Tlapa, Marquelia, Ometepec y numerosas poblaciones. Pero también es ambicionado para dos importantes procesos de transformación: minería a cielo abierto y energía eléctrica (Mapa 12). En el primer caso, la amplia superficie concesionada a las empresas mineras[24] permite vislumbrar que, de lograr instalarse en explotación tendrán una muy importante demanda de agua, por lo que muy probablemente entrarían en conflicto con los usos urbano, agrícola, pecuario y turístico al competir por los volúmenes.

Por otro lado, en la actualidad los caudales provenientes de esta zona se usan ya para la producción de electricidad en la presa La Venta, pero existen los proyectos para ampliar la presa El Guineo, y construir otras sobre los ríos Omitlán, Quetzala y Ometepec, además del tan controvertido proyecto de La Parota, sobre el río Papagayo (Mapa 9). En la actualidad, Guerrero produce más energía eléctrica de la que consume, por lo que queda claro que los proyectos anunciados no tienen la intención de proveer a la población; por el contrario se intuye que su verdadera intención es suministrar la enorme demanda de energía que requerirían las explotaciones mineras, hipótesis que se refuerza al ver que el

[24] Sobre este tema se abundará en las páginas siguientes.

trazo de la línea de conducción que se está construyendo se dirige precisamente hacia la zona concesionada.



Mapa 12. Geopolítica de la minería en la Montaña de Guerrero. Fuente: Elaboración propia a partir de información de CIPOG-EZ.

En el mismo sentido, luego del paso de la tormenta tropical Manuel en 2013, el presidente Peña Nieto anunció la construcción de una autopista de cuatro carriles, que cruzaría la Sierra Madre del Sur, desde la Costa hasta el Balsas, al mismo tiempo que se escatiman recursos para dar mantenimiento a la carretera federal existente; en la región esto se ha interpretado como la dotación de infraestructura para la entrada de la maquinaria y el paso constante de los enormes camiones de carga para mover el mineral. El Pbro. Melitón Santillán lo explica de esta forma:

> Son cuatro caminos que necesitan las mineras para entrar: a) agua, b) energía eléctrica, por eso ya pusieron siete subestaciones aquí en la Montaña y están haciendo líneas de conducción trifásicas, c) requieren carreteras para que entre la maquinaria minera y por eso Peña anunció la ampliación de la Tlapa -Marquelia; d) y necesitan seguridad, por eso quieren acabar con la organización de los pueblo s. (Testimonio del Pbro. Melitón Santillán Cantú, párroco de Malinaltepec y uno de los principales promotores del Consejo, octubre de 2012)

Las tendencias en la inversión pública en marcha para la región y proyectada para los próximos años parecen confirmar que la explotación minera constituye el eje articulador de las acciones realizadas por una diversidad de actores en Guerrero. Un ejemplo es el proyecto para elevar la altura de la cortina en la presa El Guineo, lo que permitiría convertirla en hidroeléctrica. Por ello, se procurará describir y analizar con mayor detalle este aspecto.

En los últimos años se han descubierto importantes depósitos minerales, con lo que la explotación minera en la entidad ha aumentado considerablemente. Para el 2009 ya se encontraba concesionada el 10.97% de la superficie estatal, cuyos títulos se concentraban en seis grandes empresas: Luismin (ahora propiedad de Goldcorp) con base en Mezcala, Industrial Minera México con sede en Taxco (parada por el estallamiento de una huelga desde julio de 2007), Minera Rey de Plata en Teloloapan, Minera La Calentana en Coyuca de Catalán, Cementos Apasco en Acapulco, la Sociedad de Solidaridad Social Cantera El Naranjillo en La Unión, y Minerales No Metálicos de Guerrero en Acapulco (Espinosa, 2010). En el cuadro 4 se resume la producción de las principales minas en operación.

Según los datos del Servicio Geológico Minero (SGM) reportados por Santos (2014), existe interés de otras empresas, que mantienen 31 proyectos en fase de exploración (85% por empresas asentadas en Canadá), entre ellas Minaurum Gold (dos proyectos), Musgrove Minerales Corp, Newstrike Capital Inc (tres proyectos), Silver Shield Resources Corp (tres proyectos), Tarsis Resources Corp, Vedome Resources Corp (tres proyectos), Golgroup Mining Inc (dos proyectos), Guerrero Exploration Inc (cuatro proyectos) Impact Silver Corp, Alamos Gold Inc, Citation Resources Inc, Alphamin Resources Corp (dos proyectos), Cayden Resources, First Gold Exploration Inc, Camsin Minas, Cortez Gold Group (dos proyectos), Golcorp Inc. También hay empresas de otros países: Zhong Ning Minig Investment Co (China), Hochschild Minig Pic (Perú) y Dowa Mining Co Ltd/Sumimoto Metal Mining/ Minera Parreña (Japón-México).

Mina	Concesionario	Producción (Ton/día)	Sustancias	Municipio
Los Filos	Goldcorp (Canadá)	60,000	Au y Ag	Eduardo Neri
Guerrero, Remedios y San Antonio	Industrial Minera México	1,682	Au, Ag, Pb, Cu y Zn	Taxco
Campo Morado	Farallon Mining Ltd. (Bélgica)	1,500	Pb, Cu y Zn	Arcelia
Rey de Plata	Minera Rey de Plata	1,100	Au, Ag, Pb, Cu y Zn	Teloloapan
Nukay y La Agüita	Goldcorp (Canadá)	420	Au, Ag, Pb, Cu y Zn	Eduardo Neri
Pinzán Morado	Minera La Calentana	400	Au y Ag	Coyuca de Catalán
Piedra Imán	Sociedad Cooperativa	20	Fe	Acapulco

Cuadro 4. Principales minas en explotación de minerales metálicos en Guerrero. Fuente: Espinosa, 2010.

Los principales productos metálicos extraídos durante 2011 fueron oro, plata, cobre plomo y zinc con un volumen que colocó a Guerrero como el séptimo productor minero nacional, con un 4.26% del valor de la producción nacional. Contradictoriamente a estos grandes volúmenes de extracción el sector minero metalúrgico sólo era la fuente de 1,272 empleos (Secretaría de Economía, 2012; cit. por Santos, 2014).

Mineral	2007	2008	2009	2010	2011	Posición Nacional
Oro (kg)	2,741.9	6,675.7	8,036.1	10,219.8	11,380.8	4
Plata (kg)	18,294.0	4,786.0	44,805.0	61,743.0	59,268.0	9
Cadmio	2.8	2.7	2.6			
Cobre	140.0	710.0	4,377.0	4,865.0	5,487.0	6
Fierro					332,559.0	6
Plomo	1,078.0	736.0	2,905.0	3,983.0	4,329.0	6
Zinc	8,820.0	7,548.0	39,713.0	44,512.0	45,090.0	4

Cuadro 5. Volumen de la producción de minerales metálicos en Guerrero 2007-2011. Los valores indican toneladas, excepto donde se indica. Fuente: Santos, 2014.

En un interesante trabajo de sistematización, Santos (2014) describe detalles de las concesiones mineras otorgadas entre 2008 y 2011 para esta región del estado.

Nombre del Lote	Superficie (ha)	Estatus	Sustancia	Compañía	Vigencia	# Título
Reducción norte Corazón de Tinieblas	3,394	Vigente	Au y Ag	Minera Hochschild México	2055	233560
Reducción sur Corazón de Tinieblas	2,833	Vigente	Au y Ag	Minera Hochschild México	2055	233561
Corazón de Tinieblas	37,531.6	Vigente	Au y Ag	Minera Hochschild México	2061	237861
San Gabriel (San Javier)	253	Vigente	Au, Ag, Pb y Zn	Vedome Resources Corp	2055	224981
Diana	14,722.2	Vigente	Au, Ag, Pb y Zn	Vedome Resources Corp	2059	234454
San Miguel	1,890.44	Vigente	Au, Ag, Pb y Zn	Vedome Resources Corp	2061	237866
Goliat 5 Fracc 1	8,176	Cancelado	Au y Ag	Jorge Preisser Rivera	2058	232483
Goliat 5 Fracc 3	3,053.78	Cancelado	Au y Ag	Sin información	2058	232485
Goliat 5 Fracc 4	2,017.59	Cancelado	Au y Ag	Sin información	2058	232486
Total	73,871.61					

Cuadro 6. Concesiones mineras en la Costa Montaña de Guerrero. Fuente: Santos (2014) en base a las Tarjetas de Registro Informativo del SIAM (2014), información de la DGM e informes elaborados por Vedome Resources Corp (2012).

Existen tres concesiones otorgadas a Minera Hochschild, de capital inglés, entre 2005 y 2009, a través de su filial Minera Zalamera México, que en conjunto se denominan "Corazón de Tinieblas" y suman 43,758.6 has, lo que las hace la mayor concesión otorgada en la región por la Secretaría de Economía. La concesión abarca los núcleos agrarios de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, San Miguel del Progreso, Colombia de Guadalupe, Iliatenco, Tierra Colorada, Tilapa, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Pascala del Oro y Acatepec. Abarca las partes altas de ríos, Papagayo, Malinaltepec y Acatepec (Santos, 2014).

Por otro lado, las concesiones del lote San Gabriel y La Diana fueron cedidas por sus concesionarios originales (Félix Larequi Galeana, Miguel Larequi Radilla y Diana Rebeca Castillo) a la empresa CamSim Minas S.A. de C.V. A estas sumaron la concesión del lote San Miguel, cedida por Santa Claws Minas. Posteriormente fueron cedidas a Vedome Resources Corp, y se conocen con el nombre de La Diana, San Miguel y-San Javier. Estos proyectos cubren superficie de Iliatenco, Metlatónoc y Malinaltepec. La mina San Javier estuvo en explotación durante el siglo XX y fue cerrada por considerarse no redituable; se localiza en el ejido Zitlaltepec y Bienes Comunales de Iliatenco. Las concesiones fueron adquiridas por la canadiense CamSim Mining, que para 2009 realizó trabajos de exploración y en 2010, gracias a la presión ejercida desde la Procuraduría Agraria, logró que las autoridades de Paraje Montero firmaran un convenio autorizando la exploración, por un periodo de cinco años; ese mismo mecanismo se intentó en los Bienes Comunales de Iliatenco, pero no tuvo efecto (Tlachinollan, 2011; cit. en Santos, 2014). En 2012 la minera canadiense Vedome Resources Corp adquiere los derechos de las concesiones y comienza a realizar visitas en la zona en un intento por hacer avanzar los proyectos.

En un informe de la propia empresa reportan que las muestras tomadas arrojan valores de hasta 15.042 g/ton de plata, 3.19 % de zinc y 3.41% de plomo, y ha declarado que la plata presente en estos lotes es superior a los que se han mantenido en explotación en las minas de Taxco. Curiosamente también mencionan sobre la importancia de realizar labores de infraestructura, por el limitado acceso propio del terreno accidentado, la escasez de ejes carreteros, falta de electricidad y conexión a la red de agua.[25]

Por su parte el Grupo Minero Goliat dispone de cinco concesiones en la región otorgadas entre 2007 y 2008, denominadas "Goliat 5 fracciones del 1 al 7", aunque sólo tres de ellas caen directamente en la región, además de que la empresa ha realizado reducciones y cancelaciones; según el Sistema de Administración Minera (SIAM) algunas de ellas aparecen registradas como vigentes, pero en las Tarjetas de Registro informativo de la

[25] El informe se puede encontrar en la página web de la empresa: www.vedomeresourcescorp.com/

Dirección General de Minas (DGM) se reportan como canceladas. Los lotes abarcan parte de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec (Santos, 2014).

Aunque incompleto, el mapa 8 empieza a mostrar la estrategia gubernamental para invertir en grandes obras de infraestructura en la región pensadas para incentivar la explotación minera. Formalmente la inversión se anuncia bajo el discurso de promover la equidad mediante el desarrollo de los sectores más pobres de la sociedad guerrerense, pero está claro que el interés no está puesto en las comunidades. Cada una de estas grandes inversiones proyectadas –hidroeléctricas, líneas de conducción eléctrica con voltaje industrial y amplias autopistas- coincide con los requerimientos expresados por Vedome Resources Corp (citados en la página previa) y que sin duda hacen propios las demás empresas. No es casual que la ubicación de dicho proyectos coincida plenamente en el terreno con las concesiones existentes. La mesa está servida.

Manual para facilitar la entrada de la gran minería trasnacional

A manera de introducción para este apartado y siendo una de las ideas principales que se desarrollan en mi investigación, en las páginas siguientes trataré de demostrar el alineamiento *no casual* de las acciones desarrolladas por muy diversos actores, que en su conjunto tienden a favorecer la entrada de las empresas mineras en esta región. De ninguna manera quiero decir que todos ellos respondan a una sola lógica o reciban instrucciones precisas, sino que existe cierta afinidad en los intereses, que los llevan a confluir en torno a ciertas políticas y acciones. Algunos autores denominan esto como *alianza estratégica*.

Desde esta perspectiva, afirmo como premisa de referencia que las políticas gubernamentales en México no son públicas, porque no responden al interés de la mayoría de la población, sino que responden a una élite en el poder político y económico, pese a lo cual, se financian en su mayor parte con recursos del erario público. Tampoco son nacionales sino globales, ya que se encuentran definidas en función de una economía que responde a una lógica trasnacional, detrás de la cual se encuentran unas pocas empresas que dominan la economía mundial. Estas empresas, de manera conjunta con organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), logran disfrazar sus intereses particulares haciéndolos aparecer como medidas tendientes a "procurar el bienestar común."

Lo que en un momento es una "sugerencia" emitida por alguno de estos organismos multilaterales, al poco tiempo se traduce en política gubernamental en nuestro país, evidenciando su carácter subalterno dentro de la geopolítica mundial. Un análisis

retrospectivo en cualquiera de los sectores importantes de la economía mundial, hace patente cómo las modificaciones a los marcos normativos y la implementación de programas de gobierno, es decir, la política del gobierno en turno, están orientados a abrirle paso a los capitales internacionales en cada uno de estos sectores de la economía (Delgado, 2014: 39). Esto es lo que en el discurso político neoliberal se denomina como desarrollo.

En el caso concreto de la Montaña de Guerrero, el interés por establecer proyectos de minería a cielo abierto constituye un referente obligado para analizar la actuación de un intrincado complejo de actores (empresas trasnacionales, agencias multilaterales, dependencias de gobierno e individuos, supeditados a la lógica del mercado global) y una red de complicidades a lo largo de los últimos años. Sin este referente, las acciones parecen inconexas, incluso fortuitas, pero articulados en torno a este proyecto hegemónico, es posible entender y evidenciar su organicidad.

Siendo la minería a cielo abierto uno de los grandes negocios mundiales de la actualidad, y conociendo la riqueza de las reservas en oro y plata que existen en la Montaña (como lo muestran los datos ofrecidos en el epígrafe anterior), no es de extrañar que se articulen acciones diversas. Sin embargo, existían tres grandes obstáculos que dificultaban la concreción de dichos proyectos mineros:

1. El marco legal, no sólo en materia de acceso a los recursos minerales, sino también en materia agraria, ambiental, hacendaria, etc.
2. Los derechos agrarios de las comunidades indígenas y campesinas, y
3. La existencia de un tejido social, expresado en instituciones locales y regionales, dispuestas a defender su territorio; como ya he expresado, son precisamente estas instituciones las que constituyen el sujeto social con quienes desarrollo esta investigación.

En los epígrafes subsiguientes, se pretende explicar, paso por paso, cómo se pretendió eliminar cada uno de estos obstáculos, usando las formas más diversas, desde las modificaciones a la constitución política, a diversas leyes reglamentarias, la implementación de programas de gobierno, la infiltración de los procesos sociales locales, hasta la militarización de la región.

Primer paso: Elimine obstáculos en el marco legal

Vivimos un contexto de privatización absoluta del país, dentro de un proceso que inició con la llegada a la presidencia de los gobiernos neoliberales, sean de uno u otro partido, que han seguido a pie juntillas las recetas para favorecer al gran capital. Recientemente, nos han impuesto –sin consulta- las contrarreformas laboral, educativa, energética y

hacendaria, y tienen la intención de aprobar las contrarreformas agraria y de aguas nacionales. Desde el sexenio de Salinas, se inició un proceso de pequeñas reformas, algunas quirúrgicas, en aspectos agrarios, forestales, ambientales, laborales y fiscales. Tan sólo como referencia, en noventa años desde su promulgación, la Constitución ha sido cambiada aproximadamente en 250 ocasiones, reformándosele cerca de 100 de sus 136 artículos, sumando un total de casi 400 cambios[26], con lo que se le ha ido quitando poco a poco su espíritu social reivindicativo.

Las largas negociaciones trilaterales previas a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establecieron importantes condicionantes sobre las modificaciones que cada país debía implementar para adecuar su marco jurídico a un esquema orientado al libre flujo de capitales y bienes a través del continente. México debió realizar importantes adecuaciones para poder cumplir con las condiciones solicitadas para llevar a cabo la firma de estos acuerdos. Algunos de los cambios más importantes legalizaron mecanismos expropiatorios de la tierra, la injerencia de corporaciones trasnacionales en actividades primarias y extractivas de importancia económica nodal[27], y la garantía de aranceles tributarios bajísimos para las actividades promovidas con inversión extranjera directa [28](Delgado, 2011).

En México, en los últimos 20 años, se han creado o reformado alrededor de 50 leyes que impactan en la vida de los pueblos indígenas y campesinos. Muchas de estas leyes están encaminadas a facilitar el despojo de sus territorios y de todo lo que vive sobre ellos. Ejemplo de lo anterior son los cambios en la Ley General del Equilibrio Ecológico y

[26] Cámara de Diputados LXII Legislatura. Honorable Congreso de la Unión. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2015. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

[27] La modificación de la Ley de Inversión Extranjera realizada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas, permitió que los capitales extranjeros participaran hasta con el 100% de las acciones de una empresa; este cambio en la norma fue realizado en casi toda América Latina (Delgado, 2011).

[28] La Ley Federal de Derechos (Última reforma publicada DOF 07-12-2016) establece que los titulares de concesiones y asignaciones mineras deben pagar:

- El derecho sobre minería, que se paga semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada. El importe de este derecho es de $6.77/ha durante el 1er y 2º año, $10.11/ha el 3er y 4º año, hasta llegar a $148.06/ha del 11º año en adelante. (Referencia: Artículo 263, LFD)
- El derecho especial sobre minería se paga anualmente, aplicando la tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la venta de los recursos minerales las deducciones permitidas en la LFD. (Referencia: Artículo 268, LFD)
- El derecho adicional sobre minería (semestralmente), que deberán pagar los que no lleven a cabo las obras y trabajos de exploración o explotación previstos en la LM y las comprueben debidamente durante dos años continuos, dentro de los primeros once años de vigencia de la concesión. Para el caso de los titulares cuyas concesiones se encuentren en el doceavo año y posteriores de vigencia que no realicen obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos, el pago del derecho será del 100% de la cuota señalada en la LFD, por hectárea concesionada. (Referencia: Artículo 269, LFD)
- El derecho extraordinario sobre minería (anualmente), aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la venta del oro, plata y platino. (Referencia: Artículo 270, LFD)

Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, entre otras, así como la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, que entraron en vigor recientemente.

En los apartados siguientes se hará un breve análisis de algunas de las reformas o nuevas promulgaciones que más implicaciones tienen sobre el tema: la Ley Agraria reformada en 1992, la Ley Minera reformada en 2006, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente promulgada en 1988 pero con diversas reformas, y el intento –por ahora fallido- por promulgar una nueva Ley de Aguas Nacionales en 2016.

Ley Agraria

Una de las modificaciones más importantes al marco jurídico nacional se llevó a cabo en 1992 con la reforma constitucional al artículo 27 que puso punto final a la reforma agraria, el proceso de repartición de tierras que entregaba a pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios tierras ociosas de grandes propietarios que fue uno de los legados más importantes de la Revolución mexicana. Esta reforma revirtió una de las más importantes conquistas de la Constitución de 1917, permitiendo la división, venta y arrendamiento de la propiedad ejidal de la tierra. Este cambio en el marco regulatorio generó condiciones propicias para la entrada de grandes proyectos de inversión de diferente índole, entre los cuales figuran prominentemente aquellos promovidos por empresas mineras nacionales y extranjeras.

El texto original de la Constitución de 1917 implicaba que, cuando se otorgaba a ejidos y comunidades la tenencia de la tierra, dicha propiedad se amortizaba, dado que no podía circular en el mercado bajo ninguna figura legal (venta, cesión, arrendamiento, asociación, garantía); la única forma de transmisión de la propiedad era la sucesión testamentaria. Antes de 1992, este régimen de propiedad impedía vender, rentar, donar, ceder, aportar en sociedad o en fideicomiso ni ofrecer en garantía.

Si bien para los apologistas del libre mercado esto “condenaba los bienes a la parálisis legal y comercial”, “impidiendo que sus propietarios pudieran aprovechar debidamente sus potenciales usos y valor, hecho que complicaba la inversión y asfixiaba las alternativas de desarrollo (Pérez, 2007),” en contraparte es preciso reconocer que este régimen legal protegía a los ejidatarios y comuneros a través de sus respectivas asambleas, frente a proceso disfrazados de despojo que ilegalmente se producen desde mucho antes.

Esta modificación al estatus del ejido, al quitarle atribuciones fundamentales (al igual que los bienes comunales, que aún lo conservan, los ejidos eran inembargables,

imprescriptibles e inalienables) permite ahora que se pueda parcelar y se pueda vender (DOF, 2012), es decir, se creó el marco jurídico y los programas de gobierno que promueven la individualización en la tenencia de la tierra, con lo cual no sólo se rompe el tejido comunitario sino que se pierde la fuerza del colectivo para defenderse frente a los intereses de los poderosos, estableciendo vías legales para despojar de su patrimonio a los campesinos generando nuevos procesos de acumulación de tierras y la reorganización productiva del campo.

En febrero de 1992, apenas un mes después de las modificaciones al artículo 27 Constitucional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que establece el mecanismo para que legalmente los ejidos y comunidades agrarias, a través de sus asambleas, "adopten las condiciones que más les convengan para destinar, delimitar y asignar las tierras que conforman su patrimonio", incluidas diversas formas de privatización parcial o total de sus tierras como el parcelamiento económico de tierras comunales, dominio pleno de parcelas ejidales, titulación de solares e incluso la desintegración de los ejidos en pequeñas propiedades privadas.

Esta estrategia se operó de 1992 a 2006 a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), y ya sea a través del convencimiento o de la presión, pero según cifras oficiales del propio programa, se logró certificar el 92% de los núcleos agrarios del país. Sin embargo, es preciso aclarar que "cerca del 70% de los núcleos agrarios que decidieron ingresar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), lo hicieron para definir la perimetral, no parcelaron, mantuvieron sus tierras de uso común y no optaron por el dominio pleno" (Gómez, 2014), y que si bien la "la compraventa de tierras se volvió una práctica generalizada y se realiza tanto al interior como con personas ajenas a los núcleos agrarios (…) las transacciones de tierras han involucrado apenas el 2.9% de los 105 millones de hectáreas que pertenecen a ejidos y comunidades" (Robles, 2008).

Estas cifras sugieren un aparente fracaso en el intento por incorporar la propiedad social al mercado de tierras, lo que parece confirmarse ante la necesidad de mantener el mismo eje de política gubernamental. En el año 2007, la Secretaria de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (Sector Agrario) crearon un nuevo programa, el "Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar"(FANAR), con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de certificación y titulación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Agraria y su Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. Esto significa que el FANAR operará con las mismas leyes, reglamentos, objetivos y procedimientos (jurídicos y administrativos) que el PROCEDE,

ahora como programa permanente, que se aplicará en los núcleos agrarios donde no aceptaron el PROCEDE.

Según la página web del Registro Agrario Nacional, algunos de los beneficios que un ejido o comunidad obtienen al incorporarse al FANAR, son los siguientes[29]:

- Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
- Seguridad patrimonial para tu familia
- Facilita el acceso a programas de apoyo del gobierno federal
- Propicia la inversión en el campo
- Aprovechamiento sustentable y ordenado de los recursos naturales

Sin embargo, las denuncias de diversos núcleos agrarios y de algunos analistas, permiten documentar que el FANAR –al igual que en su momento el PROCEDE- se implementa sin observar el procedimiento formal establecido en el Reglamento: se coerciona, se condiciona el acceso a los programas sociales, se promueve la división entre los ejidatarios, no se cumplen los requisitos para realizar asambleas válidas, etc. El programa sigue avanzando, con especial énfasis en aquellas regiones en las que existen recursos naturales o paisajísticos estratégicos, susceptibles de ser explotados. DE ello habla el Prof. Teodoro Tomás, Comisariado Ejidal de Iliatenco:

> (…) ha habido muchas maneras de como querer entrar a los bienes comunales y ejidales (…) hay una propuesta ahí, el parcelamiento de la tierra, o sea ya quieren que en cada ejido o tierra comunal van a venir a parcelar la tierra cada quien van a medirle su parcela muchos tenemos el certificado agrario pero ahí no dice la medición de tu terreno, ahí es colectivo, pero ahora lo quieren hacer en particular, cada quien lo suyo; el gobierno va a ser el que certifica, legaliza que ya eres dueño de esa fracción y con ese documento que te van a dar tú vas a disponer de tu tierra como se te dé la gana, nada de que te va a decir el Comisariado ¿oye por qué estás haciendo eso?, ¿oye porqué se lo vendes a la minera?, ya no va a tener derecho el ejido ni el comunal, al contrario lo que va a ocurrir ahí es de una vez acabar con los núcleos agrarios (…). ¡Por eso les quiero decir compañeros que también ahí cuidemos de que no parcelemos nuestras tierras que sigamos así como estamos en forma colectiva por que estando todavía de forma colectiva yo todavía soy representante de ustedes y nos vamos a ir a las asambleas para decir qué cosas sí queremos y qué cosas no! (Testimonio Prof. Teodoro Tomás Galeana, XIII Foro Regional, 2014).

Este tema fue uno de los centrales en el XIII Foro en Defensa del Territorio, y más adelante el padre Melitón abundó: “El gobierno tiene muchas formas para tratar de entrar al territorio comunitario, aquí se llama áreas naturales protegidas, allá por Ocuapa [municipio de Copanatoyac] se llama FANAR, y aparentemente no tienen nada que ver uno con otro, los de aquí abajo no sabemos por dónde va FANAR y los ingenieros ya andan por toda el área, recorriendo y la gente los está aceptando porque traen la lana.”

[29] http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/programas/fanar. Consulta realizada el 02 de diciembre de 2015.

(Testimonio Pbro. Melitón Santillán Cantú, XIII Foro Regional, 2014) En el mismo sentido se expresa el Prof. Apolonio Cruz Rosas al ser entrevistado:

> La SEDATU y el FANAR vienen con el programa de parcelamiento de tierras de labor, el registro de solares urbanos, van a registrar las tierras de un ciudadano, las tierras de otro, y lo van a hacer gratis, pero todo eso es con tendencia a la privatización. Eso lo han ofrecido los funcionarios de la Procuraduría Agraria en Tlapa, han presentado el programa en la asamblea de comuneros; nomás que los comuneros están ahorita a la vanguardia y no han aceptado, no se aprobó, pero de que hubo propuestas del gobierno, si la hubo. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, noviembre de 2015).

Por si esto no fuera suficiente, en un documento elaborado por la Secretaría de Economía para facilitarle a las empresas mineras el despojo del patrimonio nacional, se les explica con mucho detalle los derechos que les otorgan como concesionarias el marco jurídico frente a los dueños del terreno superficial:

> El artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que las concesiones de los bienes que son propiedad pública, como es el caso de las concesiones mineras, otorga el derecho de usar, explotar o beneficiarse de dichos bienes conforme a las reglas y condiciones previstas por la ley, la escritura o el título de concesión.
> Debido a que la concesión minera otorga el derecho de la explotación de los minerales localizados en el subsuelo, es necesario que en concesionario negocie el acceso a la superficie que cubre el área concesionada directamente con el propietario de la superficie en dónde se ubique la concesión.
> En base a esto, con el fin de tener acceso a la superficie, el concesionario podrá recurrir a las formas jurídicas que se indican a continuación, de acuerdo con la situación jurídica del terreno:
> - Si la superficie es propiedad privada, el concesionario puede comprarla o arrendarla, con el apoyo del Código Civil del estado en dónde se localiza el terreno.
> - Si el territorio pertenece a un ejido, el concesionario puede establecer un acuerdo con la comunidad en el marco de la Legislación Agraria, el cual quedará asentado en el Registro Nacional Agrario y de igual manera, aunque sin ser vinculante, en el Registro Público de la Minería.
> - Independientemente del tipo de régimen de la tierra, el concesionario tiene la posibilidad de establecer acuerdos de ocupación temporal, con la finalidad de desarrollar actividades mineras. El terreno también puede ser propiedad de la Nación o del Estado. (Secretaría de Economía. S/F)

Con esta reforma a la propiedad social de la tierra, si los dueños de las mismas se niegan a autorizar la entrada de los proyectos mineros o energéticos, y esta es la parte más peligrosa de las nuevas leyes, las empresas podrán imponer una servidumbre legal la cual se puede decretar por vía jurisdiccional o administrativa[30], aún en contra de la voluntad de sus propietarios, sin tener información completa sobre los impactos ambientales y sociales que la explotación pueda traer en sus territorios. Las empresas privadas y públicas, argumentando "utilidad pública", podrán despojar a los ejidos, comunidades, pueblos indígenas, propietarios privados de sus tierras, sin importar el uso que ellos hayan

[30] Jurisdiccional ante un Juzgado de Distrito o el Tribunal Unitario Agrario que corresponda y Administrativa con la "mediación" de la SEDATU.

destinado para sus tierras o que de ellas dependa su subsistencia, y aunque en realidad se trate de "utilidad privada", pues son los privados los que realizarán estas actividades y no el Estado (Gómez, 2014).

La Ley Agraria en su artículo 93 establece que "Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública: I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos; (…) IV. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones" (DOF, 2012).

Ley Minera

En medio de la ola extractivista que recorre el mundo, la minería se ha convertido de las actividades económicas más rentables, pues los altos precios de diversos minerales metálicos y metálicos le otorgan un amplio margen de utilidades (Delgado, 2010). Es precisamente esa alta rentabilidad y solvencia económica de las grandes trasnacionales mineras, lo que allanó el camino para modificar los marcos regulatorios en casi toda América Latina, al grado de que instrumentos jurídicos de diferentes países parecieran redactados por las mismas personas.

En el caso de México, uno de estos cambios fue el ocurrido en 2006 en la Ley Minera, cuyo artículo 6º establece que "La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma" (DOF, 2006), con lo cual se legaliza su prioridad por encima incluso, de los asentamientos humanos o de las zonas de reserva.

Esta preferencia de la actividad minera entra en conflicto con el principio de planeación democrática del desarrollo nacional plasmado en el artículo 26 de la Constitución, así como con una serie de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales establecidos en convenios internacionales ratificados por nuestro país. Más allá del plano jurídico, la preferencia legal por la actividad minera no tiene correspondencia con la realidad económica y social del país: la actividad minera representa tan sólo el 0.9 por ciento del PIB mexicano y da trabajo solamente al 0.22 por ciento de la PEA. Lo que significa que las actividades que más contribuyen a la ocupación o a la generación de riqueza (agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal, turismo, etc.), se encuentran en una situación de inseguridad jurídica ante la preferencia por la minería y la gran extensión que cubren las concesiones ya otorgadas.

Son precisamente las concesiones otra muestra de la alta prioridad que el gobierno otorga a los aprovechamientos mineros, ya que al final del sexenio calderonista se tenían registradas más de 31 mil concesiones mineras otorgadas a empresas trasnacionales. En los 2 últimos años, la cifra se incrementó en 5 mil 7 autorizaciones para explorar y explotar los recursos minerales del país, como el oro y la plata, cotizados a nivel mundial como los más preciosos. (Ramírez, 2013)

"Las tierras que acaparan las concesiones –según cifras registradas por la Secretaría de Economía–, muestran que actualmente hay 39 millones 743 mil 690 hectáreas en poder de 301 compañías. Esto implica que las empresas de la industria extractiva tienen en su poder casi un cuarto del territorio nacional, que podría ser explotado hasta por más de 50 años." (Ramírez, 2013)

Aquí es conveniente aclarar que esto no significa que toda esa superficie se encuentra actualmente bajo explotación minera, sino que a través de la concesión el gobierno federal le otorga derechos a la empresa para la exploración y/o explotación de los bienes del subsuelo del dominio de la Nación, pues considera que su explotación es deseable en tanto que sirve a la utilidad pública. Sin embargo, la designación de las actividades mineras como en servicio de la utilidad pública tiene importantes repercusiones legales, toda vez que la utilidad pública se encuentra plasmada en el artículo 27 constitucional, lo que sienta las bases para dotar de amplios poderes a particulares para buscar la expropiación de terrenos o la constitución de servidumbres sobre los mismos, atribuciones comúnmente reservadas al Estado (López y Eslava, 2013). Esto coloca a los propietarios de terrenos (sean estos propiedad privada, comunal o ejidal) que se encuentran comprendidos al interior de concesiones mineras, en una situación de indefensión frente a los concesionarios, pues aunque usualmente no recurren a la expropiación para hacerse de los terrenos necesarios, sí es común que la amenaza de expropiación sea utilizada como herramienta de negociación al momento de determinar el alquiler u ocupación temporal de estos terrenos[31].

En su Guía de Ocupación Superficial, la Secretaría de Economía se encarga de orientar muy bien a los concesionarios "Si el propietario del terreno se niega, el Artículo 19, Fracción IV, de la Ley Minera actual, confiere al concesionario el derecho de obtener la expropiación, ocupación temporal o servidumbre sobre la superficie necesaria para llevar

[31] La ocupación temporal representa la figura más usada por los concesionarios para poder realizar sus actividades en terrenos ajenos a cambio del pago de una cuota previamente establecida por el propietario de los mismos, a pesar de que esta figura no existe en la Constitución, legislación agraria o sobre tenencia de la tierra. La ocupación temporal sólo existe en la Ley Minera (artículos 44 y 46) y fue incorporada para evitar que los concesionarios tuvieran que apegarse a los regímenes de alquiler de terrenos para los cuales existe un amplio cuerpo de normas que regulan las condiciones de uso de los mismos y que protegen a los propietarios frente a posibles abusos.

a cabo los trabajos y actividades de exploración, explotación y procesamiento, así como para el depósito de residuos, desechos, escorias y depósitos de grasas." (Secretaría de Economía. S/F, p. 3)

Sin embargo, la utilidad pública de las actividades mineras realizadas por particulares es otra de las enormes incongruencias de esta Ley, pues para ello se debería tratar de un bien que sea destinado directamente al servicio público, cuando la actividad desarrollada beneficia a una clase social determinada y a toda la colectividad o cuando se requiere satisfacer necesidades del país, para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional; ninguno de los tres supuestos se cumple, evidenciando la tendencia a favor de las empresas que privó en la reforma a esta Ley. Por el contrario, el Estado tiene una participación mínima en las rentas generadas por la actividad minera, ya que con el argumento de fomentar la creación de empleos, los concesionarios pagan pocos impuestos y derechos por la riqueza extraída que, legalmente, pertenece a la Nación. En su artículo 6 la propia Ley establece que "únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades", con lo cual nulifica cualquier intento de los gobiernos estatal, municipal o local para establecer algún tipo de gravamen o compensación[32].

Como muestra de este evidente atraco a la nación, en el periodo 2008-2013 el valor acumulado de la producción minera nacional sumó poco más de un billón 234 mil millones de pesos (algo así como 83 mil millones de dólares al tipo de cambio actual) y el erario, por concepto del supuesto pago de derechos, obtuvo a cambio apenas 7 mil 100 millones de pesos (alrededor de 473 millones de dólares), o lo que es lo mismo, 0.6 por ciento de esa riqueza extraída (Fernández-Vega, 2015). Esta cifra evidencia la nula contribución de esta muy lucrativa actividad, a la recaudación fiscal del país. "Lo anterior explica cómo fue posible que Alberto Bailleres (Peñoles) y Germán Larrea (Grupo México) incrementaran sus fortunas como en los cuentos de hadas: tan sólo en los gobiernos panistas (Fox y Calderón) y el primer año del actual (Peña Nieto), Bailleres aumentó sus haberes mil por ciento (de mil 200 a 12 mil 400 millones de dólares, según Forbes) y Larrea mil 300 por ciento (de mil 100 a 14 mil 700 millones de dólares), convirtiéndose en el tercero y segundo, respectivamente, hombres más ricos del país, en una economía que a duras penas creció 2 por ciento como promedio anual"(Fernández- Vega, 2015).

Por si todo esto fuera poco, la Ley prevé mecanismos deficientes para enfrentar las externalidades negativas generadas por la actividad minera. Bajo este esquema, es el Estado quien asume los costos de las afectaciones a la salud, economía y remediación ambiental, al tiempo que no percibe más que una pequeña fracción de los beneficios de la

[32] Según el reportaje de Ericka Ramírez publicado en *Contralínea*, en junio de 2013, el arancel federal oscilaba de $5.7 a $124.74 pesos semestrales por hectárea.

explotación. Ante una concentración desproporcionada de las rentas mineras en manos de particulares y la transferencia de los costos al erario se anula cualquier pretensión de servicio a la utilidad pública. Ahora bien, si abandonamos una perspectiva Estado-céntrica y nos concentramos en las poblaciones afectadas o potencialmente afectadas por la actividad minera, la incongruencia se acentúa. El actual esquema de explotación minera concentra desproporcionadamente los costos de esta actividad en las poblaciones que habitan estos territorios[33].

Con este candado en la Ley Minera, no existe mecanismo legal alguno a partir del cual se obligue a las empresas a transferir, de una u otra forma, parte de su renta a las comunidades; si acaso se presentan estas transferencias, éstas se originan de acuerdos puntuales con las comunidades dueñas de los predios y dependientes de la buena voluntad del concesionario.

Como se ha tratado de evidenciar en este apartado, los múltiples problemas asociados a las actividades mineras no se deben a omisiones, malas implementaciones o ambiguas interpretaciones de la norma. Las normas plasmadas en la legislación minera son cabalmente acatadas por todos los actores involucrados en este sector económico. El problema radica en que la legislación minera fomenta la desregulación del sector, lo que sumado a una deficiente y sumamente flexible legislación ambiental y a la falta de leyes secundarias que regulen la garantía de derechos humanos plasmados en la Constitución, han generado las condiciones propicias para un panorama minero que fomenta la concentración de ganancias económicas, la externalización de costos al Estado, pero sobre todo a la sociedad y al medio ambiente, al tiempo que minimiza o anula la participación de otros sectores de la sociedad sobre las decisiones relacionadas con estas actividades extractivas.

Para las comunidades de la Montaña de Guerrero y varios otros casos con conflictos similares, el contrapeso legal debería provenir de su derecho a ser consultados y a que su consentimiento previo, libre e informado sea requisito legal para implementar proyectos dentro de su territorio, tal como se encuentra plasmado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pese a que dicho Convenio fue signado por el Senado de la República, muchos funcionarios gubernamentales insisten en darle un carácter no vinculante. Es precisamente el derecho a la consulta y al consentimiento previo, el centro del juicio de amparo promovido por la comunidad de San Miguel del Progreso y que el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chilpancingo, resolvió a favor de la comunidad.

[33] Un crudo ejemplo de esto es la tragedia ambiental ocurrida en 2014 en el Río Sonora por responsabilidad de la Minera México.

Leyes General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

En México la principal normatividad ambiental es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) promulgada en 1988.

Uno de los temas centrales de esta ley por sus implicaciones en los proyectos extractivistas que se estudian en este documento, es el que corresponde al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que se encuentra plasmado en el capítulo V. Este mecanismo representa el principal instrumento de protección socioambiental existente en el derecho mexicano. Desafortunadamente, adolece de serias deficiencias, tanto en el diseño de la norma como en su implementación. Para proyectos de extracción minera, el PEIA solicita al concesionario la elaboración de una manifestación de impacto ambiental (MIA), para lo cual contrata a un profesional que elabora este documento donde plasma todos los impactos ambientales más importantes asociados al proyecto que desea emprender. La SEMARNAT evalúa y, en su caso, aprueba o niega la aprobación al proyecto.

A lo largo de este proceso, la ciudadanía puede solicitar una "consulta" con respecto al contenido de la MIA. En caso de decidir conceder la consulta, se lleva a cabo una reunión pública de información en las poblaciones inmediatas al proyecto contemplado (Art. 34) (DOF, 2008).

Este mecanismo presenta las siguientes fallas importantes. En su diseño e implementación impera una lógica de promoción de la competitividad a partir de la generación de un trámite expedito, por lo que se busca no retrasar el tiempo en que se abre un negocio para no ahuyentar la inversión. Para lograrlo se acota el tiempo de evaluación de la SEMARNAT, que además no tiene facultades para verificar lo asentado en la MIA. No se le permite a la SEMARNAT o a la población potencialmente afectada allegarse de una segunda opinión a partir de la corroboración por parte de un equipo de expertos seleccionados por la dependencia y/o por la población de las aseveraciones plasmadas en la MIA. El contenido de la MIA no se hace accesible a los habitantes de las poblaciones antes de que ocurra la afectación en cuestión.

Para lograr este propósito se requeriría obligar a la empresa a presentar el documento de la MIA íntegro (con todos sus anexos) y acompañado por un resumen de su contenido redactado en lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y, en su caso traducido a la lengua de la población en cuestión. La SEMARNAT debería estar obligada a difundir estos documentos. La LGEEPA establece el derecho de las poblaciones potencialmente afectadas a solicitar una consulta, pero ésta termina siendo una reunión pública de información, donde el promovente expone a rasgos generales el proyecto y, aunque los

asistentes pueden verter todas las opiniones que deseen, la SEMARNAT no se encuentra obligada a recogerlas y ponderarlas en su decisión final. Más aún, la SEMARNAT no se encuentra obligada a realizar la consulta, ya que la unidad encargada de llevar a cabo este procedimiento, no cuenta con recursos suficientes para asistir a todos las consultas que le son solicitadas en el país, ya que no es vinculante con la consulta a pueblos indígenas establecida en el artículo 6 del Convenio de la OIT. Finalmente, la SEMARNAT no está facultada para realizar visitas de inspección y corroborar que las restricciones y medidas de mitigación al proyecto se estén cumpliendo. Tampoco existen mecanismos de sanción para los promotores que incurran en alguna violación de lo establecido en la autorización de la MIA.

En su Título II sobre la biodiversidad, la LGEEPA dedica el primer Capítulo a las Áreas Naturales Protegidas, mismo que se reformó en mayo de 2008 para incorporar las áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), como una nueva categoría de Áreas Natural Protegida de jurisdicción federal (DOF, 2008). Con esta medida, se da un paso atrás en un interesante instrumento de política ambiental que pretendía reconocer el buen manejo de ecosistemas y recursos naturales que realizan numerosas comunidades indígenas y campesinas dentro de sus territorios. Originalmente la medida sólo requería que la autoridad competente expidiera un certificado reconociendo ese buen manejo, es decir, por primera vez existía un instrumento de política pública que reconociera que la población puede hacer conservación y protección ambiental, no sólo las dependencias.

Ahora bien, el problema no es sólo de tipo simbólico sino, por supuesto, jurídico. En su Artículo 44 la Ley establece que "Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan." Esto significa que aunque se hable de promover "la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas…" la SEMARNAT (a través de la CONANP) tiene facultades para imponerles el uso del suelo y las actividades que podrán realizarse dentro de un polígono decretado. Es decir, restringe el papel de la Asamblea Agraria a decidir sobre su territorio y le sobrepone la autoridad del Director del ANP, que es nombrado por la SEMARNAT (DOF, 2014b)[34].

El Reglamento de Áreas Naturales Protegidas derivado de esta Ley encierra una trampa legal, pues al tiempo que restringe el manejo campesino del territorio y sus recursos, reconoce mecanismos para permitir la explotación minera dentro de un ANP (explotación

[34] Artículo 8 del Reglamento de Áreas Naturales Protegidas.

que a todas luces es contraria a la conservación ambiental), y otorga facultades para resolver tales casos al Director de la misma, que es nombrado por el gobierno federal.[35]

Ley de Aguas Nacionales

En lo que algunos expertos llamaron la última gran reforma estructural, el gobierno de Peña Nieto intentó durante 2015 reformar la Ley de Aguas Nacionales. El agua es el recurso natural por excelencia, ya que no sólo participa en prácticamente todos los aspectos de la vida humana, sino que es un insumo esencial para los diferentes procesos industriales o energéticos: sea para la producción de electricidad, la minería a cielo abierto o la extracción de hidrocarburos, se requiere de agua en grandes cantidades.

Curiosamente, el contexto para promover esta reforma se generó por un importante logro de las organizaciones civiles a nivel internacional, cuando consiguieron en 2010 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconociera "explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos"[36]. Derivado de ello, en 2012 se incorporó al Artículo 4º Constitucional, el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, estableciendo un plazo de un año para adecuar la ley secundaria correspondiente.

La llamada Ley Korenfeld[37] es una iniciativa de reforma de corte profundamente extractivista y privatizadora que fue presentada al Congreso de la Unión en febrero de 2015 generando una protesta generalizada que, de cara al proceso electoral, obligó a poner en pausa el proceso de aprobación y que, en el recambio de legisladores caducó el tiempo para ser aprobada.

Entre los aspectos más preocupantes de la iniciativa se puede contar que buscaba dotar a la CONAGUA de más facultades que las actuales, sin considerar mecanismos de participación o vigilancia (Artículo 15), por lo que aumentaba de forma preocupante el

[35] El Reglamento de Áreas Naturales Protegidas (derivado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) es el instrumento que regula tanto las áreas *certificadas* como *decretadas* con fines de conservación. En sus Arts. 81, 89, 94, 95 y 96, establece los mecanismos administrativos que permiten la exploración y el aprovechamiento minero dentro de áreas que se supone han sido destinadas a la conservación, donde incluso se encuentran prohibidos los diferentes tipos de manejo campesino como la agricultura de montaña o la extracción doméstica de recursos del monte, como la leña.

[36] http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml; fecha de consulta 22 de abril de 2017.

[37] Esta iniciativa se denominó así porque su principal promotor era David Korenfeld, entonces titular de la CONAGUA. La iniciativa se presentó firmada por dos diputados, los presidentes de las Comisiones de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos, al interior de las cuales fue aprobada para pasar al pleno en sólo un día, violando el reglamento interno del Congreso. La información detallada a continuación se extrajo del documento turnado al pleno y que se podía consultar en la página de la Cámara de Diputados.

margen de discrecionalidad en la asignación y manejo del líquido. Se caracteriza por su énfasis en la realización de grandes obras hidráulicas (trasvases, desalinizadoras, pozos muy profundos, inmensas plantas de tratamiento), su uso intensivo en proyectos energéticos concesionados a privados (megapresas, termoeléctricas y fracturación hidráulica); curiosamente el uso del agua para la minería no requeriría de concesión y no mencionaba ninguna obligación para su tratamiento previo a la descarga en cuerpos de agua nacionales; facultaba a la CONAGUA para hacer uso de la fuerza pública para garantizar la ejecución de las obras (Artículo 241), y establecía fuertes candados al monitoreo o estudio del agua.

Al considerar la generación eléctrica y los trasvases "de utilidad pública" (Artículo 8) la iniciativa legalizaba el despojo del agua a manos de los concesionarios; la expropiación no tendría derecho a amparo. En el mismo sentido especificaba que el ejidatario o comunero que "otorgue el usufructo" de su parcela, perderá la concesión de agua que le había sido asignado, violando con ello derechos históricos de las comunidades al agua: "Cuando se otorgue el usufructo de parcelas a sociedades civiles o mercantiles o cualquier otra persona moral, los adquirentes conservarán los derechos sobre el uso de las aguas correspondientes. La CNA otorgará la concesión correspondiente (Artículo 145)."

También permitía la explotación de aguas salobres costeras (Artículo 71) y el minado de pozos ultraprofundos sin requerir de concesión ni de manifestación de impacto ambiental.

En lo referente al uso domiciliario, solo permitiría el manejo comunitario del agua en donde y hasta cuando el gobierno municipal o estatal no esté interesado en retomarlo. Además promovía claramente la privatización al establecer que "La autoridad debe fomentar la participación del sector privado en la prestación de servicios vía concesiones y contratos de asociación público-privado (Artículo 51) para la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas" (Artículo 52).

Uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa fue el de la disponibilidad para uso doméstico, ya en su Artículo 137 establecía la obligación del Estado a proveer de sólo 50/lts/hab/día, cuando los estándares internacionales establecen 100 lts. Esta restricción resulta particularmente paradójica cuando se supone que el principal motivo para reformar la ley para hacerla compatible con el derecho constitucional al Agua y al Saneamiento, misma razón por la que un amplio sector de la sociedad se organizó en torno a la campaña "Agua para todos agua para la vida", que hizo su propia propuesta de reforma a la ley a manera de una iniciativa ciudadana que ni siquiera fue analizada en el Congreso pues sólo había interés en aprobar la iniciativa oficial. No obstante esto, dicha campaña logró colocar el tema del derecho humano al agua en los medios de

comunicación nacionales y generar una amplia movilización en la mayoría de las entidades federativas, y fue sin duda, la principal razón para atajar este primer intento de reforma.

En el cambio de legislatura federal ocurrido en 2015, momentáneamente se suspendió el intento por reformar la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, dada la relevancia de este recurso y por la obligación de una nueva Ley que garantice el derecho humano al agua, es seguro que la iniciativa de reforma será presentada nuevamente al Congreso de la Unión, por lo que el tema está lejos de agotarse.

Segundo Paso: Restrinja los derechos agrarios

A veinte años de que los gobiernos neoliberales iniciaron la "contrarreforma agraria", los resultados obtenidos están muy lejos de alcanzar las metas que esperaban.

A pesar de la embestida contra la propiedad social, en la actualidad más del 54% del territorio nacional sigue en manos de Ejidos y Comunidades (Robles, 2008), lo que significa un problema para quienes han visto en la propiedad social un obstáculo para el desarrollo de sus proyectos de explotación de los recursos y para el acaparamiento de tierras. Son los ejidatarios y comuneros quienes tienen derecho a decidir sobre el uso de sus tierras a través de su máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal o Comunal.

Es por ello que las empresas tienen que tratar de llegar a acuerdos y convenios de ocupación temporal con los dueños de las tierras, en este caso con los Ejidos y Comunidades. La Ley de Hidrocarburos (DOF, 2016a) y la Ley de Energía Eléctrica determinan que cuando el proyecto involucre terrenos, bienes o derechos sujetos a los (DOF, 2014c) regímenes previstos en la Ley Agraria[38], la autorización para el uso, goce o afectación, deberá sujetarse, a las formalidades previstas en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, es decir por medio de las llamadas Asambleas Duras o de Formalidades Especiales[39]. Por otro lado, la legislación agraria señala que: "Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación" (DOF, 2012) [40]. Estos dos requisitos, dan elementos para que las Asambleas nieguen la entrada de estos

[38] Artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 75 de la Ley de la Industria Eléctrica.
[39] Según la Ley Agraria deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea; para su instalación válida en primera convocatoria deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios o comuneros, en segunda o ulterior deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno; los acuerdos se tomarán con el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea.
[40] Ley Agraria, Artículo 95.

proyectos. Sin embargo, si no hay información, y organización para la resistencia, los ejidos y comunidades agrarias, pueblos indígenas y campesinos pueden ser engañados para firmar acuerdos de explotación, ocupación temporal o servidumbre y hacerlo de manera voluntaria.

Las áreas voluntarias para la conservación

Como ya se comentó en un epígrafe anterior, la figura de áreas voluntarias destinadas a la conservación se instituyó en la primera década de este siglo como un instrumento de política pública orientado a incentivar el buen manejo de los ecosistemas y sus recursos realizado por particulares. Se trataba de una certificación expedida por la autoridad ambiental, en la que se hacía constar ese buen manejo y, entre las cosas que lo hacían interesante era que, en primer lugar, reflejaba una forma de interrelación de las personas con su entorno, de una forma de manejar su territorio; en segundo lugar representaba la voluntad de los dueños de ese territorio por solicitar dicha certificación; y tercero, que la autoridad gubernamental respetaba esa voluntad y esa forma de vivir y manejar el territorio, por lo que sólo intervenía a petición de parte y con la intención de coadyuvar e incentivar[41].

Sin embargo, ante los compromisos internacionales contraídos por el gobierno mexicano en el marco de las acciones contra el cambio climático, resultaba necesario incrementar la superficie decretada con fines de conservación[42]. Es entonces cuando las áreas voluntarias dejan de serlo, por lo que pasan a ser una categoría más de ANP y deben estar mediadas por una declaratoria del ejecutivo federal.

---

[41] Según la CONANP "La certificación es una herramienta que ayuda a los propietarios al establecimiento, administración y manejo de sus áreas naturales protegidas. Es un proceso unilateral por parte del proponente, la CONANP participa como fedatario de la voluntad de conservar sus predios y de las políticas, criterios y acciones que el promovente pretende realizar para lograr sus fines". (http://www.gob.mx/conanp/prensa/areas-destinadas-voluntariamente-a-la-conservacion-otra-forma-de-proteger; fecha de consulta 21 de abril de 2017)

[42] Derivado del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica se organizan en función de Objetivos Estratégicos; dentro del "***Objetivo estratégico C:*** *mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética, se encuentra la* **Meta 11.** Para 2020, **al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores** y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, **se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas** administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios". (https://www.cbd.int/sp/targets/; fecha de consulta 21 de abril de 2017).
Aparentemente para el gobierno federal resultó mucho más sencillo tratar de cumplir con esta meta que con aquellas otras relacionadas con abatir sustancialmente los niveles de pobreza, poner fin a la contaminación de los ecosistemas o haber restaurado por lo menos el 15% de los ecosistemas degradados.

Es así como en la Costa Montaña (seguramente también en otras regiones del país), los empleados de la CONANP comenzaron a promover estas declaratorias. Usaron como base trabajos de ordenamiento territorial comunitario realizados en diversos núcleos agrarios, retomaron de ahí las zonificaciones planteadas, pues normalmente se incluyen áreas que se protegen con formas de aprovechamiento de muy bajo impacto, por así convenir a los intereses de la comunidad.

Estos esfuerzos deberían ser suficientes como promoción de la conservación y buen manejo ambiental, pues al aprobarse en asamblea gozan de la legitimidad que les da el que sean los propios dueños quienes asuman el compromiso; pero además, tiene la legalidad de que, amparados en la Ley Agraria, tanto la zonificación de áreas como los acuerdos incorporados al reglamento ejidal o estatuto comunal, adquieren el estatus de norma dentro de ese territorio.

El problema es que en la perspectiva de las dependencias esto no fue suficiente. A pesar de haberse plasmado en los Reglamentos o Estatutos de cada núcleo agrario, era necesaria la declaratoria federal en la que dichas áreas fueran certificadas por la CONANP, pues al convertirlas en Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, automáticamente se convierten en ANP´s y, por tanto, se contabilizan casi 28 mil ha para el cumplimiento de los compromisos contraídos a través de tratados internacionales en materia de biodiversidad y cambio climático por fomentar la captura de carbono.

Fue entonces cuando propusieron a los Comisariados que certificaran sus áreas ya definidas para la conservación, prometiendo que esa medida atraería cuantiosos recursos para el núcleo agrario y que habría camionetas para las autoridades, pero fueron muy cuidadosos de no especificar los compromisos que adquirían como núcleo. En varios de los ejidos y comunidades visitados para realizar esta investigación la historia es la misma: llegaron los empleados del MIE-CONANP[43] con la información sobre esa "oportunidad", enfatizando que debía actuarse con velocidad pues la convocatoria cerraría muy pronto, con un formato de acta de asamblea que modificaron para adecuar las superficies, nombres de autoridades, etc.; pidieron copias de otras asambleas para acompañar el oficio de "solicitud por parte del núcleo agrario" y se retiraron augurando los beneficios. Nunca se informó a la asamblea, no conocían el certificado y, por lo tanto, desconocían los compromisos y condicionantes que habían "aceptado" al "solicitar" la certificación.

[43] El programa Manejo Integrado de Ecosistemas operó en los estados de Oaxaca (La Chinantla), Veracruz (Los Tuxtlas) y Guerrero (Montaña) durante el periodo 2002-2010, con un préstamo de Banco Mundial a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Siendo algunos de sus objetivos el conocimiento sobre la biodiversidad y la promoción de áreas campesinas de conservación, la dependencia encargada de acompañar fue la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Encargado de ese programa para la Ecoregión Prioritaria Montaña de Guerrero, llegó a la región el Dr. Taurino Hernández Moreno. Años más tarde el programa sería absorbido por la CONANP.

En el caso de los Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón, el certificado expedido en 2011 comprende 2,379.86 ha, que representa casi la tercera parte de su territorio; reconoce tres zonas: restauración 1,155.50 ha, usos múltiples 179.78 ha y conservación 1,044.58 ha. Establece lineamientos y actividades prohibidas para cada zona y tiene una vigencia de 30 años. En la "solicitud" se emplearon fotocopias de actas levantadas en dos asambleas diferentes, incluso con nombres repetidos. La comunidad conoció el certificado hasta que se solicitó por escrito a la CONANP copia del mismo en el año 2013.

A pesar de que este procedimiento de certificación significaba ya una imposición a los núcleos agrarios y, por ende, la violación de sus derechos agrarios y como pueblos indígenas, los empleados de CONANP no se detuvieron ahí, porque aún se requería incorporar mayor superficie. Así que el siguiente paso fue promover la declaratoria como Reserva de Biosfera, en la que las áreas certificadas como AVDC se convertirían en las *zonas núcleo*, es decir de conservación estricta, que estarían rodeadas por una vasta *zona de amortiguamiento*, para sumar un total de 157,700 ha. [44]

[44] En el artículo 49 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP's (2014b), se define que:
"**I. Las zonas núcleo**, que tendrán como principal objetivo la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo, y que podrán estar conformadas por las siguientes subzonas: **a) De protección**: Aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo, y **b) De uso restringido**: Aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control.
II. Las zonas de amortiguamiento, tendrán como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar conformadas básicamente por las siguientes subzonas: **a) De uso tradicional**: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están relacionadas particularmente con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área protegida; **b) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales**: Aquellas superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable; **c) De aprovechamiento sustentable de agroecosistemas**: Aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales; **d) De aprovechamiento especial**: Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, con presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conforman; **e) De uso público**: Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de los ecosistemas; **f) De asentamientos humanos**: En aquellas superficies donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área protegida, y **g) De recuperación**: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación."

Cuando esto se supo en la región causó indignación y malestar, pues prohibía prácticamente cualquier actividad productiva, aunque sea de bajo impacto, dentro de tales polígonos. Al ser entrevistado, el M.C. Carlos Toledo, entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero, opinó:

> Hubo un trabajo comunitario, hubieron ordenamientos comunitarios, pero aparentemente no fue suficiente o la critica que después yo percibí es que el trabajo que había hecho el equipo del PNUD no era un trabajo consistente en términos del vínculo con las comunidades, es lo que todo mundo decía, yo tenía la idea que si había sido, había tenido la ocasión ya participando en el gobierno de Guerrero, tanto en la Secretaria de Desarrollo Rural y luego en la SEMAREN, lo que pude observar es que sí había un real proceso social, sí se generaba una organización que fue la Unión de Ejidos y Comunidades para la Conservación que también es parte del movimiento, que era un movimiento que por lo menos lo que yo vi, tenía base social estaban las autoridades agrarias, estaban las comunidades, yo no sé en donde estuvieron las limitaciones, mucha gente dice que quien dirigía ese programa, que era el maestro Taurino, tenía muchos vicios en su relación con las comunidades, pero yo no sé hasta qué punto, podría ser un tema de investigación hasta qué punto era realmente un problema de vicios de proyecto del "MIE", o simplemente era resultado del puro conflicto entre el equipo de Taurino y otros actores que participaron o que no pudieron participar de una manera más plena en el asunto, y entonces había de alguna forma dos grupos de gentes trabajando, ambos con enraizamiento social, pero antagónicos. Lo que yo pude percibir es que el equipo del PNUD si había generado de alguna manera una suerte de base social. (Testimonio M.C. Carlos Toledo Manzur, marzo de 2016) [45]

En la idea de mostrar una supuesta participación comunitaria, en el Estudio Previo Justificativo, se habla de que las comunidades con ADVC habían conformado esta Unión de Ejidos y Comunidades por la Conservación –a la que alude Toledo en el párrafo anterior-, cosa que resulta muy extraña, pues de esta instancia no se pudieron encontrar rastros en la prensa ni referentes en las autoridades de la región. Da la impresión de que las autoridades comunitarias, al no estar conscientes de la certificación, pudieron haber participado en reuniones sin tener claros los alcances políticos y simbólicos de su presencia, para validar la iniciativa gubernamental.

> Yo tuve varias reuniones con ellos, con esa asociación, en donde eran autoridades agrarias de diferentes ejidos de la región que se organizaron en esta Unión de Ejidos y Comunidades por la Conservación de la Biodiversidad de la Montaña, no sé qué tanto estaba hecha de manera corporativa o clientelar, pero de que existía, existía. (Testimonio M.C. Carlos Toledo Manzur, marzo de 2016)

El problema fue que ni el proceso de certificación de la CONANP ni la iniciativa de expandir las áreas a una reserva de biosfera fueron consultados, por lo que la gente se sintió engañada, se perdió la confianza y con ello se tiró por la borda un largo proceso a

[45] El M.C. Carlos Toledo Manzur, se desempeñaba entonces como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero. Llegó a Guerrero en los años 80's como parte del equipo Programa de Aprovechamiento Integrado de Recursos, (PAIR-UNAM), liderado por la M.C. Julia Carabias Lillo. Colaboró en la naciente Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 8SEMARNAP), y fue Subsecretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Guerrero.

nivel comunitario, que se había venido construyendo con la confluencia de numerosos actores.

El cuadro 7 resume la información de las áreas comunitarias certificadas por la CONANP y con pago por servicios ambientales (CONAFOR) en los 14 núcleos agrarios involucrados en el CRAADT.

Municipio	**Núcleo Agrario / Número de Certificado**	**Áreas de Conservación Voluntaria (ha)**	**Plazo de la Certificación**	**Superficie con PSA (ha)**
Atlamajalcingo del Monte	Ejido Huehuetepec/ CONANP-188/2009	978.55	30 años 2009-2039	
Acatepec	B.C. Acatepec/	12655.71	30 años 2011-2041	
Cochoapa el Grande	B.C. Cochoapa El Grande/			2,876.76
Iliatenco	B.C. Iliatenco/ CONANP-150/2007	6,537.62	10 años 2007-2017	2,876.63
	B.C. San José Vista Hermosa/ CONANP-175/2008	459.51	30 años 2008-2038	458.13
	Ejido Iliatenco/ CONANP-161/2007	3250.18	10 años 2007-2017	
Malinaltepec	B.C. Colombia de Guadalupe/ CONANP-185/2009	631.19	30 años 2009-2039	631.89
	B.C. Malinaltepec/ CONANP-174/2008	253.17	15 años 2008-2023	
	B.C. Paraje Montero /CONANP-173/2008	667.85	30 años 2008-2038	994.9
	B.C. San Miguel del Progreso/ CONANP-184/2009	277	30 años 2009-2039	250
	B.C. Santa Cruz del Rincón/ CONANP-256/2012	2,379.86	30 años 2011-2041	
Metlatónoc	Ejido Zitlaltepec/ CONANP-259/2011	2,648.89	30 años 2011-2041	2,471.77
San Luis Acatlán	B.C. Pueblo Hidalgo/ CONANP-257/2011	7,907.64	30 años 2011-2041	
Tlacoapa	Totomixtlahuaca	4160.87	30 años 2011-2041	
Total Montaña		**42,808.04**		**10,560.08**

Cuadro 7. Predios certificados entre 2007 y 2011 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en su categoría de Áreas Voluntarias Destinadas a la Conservación y con Pago por Servicios Ambientales, en Territorio Comunitario. Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/listado_areas.php)

Esta forma poco cuidadosa en que la CONANP intentó operar el proyecto RBM es narrado de forma elocuente por el Comisariado de El Rincón:

> No están por saberlo pero aquí nos vinieron a ofrecer dinero para entrar a esos proyectos, diciendo si está apurado o no está su secretario fírmele y ya luego nosotros rellenamos el papel…fírmele, ud. es una buena persona, y me gustó que me dijeran que soy una buena persona…..ud. necesita entrar a un proyecto, y le va a ir bien! Le va a tocar millón y medio de pesos y creo que necesita una camioneta para que recorra su territorio; ¿Cómo de que no la necesito? Si la necesito, ¿pero sabe qué? Porque esa propuesta no se la hace a los comuneros en una asamblea…pero yo inocentemente se lo dije sin saber que esas mañas venían detrás, no sabía…pero no les firmé ese papel, ni recibí el dinero ni recibí la camioneta y aquí andamos!
>
> Pero sí nos llegó este trabajo compañeros, un estudio técnico para la reserva de la biosfera, ¿y saben qué? (…). ¿Cuándo dimos nuestra anuencia? ¿Cuándo? Sin embargo aquí dice: comisión responsable del estudio técnico, quién lo hizo? Aquí mismo está diciendo: ¡CONANP! ¡Así llegan engañando esas personas! Y para acabar con Taurino somos muy amigos, éramos muy amigos, el responsable de CONANP.
>
> La 3ª vez que me visitaron vino Taurino y le dije sabes qué Taurino, aquí no te puedo atender, en la Comisaría. Se iba a dar una reunión en Pascala del Oro, iba a ir el profe Teodoro y el comisariado Tomás García, y yo llevaba por buena gente a Taurino y su propuesta que pensé era buena, estaba yo inocente, venía entrando. Resulta que allá cuando llega Taurino y empieza a participar, lo van agarrando los compañeros, le dieron una santa revolcada, le dijeron sus verdades y Taurino se salió de la Asamblea. Hasta ahí vine a abrir los ojos, hasta ahí vine a reaccionar también yo; a partir de entonces empezamos a buscar información, por eso es que llegué a La Ciénega y cuando llego allá me acabo de enterar de lo demás, y por eso es que nos quedamos en este grupo. ¡Así de sencillo se las ingenian! (Testimonio Prof. Apolonio Cruz, XII Foro en Defensa del Territorio, enero de 2014)

Continúa el Prof. Apolonio narrando al conocer que según los documentos que tiene la CONANP, la comunidad del Rincón aprobó la RBM en una asamblea:

> Ahora como resultado de lo que se hizo en Cochoapa el Grande solicitamos a CONANP de que nos diera copia de lo que decían ellos cuando contestaron que no se dio ningún estudio técnico sino cuando los comuneros lo solicitaron, si no se llevó a cabo una asamblea dura; y resulta que viene como respuesta este engargolado (lo muestra) aquí está, y no viene la solicitud de los comuneros, no viene, inclusive viene en la relación de firmas una persona que firma dos veces, quiere decir que este documento no se hizo aquí; dice: "núcleo agrario de Santa Cruz el Rincón, municipio de Iliatenco", y no somos del municipio de Iliatenco, somos de Malinaltepec….aquí está como prueba: ¿quién hizo el estudio técnico de la reserva de la biosfera? Los hizo CONANP! Así como lo oyen, CONANP! Mientras que aquí ya nos estamos peleando los del Rincón, culpando a uno, culpando a otro, pero el mero responsable aquí está escrito su nombre. ¡Entonces de ese tipo de engaños compañeros hay que tener cuidado, hay que abrir bien los ojos, venga quien venga no hay que firmarle y si lo va a hacer que lo haga frente a una asamblea, si nos va a engañar que engañe a toda la asamblea! Eso lo digo como manera de prevención. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz, XII Foro en Defensa del Territorio, enero de 2014)

El proyecto de Reserva de Biosfera

En este apartado se intenta sintetizar y analizar críticamente el discurso manejado por los gobiernos federal y estatal respecto del proyecto. Este se enuncia en el Estudio Previo Justificativo elaborado por la CONANP y fechado en junio de 2012, pero también por lo vertido a la prensa local por los actores involucrados, que a través de abundantes entrevistas y artículos de opinión en los medios locales, trataron de preparar el terreno para el decreto y, más tarde, intentaron responder al Foro del 6 de octubre en la comunidad de La Ciénega.

En el año 2012, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero (SEMAREN) hicieron pública su intención por crear la Reserva de Biosfera de la Montaña de Guerrero (RBM). En julio de ese año, la CONANP emitió el Estudio Previo Justificativo (EPJ) que es requisito para analizar la iniciativa. En dicho documento, argumentan que la ecorregión Montaña de Guerrero es particularmente importante pues alberga ecosistemas globalmente importantes y que además forma parte de una región pobremente representada en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; que los bosques retienen el suelo y protegen a la región de deslizamientos, que es el mayor riesgo natural de la región; constituye la zona más importante de captación de agua del estado; la región es uno de los más importantes pulmones del estado, lleva a cabo funciones ecosistémicas tales como: a) captura de carbono; b) producción de oxígeno; c) conservación de la biodiversidad (banco de genes para las generaciones presentes y futuras de la región, el estado y el país); d) retención del suelo lo cual evita el proceso de erosión y la pérdida del mismo (CONANP, 2012).

Se explica también como en "respuesta a esta necesidad de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en la Montaña de Guerrero, se implementó el Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE); el cual fue financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente (*Global Environment Facility* ó GEF por sus siglas en inglés), implementado por el PNUD y la CONANP. El MIE es una iniciativa que recién se está concluyendo, su propósito central ha sido proteger la biodiversidad y las funciones ecológicas vitales que se originan en la Montaña de Guerrero. El enfoque de intervención fue integrar a las poblaciones de 64 localidades en procesos que conducen al desarrollo local promoviendo la participación en la toma de decisiones en el manejo sustentable del territorio" (CONANP, 2012). En entrevista, el M.C. Carlos Toledo lo plantea así:

> Ese fue un proyecto que surge de una acción desarrollada en el marco de un proyecto internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto se llamó Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) fue un proyecto del GEF que se inició aproximadamente en el 2000. A mí me tocó diseñar y preparar ese proyecto cuando estaba en la SEMARNAT en la Dirección de Programas Regionales (PRODERS) y de alguna manera

esto era como un mecanismo de buscar la continuidad de la visión que traíamos en los PRODERS; entonces surge como un proyecto que recibía el apoyo de los recursos del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) a través del PNUD y que básicamente el objetivo que tenía era generar una alternativa de conservación en la biodiversidad de los recursos naturales, que tuviera fuerte contenido de consenso social y de participación de las comunidades, porque en la SEMARNAT en ese entonces peleábamos dos visiones de las cosas, una visión que era la conservacionista a ultranza más encabezada por biólogos, clasemedieros, que tenían un cierto desdén por las comunidades indígenas y lo que buscaban era imponer esquemas de conservación, reservas con una suerte de desdén por la participación y los problemas de los grupos indígenas y sociales. Entonces uno de los planteamientos de los PRODERS era que había una coincidencia entre las zonas que todavía estaban conservadas en el país y las áreas donde existían comunidades indígenas y grupos sociales con problemas serios de pobreza, entonces lo que no nos planteamos fue que no era posible la conservación si no se enfrentaba la problemática de los campesinos pobres.

En las comunidades pobres lo que ocurre que al estar en una situación de pobreza y desventaja pues tienen un comportamiento de expansión horizontal de su producción al igual que pasa con la ganadería extensiva. La economía campesina, maicera, es una economía que desgasta al suelo y entonces avanza sobre las zonas de conservación, pero fundamentalmente no por otra cosa, sino porque las tecnologías tradicionales con el crecimiento demográfico, con el problema de la marginación de las comunidades indígenas entran en crisis; lo que antes permitía por ciclos más largos de recuperación de suelo, utilizar la regeneración de la vegetación como mecanismo de fertilización, entonces al momento en que aumenta la población se acortan, entran en crisis los ciclos. Entonces la recuperación de los suelos agrícolas, sobre todo el maíz que es el principal producto de México y el principal rubro de los campesinos, el maíz es un cultivo sumamente erosivo de suelo, entonces en la medida que entra en crisis hay un proceso de avance de esos grupos. Lo que nosotros decíamos era que es necesario que en los procesos de conservación partan del consenso de los grupos campesinos que se encuentran alrededor y el gobierno como política pública o las gestiones de conservación tienen que atender la problemática de los campesinos, transformar sus sistemas productivos para que sean sustentables y así de esa forma se conservan los recursos. No es posible la conservación del recurso sin que exista atención a los campesinos pobres, eso digamos era un poco la tesis de los PRODERS y un poco de las tesis del MIE originalmente; entonces la idea del "MIE" era justamente avanzar en un proceso de consenso con las comunidades, muy intenso, que derivara finalmente en un esquema de conservación. Entonces la idea era impulsar el ordenamiento comunitario de las comunidades que se encuentran en las zonas con alta biodiversidad para que ese propio esquema del ordenamiento comunitario definiera zonas de conservación y la suma de las zonas de conservación de los diferentes ejidos y grupos agrarios, y era como el objetivo la generación de un esquema de conservación con mayor amplitud como son las reservas de la biosfera. Esa era la idea original. (Testimonio M.C. Carlos Toledo Manzur, marzo de 2016)

El Proyecto sería el antecedente directo del proyecto de Reserva, pues a través de él se certificaron la mayor parte de las Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que serían consideradas como zonas núcleo en la propuesta de zonificación de la Reserva. El mismo documento continúa:

"Por otro lado, es importante destacar que el área propuesta como Reserva de la Biosfera es asiento de dos culturas originarias: la Me'phaá y la Na savi, cuya cosmovisión es compatible con la conservación de los ecosistemas y la estructura organizativa de las comunidades favorecerían el manejo de la ANP. Lo anterior se constata en 2009 con la creación de la Unión de Ejidos y Comunidades de la Montaña de Guerrero con Áreas Protegidas Agrupadas, que

está integrada por 15 Núcleos Agrarios que han asumido a la conservación como parte de una propuesta de desarrollo local integral.
La Unión cuenta con 29,324.67 hectáreas certificadas por la CONANP como Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, de éstas, 12,815.35 hectáreas forman parte del polígono propuesto como Reserva de la Biosfera.
Asimismo dentro del polígono propuesto para RB, están otros Núcleos Agrarios que tienen ADVC sin ser integrantes de la Unión, éstos son los siguientes: B.C. de Iliatenco, B.C. de Colombia de Guadalupe, Ejido de Zitlaltepec, Ejido Huehuetepec y Santa Cruz del Rincón, los cuales suman 13,176.109 hectáreas. Parte de estas áreas se encuentran catalogadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO et al., 2007) como una zona con un elevado déficit de Áreas Protegidas y de elevada importancia biológica en su trabajo —Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad en México." (CONANP, 2012: 25-26)

La lectura detallada del EPJ permite identificar algunos aspectos interesantes. En primer lugar se reconoce la importancia biológica de la región, su aceptable grado de conservación, que la cosmovisión de ambos pueblos indígenas es "compatible con la conservación de los ecosistemas" y que "la estructura organizativa de las comunidades favorecerían el manejo"; se menciona como antecedente que existen diversos polígonos certificados como ADVC, que son legalmente consideradas como ANP's. La pregunta entonces es ¿Por qué las dependencias vieron la "necesidad" o "pertinencia" de sobreponer un decreto de Reserva de la Biosfera? ¿Por qué reemplazar algo que supuestamente ya estaba funcionando?

La respuesta más obvia, como ya se dijo, parece relacionarse con que la combinación de zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, permitiría aumentar exponencialmente la superficie *bajo* régimen de conservación, al pasar de 23,611.6 ha en áreas certificadas que serían asignadas como zona núcleo, a una superficie total de 157, 896.08 ha. Esta cifra es un aporte significativo a las metas del gobierno federal en el marco de los compromisos de acción contra el cambio climático.

Otro punto de reflexión es: si de verdad hay tanta voluntad comunitaria por la conservación, como para formar la Unión de Ejidos y Comunidades de la Montaña de Guerrero con Áreas Protegidas Agrupadas, ¿por qué no respetar lo que establece el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas para someter a consulta la propuesta? El Artículo 47 de dicho instrumento jurídico establece que "Los estudios previos justificativos, una vez concluidos, deberán ser puestos a disposición del público para su consulta por un plazo de 30 días naturales, en las oficinas de la Secretaría y en las de sus Delegaciones ubicadas en las entidades federativas donde se localice el área que se pretende establecer. Para tal efecto, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica un aviso a través del cual se dé a conocer esta circunstancia". Si el EPJ está fechado en julio de 2012, la consulta debió llevarse a cabo a más tardar en agosto, cuando en septiembre apenas habían firmado el convenio entre

CONANP y la UIEG. Lo cierto es que esa Unión de Ejidos y Comunidades en una invención de la CONANP, que probablemente existe sólo en algún acta, pero que nunca ha operado. De otra manera, ¿cómo se explica la fuerte resistencia de las comunidades ante la amenaza del decreto?

El 9 de octubre de 2012, en su columna de opinión, Carlos Toledo argumenta la necesidad de crear una reserva de biosfera en la parte alta de la Montaña y presenta el proyecto como "el resultado de un largo proceso comunitario llevado a cabo por el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) que fue desarrollado en esta región desde hace más de 10 años por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)" (Toledo, 2012).

El propio Toledo afirma: "Si bien el proyecto cubrirá todos los requisitos legales, está planteado para establecer un nuevo tipo de reserva de la biosfera. En primer lugar será una reserva con un fuerte proceso de participación, información y consulta ciudadana que se establezca de abajo hacia arriba con un amplio consenso de las comunidades y organizaciones indígenas involucradas. De hecho, la propuesta surge de un trabajo de gestión comunitaria muy intenso que llevó a cabo durante más de una década el MIE-PNUD." Y prosigue "el proyecto busca establecerse bajo un nuevo modelo que asegura que sea un instrumento en manos de las comunidades indígenas que les permita ejercer la defensa y el control de su territorio. Para ello, el compromiso es la formación de un Consejo Asesor de la reserva que sea ampliamente representativo de las comunidades y que funciones como el organismo encargado de tomar las decisiones fundamentales del área protegida, incluida la aprobación del Plan de Manejo" (Toledo, 2012). En el mismo sentido, en entrevista telefónica al periódico El Sur, Toledo afirmó que "la reserva va a tener un consejo asesor que va a estar constituido por los representantes más directos de las comunidades involucradas y este consejo asesor es el que va a tomar las decisiones más importantes de la reserva". (Cervantes, 2012)

En esa misma entrevista, el funcionario continua "la reserva de la biosfera es un proyecto de desarrollo alternativo para que los habitantes de esa zona ocupen sus recursos naturales con toda la potencialidad sin destruirlos y para que de esa manera, también, generen mayor bienestar" (Cervantes, 2012). Cuando pude entrevistarlo, el mismo Toledo planteaba:

> Nosotros lo que planteábamos, como una visión alternativa, era que a pesar de que así fuera en la legislación, en la medida en que construyera un movimiento comunitario muy sólido y se formara una estructura de representación con el apoyo del gobierno estatal, en esa medida independientemente de que la legislación le dejara el control de la reserva a la federación, había un espacio en el cual se podía negociar con un Consejo de Autoridades que queríamos formar de todas las diferentes comunidades, de tal suerte que ese Consejo fuera el

> que se apropiara de la Reserva y que impusiera sus condiciones a la federación, esa era la idea que nosotros teníamos. (Testimonio M.C. Carlos Toledo Manzur, marzo de 2016)

Al respecto, es muy interesante problematizar punto por punto lo que se afirma. En primer lugar está el tema de la *necesidad* de establecer un área de conservación en el esquema gubernamental. Sobre ello es conveniente considerar que la región considerada en el proyecto, efectivamente alberga una importante biodiversidad y mantiene la mayor parte de sus bosques en buen estado de conservación[46], y que esto no ocurre de forma independiente a la población, sino que se explica justamente a partir de una relación histórica entre las comunidades y su territorio. Por ello resulta contradictorio el argumento de que la conservación ecológica de la región requiere la intervención del gobierno imponiendo reglas distintas a las que operan localmente.

Detrás de esto, se evidencia una concepción de la política gubernamental inspirada en la llamada *tragedia de los comunes*, que en términos generales plantea la imposibilidad de los grupos sociales para administrar de forma colectiva y eficiente los recursos naturales, argumentando que hay una tendencia a sobreexplotar dichos recursos provocando su paulatina degradación (Hardin, 1968). En su icónico texto, Hardin señala dos factores que conducen al deterioro del ambiente: la creciente demanda de recursos naturales derivada del crecimiento de la población humana, y el consumo *per capita* y la forma en que los humanos se organizan para extraer recursos del ambiente. A pesar de reconocer el papel crucial de la organización social para aprovechar la naturaleza, tanto él como los que se han inspirado en su obra, centraron su atención en el planteamiento malthusiano de que la principal amenaza es el crecimiento poblacional.

A partir de esta concepción, se plantea que sólo existen dos *fuerzas* capaces de imponer una correcta administración; dichas fuerzas son el mercado y el gobierno (Hardin, 1968). Es precisamente este supuesto uno de los pilares de las políticas gubernamentales, por lo que la propiedad comunal se concibe como la causante de la degradación ambiental y, de paso, del estancamiento económico. De ahí que se requiera privatizar esos bienes comunes, o que estos pasen a ser controlados de manera centralizada por el gobierno. Esto es justamente lo que se pretendió hacer en la Montaña de Guerrero: *privatizar* vía concesiones y *estatizar* vía la reserva de la biosfera. Esta concepción cierra cualquier posibilidad de autorregulación exitosa por parte de las comunidades dueñas del territorio, por lo que merece ser problematizada.

[46] Esta afirmación se puede sostener no sólo en el propio EPJ, sino en otros estudios realizados en la región, como son los ordenamientos territoriales comunitarios de Santa Cruz Del Rincón, Pascala del Oro y Tlaxcalixtlahuaca, en los cuales participé como parte de un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la UNISUR. Mención particular merece el trabajo de Lozada, Santiago y Rojas (2016), cuyo inventario florístico en las comunidades de Tres Marías y Xochiatenco (Mpio. de Malinaltepec), reporta 536 especies de plantas vasculares.

El debate y la reflexión teórica en torno a los bienes comunes se deriva en buena medida de estudiar el proceso a través del cual en Inglaterra, los *commons* o tierras comunes de las poblaciones campesinas, poco a poco se transforman en propiedades privadas de terratenientes por el proceso de *enclosures*, clausuras o encierros establecidas por ellos para la ganadería de borregos, "dando lugar a un sistema económico que transforma la tierra y después el conjunto de la realidad en mercancía, paso necesario para la acumulación del capital" (Houtart, 2013, p. 9).

Entre las críticas a la postura de Hardin, se señala que dicho autor omitió hacer una importante distinción entre los recursos comunes de acceso abierto y los de acceso cerrado. El primer caso se refiere a situaciones en las que un recurso no tiene dueños genuinos o éstos no ejercen su potestad y, por lo tanto, nadie se siente responsable de su mantenimiento (en muchos casos se trata más bien de una "falta de propiedad") (Bray *et al*., 2007). En estas circunstancias, bastante inusuales, resulta tentador asumir la actitud del gorrón (*free rider*) como se le conoce en la literatura sobre el tema al individuo que accede a los beneficios sin preocuparse del mantenimiento del sistema que los produce, lo que conduciría a la sobreexplotación de los recursos.

El segundo caso se trata de una propiedad común de acceso cerrado donde, al contrario de la primera, existen dueños claramente reconocidos (Bray *et al*., 2007). En este caso entraría la propiedad social de la tierra en México, pues ya sea por otorgamiento de tierras (ejido) o el reconocimiento de derechos ancestrales (bienes comunales), el marco jurídico reconoce estos espacios como propiedad colectiva y con personalidad jurídica para organizar su administración.

Diversos autores han documentado una diversidad de casos que demuestran que las personas no siempre actúan de la forma egoísta y autodestructiva que plantea Hardin como inexorable. La existencia de sentimientos de solidaridad, lógicas de co-responsabilidad y el establecimiento de reglas claras para el acceso regulado y equitativo a los bienes comunes, han posibilitado una administración colectiva exitosa en el manejo de bosques, aguas, pesca o espacios públicos urbanos, entre muchos otros casos.

Una de las autoras que más ha teorizado al respecto es Elinor Ostrom, cuyo trabajo germinal le valió el premio nobel de economía y ha inspirado a numerosos equipos de investigación en todo el mundo. Esta autora afirma que durante miles de años la gente se ha organizado para manejar sus bienes comunes, lo que a menudo les ha llevado a crear instituciones y normatividades para gobernarlos con una visión de largo plazo (Ostrom, 1999). Como alternativa al modelo de Hardin, la documentación y sistematización de experiencias empíricas, le permitió proponer un escenario en el que los propios usuarios del recurso de uso común establecen un contrato vinculante para comprometerse con una

estrategia de cooperación que ellos mismos elaborarán y de la que todos salen beneficiados de forma equiparable (Ostrom, 2000).

Para Ostrom (2000) el "término recurso de uso común (RUC) alude a un sistema de recursos naturales o creados por el hombre, lo suficientemente grande como para volver costoso (aunque no imposible) excluir a beneficiarios potenciales". Para clarificar mejor, dicha autora distingue entre "los sistemas de recursos como variables de acervo capaces, en circunstancias favorables, de producir una cantidad máxima de un flujo favorable de unidades del RUC sin perjudicar el acervo o el sistema de recursos". Entre los ejemplos que ofrece de sistemas de recursos están las áreas de pesca, las cuencas subterráneas, canales de riego, puentes, servidores de computación, mientras que "las unidades de recurso serían aquellas que los individuos se apropian o usan de los sistemas de recursos": cantidad de pescado capturado en un área de pesca, volumen de agua extraído de un acuífero o canal de riego, número de veces que se cruza un puente en un año, porcentaje de uso de un servidor de cómputo, etc. Quienes sustraen o utilizan dichas unidades se conceptualizan como apropiadores. De la misma manera se maneja el concepto de proveedores para referirse "a cualquiera que en verdad construye, repara o lleva a cabo acciones que aseguran el sostenimiento en el largo plazo del propio sistema de recursos".

Un caso particular de los RUC es en "situaciones de propiedad común *pura,* donde los derechos del recurso se comparten de manera coequitativa y son exclusivos de un grupo de personas bien definido" (Singh, 1994; cit. por Edwards, 2006, p. 17), que sería el equivalente a la propiedad social existente en nuestro país, donde los ejidatarios o comuneros son los dueños del territorio reconocidos legalmente y constituyen un padrón claramente identificado.

La autora califica de exitosas a diversas instituciones que gestionan los RUC y que expone en su libro, cuya característica principal es que los individuos involucrados poseen una autonomía considerable para diseñar sus instituciones y mejorarlas a través del tiempo (Ostrom, 2000).

En esta lógica que plantea Ostrom, al aplicar al caso de la Montaña de Guerrero, el Sistema de Recursos se referiría al territorio comunitario y el conjunto de ecosistemas en él existentes, pues de su dinámica natural depende la provisión de determinados flujos o unidades de recurso que están siendo apropiadas por la gente o son susceptibles de ser apropiadas, para satisfacer sus necesidades. Pero es justamente la lógica comunitaria con sus usos y costumbres, saberes etnoecológicos, sistemas de cargos, autoridades e instituciones, lo que permite que sus miembros jueguen el doble papel de apropiadores como de proveedores, pues de su adecuada intervención depende que las distintas formas de apropiación no alteren el funcionamiento del sistema al grado que comprometan la renovabilidad del recurso apropiado o algún otro. Desde esta

perspectiva, tal sería el caso de las asambleas comunitarias y del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, pues su preocupación central y motivo de lucha reside precisamente en salvaguardar el territorio comunitario como un patrimonio colectivo, lo cual implica impedir el decreto de la RBM y que las empresas mineras operen en su territorio, pues tienen la certeza que ello afectaría severamente el acceso de la población a una diversidad de recursos, de los que dependen para su reproducción social.

En el caso concreto de los territorios indígenas, el tema de los recursos comunes tiene una relación directa y profunda con otros conceptos, tales como derecho, acuerdos, conocimiento, cultura, identidad y cosmovisión, entre otros (Lauriola y Moreira, 2006). En varios ejemplos de comunidades indígenas en Guerrero, la existencia de acuerdos comunitarios específicos y de instituciones capaces de vigilar su aplicación, han sido fundamentales para garantizar el manejo sustentable y equitativo de bienes comunes[47]. En el caso concreto de la Montaña, las certificaciones y la propuesta de decreto, muestran un desconocimiento hacia los acuerdos y autoridades existentes, por lo que transgreden la institucionalidad local en lugar de potenciarla. Por otro lado, esta perspectiva inspirada en Hardin omite mencionar dos aspectos centrales: a) existen numerosos ejemplos de terrenos en propiedad privada o estatal sujetos a procesos de intenso deterioro; b) como ya lo han demostrado diversos autores –desde Marx hasta Harvey-, es precisamente la enorme concentración en pocas manos y la imperiosa necesidad de acumulación del capital, la principal causa de la crisis ambiental a escala planetaria.

Otro aspecto interesante para ser analizado es el concepto de participación ciudadana, que en los discursos gubernamentales parece una especie de conjuro, cuya sola enunciación cubre cualquier iniciativa con un halo de inocuidad. Por eso llama la atención lo reiterado del uso del término, ya sea por uno u otro funcionario, para validar el proyecto referido. Efectivamente, el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas ha operado durante los últimos diez años, promoviendo el ordenamiento comunitario del territorio en diversos núcleos agrarios y, sin duda, uno de los productos fue que ejidos y comunidades agrarias participantes explicitaran acuerdos tendientes a la conservación ambiental, tales como proteger las zonas de recarga de acuíferos y los cauces de los ríos, estableciendo sus áreas comunitarias de conservación. Tales áreas y los procesos de debate y reflexión pública, estaban impactando positivamente la conservación ambiental en la región. El problema radicó en que después eso fue usado para imponer sin su

[47] Para Guerrero existen diversas investigaciones realizadas por el Grupo de Estudios Ambientales y Sociales A.C (GEA), quienes han documentado normas y formas de organización comunitaria para promover el uso sostenido y acceso equitativo a recursos clave como la palma zoyate (*Brahea dulcis*), el maguey mezcalero (*Agave cupreata*) y el agua. Para el caso de la palma se puede consultar Aguilar *et al.* 1996. También han merecido gran atención los acuerdos y trabajos realizados entre GEA y las comunidades de la región para recuperar y proteger sus fuentes de agua, que entre otros laureles llevaron a que la comunidad de Oxtoyahualco se hiciera acreedora al Premio Latinoamericano de Cuidado del Agua en 2007.

consentimiento la certificación y tratar de sorprender con la declaratoria como Reserva de Biosfera. Al entrevistar a Carlos Toledo y cuestionarlo sobre la base social del proyecto de reserva y su antecedente el MIE, comenta:

> Fueron varios productos de ese proyecto: estuvieron los ordenamientos, estuvo un programa de desarrollo para la región de la Montaña, hubo esta organización que se formó de la Unión de Ejidos y Comunidades para la Conservación, que estaban desarrollando proyectos alternativos, ecoturísticos, de manejo de fauna. Entre otras cosas se generó el proyecto de Estudio Técnico Justificativo para el Establecimiento de la Reserva. Teóricamente esta Reserva iba a ser el producto de los acuerdos comunitarios territoriales, en donde cada uno de los núcleos agrarios iba a definir dentro de su propio territorio cuál era su zona de conservación, como lo hicieron en Iliatenco por ejemplo con toda precisión, sería bueno hacer una revisión de cuántos ordenamientos se hicieron y cuántos definieron zonas de conservación y qué relación tiene esas zonas de conservación, con las zonas núcleo que se planteó porque esa era la idea que se hiciera una reserva de abajo para arriba. Uno de los productos del proyecto fue el proyecto de reserva de la biosfera que fue generado como un Estudio Técnico Justificativo que ya definió con precisión rodales tanto de zona núcleo como de zona de amortiguamiento. Teóricamente esos deberían ser el producto de los ordenamientos comunitarios, aunque a lo mejor vale la pena revisar qué tanto fue o qué tanto no fue. Entonces se generó ese proyecto y se ingresó a la CONANP, pero es muy burocrática para esto para la aprobación de los estudios técnicos justificativos; ese proyecto estuvo dando vueltas hasta que finalmente la CONANP dijo estamos de acuerdo, vamos a proceder al siguiente paso que es a la consulta, teóricamente una vez que está aprobado técnicamente, el siguiente paso es ir a la consulta intensa con las comunidades, y de esa consulta pasar ya al proceso de decreto. Entonces cuando yo entre a la SEMAREM luchamos para que se aprobara en la CONANP técnicamente el asunto y después ir al siguiente paso, a la consulta, y empezamos a revisar la consulta. Estuvimos platicando con las comunidades en una primera etapa con la gente de Metlatónoc, Cochoapa, con la parte más mixteca, con la gente de Iliatenco, Malinaltepec, dimos como una ronda de reuniones con las autoridades agrarias en todo lo que estaba y en principio tuvimos como suerte de aceptación del asunto, especialmente la zona mixteca; pero justamente en la zona tlapaneca en Iliatenco, nos reunimos incluso con el padre Melitón en una reunión donde estuvieron todas las autoridades y aparentemente ahí iba la cosa. (Testimonio M.C. Carlos Toledo Manzur, marzo de 2016)

Llama la atención que el ex funcionario, pese a una larga trayectoria de actividad desde la sociedad civil, no logra darse cuenta que la participación de las autoridades en los Foros convocados por el Consejo Regional de la Montaña, estaba motivado por la búsqueda de recursos para llevar a sus comunidades. Era precisamente en esos Foros, donde acudían los empleados de la CONANP, MIE, CONAFOR, CDI y otras dependencias de gobierno para promover sus diferentes programas. La mera presencia o "participación" en esos espacios no necesariamente significa coincidir o avalar; se acude porque así se consiguen recursos para las comunidades, pero en el momento en que se percatan del peligro la mayoría no duda en participar con el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Es la diferencia entre una participación instrumental y una participación para la resistencia o liberadora.

Un aspecto más que llama la atención en las diferentes versiones, es la idea del *nuevo tipo de reserva* y el papel del *consejo asesor*. Los diferentes funcionarios federales o estatales

involucrados, anuncian que el proyecto propuesto para la Montaña sería algo *nuevo*, a mi parecer buscando desmarcarse de los fracasos y cuestionamientos que han tenido las ANP's en todo el país. Se insiste mucho en que serán los representantes comunitarios a través del consejo asesor quienes tomarán las decisiones. Pero convenientemente se *olvidan* que el concepto de *reserva de biosfera* es una figura jurídicamente reconocida y definida por la LGEEPA, por lo que sus características y funcionamiento solo pueden variar si el Congreso de la Unión modifica dicha Ley y/o su Reglamento. Es precisamente en ese Reglamento, que con mucha claridad se establece que el Consejo Asesor tiene por objeto asesorar y apoyar a los directores de las áreas protegidas[48], lo que le otorga un carácter consultivo, no resolutivo. Dicho más claramente, tanto las atribuciones que anuncian tendría el Consejo Asesor como el nuevo tipo de reserva, jurídicamente no tienen ningún respaldo, a menos que ocurrieran cambios a la legislación federal aplicable.

En resumen, detrás del discurso gubernamental de conservación se ocultan una serie de hechos y de formas de pensar:

1. En primer lugar, no se dice que estos programas responden a los compromisos internacionales que ha asumido el gobierno federal en el marco de los acuerdos del cambio climático global y que ahora buscan imponer a través de los mecanismos REDD+;
2. Usando un doble discurso se asume la *tragedia de los comunes,* es decir que las comunidades no saben y no tienen formas para garantizar la conservación de los recursos naturales, invisibilizando los conocimientos, formas de manejo y de organización, instituciones y regulaciones comunitarias que, de hecho, son las que han hecho posible que los recursos naturales existentes hasta la fecha en la región se hayan conservado. Desconocen el manejo campesino del territorio, basado en el manejo diversificado y multipropósito.
3. Pretende ignorar que casi la totalidad de las ANP's decretadas no han operado correctamente, en esencia porque han hecho un lado a los dueños del territorio y su institucionalidad; a cambio les han impuesto formas de manejar la tierra, han fomentado la corrupción y la división en las comunidades. La mayoría de las ANP's decretadas sólo han acelerado la destrucción de los recursos ante la falta de certeza jurídica sobre la posesión de la tierra y la incapacidad del gobierno para salvaguardar la integridad de esos territorios.

Pero además, el proyecto de Reserva de la Biósfera conlleva una serie de peligros que deben estar claros para los núcleos agrarios:

[48] El Reglamento de Áreas Naturales Protegidas en su capítulo IV se refiere a los Consejo Asesores; en los artículos 17 y 18 establece claramente su carácter consultivo (DOF, 2014b).

1. El Decreto implica sobreponer leyes y autoridades sobre los territorios comunitarios. A la Ley Agraria que hoy rige los núcleos agrarios le sobreponen la LGEEPA (y en particular su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas); a la Asamblea Agraria y su Comisario como autoridades, le sobreponen las figuras de la SEMARNAT/CONANP y del Director de la Reserva, que sería nombrado por el gobierno federal.
2. Aunque la CONANP y la SEMAREN afirmen que la declaratoria frenaría la explotación minera, lo cierto es que la Ley Minera en su artículo 6º establece que dichas actividades son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno (DOF, 2006), con lo cual se legaliza su prioridad por encima incluso, de los asentamientos humanos o de las zonas de reserva, con lo que se justifica el cambio en el uso del suelo y el despojo.
3. La jurisprudencia establece que lo que es primero en tiempo es primero en derecho, por lo cual, en un escenario de disputa legal, las concesiones mineras tendrían derecho por encima del decreto, por haber sido emitidas con anterioridad. Esto demuestra la falsedad de quienes argumentan que la declaratoria como ANP's cerraría el paso a las empresas mineras.
4. El Reglamento de Áreas Naturales Protegidas derivado de la LGEEPA encierra una trampa legal, pues al tiempo que restringe el manejo campesino del territorio y sus recursos, establece mecanismos para permitir la explotación minera dentro de un ANP (explotación que a todas luces es contraria a la conservación ambiental), y otorga facultades para resolver tales casos al Director de la misma, que es nombrado por el gobierno federal.[49]
5. Aunque se ha estado promoviendo la figura de un Consejo Asesor de la Reserva supuestamente como una forma de garantizar la participación de las comunidades y su soberanía sobre el territorio, debemos tener claro que según el Reglamento de ANP, la figura de ese Consejo tiene sólo un papel consultivo, no directivo, por lo que su existencia no garantiza la conducción comunitaria de la Reserva, sino que sólo convalida el proceso.
6. Los programas de gobierno enmarcados en la política contra el cambio climático (REDD+) resultan engañosos, unos imponen áreas naturales protegidas, otros ofrecen subsidios que comprometen la gobernabilidad y posesión de los territorios al otorgar de facto derechos a dependencias o empresas (p.e. pago por servicios

[49] El reglamento de Áreas Naturales Protegidas (derivado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) es el instrumento que regula tanto las áreas *certificadas* como *decretadas* con fines de conservación. En sus Arts. 81, 89, 94, 95 y 96, establece los mecanismos administrativos que permiten la exploración y el aprovechamiento minero dentro de áreas que se supone han sido destinadas a la conservación, donde incluso se encuentran prohibidos los diferentes tipos de manejo campesino como la agricultura de montaña o la extracción doméstica de recursos del monte, como la leña (DOF, 2014b).

ambientales) (De Ita *et al*., 2012), promueven el abandono del cultivo de granos básicos por productos agroforestales a través de la llamada reconversión productiva (p.e. maíz por bosque), imposición de esquemas de uso de la tierra que restringen las formas tradicionales de manejo campesino (certificación de áreas voluntarias de conservación), entre muchos otros. Todos estos programas ponen en peligro la autodeterminación de los pueblos y su soberanía alimentaria.

Tercer Paso: Debilite la organización comunitaria

Como ya se comentó en el primer capítulo, uno de los rasgos más interesantes de la región Costa Montaña es su organización comunitaria. Aunque recientes, la vitalidad y fuerza de las instituciones comunitarias en la región han venido anclando una forma de hacer política a partir de la base, de las demandas y aspiraciones de las comunidades, que se organizan no sólo para exigir sus derechos, sino también para de forma autogestiva construir escenarios para proteger a su gente y su territorio.

Paulatinamente esto fortaleció el tejido comunitario, no sólo a nivel de una localidad particular, sino a escala intercomunitaria. Poco a poco se naturalizó una estrategia para cerrar filas frente a problemas o amenazas comunes, relativizando o poniendo en pausa los conflictos que existen entre los pueblos. Esto permitió enfrentar los problemas de inseguridad, de violencia, de desastres naturales y, más recientemente, de defensa de su territorio.

Este modelo organizativo generó durante varios años que la región fuera uno de los territorios más seguros dentro de una entidad constantemente convulsionada por hechos de sangre, y permitió también que se gestaran proyectos autonómicos de educación y comunicación.

En el terreno electoral se libraban fuertes batallas, en las que poco a poco ganaban terreno las posiciones de izquierda, llevando al gobierno municipal y comisarias a algunos de los líderes de la región. Esto llevó al gobierno priista de René Juárez Cisneros a reconfigurar el mapa político administrativo, creando nuevos municipios para proteger a la fracción política derrotada y debilitar los gobiernos locales de oposición, como ocurrió al separar Iliatenco de Malinaltepec, y a Cochoapa de Metlatónoc.

La primera década del siglo cerraba así en la región con un panorama promisorio para el movimiento indígena, que se había convertido en referente para varios otros procesos organizativos en el país.

Simultáneamente ocurrían otro tipo de procesos: a) el programa Manejo Integrado de Ecosistemas dependiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pasaba a

formar parte de la CONANP, desde donde promovieron certificados de conservación voluntaria a través de mecanismos poco claros y tramposos que amenazaron los territorios de las comunidades y el tejido social al generar desconfianza; b) se crea la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) como un proyecto gubernamental que buscaba mediatizar la demanda por una educación propia de los pueblos originarios y, en su lugar, favorecer una educación folklorizante y desarrollista que promovía valores y formas de pensar diferentes a la lógica comunitaria, además de provocar división entre las comunidades; c) desde la UIEG y otras instancias gubernamentales arriban a la región personajes que posteriormente jugarían un papel central en la disputa por la CRAC, generando una profunda división en el sistema comunitario de seguridad y justicia.

El primero de estos tres ejemplos se abordó con el tema de las áreas voluntarias para la conservación y la reserva de la biósfera; los dos siguientes se desglosan en las páginas subsecuentes.

La Ruptura en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

Desde su fundación, en 1995, la Coordinadora había tenido que librar numerosos problemas, no sólo los inherentes a su proceso organizativo, sino los ocasionados por el gobierno. Amparada en el endeble asidero jurídico que representaba el Convenio 169 de la OIT, la CRAC había logrado establecer un sistema comunitario de seguridad, que mediante el uso de las armas, salvaguardaba un territorio, poniendo en entredicho uno de los pilares del estado, que es el monopolio en el uso legítimo de la violencia. Esto ha sido interpretado en diversas ocasiones como un desafío, por lo que no es de extrañar que durante los primeros años se hayan girado numerosas órdenes de aprehensión contra la mayoría de los coordinadores, comandantes y líderes comunitarios; que se hayan producido detenciones y escaramuzas diversas; sin embargo, la compleja situación política nacional generada por el levantamiento zapatista, sin duda fue uno de los factores que disuadieron al gobierno de realizar acciones abiertamente violentas. A lo largo de los años, las diferentes administraciones estatales han tenido diferentes estrategias en su trato con la CRAC-PC; algunas se han confrontado abiertamente, otras han soslayado su existencia y otras incluso han mantenido cierto nivel de colaboración.

El control territorial por parte de las comunidades, a la larga permitió que se creara su propio sistema de justicia, que se detuviera la explotación clandestina de recursos forestales y que se soñara con un sistema educativo propio. Fue así como la CRAC –PC se convirtió en obstáculo para los intereses de las empresas mineras, del gobierno y de los viejos caciques que se habían acostumbrado a medrar en la región. Desarticular la CRAC se volvió una prioridad, por lo que se inició un proceso para infiltrar la organización.

Como parte de este proceso, cuyo detalle se abordará a continuación, en 2007 los gobiernos federal y estatal inauguran con bombo y platillo la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero – Ignacio Manuel Altamirano (UIEG-IMA), que se convertiría en un caballo de Troya para el proceso organizativo regional. Desde esta institución no sólo se buscó atajar el proyecto universitario de las comunidades, sino que fue el vehículo para que llegaran y/o operaran en la región algunos personajes que jugarían papeles centrales en la división y confrontación entre las comunidades, lo que culminaría con la fractura interna de la CRAC. Estas personas han estado muy vinculadas con diversas dependencias del gobierno federal y estatal, no sólo con la UIEG-IMA. [50]

Entre estos personajes se encuentra Aréstegui, rector de la UIEG-IMA y otros dos que también fueron parte de la nómina institucional durante su periodo, que aprovecharon su posición para socavar parte de la base social de la CRAC y la Unisur, para congraciarse en las comunidades a través de dádivas otorgadas con recursos de la institución, como la compra de instrumentos musicales, financiar las fiestas patronales o regalar uniformes a los policías comunitarios.

Su experiencia política les permitió ganar presencia y llegar a ocupar puestos dentro del Comité Ejecutivo de la CRAC. Fue en esta administración que se empezaron a operar cambios en el reglamento interno sin pasar por la aprobación de ninguna asamblea.

Para consolidar su posición hegemónica en la organización, incorporaron numerosas comunidades al sistema, sin mediar los acuerdos necesarios y sin el aval de la asamblea regional; pronto empezaron a funcionar las Casas de Justicia de El Paraíso, Cacahuatepec y Cochoapa, políticamente afines a ellos. El número de comunidades agrupadas en torno a la CRAC se triplicó en sólo tres años. La integración de estas comunidades les permitió modificar sustancialmente la correlación de fuerzas y apuntalar su posición. Parte del problema es que dichas comunidades desconocían muchas cosas de este sistema de seguridad y justicia, muchas de ellas ni siquiera tenían tradición de organización comunitaria ni sistemas de cargos, por lo que con el paso del tiempo, el funcionamiento de la CRAC-PC se debilitó claramente, como lo describe el Prof. Apolonio Cruz:

> Hay todo un número de comunidades que no participaron en el proceso de unidad que dio origen a CAIN, que se sumaron años después porque también ya estaban cansadas de los atropellos de las delincuencia y de la policía, pero que no tuvieron el proceso previo de concientización, no hubo asamblea para informar qué es en realidad la policía comunitaria, qué es en realidad la impartición de justicia, la reeducación; nomás porque les gustó se agregaron; por supuesto hubo gente buena que se sumó al proyecto, pero también hubo

[50] Podemos ubicar a estas tres personas como funcionarios o empleados gubernamentales (federales o estatales) en diferentes momentos, particularmente el caso de Rafael Aréstegui Ruíz, quien fue Director del Instituto de Estudios Parlamentario Eduardo Neri del Congreso del Estado de Guerrero, Director de Desarrollo Social en la Delegación Tlalpan y Director de Educación Básica en el Distrito Federal. Fue Rector de la UIEG-IMA en el periodo 2009-2012.

> malvados que vinieron a descomponer; para empezar viniendo a aplicar las mismas prácticas del gobierno: pago de fianza, pre-liberación, testigos falsos; cuando al principio la CRAC no era así, si no en base a los usos y costumbres, y ahí se habla con la verdad; a una persona para que sea detenida se le tiene que investigar bien, su verdad tiene que salir y no nomás por sospechar detenerlo; en la PC primero se investigaba y después se procedía; esos mismos vicios del gobierno, estas personas nuevas los trajeron a la CRAC; así llegan otros vivales, con ideas gobiernistas, que traían una encomienda: dividir a la CRAC! Porque la CRAC representaba la unidad de los pueblos indígenas en la Montaña y Costa Chica; entonces dijo el gobierno, aquí no vamos poder entrar porque están unidos, están organizados. ¿Qué hizo el estado? Mandar personas como halcones para empezar a dividir, cooptar a las autoridades, ofrecer dinero para sobornar; así llegaron millones de pesos a la región, llevando hasta a la credencialización de los policías comunitarios, como si fueran policías del gobierno y no de su pueblo. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz, noviembre de 2015).

Durante su gestión se cometieron diversas irregularidades y violaciones al Reglamento Interno, provocando el descontento, el alejamiento y debilitamiento del sistema comunitario. Recibiendo ya un subsidio permanente por parte del gobierno del estado, se instalaron una lógica clientelar al interior de la CRAC, llegando incluso a formar un grupo especial de "policías comunitarios" con entrenamiento militar, asalariados y que operaban como sus escoltas personales. Este grupo realizaba tareas de intimidación contra los detractores.

El momento más álgido inició en febrero de 2012, cuando en una flagrante violación al Reglamento Interno se modifica el mecanismo de elección para imponer la llegada de Eliseo Villar Castillo como Coordinador Regional, a pesar de no cumplir el requisito de haber sido previamente autoridad comunitaria y de tener acusaciones pendientes de ser juzgadas dentro del propio sistema comunitario.

> Este papel de los gobiernistas quedó más claro en la asamblea del 23 de febrero de 2012, en que violentando el reglamento interno se impuso a los nuevos coordinadores regionales, entre ellos Eliseo Villar Castillo. La idea era dejar gente que garantizara el seguimiento del compromiso que se tenía ya con las empresas mineras. Apenas unas semanas después, para el domingo de ramos de ese mismo año, la propia Coordinadora recibió a los mineros en la Casa [de Justicia] del Tamarindo y le dan indicaciones de atender esa visita al Comandante Regional Raúl de Jesús Cabrera, de Arroyo San Pedro; el día domingo suben los mineros a Iliatenco, casi casi obligando al Comisariado Ejidal de Iliatenco de sentarse a platicar sobre las minas; es así como el recién nombrado Comandante escoltó a los mineros; pero el Comisariado de Iliatenco les dijo que no podían hablar de eso si no era en la asamblea del pueblo; ante la negativa, le dijo el canadiense que era muy tontos, que estaban sentados sobre la riqueza, sobre el oro, y no lo quieren aprovechar.
>
> Más adelante, a inicios de agosto de 2012, en la comunidad de Río Iguapa (anexo de Buenavista), detienen a dos ingenieros que dijeron trabajar para los hermanos Larequi Radilla, que uno de ellos era el titular de la concesión minera La Diana, y que fue quien firmó el contrato de exploración con la comunidad de Paraje Montero, con lo cual quedó claro que trabajan para tal empresa; para sorpresa de los ciudadanos, los ingenieros eran escoltados por miembros de las Fuerzas Especiales que formaron Pablo Guzmán y Valentín Hernández. ¿Esos policías que hacían acompañando a los ingenieros? Eso quiere decir que la CRAC de San Luis ya estaba trabajando con las empresas mineras, entonces en sí, los del compromiso, los que estaban vendiendo el territorio eran ellos, no lo que decían en El Faro, donde acusaban a

> Apolonio, a Bruno, a Cirino; pese a eso, ellos siguieron estando en la CRAC, y el gobierno de Ángel Aguirre fue donde más los fortaleció, dándoles dinero mensual, entonces quiere decir que el gobernador estaba interesado en que toda esa región de la Costa Chica y la Montaña estuviera controlado pues, porque atrás de él está el gobierno federal y están las mineras. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz, noviembre de 2015)

Pese a que al principio Villar Castillo aparentó una postura beligerante hacia el gobierno del estado, esto cambió drásticamente en el 2013, en que apareció junto al gobernador en diversos eventos y el financiamiento fluyó como nunca antes hacia la CRAC. En mayo de 2013, Aguirre Rivero acude a San Luis Acatlán a poner la primera piedra para la construcción de las cuatro casas de justicia del organismo de policías comunitarias, obra para la que anuncia una inversión de 24 millones de pesos. En el mismo evento anunció que otorgaría un millón de pesos mensuales a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), lo que representaba un 100% de aumento (Diario Sin Límites, 2013). Al respecto, el párroco de Santa Cruz del Rincón comenta:

> …el gobierno va a utilizar miles de formas para fregarnos, va a comprar a nuestra gente y lo está haciendo, pues tenemos la casa de justicia de San Luis Acatlán que encabeza Eliseo Villar Castillo, ¿cuántos millones le dieron? cuando unos comisarios están luchando por una escuela, por un automóvil que les den, un automóvil que pueden costar unos 200, 250 mil pesos y no le dan ¿y que paso con Eliseo Villar? le dan 4 millones, cuando el gobierno suelta dinero es que algo quiere, si nuestro gobierno federal ha anunciado que va a poner una autopista de Puebla a Marquelia ¿qué es lo que le interesa? el gobierno da no nada más así, hay algo de por medio y desgraciadamente mucha de nuestra gente aunque seamos de la misma raza caemos en esas trampas, tenemos que tener mucho cuidado a estas alturas de caer en la trampa, y si tenemos compañeros que ya cayeron, ya fueron engañados se deslumbraron con el dinero, una camarita, una laptop, piénsenle bien, creo que primero esta nuestra gente, primero están estos grandes valores para quizás la raza que viene, para sus hijos, para sus nietos, no hagan lo mismo que hicieron los señores de Carrizalillo, lo único que les importó a ellos es el dinero para ellos mismos o gozar en este momento, tenemos nuestra casota en Chilpancingo, tenemos nuestro carrote aquí, estoy gozando, estoy disfrutando, si pero ¿qué va a ser para tu hijo, para tu nieto, que mundo le vas a dejar para tu descendencia? o creo que es muy triste pensar en uno mismo, eso es egoísmo, es soberbia y eso dios no lo quiere al contrario dios nos dio este mundo, con esta naturaleza y quiere que la cuidemos, protejamos y la defendamos contra esos males que le quieren hacer daño, pues eso nada más les quiero decir, soy su humilde servidor de aquí de Santa Cruz del Rincón, soy párroco.
>
> La diócesis de Tlapa está muy interesada en luchar con los pueblos para defender su territorio, su naturaleza, todos los sacerdotes, las religiosas, catequistas hemos decidido acompañarlos en esta lucha. (Testimonio Pbro. Francisco Javier Sánchez Cruz, durante el XII Foro en Defensa del Territorio, 2014)

En ese mismo evento en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en su discurso "Ángel Aguirre externó la relación tan cercana entre él y el actual coordinador, y precisó que en su campaña, Villar le había regalado un becerro. Esa cercanía tuvo dos frutos visibles: la donación del gobierno del estado de 8 millones de pesos a la CRAC de Eliseo para proyectos productivos, y la credencialización de más de 900 policías comunitarios, mismos que serán identificados como parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública" (Ramírez, 2013). Sobre la credencialización comenta el párroco de Malinaltepec:

> Ya se planteaba en esta Comisaría (El Rincón) en una reunión de la Comunitaria, que ya hay planes y que por eso soltaron lana a las comunitarias, para dividirlas, y ahora las credencializaron; no había necesidad de que les dieran su credencial, pero como fueron tontos también dijeron que ya querían ser oficiales, cuando no es necesario que seas oficial. (Testimonio Pbro. Melitón Santillán Cantú, durante el XII Foro en Defensa del Territorio, 2014).

Ese proceso llevó a la fractura de la CRAC, quedando por un lado esa dirigencia con tintes pro-gobiernistas, y por otro, las comunidades que originalmente fundaron el sistema y que están buscando retomar la filosofía y valores de servicio comunitario que le dieron origen, aglutinadas en torno a la casa de justicia de Santa Cruz del Rincón y bajo la denominación CRAC-PC de los Pueblos Fundadores.

Esto ocurre en un contexto de proliferación de grupos de autodefensa y de policía ciudadana, que sacudió el escenario político nacional, motivando reacciones diversas. Una de ellas fue el informe presentado por el Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, en el que afirmaba que el 65% del territorio estatal estaba controlado por este tipo de grupos armados a los que calificó de contrarios al orden constitucional. El *ombudsman* acusó al gobierno del estado de haber "financiado, tolerado y legitimado" a dichos grupos; al respecto ofreció cifras: "De enero a junio 2013, el gobierno encabezado por Ángel Aguirre Rivero ha aportado un total de 11 millones 615 mil 914 pesos, de los cuales 6 millones 168 mil 205 pesos fueron otorgados a la CRAC y 5 millones 447 mil 709 pesos a la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG)[51], en cuestiones tales como la entrega de credenciales, ambulancias, camionetas, vehículos con blindaje, uniformes, despensas, equipos de comunicación, playeras y gorras"(Meráz, 2013). En ese mismo informe, se afirma que estos grupos armados operan en 46 de los 81 municipios de la entidad (la UPOEG en 26, la CRAC en 15, la Unión de Pueblos de la Costa Grande en 4 y otros grupos en 16 municipios). "La CNDH advirtió que es inaceptable que las comunidades asuman de manera permanente tareas públicas que no les corresponden y que pueden traducirse en reductos de poder, como hacer justicia por propia mano o ejercer violencia en reclamo de derechos" por lo que "pidió al Senado adoptar medidas para analizar la situación que impera en Guerrero, misma que ha generado una afectación en la vida de los ciudadanos. Al gobernador le solicitó asumir la función que le corresponde, recobrar la seguridad e implementar un programa de presentación de denuncias" (Reyes, 2013).

[51] La Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) surge en 2011 "como una respuesta de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero, ante las condiciones de pobreza y marginación en las que vivimos, reflejadas en graves rezagos en materia de infraestructura básica, educación, salud, vivienda, acceso a la justicia, seguridad pública, alimentación y fuentes de empleo". Opera en las regiones Centro, Montaña y Costa Chica de Guerrero. Uno de sus fundadores y líderes más visibles es Bruno Plácido Valerio, también fundador y primer Comandante Regional de la CRAC-PC. (http://upoeg.blogspot.mx/p/quienes-somos.html; fecha de consulta 22 de abril de 2017).

En este contexto de tensión creciente entre las fuerzas armadas del gobierno y de los grupos ciudadanos y comunitarios, un hecho fundamental ocurrió el 5 y 6 de agosto de 2013, cuando un comando militar detuvo a cinco policías ciudadanos en la localidad de El Pericón, Mpio. de Tecoanapa. En respuesta, el conjunto de comunidades organizadas en torno al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), bloquea la carretera federal y retiene a más de 100 militares a los que mantiene cercados en las afueras de dicha localidad, acusándolos no sólo de abuso en la detención de los policías ciudadanos, sino de "mantener vínculos con el crimen organizado y entrenar grupos paramilitares" (Cervantes, 2013).

El Secretario de Gobernación federal mandó llamar al gobernador a la ciudad de México y, a partir de ese momento, la política estatal sufrió un golpe de timón: no sólo cambió el discurso, sino que se iniciaron diversos mecanismos de represión y disuasión contra este diverso conglomerado de organizaciones, cuyo único elemento común es la defensa de su territorio por la vía de las armas.

Otro resultado de la cercanía Aguirre-Villar es que la fracción pro-gobiernista de la CRAC jugó un papel muy cuestionable en la criminalización de la lucha social en la región. En mayo de 2013 Gonzalo Molina anunció que los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio habían sido expulsados de la CRAC por promover la división. Al respecto "Cirino Plácido Valerio responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ''operó'' su salida a través de Óscar Chávez Rendón, subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención de Organizaciones Sociales. (….)Acusó que detrás de su expulsión también están el ex rector de la Universidad Intercultural, Rafael Aréstegui Ruiz; el ex asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández; el diputado local Jesús Marcial, y el ex coordinador de la policía comunitaria, Pablo Guzmán, ''quien responde a las órdenes de su compadre Óscar Chávez, actual funcionario del gobierno estatal'' (Ocampo, 2013).

Unos meses más tarde las expulsiones siguieron. En el proceso de credencialización los comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, con sede en Ayutla, no participaron a pesar de que Eliseo Villar lo había pactado para toda la CRAC. En respuesta Villar Castillo declaró que esa casa ya no pertenecía a la CRAC, aunque ninguna asamblea regional avalara dicha exclusión. En el mismo sentido, en septiembre de 2013, "En una reunión entre el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez y un grupo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), acordaron instalar una mesa jurídica para revisar los casos de los policías comunitarios detenidos y desconocer a Gonzalo Molina y a Arturo Campos Herrera" (Agencia Irza, 2013); Molina y Campos, coordinadores de la PC en Tixtla y Ayutla, respectivamente, habían encabezado recientemente bloqueos en distintas vías federales, retenido a funcionarios estatales y municipales, además han tenido roces

con el Ejército Mexicano. “La CRAC se deslinda de las acciones que realicen Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera”, señaló el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo tras el acuerdo que él y otros líderes de la PC tuvieron con Martínez Garnelo y Ernesto Aguirre (Agencia Irza, 2013).

Eso puede explicar por qué el gobierno federal (soldados y marinos) y el estatal, se fueron contra las casas de justicia de Olinalá, Tixtla y El Paraíso. A partir de haber sido “expulsados” de esa CRAC presidida por Villar Castillo (Chávez, 2013), inmediatamente fueron aprehendidos varios de los líderes y encarcelados en prisiones de máxima seguridad, como es el caso de Nestora Salgado García en agosto de 2013 (De la O, 2013a), Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González (De la O, 2013b) en noviembre del mismo año.[52]

Es así como, luego de años de haber mantenido prácticamente fuera de la región a los cuerpos policiacos y al ejército, el debilitamiento del tejido comunitario que sostenía la CRAC y la actitud cómplice de la nueva dirigencia les permitieron regresar, esta vez para aprehender a los líderes supuestamente expulsados y, más tarde, enmascarados por la cruzada nacional contra el hambre.

Como resultado de esta crisis provocada por los actuales y anteriores Coordinadores Regionales de la CRAC, es que 19 de las comunidades que dieron origen al sistema comunitario, deciden deslindarse en junio de 2013 y convocar al rescate del proyecto original, asumiendo la denominación como CRAC de los Pueblos Fundadores y estableciendo provisionalmente la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón. [53]

Pero el proceso de desmembramiento no terminaría ahí. Durante 2014 y 2015, las fracciones afines a Valentín Hernández y Pablo Guzmán, por un lado, y las cercanas a Eliseo Villar por el otro, protagonizaron en los medios de comunicación descalificaciones y acusaciones recíprocas por malversación de fondos, detenciones ilegales y tortura. Villar Castillo fue desconocido en San Luis Acatlán y tuvo que refugiarse en la recién creada Casa de Justicia de Juchitán, donde siguió contando con el respaldo de Ángel Aguirre. La confrontación subió de tono hasta producirse violentos encuentros en diversas localidades que tuvieron como saldo diversos heridos e incluso muertos, hasta que finalmente se produjo la detención de Villar Castillo el 30 de abril de 2015 a manos de la policía estatal (Chávez, 2015). El Prof. Apolonio Cruz lo expresa así:

> Eliseo fue reconocido y protegido por Ángel Aguirre, porque tenía que hacer el trabajo que ya había empezado Pablo Guzmán. Tenía que ora si, seguirle dando de comer; pero ¿Cuándo se

[52] Nestora Salgado permanecería 31 meses en prisión, hasta ser liberada en marzo de 2016. Luego de 4 años en prisión, en diciembre de 2017 fue liberado Arturo Campos. Gonzalo Molina aún permanece preso

[53] Minuta de la Asamblea de Autoridades Comunitarias, Consejeros, Policías Comunitarios y ciudadanos en Santa Cruz del Rincón, 16 de junio de 2013. 6 fojas + firmas de autoridades.

> ensucian las cosas? Cuando Pablo y Eliseo se pelean, ahí ya no le resultó al gobierno. Ora sí nos preguntamos, ¿Por qué Eliseo está en la cárcel? La respuesta sería porque Pablo Guzmán siguió en la línea gobiernista, llegó Rogelio y lo llamó como asesor; desde ese poder influyó para que lo encerraran, además de los atropellos que cometió; pero no fue por justicia, porque a Eliseo lo dejaron hacer muchas cosas; ¿por qué no encerraron a Eliseo cuando desarmó a la policía ministerial? ¿Por qué no lo encerraron cuando desarmó a la policía municipal de San Luis Acatlán y Malinaltepec? ¿Por qué no lo encerraron cuando entró armado al puerto de Acapulco? Porque entonces no había quien lo señalara y estaba haciendo el trabajo que le encargaron. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz, noviembre 2015).

En el mismo sentido se expresó Carlos Toledo al preguntarle en su opinión quién ganó con la desarticulación de la CRAC durante esos años:

> Fue provocada por la intervención gubernamental porque Aguirre lo que hizo fue dividir a la CRAC, entonces eso la desequilibró; pero también fue producida por la falta de consistencia de la organización, de la CRAC misma, y por la falta de reglamentación en sus mecanismos que lo hacía débil institucionalmente entonces la hizo sujeta de que la intervención gubernamental la hiciera trizas. (Testimonio M.C. Carlos Toledo, marzo 2016).

Antes de cerrar este apartado, me parece muy pertinente retomar las reflexiones que Roberto Ramírez Bravo publicara en agosto de 2013:

> El gobierno del estado de Guerrero ha usado varios recursos para dividir a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que durante 17 años ha tenido en sus manos la procuración y aplicación de justicia en los municipios donde ha operado en La Montaña y Costa Chica. (...) En el fondo, sin embargo, lo que está en juego sigue siendo algo tan sencillo y tan primitivo como la explotación de las mineras. En Aquila, Michoacán, está el mejor ejemplo y la más clara explicación. Allá una empresa minera, Ternium, de capital extranjero, explotó durante años el subsuelo. Cuando la comunidad se organizó, la empresa difundió en medios de comunicación que le pagaba 18 mil pesos mensuales a cada comunero, lo cual no era cierto, pero originó que la delincuencia organizada les quisiera cobrar cuotas de 2 mil pesos a cada uno. Así nació ahí la autodefensa, que empezó a ser acosada por el Ejército y la policía, hasta que los comuneros detuvieron a 60 soldados. Lo que vino después fue la detención de los policías comunitarios, el desmantelamiento de la autodefensa, y la felicidad para la minera (Ramírez, 2013).

Las semejanzas son grandes como para pensar en coincidencias; todo parece indicar que el intento por desmantelar la CRAC, al igual que el caso michoacano, no responde a otro interés que el de minar la principal instancia de defensa y control territorial de las comunidades indígenas.

La UNISUR y la UIEG

En el ámbito educativo, la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) nace de un paradigmático proceso de consulta y participación comunitaria, ante la necesidad de contar con profesionistas propios, que potenciaran la lucha y apoyaran el desarrollo de las comunidades. La institución se planteó entre sus características centrales el declararse como “una institución de los pueblos para los pueblos”, asumiendo el reto de ponerse al servicio de las comunidades.

Por ello, cuando se inaugura en agosto de 2007, representaba la antítesis del proyecto gubernamental oficial encarnado en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), cuya creación se había logrado imponer buscando mediatizar la demanda por una educación superior propia, y subsumirla en un modelo homogéneo definido centralmente desde la CGEIB.[54]

A contrapelo del amplio proceso de consulta que se desarrolló para impulsar la UNISUR, el Secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero, fue inflexible en determinar que se impulsaría un solo proyecto de universidad, cuya sede única sería La Ciénega, el modelo educativo sería el impuesto por la CGEIB en todo el país, las autoridades serían nombradas por el gobernador sin injerencia de las comunidades. Tampoco importó que la construcción fuera a edificarse sobre una falla geológica muy activa y en un terreno con un viejo litigio agrario. La falta de apoyos claros a nivel comunitario, los problemas presupuestales y el clima político adverso, hicieron que la UIEG naciera en condiciones muy precarias y con un discurso muy ambiguo.

En un intento por darle credibilidad a su propuesta desde un discurso aparentemente identitario y reivindicador de la cultura, el gobernador nombra como primer rector de la UIEG al Dr. Abad Carrasco Zúñiga (González y Añorve, 2007), lingüista *Me'phaá*, obviando que su formación fue en el Instituto Lingüístico de Verano, famoso proyecto que promovió el estudio de las lenguas indígenas como forma para infiltrar a las comunidades. Al poco tiempo, el rector debió salir en medio de acusaciones de discriminación y acoso sexual (Rodríguez, 2009), presionado por que estudiantes y profesores tomaron las instalaciones y bloquearon la carretera Tlapa-Marquelia, exigiendo su remoción.

En medio del descrédito, con una matrícula muy reducida, sin ninguna vinculación con las comunidades, el proyecto de la UIEG parecía condenado a naufragar. En ese contexto, Rafael Aréstegui es contratado por la CGEIB para hacer un diagnóstico de la situación y proponer alternativas.

Por su parte, desde su diseño, el modelo pedagógico de la UNISUR planteaba la necesidad de establecer y mantener un claro compromiso con las comunidades. La Misión institucional se definió como: "Formar a los profesionales e intelectuales indígenas, afromexicanos y mestizos, con un profundo compromiso comunitario, que partiendo desde la óptica de su propia cultura y cosmovisión del mundo, contribuyan a un desarrollo integral y sustentable de sus comunidades" (Méndez y Méndez, 2011).

[54] La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, es una instancia creada durante el gobierno foxista al interior de la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de incorporar la noción de interculturalidad en todo el sistema educativo. Entre otras tareas se le encomendó la creación y seguimiento de las universidades interculturales creadas en diferentes entidades.

Esto se trató de concretar en el diseño de las unidades de aprendizaje y el trabajo en aula, pero sobre todo a partir de involucrarse cotidianamente en las actividades comunitarias: que profesores y estudiantes asistieran a las asambleas de su comunidad y a las asambleas regionales de la CRAC PC, sumarse a las labores colectivas como las diferentes actividades cívicas o el combate a los incendios forestales, participar en las festividades religiosas como la petición de lluvias o el festejo de la Santa Cruz, etc. Por ello no es de sorprender que cuando surgieron en la región los problemas provocados por la posible entrada de las empresas mineras o el proyecto de la reserva de la biósfera, estudiantes y profesores se involucraron en las actividades que se acordaron en los diferentes espacios comunitarios o regionales: se acudía a los Foros en Defensa del Territorio, se hicieron pintas, se diseñaron materiales de divulgación, se generaron propuestas de conservación comunitaria, etc.

Pero así como la UNISUR no era ajena de la problemática regional, tampoco lo era del proceso de división que se estaba produciendo al interior de la CRAC y en las comunidades. Dentro de la universidad poco a poco se fueron definiendo dos grupos. Uno que insistía en mantener una posición cercana al gobierno de Aguirre, a la dirigencia perredista y al sector progobiernista de la CRAC, principalmente con Pablo Guzmán. La posición se argumentaba desde la conveniencia de no romper con el gobierno con el fin de lograr el reconocimiento institucional y el acceso al presupuesto como universidad pública. Para este grupo era necesario seguir "negociando" con el gobierno en aras de lograr el reconocimiento y la facultad para expedir títulos profesionales, para que los egresados pudieran insertarse exitosamente en el mercado laboral, aunque ello significara seguir renunciando a aspectos centrales del modelo de educación comunitaria.

El otro grupo, que había asumido la denominación de colectivo "nosotros aprendiendo", planteaba la necesidad de deslindarse del gobierno aguirrista, sobre todo a partir de su responsabilidad en el asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrido en Chilpancingo, pero también ser el promotor de los proyectos mineros y de reserva de la biósfera. Afirmaban que el gobierno nunca daría reconocimiento a una institución que públicamente se oponía a sus "proyectos de desarrollo" colocándose del lado de las comunidades en resistencia, y que a lo largo de siete años había dado muestras suficientes de su falta de voluntad política por apoyar a la UNISUR. Se argumentaba que la razón de ser de la UNISUR no era la expedición de documentos, sino el formar estudiantes capaces de acompañar las luchas de sus pueblos, y que para ello no hacía falta el reconocimiento gubernamental, sino la legitimidad que sólo le podían otorgar las propias comunidades, que era el momento de acercarse a las autoridades e instituciones comunitarias para cerrar filas frente a la intromisión del gobierno. Este grupo mantenía mucha afinidad con el sector de la CRAC que terminaría separándose y reagrupándose en la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores.

El nivel de confrontación alcanzó tal nivel que prácticamente paralizó la institución. Se buscó dirimir el asunto en una asamblea en la comunidad de Santa Cruz del Rincón, donde la escasa participación ciudadana permitió que terminara imponiéndose a base de amenazas y difamaciones una postura gobiernista, enarbolada por una decena de personas políticamente cercanas a Pablo Guzmán. Fue así como se acordó que UNISUR debía seguir buscando el reconocimiento institucional por el gobierno y que no debía involucrarse en los asuntos de las autoridades civiles ni agrarias, ni con la CRAC-PC; quien no acatara estos acuerdos se haría merecedor a sanciones.[55]

Los miembros del colectivo "nosotros aprendiendo", interpretaron esto como la imposibilidad de seguir participando en la defensa del territorio frente a la minería y la reserva de la biosfera, lo cual contradecía los principios de una universidad que se asumía como *de los pueblos para los pueblos*, por lo que decidió deslindarse públicamente de la institución a través de un comunicado, con lo cual salieron de la institución alrededor del 65% de los profesores que se encontraban colaborando en ese momento.[56] Un grupo importante de ellos se ha mantenido activo en la región colaborando en el Consejo Regional de Autoridades en Defensa del Territorio y de la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores.

El control militar

La presencia de cuerpos policiacos o castrenses en la Montaña, históricamente ha estado vinculado con la represión a los movimientos sociales y la gente los asocia con abusos, vejaciones e inseguridad. Acabar con el movimiento insurgente de Genaro Vázquez fue el pretexto para una vasta serie de violaciones a los derechos humanos para los habitantes de la región. La guerrilla fue exterminada pero los militares y policías se quedaron y, aliados con los caciques locales, cometieron toda serie de abusos durante décadas. En las diferentes narrativas sobre el origen de la CRAC-PC, nunca faltan las historias sobre la complicidad entre caciques, delincuentes, policías y militares.

La consolidación de la CRAC y el control que ejerció sobre el territorio comunitario, significó en la práctica, la expulsión de las fuerzas armadas del gobierno que, durante tres lustros casi se limitaron a realizar breves incursiones en la región. Es bajo estas circunstancias que recuperar el control armado de la Costa Montaña se convirtió en prioridad gubernamental, particularmente ante el surgimiento de la UPOEG, que al ocupar

[55] Acta de la asamblea celebrada en la comunidad de Santa Cruz del Rincón, Mpio. de Malinaltepec, el día 9 de marzo de 2014. 7 fojas + firmas de asistencia.
[56] Pronunciamiento del colectivo "Nosotros Aprendiendo", ex profesores de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR). 1º de septiembre de 2014. 6 fojas + firmas.

territorios aledaños a los de la CRAC, no sólo significaba agregar 8 mil hombres armados fuera del control del gobierno, sino varios municipios más.

En la estrategia gubernamental por controlar y/o desarticular estas fuerzas se encuentran diferentes tipos de acciones: las de tipo administrativo como la formación del mando único y pretender que estas agrupaciones ciudadanas y comunitarias se plegaran, tal como ocurrió con la credencialización avalada por Eliseo Villar para la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; las de tipo de jurídico como la fallida iniciativa de ley para regular las policías ciudadanas; de manipulación como tratar de mediatizarlas a través de la entrega de recursos diversos –tanto la CRAC como a la UPOEG han recibido cuantiosos recursos para diversos fines- o la infiltración de elementos para cooptarlas y dividirlas, como ya se describió que ocurrió durante la administración de Pablo Guzmán en la CRAC-PC; o más recientemente, a través de programas sociales, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue el pretexto para militarizar la región, para realizar tareas de "inteligencia", de intimidación y de represión directa[57]. Sobre el papel de las fuerzas armadas *Tata* Felícito, expresa:

> ¡Dice el Comité que ya se canceló el proyecto, pura mentira eso! ¡Ahora hay que esperar a los que nos vienen a espantar, a los militares, a los judiciales; señores vamos a unificar, ya no vamos a permitir que vuelva a entrar esa gente aquí a la región de la Montaña, esos cabrones armados! Esas armas son de nosotros, son del pueblo, no para que vengan a espantar nuestra gente. (Testimonio *Tata* Felícito, *Me'phää* originario de La Ciénega, durante el 1er Foro Regional, octubre de 2012).

Al respecto también resultan elocuentes las palabras de Melitón Santillán cuando narra lo ocurrido con la CRAC a partir de que empezaron a recibir recursos del gobierno del estado:

> A través de la entrega de cuatrimotos, camionetas y recursos ya los atontaron y ahora ya no quieren participar en estos foros, cuando le pedí al Coordinador de [la Casa de Justicia de] Espino Blanco que bajara a los Foros, afirmó que no bajaba porque en la CRAC de San Luis le había dicho claro que no se metiera, que era un problema de la universidad. (Testimonio Melitón Santillán Cantú, durante el 1er Foro Regional, octubre de 2012)

Esto coincide con mi propia experiencia, pues a fines de 2012 personalmente invité a Pablo Guzmán para que la CRAC se involucrara en los Foros, a lo cual respondió que la CRAC no tenía nada que ver con los temas agrarios; intentando aclarar el punto reviré diciendo que no se trataba de un tema exclusivamente agrario y que la CRAC tenía la encomienda de salvaguardar el territorio comunitario fuera cual fuera la amenaza, pero su respuesta nuevamente fue de negativa a involucrarse. Con el paso del tiempo quedaría clara su complicidad cuando policías comunitarios bajo el mando de Pablo Guzmán y luego

[57] El detalle sobre estos aspectos se abordó en el epígrafe *La ruptura en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias*, que forma parte de este mismo capítulo.

de Eliseo Villar, fueron sorprendidos escoltando personal asociado a las mineras, tal como está referido en un epígrafe previo.

El enorme debilitamiento en la CRAC a consecuencia de las rupturas internas y la creciente presencia militar en la región, permitieron acciones que no se hubieran pensado años atrás, como fueron las incursiones para aprehender a Nestora Salgado García en agosto de 2013, Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González en noviembre del mismo año, y más tarde al propio Eliseo Villar Castillo en abril de 2015.

Este tipo de eventos han dejado claro para la gente de la Montaña, la complicidad existente entre diferentes instancias de gobierno y las empresas mineras, por lo que avizoran el recrudecimiento de la violencia en la región buscando minar la resistencia comunitaria y generar condiciones para que las empresas hagan valer las concesiones que les han otorgado. Esta idea se refuerza con los testimonios de casos similares, tanto en México como en otros países, como lo narra el Prof. Apolonio Cruz:

> En un evento conocí a personas que venían de Chile y ellos me platicaron cómo ocurrió allá cuando se armaron para defenderse de las mineras; en respuesta empezaron a mandar a los militares en las montañas , en los caminos, en las ciudades, en los puentes, en todos partes: retenes militares, operativos, policías y todo eso; y el movimiento siguió, ya no solo ciudadano contra ciudadano, sino que ahora contra los militares y contra la policía; así se da el toque de queda, para que la población a las 10 de la noche todos encerrados hasta el otro día; en ese tiempo cuando el toque de queda, no se dieron cuenta cómo empezaron a entrar las mineras y a trabajar; cuando ya estaban instaladas se quita el toque de queda y como que la gente despertaron y dijeron "¿qué estamos haciendo?, ¿qué está pasando allá?" empezaron a platicarse "¿pero quién no hizo pendejos? ¿Por qué nos peleamos? ¡Pero las mineras ya están bien instaladas!". Esa plática me la dieron hace dos años y tal parece que eso se está repitiendo aquí en nuestra región. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Mendoza, XII Foro de Defensa del Territorio, 2014)

Desde finales de 2014 y por más de dos años, Guerrero sufrió el mayor proceso de militarización de que se tenga memoria. El crecimiento de los grupos de autodefensa y policía comunitaria, las protestas contra la mal llamada reforma educativa que no cesaban en las principales ciudades, y la escalada en las protestas ante la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa a manos del gobierno, generaron un clima de enorme inestabilidad política, no solo en la entidad, sino incluso a nivel nacional. El conflicto contra la Secretaria de Educación fue creciendo en otras regiones del país y resultó particularmente álgido en Nochixtlán (Oaxaca), donde la represión militar en junio de 2016 asesinó a ocho personas y lesionó a más de 100. Por su parte, la desaparición de los normalistas fue un tema que vino cobrando relevancia política conforme la información salía a la luz dejando clara la participación de los tres órdenes de gobierno, de diversas fuerzas armadas y su colusión con bandas del crimen organizado.

El nivel de las protestas creció hasta un punto que el gobernador Ángel Aguirre se vio forzado a pedir licencia y se llegó a pensar que esto podía ocurrir a nivel de la presidencia

de la república. El gobierno federal pretendió frenar esta avalancha de inconformidad social enviando varios miles de efectivos de sus diferentes fuerzas armadas: gendarmería, policía federal, ejército y marina. Tan sólo para la aplicación del examen al desempeño docente, en el marco de la reforma educativa, llegaron al estado más de seis mil policías federales (Revolución 3.0, 2015). En este escenario de muy alta violencia y represión, el Consejo de Autoridades Agrarias debió encaminar su lucha por la defensa del territorio comunitario.

A lo largo de este capítulo se mostró cómo en México, igual que en toda Latinoamérica, se ha implantado y consolidado un estilo de desarrollo de tipo extractivista, que se caracteriza por un patrón de acumulación económica basado en la sobreexplotación de recursos naturales, la gran mayoría de ellos no renovables, además de otros que, si bien pueden concebirse originalmente como renovables, la tasa de extracción o la dinámica de explotación a que se encuentran sometidos ha comprometido su renovabilidad.

Además de las actividades consideradas como típicamente extractivas tales como la minería y explotación de hidrocarburos (petróleo o gas shale) y aquellas ligadas al nuevo sistema agroalimentario (los agronegocios o la producción de biocombustibles), en el extractivismo del siglo XXI se deben incluir también los megaproyectos de infraestructura impulsados por los gobiernos -so pretexto de promover la equidad y el desarrollo- en materia de transporte (autopistas, aeropuertos, puertos marítimos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones, cuyo objetivo estratégico en realidad es facilitar la extracción y exportación de las materias primas hacia sus puertos de destino (Delgado, 2010) así como los proyectos conservacionistas que despojan a la gente de sus territorios y la desalojan para privilegiar un supuesto interés público.

El proceso de búsqueda de nuevas materias primas, está fuertemente impulsado por enormes capitales trasnacionales y nuevas tecnologías, lo que ha permitido llegar a territorios que antes habían sido considerados improductivos, sea por su lejanía, por la dificultad en el acceso, la relativa baja densidad en que se presenta el recurso o por antiguas dificultades políticas. La hegemonía político-económica, la disponibilidad de enormes capitales concentrados en pocas manos y con facilidad para moverse sin importar fronteras nacionales, y el avance tecnológico y en el transporte global, ha llevado

a eliminar o relativizar la importancia de estos obstáculos, haciendo “accesibles” y rentables territorios que antes no se hubiera podido imaginar. Parte central del problema es que finalmente está llegando a lo que se podrían considerar como últimos reductos de territorios indígenas y de biodiversidad. Ni los páramos de alta montaña se encuentran ahora demasiado lejos. Durante siglos los pueblos originarios se han visto forzados a replegarse hacia zonas cada vez menos accesibles; ahora que ya no hay hacia donde replegarse, el conflicto tiende a tornarse más cruento.



Figura 6. Visita de autoridades agrarias del CRAADT a la minera a cielo abierto de Carrizalillo, Mpio. de Eduardo Neri, Gro.

Es así como el modelo extractivista llega prácticamente a cualquier rincón del planeta, irrumpiendo en los territorios apoyado por gobiernos locales afines y los medios de comunicación, lo cual deslegitima las resistencias y enfrenta a los opositores contra diversos enemigos. Para el caso de México, se puntualiza cómo desde la década de los años 90 del siglo pasado, los gobiernos neoliberales modificaron el marco jurídico y las políticas públicas para alinearlos con las necesidades de la ola extractivista. Esto ocurrió incluso con aquellos instrumentos políticos y jurídicos que debían salvaguardar los

derechos de los pueblos originarios y la viabilidad de los ecosistemas y los bienes comunes que de ellos se derivan.

El análisis de lo ocurrido en la Costa Montaña resultó adecuado para desmantelar uno de los dogmas en las políticas gubernamentales del país y que se deriva de un supuesto teórico conocido como *la tragedia de los bienes comunes*, el cual plantea la imposibilidad de los grupos sociales para administrar de forma colectiva y eficiente los bienes en propiedad común, afirmando que hay una tendencia a sobreexplotar dichos recursos provocando su paulatina degradación (Hardin, 1968).

Desde esta postura sólo el mercado y el gobierno son capaces de imponer una correcta administración. La propiedad colectiva se concibe como la causante no solo de la degradación ambiental sino también del estancamiento económico. La solución consiste, por un lado en privatizar esos bienes comunes para hacerlos productivos y, por el otro, que estos pasen a ser controlados de manera centralizada por el gobierno para garantizar su conservación. Esto es justamente lo que se impulsó en la Montaña de Guerrero: privatizar vía concesiones y estatizar vía decreto federal como reserva de la biosfera.

Esta concepción constituye la justificación a los procesos de despojo que son indispensables para la acumulación del capital, pues el sistema capitalista requiere como premisa el crecimiento económico, condición que lleva a crisis cíclicas que sólo se superan temporalmente a través de la expansión geográfica (Harvey, 2014).

Con la llegada de estos proyectos se desestructuran las economías locales y regionales, se destruyen los ecosistemas y la biodiversidad, se profundizan los procesos de acaparamiento de tierras, y se termina expulsando o desplazando a las comunidades locales, en su mayoría campesinas o indígenas, en un proceso que Harvey (2014) denominó acumulación por desposesión. Cuando se encuentra resistencia a la implementación de los proyectos, empresas y gobiernos locales no se limitan para trastocar las incipientes democracias, desatar procesos de violencia y criminalizar la lucha social (Svampa, 2012 y 2013).

En resumen, la implementación de estos mega-proyectos no se puede explicar si no es aludiendo a una lógica neocolonial, que determina un flujo neto y unidireccional de riqueza que se concentra en los países hegemónicos, y cuyo origen es la expoliación de los recursos naturales y humanos en las naciones subdesarrolladas. En cualquiera de las formas que toma este saqueo de recursos, los costos ambientales, sociales y económicos resultan extremadamente altos y son transferidos a la población y los ecosistemas locales. En muchos casos, los impactos son tal altos e irreversibles que terminan llevando a la desaparición de los mundos de vida que ahí existían.

Por ello, frente a la postura catastrófica de los bienes comunes que sólo sirve para justificar el despojo, se ofrece como alternativa el planteamiento de Ostrom (1999 y 2000), que afirma que durante miles de años la gente se ha organizado para manejar sus bienes comunes, lo que a menudo les ha llevado a crear instituciones y normatividades para gobernarlos con una visión de largo plazo. Luego de años de detallado análisis en numerosos casos empíricos por todo el mundo, propone una serie de condiciones que promueven y potencian la conservación y adecuada administración de bienes de uso y de propiedad común. Se concluye que para el caso de México, el ejido y los bienes comunales, como formas de propiedad social de la tierra y los recursos, son espacios privilegiados para impulsar el manejo sustentable y conservación del patrimonio nacional en aras de un verdadero interés colectivo. Prueba de ello es que muchas de las áreas mejor conservadas del país se encuentran bajo el resguardo de grupos indígenas y campesinos, bajo regímenes de propiedad colectiva.

TERCERA PARTE. LA DEFENSA DEL TERRITORIO COMUNITARIO Y SU PROYECTO DE VIDA



Figura 7. Segundo Foro Regional en Defensa del Territorio, Colombia de Guadalupe, Mpio. de Malinaltepec, noviembre de 2012.

Capítulo 3. El inicio de la movilización

Introducción

En diversos contextos, la conformación de una institución inter-comunitaria encargada de salvaguardar el territorio como un bien común, es algo que llamaría la atención: autoridades de 13 comunidades que se reúnen periódicamente, que hacen actividades conjuntas y asumen un compromiso recíproco de defender el territorio del otro, al grado de conformarse bajo la figura del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT). Para la gente que habita en la región, la existencia de ese Consejo se percibe como algo *natural*; influido por esa forma de pensar, yo mismo terminé por asumir con cierta naturalidad su existencia, por lo que no había pensado en la pertinencia de indagar sobre el conjunto de condiciones que permitieron su fundación.

Sin embargo, como afirma Melucci (1991: 358) la acción colectiva no es un fenómeno empírico unitario, sino diverso y multifacético. Los actores colectivos "producen" entonces la acción colectiva porque son capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción, por ello, "La unidad, si existe, debe entenderse como un resultado no como punto de partida, no es una evidencia sino un hecho a ser explicado". Luego entonces, ¿cuáles son los factores que permitieron el surgimiento de esta institución? Este capítulo trata de aportar elementos para explicar este proceso.

La intención original de este trabajo de investigación acción participativa, ha sido acompañar y sistematizar la experiencia del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, en la Costa Montaña de Guerrero, en la idea de generar insumos para reflexionar colectivamente con los actores involucrados sobre esta institución comunitaria regional, entre otras temas sobre la efectividad de sus prácticas políticas para salvaguardar la integridad del territorio comunitario, y aprovechar la experiencia para fortalecer el tejido social en la región.

Este capítulo trata de dar cuenta del proceso de conformación y operación de dicho Consejo, de sus éxitos y fracasos, así como de las condiciones que influyeron. Para ello es preciso entender la historicidad de la lucha por la defensa del territorio, empezando por analizar los mecanismos que permitieron el surgimiento de este Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio como un sujeto colectivo, porque buscar mecanismos para su fortalecimiento requiere la comprensión de los elementos que permitieron su conformación.

Por ello, para abordarlo retomo la propuesta que hace Gerardo Munck (1995), quien plantea que tratar de entender integralmente un movimiento social requiere abarcar tres problemas centrales:

- **La formación de actores**: atañe a la emergencia de los fundadores u organizadores de un movimiento social, o, en otras palabras, el actor social que organiza y orienta al movimiento social;
- **La coordinación social**: tiene que ver con la constitución de un movimiento social como movimiento, o el desafío de organizar a una masa descentralizada o a un grupo de personas de una manera no jerárquica;
- **La estrategia política**: está ligado con la orientación hacia el cambio de un movimiento social; sigue siendo la brecha más significativa en los esfuerzos corrientes por elaborar una teoría de los movimientos sociales

Para poder abarcar con la debida amplitud cada uno de estos aspectos, sólo el primero de ellos se aborda en este capítulo. Los siguientes aspectos se abordan en los Capítulos 4 y 5, respectivamente.

La reserva de biosfera y las concesiones mineras: detonante de la movilización

Quiero iniciar el recuento con el factor que disparó el proceso: la amenaza de que varias comunidades verían afectada la capacidad de autodeterminación sobre su territorio y los recursos naturales, como resultado de dos proyectos promovidos por actores externos: las restricciones al uso de la tierra a consecuencia de un enfoque conservacionista promovido por el gobierno, que pretendía declarar una reserva de biósfera, y el deterioro integral y de gran escala de los ecosistemas que sería ocasionado por aprovechamientos mineros a cielo abierto, toda vez que la mayor parte de la región ha sido concesionada por el gobierno federal en fase de exploración.

En la segunda mitad del 2012 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado (SEMAREN) dieron a conocer su intención de establecer la Reserva de la Biósfera de la Montaña Alta de Guerrero.

Esta información se hizo pública en el momento en que ambas dependencias firman un convenio de colaboración con la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), mediante el cual dicha universidad de encargaría del “proceso de información y consulta a las 250 comunidades indígenas para la creación de la Reserva de la Biosfera de la región de la Montaña de Guerrero”. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Toledo Manzur, y el Rector de la UIEG, Rafael Aréstegui Ruíz “suscribieron el

convenio mediante el cual se informará y consultará a la población de los seis municipios de la Montaña y Costa Chica, comprendidos dentro del territorio que se pretende declarar área natural protegida, para que externen su opinión sobre la preservación de los bosques, aprovechamiento y sustentabilidad (….) Toledo Manzur indicó que en el proyecto trabajarán 30 egresados de la Universidad Intercultural, que serán coordinados con cinco profesores, para visitar las 250 localidades de la reserva" (Harrison, 2012)[58]. Según las declaraciones vertidas en medios locales, los jóvenes profesionistas fueron designados por la misma casa de estudios con base en la lengua materna que hablan y el conocimiento que tienen del territorio.

> Entonces se nos ocurrió la idea de que para obtener una consulta muy amplia programamos recursos del gobierno y nos pareció afortunado la posibilidad de involucrar a la Universidad Intercultural de la Ciénega, porque nos informamos que había una carrera de Desarrollo Sustentable y que había un conjunto de gente mixteca y tlapaneca que estaba saliendo de la Universidad. Entonces se nos hizo buena idea que pudiéramos canalizar los recursos hacer un convenio con la universidad con el objetivo de emplear a los muchachos que iban saliendo de la universidad para que nos ayudaran en el proceso de dar a conocer en cada una de las localidades que estaban involucradas en la Reserva, que eran alrededor de 250 más o menos, que pudiéramos en esas primero hacer un trabajo de información para que la gente supiera de la Reserva, etc., y en segundo un trabajo de consulta.[59]

Según refiere la nota de Ferrer (2012) El Rector de la UIEG expresó su beneplácito por los acuerdos y que la UIEG juegue un papel importante en el proceso de lograr la declaratoria. Sin embargo, esto provocó un malestar generalizado que movilizó a la población y los llevó a convocar de manera urgente al Foro en Defensa del Territorio del 6 de octubre de 2012. Este primer Foro, convocado por las autoridades comunitarias de Malinaltepec con el objetivo de "informarle a los pueblos sobre las posibles implicaciones sociales, culturales y ambientales que tendría el decreto de la reserva de biósfera en la Montaña de Guerrero.

Los convocantes señalaron en un comunicado "que dicho territorio les ha sido heredado por sus antepasados a los pueblos que habitan la región y son los únicos dueños, dándoles la tierra lo suficiente para sobrevivir, sin embargo, los gobiernos criollos y mestizos, con sus leyes y políticas quieren saquear sus riquezas naturales".

Es así como, el 6 de octubre, ante varios cientos de personas provenientes de diferentes comunidades, sobre todo de la parte alta de la Montaña, se efectuó el Primer Foro Regional de Defensa del Territorio. El evento dio inicio cuando cuatro *principales* del pueblo *Me'phaá* realizaron una ritual tradicional para propiciar buenos resultados del encuentro; acto seguido, las autoridades de las comunidades de Malinaltepec, La Ciénega y Ojo de Agua, explicaron el motivo de la convocatoria y ofrecieron la información que

[58] Aurora Harrison. **Pretenden declarar área natural protegida 157 mil hectáreas de La Montaña y Costa Chica.** El Sur, jueves 6 de septiembre de 2012.

[59] Entrevista con el M.C. Carlos Toledo Manzur, entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero. Chilpancingo, Gro. 7 de marzo de 2016.

hasta el momento había circulado en los periódicos y por boca de algunos jóvenes estudiantes. Las intervenciones de los asistentes desde un inicio tuvieron un tono molesto ante lo que consideraron de entrada un fuerte agravio hacia sus usos y costumbres y un peligro a la integridad de sus territorios. Aunque se aclaró que no están en contra de los trabajadores o estudiantes de la UIEG, "es lamentable que se les utilizara en planes perversos contra sus propias comunidades o familias lo que dejó en entredicho cuál es el verdadero papel de dicha universidad".

Numerosas intervenciones abundaron sobre el tema: "No somos burla del gobierno, qué pasa, porqué nuestros hijos están siendo contratados para golpear a su propia gente, que se vaya el que hace daño"[60]. A partir de estos razonamientos, uno de los acuerdos tomados por los asistentes fue tomar las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero para exigir la salida del rector Rafael Aréstegui Ruíz por haber firmado, a espaldas de las comunidades, el convenio con el cual se buscaría convencer a los pueblos de los aparentes beneficios del proyecto. En diferentes intervenciones, la mención del nombre del rector generó rechiflas y muestras de rechazo, sobre todo en el momento en que la figura del aludido fue vista a la distancia mientras caminaba hacía el lugar en que solía alojarse. Ese fue el último día en que el rector fue visto en la comunidad, pues el poco tiempo que aún duró en el cargo, lo hizo desde la capital o en la sede alterna de la universidad, que abrió en la comunidad de Ayutla de los Libres.

> Fue entonces cuando nos enteramos del convenio firmado entre Rafael Aréstegui Ruíz, que venía fungiendo como rector de la universidad intercultural y Carlos Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que lo firman a espaldas de los pueblos de estos seis municipios; ante lo cual nos preguntamos en el pueblo de La Ciénega: ¿Por qué esa actitud de hacerlo a espaldas de los pueblos? ¿Por qué? Era la pregunta cuando nos convocamos a la asamblea general de nuestro pueblo de La Ciénega (…) Quiere decir [que para ellos] seguimos siendo objetos, cuando somos sujetos y nuestra dignidad está por delante, y esto se hizo a espalda de los seis municipios, fue la inconformidad en las reuniones comunitarias y dijimos "ya basta", porque la gente que trabaja en nuestras comunidades en nuestra región, debe fungir bien en sus tareas cotidianas.[61]

En el Foro se discutió ampliamente sobre los procedimientos para el establecimiento de una reserva de biosfera y las implicaciones que tendría para las comunidades cuyos territorios serían involucrados. Se habló de las restricciones que el decreto impondría a los pobladores para acceder a los recursos naturales y el papel que jugaría la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para regular el aprovechamiento de dichos recursos; se enfatizó en la gran paradoja que significa la prohibición para que los pobladores siguieran aprovechando la leña y otros recursos forestales mediante esquemas de extracción a baja escala, pero que el Reglamento considera la posibilidad de

[60] Intervención por parte de un señor *Me'pháá* asistente al Foro.
[61] Intervención de la Profra. Maurina Morán para hacer una reseña del inicio del movimiento, durante el X Foro en Defensa del Territorio, celebrado en Iliatenco el 9 de agosto de 2013.

autorizar proyectos extractivos de mayor envergadura, como en el caso de materiales pétreos y explotación minera. La lectura y análisis de artículos puntuales en el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas[62], derivado de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), evidenció esta contradicción entre el discurso conservacionista que pone límites al manejo campesino pero deja abierta la posibilidad de explotaciones de alto impacto ambiental y social.

Fue así como se fue perfilando el acuerdo central, en el sentido de iniciar un proceso de resistencia frente al intento por imponerles el decreto de la reserva y favorecer la entrada de las empresas mineras, y para coordinar la tarea, en el 2º foro se acuerda conformar un comité de defensa del territorio, integrado por las autoridades agrarias y comunitarias, al cual se le tomó protesta en esa misma ocasión. Nace así el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, instancia que asume su responsabilidad como conjunto de autoridades agrarias y, por ende, responsables de salvaguardar los territorios de sus respectivas comunidades.

Esto parece coincidir con lo que algunos teóricos europeos han analizado sobre la emergencia de los fundadores de un movimiento social en los términos de la experiencia compartida que tiene un grupo de personas, en el contexto de una crisis estructural, que los lleva a ver que "las cosas podrían ser diferentes". Los fundadores de un movimiento social emergen, dentro de la estructura del viejo orden como portadores de la visión de un nuevo orden y, en este sentido, la experiencia compartida que constituye al grupo como tal no ocurre en un vacío, sino tanto dentro como en conflicto con un orden estructuralmente definido (Alberoni, 1991). En el mismo sentido Touraine (1995) plantea que el análisis del movimiento social empieza con las relaciones sociales, y no con los actores, toda vez que la identidad de dichos actores sólo puede ser definida aludiendo al conflicto real con un adversario y reconocimiento la meta de la lucha. Esto parece estar muy claro entre los participantes de este movimiento, como lo explica el Prof. Apolonio Cruz:

> El punto principal que nos mueve es el problema: nos van a explotar las minas, ah caray! nos van a traer desgracias grandes, nos van a envenenar el agua, va a tapar los terrenos de cultivo; ah, no hay que dejarnos entonces prácticamente el problema se vuelve el líder y eso nos une a todos; vamos a la asamblea a un lugar vamos a otro, para ver qué hacemos en contra de esas pretensiones, sea la mina o la reserva de la biosfera, híjole si entra eso ya no voy a poder entrar a mi terreno, de dónde voy a sacar leña, de dónde voy a sacar madera para los postes del corral, ajá, ¿Y mi café y mis plátanos? No, yo voy a la asamblea para saber… no piensan en Apolonio, no piensan en fulano, no, piensan en el problema; no se dice que el problema es el líder, ¡pero sí! (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, noviembre de 2015)

Para Melucci (1999), los movimientos sociales son formas de acción colectiva que responden a dos condiciones: 1) son siempre expresión de un conflicto social (y no sólo

[62] El análisis puntual de este Reglamento y de la propia LGEEPA se realizó en el capítulo 2.

"respuestas" a una crisis), es decir, son expresión de la oposición entre al menos dos actores por la apropiación o el control de recursos que ambos valoran (en este caso el territorio comunitario y sus recursos naturales, sean éstos bosques o minerales); 2) tienden a provocar una ruptura de los límites de compatibilidad del sistema dentro del cual se hallan situados: normas o reglas de procedimiento en el caso de un sistema organizativo o de un sistema político, y formas de apropiación o de distribución de los recursos sociales en el caso de un modo de producción. En este caso el cuestionamiento es sobre la legitimidad del estado para decidir unilateralmente la apropiación o distribución de los recursos existentes en un territorio que las comunidades asumen como propio.

Lo que se manifestó aparentemente sólo en respuesta al intento por imponer el decreto de un ANP, en realidad está expresando un conflicto mucho más profundo, que se origina por el choque entre dos matrices civilizatorias, dos formas distintas de entender el *ser y estar en el mundo*. Por ello, he considerado pertinentes las perspectivas que privilegian el conflicto y la identidad para explicar la acción colectiva (Tarrés, 1992).

> Nosotros no estamos de acuerdo en la RBM, y se lo hemos dicho a Taurino [Hernández]; tan sólo ahora con la reserva que tenemos enfrente [se refiere al área voluntaria de conservación] ya no podemos cortar leñas ni sembrar la milpa, y la gente se enoja y viene a reclamar a la comisaría; por eso tenemos que echar abajo ese proyecto y no dejar que lo hagan, pero no debemos recordar que esos certificados son por 10 años, que las concesiones son por 50 años, así que si este año no los dejamos, van a venir el otro año y el otro; por eso tenemos que estar fuertes, estar unidos para no dejar pasar.[63]

Un escenario en el que la imposibilidad de mantener sus formas de reproducción social resulta inaceptable, aunque el discurso oficial pretenda hacerlo atractivo ofreciendo algunos beneficios. Es muy interesante cómo los habitantes de la región no sólo perciben lo magro de esos supuestos beneficios, sino también lo desproporcionado que resultan los daños que se avizoran y que, de ninguna forma podrían ser compensados.

> No va a haber desarrollo sin explotación minera, dice el gobierno. Pero desde cuando estuvimos en el Consejo tuvimos un copia del contrato con Paraje Montero, y qué dice: que el contrato es privado y no debe darse a conocer, que se le autorizan 15 plazas en la empresa, pero Paraje no tiene sólo 15 ciudadanos para darle esos empleos, con un salario de $150.00 diarios, lo que quiere decir que van a ser trabajadores de bajo nivel; ahora, ¿cuánto le van a pagar a Paraje Montero? Hablan ahí de $300, 000, pero por etapas, primero un pago, luego otro, no va a ser en un solo pago. ¡Eso no es desarrollo! ¿Y el cianuro? ¿Y las enfermedades? Con el rodar de los árboles, tierra, piedras, se van a tapar los manantiales, se pierden las tierras de cultivo. ¡Eso no es desarrollo! Todo eso se habló con la gente, más lo que nos

[63] Silvino Santos Rojas, Comisariado de Bienes Comunales de Colombia de Guadalupe, durante el 2º Foro realizado en Colombia de Guadalupe, el 10 de noviembre de 2012.

> llevaron los intelectuales, más lo que vimos en la visita a Carrizalillo; en eso se concientizó la gente.[64]

Aunque pueda parecer pretencioso este enfoque para analizar un pequeño movimiento, integrado por algunas comunidades indígenas ubicadas en una de las regiones más pobres del país, sostengo que en la lucha del Consejo de Autoridades por defender el territorio comunitario es posible retomar lo que afirma Touraine (1995) que el movimiento social constituiría la forma más compleja de la acción social, pues se ubica en los conflictos centrales de una sociedad entre adversarios que poseen interpretaciones opuestas y conflictivas sobre el modelo de sociedad. Lo que se pone a debate es la legitimidad del Estado para decidir sobre los medios de producción (en este caso el territorio y el subsuelo) al concesionarlos o tratar de imponer restricciones en el acceso, sin el consentimiento de los dueños originales y primigenios. Este debate cuestiona uno de los fundamentos en que se erigió el Estado mexicano.

La conciencia creciente de que su lucha no es aislada, sino que existen numerosos pueblos y regiones enfrentando problemáticas similares, ha dado lugar a lo que Rodríguez (2010) ha llamado el "giro geográfico" o "ecoterritorial" que se observa en las últimas décadas dentro de los círculos académicos tiene que ver con un acercamiento de las ciencias sociales a los temas ambientales, de las ciencias ambientales a los problemas sociales, y ambos con la emergencia de una variedad de movimientos sociales cuyo eje central es la defensa de sus territorios. Así, campesinos, pueblos originarios, afectados por la construcción de obras de infraestructura, desplazados por la violencia y/o por el aumento en la plusvalía de sus terrenos, etc., a lo largo y ancho del planeta, aunque predominantemente en los llamados países del tercer mundo, parecen converger en torno al mismo planteamiento básico, la defensa de sus territorios.

Sin embargo, esta noción tan elemental sobre el origen del movimiento, no logró ser comprendida por los impulsores del proyecto RBM, que lo siguen interpretando como un problema de falta de información, de manipulación y de conflictos internos. Por eso me parece relevante presentar el testimonio de Carlos Toledo, quien en aquel momento ocupaba el cargo de Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno del estado:

> Finalmente lo que se quedó en el espíritu, no de la gente sino de este grupo que estaba oponiéndose, fue que era un instrumento de las mineras, o sea que quedó totalmente al revés, porque planteamos que si el programa de manejo de la reserva establecía que no se permitía la presencia de mineras, lo que pudo haber sido más o menos fácil, pues eso ataba completamente de manos al gobierno federal.
>
> (…) hubiera sido oportuna una alianza entre las comunidades y el gobierno del estado, para imponerle a la federación un esquema en los hechos en donde fueran las comunidades

[64] Profr. Apolonio Cruz Rosas, Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz El Rincón. Entrevista realizada en noviembre de 2015.

> quienes definieran; esa era la idea que yo tenía, que había que aprovechar de alguna manera el espacio de la SEMAREN para buscar un vínculo con las comunidades (…)
>
> (…) si hubiera habido la posibilidad de esta alianza entre el gobierno estatal -teóricamente un gobierno que debería haber sido izquierdista, comprometido con la gente, pero bueno ya vimos que finalmente no fue así, pero ese era el juego político, ese era el juego que yo quería impulsar y que no salió bien, un juego en el cual teóricamente un gobierno comprometido con la población-, con las comunidades se hubiera podido imponer un esquema de conservación diferente, aprovechando los resquicios que la ley tenía. Finalmente no ocurrió así porque nos dividimos, cuando la gente se enteró del asunto propagó la idea de que la Reserva era nociva y de alguna manera aisló a las comunidades del gobierno del estado, entonces hizo que el gobierno del estado apareciera como un aliado del gobierno federal, y entonces esa división tanto entre la universidad y las comunidades, como de las comunidades mismas, como entre las comunidades y el gobierno del estado, generó una situación en la que se empantanó el asunto. Eso fue todavía más grave debido a la acción violenta que los grupos opositores plantearon, porque lo que hicieron fue que tomaron la universidad, secuestraron a las autoridades durante no sé cuántos días y exigieron la renuncia del rector. Como parte de la demanda estaba la negativa al desarrollo de la reserva con el argumento de que la reserva era instrumento para la entrada de las mineras; entonces lo que ocurrió fue que el proyecto se abortó, porque la consulta no se pudo hacer por lo mismo, y la discusión con el grupo opositor fue imposible, lo que mí me dijeron fue que ni me apareciera porque lo amarramos, no hubo un espacio de discusión sino que fue un acto como de violencia y así quedo la cosa; igual con Taurino, a él también le dijeron que ni se apareciera; entonces se empantanó el asunto.
>
> (….) Yo creo que si hay un peso aquí fuerte de los conflictos entre actores de la región, hay una situación, es decir porque tan violentamente se fueron contra El Flaco (Rafael Aréstegui), pues eran conflictos políticos no de las masas o del pueblo, sino de los actores; que unos querían una cosa y otros otra, pero además cuando apareció la lana, fue cuando todo mundo dijo ahí voy. [65]

Llama la atención que aún entre los funcionarios del sector ambiental y con cierta afinidad hacia el manejo campesino, prevalezca esta *visión inocente*: pensar que el decreto y el programa de manejo como RBM hubieran podido frenar la entrada de la explotación minera, pensar que una alianza entre la SEMAREN y las comunidades hubiera podido imponerle al gobierno federal una modalidad de manejo no contemplada en las leyes específicas, pensar que esto no fue posible sólo porque hubo desinformación, conflictos internos y se generó división, o incluso pensar que el de Aguirre Rivero sería un gobierno de izquierda que potenciaría las iniciativas comunitarias. Es aún más grave es que se juzgue como violenta y mal informada la reacción comunitaria, cuando son justamente las acciones de gobierno –a través de sus diferentes instancias- las que llegaron a violentar la forma de vida de las comunidades.

Más allá de estas explicaciones simplistas que pretenden desvalorizar la resistencia comunitaria, al reducirla a la poca comprensión de la problemática o a la manipulación originada por conflictos entre líderes, para la gente de las comunidades existía una

[65] Entrevista con el M.C. Carlos Toledo Manzur, entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero. Chilpancingo, Gro. 7 de marzo de 2016.

amenaza real: fuera la destrucción ambiental ocasionada por la explotación minera, o fuera la prohibición para el uso de porciones importantes de su territorio, en ambos casos significaría dejar de contar con una importante fracción de bienes o servicios ambientales de los cuales depende directamente su bienestar. Fue precisamente esta amenaza lo que aglutinó a la gente y provocó la movilización.

Los actores sociales en la conformación del Consejo Regional de Autoridades Agrarias

Más allá del factor detonante que ya se abordó en el apartado previo, el movimiento no se puede entender "como simple efecto de precondiciones estructurales" sostiene Melucci (1999, p. 14), pues en numerosos ejemplos en otras partes del estado o del país, ante amenazas similares la población local ha reaccionado de formas diversas.

Según Pizzorno (1989, cit. por Giménez, 1994) ningún modelo racional, planteado en términos de cálculo de costos y beneficios, puede explicar la acción colectiva si no presupone constituida la identidad de los actores sociales, pues para poder establecer un vínculo entre intereses y movilización colectiva, se requiere la presencia de una identidad colectiva, de un "nosotros" en el cual reconocerse para poder dar consistencia y continuidad a la acción y para poder calcular costos y beneficios. La identidad constituye un nudo crucial para toda teoría de la acción y, particularmente, para una teoría de los movimientos sociales.

Me parece que, en este caso, un factor fundamental es la identidad como miembros de un pueblo originario; ya sean *Me'phaá* o *Na savi*, las comunidades conservan un sentido de pertenencia muy arraigado, donde la idea de *hacer comunidad* se expresa cotidianamente en el sistema de cargos y otros mecanismos de acción colectiva, sea en aspectos religiosos, agrarios, cívicos, culturales o políticos, la gente acostumbra organizarse para realizar diversas actividades de forma comunitaria.

> La identidad es importante porque allá se dice: somos hermanos, de raza, y entre nosotros no nos podemos golpear, no nos podemos rechazar, no nos podemos discriminar; al contrario, nos tenemos que cuidar, somos los mismos, estamos en la misma clase social, estamos en la Montaña, respiramos el aire de la Montaña, tomamos el agua de la Montaña; no somos enemigos, somos compañeros, somos hermanos, y ese sentir nos abrazó más.[66]

Aquí es pertinente la aclaración que hace Tarrés (1992) al referirse a las perspectivas que analizan la acción tomando como referencia el sistema social, pues reconocen que el comportamiento colectivo es parte en mayor o menor medida de la vida cotidiana de una sociedad, pero sólo cuando se deduce una voluntad de poder para buscar un orden social nuevo es adecuado hablar de un movimiento social. Dicho de otra forma, la tradición de

[66] Profr. Apolonio Cruz Rosas, Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz El Rincón. Entrevista realizada en noviembre de 2015.

organización comunitaria es un referente organizativo e identitario importante para entender este proceso, pero no es suficiente. En este punto resulta pertinente adelantar parte del análisis que se hace en el capítulo cuatro, acerca de la teoría de las necesidades en la teoría marxista; al respecto, Marx afirma que "La sociedad capitalista como totalidad, como «cuerpo social» no produce sólo la alienación, sino también la consciencia de la alienación, dicho en otras palabras, las necesidades radicales" (Heller, 1986, p. 112). Pero no se trata de la mera conciencia empírica de la pobreza que impera en la región, sino más bien de una conciencia más profunda, que surge primero entre algunos líderes y que paulatinamente se comparte producto de la reflexión colectiva sobre la situación en que se encuentran:

> Es la simple consciencia de la alienación, el reconocimiento de que las relaciones sociales están extrañadas, de lo que se sigue (o constituye su base) la necesidad de superar la alienación, de transformar de modo revolucionario las relaciones sociales y de producción extrañadas y en general la necesidad de crear relaciones no alienadas (Heller, 1986, p. 113).

Por ello, un factor relevante para entender la respuesta de las comunidades es el papel de actores particulares, cuya presencia y peso específico ayudó a aglutinar el movimiento. Afirma Pizzorno (1974; cit. por Alberoni, 1984) que "para que se inicie una fase de luchas después de un periodo de escasa militancia, es necesaria la presencia de sujetos que tengan ya la experiencia de lo que es un conflicto colectivo, de cómo se conduce, de cuáles son las técnicas de la solidaridad y la probabilidad de que esta funcione (..) ".La presencia de dichos personajes se explica a través de un largo proceso organizativo del cual, desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, las comunidades indígenas de la región Costa Montaña de Guerrero han sido protagonistas[67]. Las históricas condiciones de marginación y pobreza en que se encuentra la región, aunado al abandono institucional, fueron generando la conciencia de que sólo a través de la organización y la conjunción de fuerzas sería posible transformar la lacerante realidad que enfrentan las comunidades *Me'phaá* y *Na savi*.

Como ya se comentó en el Capítulo Uno, un referente fundamental para la región lo constituye el Consejo 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular, que como parte de una Campaña Continental que protestaba luego de cinco siglos de conquista. La confluencia de tantos actores y tan diversos, aunado a la energía y reflexión que se logró conjuntar en torno a esta campaña de escala continental, fueron un espacio que potenció las inquietudes y reclamos históricos de los habitantes de la Montaña. Parte de esa energía se canalizó hacia la constitución del Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), que devino en la conformación del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC -PC). El gran aporte del CAIN, fue que por primera vez los habitantes de la Montaña se sentaron a definir colectivamente un imaginario de futuro, y dieron los primeros pasos en esa dirección.

[67] Esto se aborda en el Capítulo 1 bajo el epígrafe *Breve historia de la región*.

Como parte fundamental de este análisis es necesario reconocer a dichas comunidades como *sujetos sociales* en el sentido de Zemelman (2011), pues su accionar los constituye como agentes transformadores de la realidad. En el mismo sentido, Heller (1986, p. 87) siguiendo a Marx afirma que "(…) la *colectividad* se convierte en *sujeto.* El deber mismo es colectivo, puesto que al límite de la alienación capitalista despiertan en las masas (…) necesidades (las denominadas necesidades radicales) que encarnan ese deber (…)" y que por su naturaleza tienden a trascender la situación que los aliena.

La charla con algunos personajes de la región, permite constatar como su accionar se hizo necesario en el contexto de marginación y abandono institucional en que se encontraban, y cómo fue dicha necesidad lo que logró movilizar las voluntades individuales y aglutinarlas en torno a un proyecto social que fueron delineando sobre la marcha, pues como el mismo Zemelman reconoce este fin colectivo es siempre de largo alcance; dicho proyecto podría ser definido como una utopía, en términos de que significó *Pensar lo no pensado*, es decir, plantear alternativas que se salen de los marcos de lo ya estructurado, pues la construcción de la utopía genera una línea divisoria entre lo ya dado del presente y lo que pueda darse como futuro, lo cual implica dos momentos cruciales: la capacidad para percibir opciones, que se constituye en exigencia de potenciación de la realidad, y el momento de determinar su viabilidad, que conlleva a concretar la utopía en políticas y acciones concretas que contribuyan a su construcción (Zemelman, 2011). La utopía comienza al plantear los pensamientos y acciones que promueven resolver no sólo lo propio, sino lo colectivo, como lo menciona una autoridad *Me'phaá*:

> En la región, antes de tener las reuniones de CAIN, el pecado más grande que teníamos era la indiferencia, ser indiferentes, tener una mentalidad individualista, una mentalidad localista: si es para mi barrio sí, lo demás no me interesa; si es para mí sí, lo de aquellos no me interesa; si es problema de aquel, es muy su problema, mientras no me pase a mi está bien; esos pensamientos son la debilidad; yo así pensaba, no veía problemas, todo estaba bien (…) pero cuando empezamos a platicar a reflexionar con profundidad, de que no estamos condenados a estar siempre en la marginación, sino que también tenemos derecho, también podemos, entonces empieza a resaltar que sí hay problemas, que también tenemos derechos a tener carretera pavimentada, servicios médicos, buenas escuelas, luz eléctrica, agua potable, y nos pusimos a hacer eso, se lograron cosas, pero sólo estando unidos. (….) [68]

El CAIN y la CRAC impulsaron un proceso de base, en el que la participación directa de la población a través de las asambleas comunitarias poco a poco fue generando un sentido propio de hacer política, no a través de la representación sino de la participación ciudadana en un sinnúmero de tareas, desde las estratégicas hasta las sencillas y cotidianas. Es decir que al tradicional sentido de comunalidad, se le sumó y enriqueció con esta forma particular de hacer política que se puede definir como el mandar obedeciendo.

[68] Profr. Apolonio Cruz Rosas, Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz El Rincón. Entrevista realizada en noviembre de 2015.

El contexto nacional e internacional estaba caracterizado por una intensa lucha política de los pueblos originarios a todas las escalas; armados inicialmente sólo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero sobre todo con la certeza de que dependía de ellos transformar las precarias condiciones de vida en que se encontraban, iniciaron la construcción de lo que a la postre sería uno de los más importantes referentes del movimiento indígena nacional, no sólo por haber logrado revertir el clima de inseguridad que privaba en la región sino porque lograron establecer un verdadero control sobre su territorio y proyectar en él su imaginario de futuro. El freno a la delincuencia (incluida la proveniente de policías y militares) generó estabilidad y protegió la producción y el ingreso, la organización comunitaria presionó políticamente hasta lograr ciertos beneficios en infraestructura carretera, eléctrica, de salud y comunicaciones, además de llevar a la creación o instalación de tres diferentes universidades en la región. Algunos de esos liderazgos lograron abrir espacios en partidos políticos de izquierda y acceder a través de las urnas a diputaciones y presidencias municipales, sacudiéndose a los viejos caciques del partido oficial.

> Antes del 90, había asambleas, pero sólo localistas, solo para lo pequeño, lo que es ya, pero no pensar a futuro ni tener visión; eso nace con CAIN, primeros unos cuantos y de ahí fuimos invitando más y más, hasta hacernos fuertes, ya éramos más de 400 los que nos reuníamos; así se logró la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia, la UPN en El Rincón, las casas de salud. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, noviembre de 2015).

Todo este proceso, además de los beneficios directos que se puedan enumerar, representó un espacio de formación de ciudadanía para las comunidades de la región, que paulatinamente se hicieron conscientes de sus derechos, de la discriminación histórica de que han sido objeto, de su capacidad para organizarse y de la fuerza que se puede construir a través de la unidad. En este caso particular, me refiero a sus derechos sobre el territorio amparados en la Ley Agraria, pero también a su derecho como pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afectan sus condiciones de vida y su reproducción social y, por supuesto, el derecho a constituir sus propias instituciones, que han venido ejerciendo a lo largo de estos años.

Ejemplo de lo anterior son dos triunfos en el plano político que han logrado las comunidades de la región durante el 2017. El primero es que la autoridad electoral reconociera el derecho a la Elección por Sistema Normativo Propio en el municipio de Ayutla de los Libres. El segundo, que se analizará puntualmente en el capítulo cinco, son los amparos federales otorgados a la comunidad de *Júba Wajíin* (San Miguel del Progreso, Mpio. de Malinaltepec) que impide a la Secretaría de Economía otorgar concesiones mineras dentro de este territorio sin la consulta a los habitantes.

Es así como la historia del movimiento social protagonizado por los pueblos indígenas de la Costa Montaña de Guerrero se remonta a más de 20 años. Con triunfos y fracasos, con

momentos de amplia movilización y de fuerte reflujo, pero la gente de la región tiene en su haber una experiencia de la cual echar mano para enfrentar nuevos problemas que se les van planteando. El proceso que inició con la Campaña Continental 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular y la emblemática Marcha del 12 de Octubre de 1992, que en la región derivó hacia la fundación de la Policía Comunitaria, ha constituido una escuela de lucha y participación política, que entre otras cosas fue formando ciertos liderazgos regionales, que se encargarían de impulsar otras luchas, algunas de las cuales interpelaron de forma directa el *status quo*.

Para dimensionar mejor el papel formativo que tuvieron estas luchas, es pertinente retomar las palabras de Kertzer, "la acción no nace de los cerebros de los organizadores, sino que se inscribe y transmite culturalmente. Las convenciones aprendidas de la acción colectiva forman parte de la cultura pública de una sociedad" (Tarrow, 1997, p. 50). A estas convenciones Tilly las denomina como el *repertorio de confrontación*, y señala que "la gente no puede emplear rutinas de acción colectiva que desconoce; cada sociedad tiene una reserva de formas familiares de acción, conocidas tanto por los activistas como por sus oponentes" (Tarrow, 1997, p. 51), por lo que un llamado a la acción colectiva en una sociedad y momento específicos, presupone también un repertorio conocido de formas de acción colectiva.

El análisis de los movimientos sociales empieza con el problema de la formación de actores; la emergencia de los fundadores u organizadores de un movimiento social es un requisito que debe cumplirse antes de que otros problemas puedan ser abordados (Melucci, 1999). En este caso, un factor crucial fue la coyuntura muy favorable de que algunas autoridades agrarias estuvieran representadas por líderes comunitarios que gozan de amplia experiencia y consenso regional. Fue su experiencia y claridad política lo que permitió identificar rápidamente escenarios de riesgo para las comunidades, y su capacidad de convocatoria fue fundamental para darle peso específico a la naciente institución. Por ello, es relevante retomar a Touraine (1982, cit. por Giménez, 1994) en el sentido de que no se trata de estudiar a los actores sociales en sí mismos, sino a través de su acción, introducir al actor social como fuente generadora de sentidos.

El mismo Touraine afirma que el movimiento social constituiría la forma más compleja de la acción social, pues se ubica en los conflictos centrales de una sociedad y se definiría como un conjunto de interacciones orientadas normativamente entre adversarios que poseen interpretaciones opuestas y conflictivas respecto de un modelo de sociedad pero que al mismo tiempo comparten un campo cultural. De ahí que las nociones de identidad - entendida como la definición que hace el actor sobre sí mismo - , oposición, entendida como la definición de adversarios y de aliados en la lucha, así como la de totalidad - entendida como proyecto - sean básicas para el análisis de los movimientos sociales.

Munck (1995) considera que no se debe tomar a los fundadores de un movimiento social como un supuesto, el análisis no debe comenzar con los actores, pero si, en cambio, con

una explicación de la emergencia de estos actores. Explicar su surgimiento ayuda a entender el movimiento mismo. Es la experiencia compartida que tiene un grupo de personas, en el contexto de una crisis estructural, lo que los lleva a ver que las cosas podrían ser diferentes. Los fundadores de un movimiento social emergen, dentro de la estructura del viejo orden como portadores de la visión de un nuevo orden y, en este sentido, la experiencia compartida que constituye al grupo como tal no ocurre en un vacío, sino tanto dentro como en conflicto con un orden estructuralmente definido. Esto lleva a reconocer la existencia de un conflicto que genera un *grupo de interés* frente a una sociedad particular, lo que genera también la identidad entre dichos miembros fundadores, por lo que el movimiento nace con una identidad colectiva.

En este punto es pertinente hacer una pausa para comentar sobre el primer intento por constituir un movimiento de defensa del territorio frente a la megaminería en la Montaña. A partir de que se conoció la información sobre las concesiones, la CRAC-PC convocó en marzo de 2011 en San Luis Acatlán a un evento encaminado a buscar formas conjuntas de defensa frente a la minería. A dicho evento llegaron diversos medios libres y organizaciones sociales. Resultado del encuentro, unos días después inicia la campaña "A Corazón abierto, defendamos nuestra Madre Tierra en contra de la minería", con la que se buscaba alertar a la población sobre el peligro que se avecinaba. Se hicieron spots en las radios comunitarias, pintas en casas y carreteras y se editó el libro "El respeto a nuestra tierra es justicia ¡No a las mineras!" (González *et al*., 2011), elaborado por investigadores del Programa Actores Sociales de la Flora Medicinal en México (INAH) y de la Universidad Autónoma de Morelos, y editado también bajo las siglas de la CRAC-PC y el Ayuntamiento de San Luis Acatlán. Sin embargo, esta campaña duró poco tiempo; todavía en el evento de aniversario de la CRAC-PC, en noviembre de 2011, se intentó darle seguimiento, pero sólo algunos de los participantes, lograron sostener el esfuerzo mucho más tiempo. "(…) la campaña que inició con mucha fuerza, no avanzó más allá de esta primer etapa muy activa. (…) la resistencia a las minas traslada su epicentro de lucha de San Luis Acatlán en la Costa-Montaña, a las comunidades de más arriba en lo que ya es propiamente la región Montaña." (Mora, 2014, p. 139).

El que este primer intento no lograra consolidarse puede deberse a dos factores. El primero es que el peligro aún no se sentía tan inminente, como si lo fue en el momento en que se firma el convenio entre la UIEG, la CONANP y la SEMAREN, como ya se argumentó en el epígrafe anterior. Sin embargo, el factor más importante probablemente haya sido el peso político específico y la capacidad de aglutinar que tuvieron los convocantes. Para el 2012, el eje articulador fueron nuevamente los liderazgos locales, al confluir los párrocos indígenas y sus feligreses, el magisterio indígena, así como los líderes campesinos y comunitarios.

Como ya se comentó en el capítulo uno, los párrocos de teología de la liberación, tuvieron una notable influencia que se nota no solo en la organización y la defensa de los derechos de los pueblos, sino como se introducen elementos católicos en las nuevas instituciones, como sería el perdón en la CRAC, defender el territorio como una forma de proteger a las criaturas del Señor; con el respaldo de las hermandades que se forman alrededor de los santos católicos, los párrocos lograron movilizar una amplia base de apoyo.

Por otro lado están los líderes locales, campesinos, sin formación académica, algunas veces vinculados al proceso 500 ARI o a los consejos regionales, cuya actividad política y experiencia de vida potenciaron los procesos. Algunos incluso tuvieron un breve paso por la policía o el ejército, adquiriendo así otro tipo de formación. Otro actor muy notorio son aquellos profesores que nunca perdieron su identidad, cuya formación les da ciertos elementos nuevos que ponen al servicio de los movimientos y que saben potenciar el papel que de por sí juegan en las comunidades.

La suma de su experiencia, sus aliados y su visión constituyó una base sólida para construir el naciente Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. El proceso detallado de cómo se produjo tal articulación se aborda en el siguiente capítulo.

Antes de cerrar este capítulo, quisiera subrayar un aspecto que me parece por demás relevante. En medio de un clima de mucha tensión que se vivía en la región, principalmente por la fractura al interior de la CRAC-PC luego de que se polarizaran las diferencias entre muchos de sus fundadores y las nuevas dirigencias, en tan sólo un par de meses se logró constituir una nueva instancia intercomunitaria, el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT). En las páginas precedentes se mostró cómo esto fue posible gracias a un par de factores: el conflicto y la identidad (Pizzorno, 1989; Tarrés, 1992; Melucci, 1999).

Melucci (1999) considera que los movimientos sociales son formas de acción colectiva que responden a dos condiciones: 1) son expresión de un conflicto social (en este caso el territorio comunitario y sus recursos naturales, sean éstos bosques o minerales); 2) tienden a provocar una ruptura de los límites de compatibilidad del sistema dentro del cual se hallan situados (en este caso el cuestionamiento es sobre la legitimidad del estado para decidir unilateralmente la apropiación o distribución de los recursos existentes en el territorio de las comunidades). Como se pudo constatar, el inminente decreto de Reserva

de Biosfera y la eventual entrada de las mineras, significaron para las comunidades la terrible amenaza de perder porciones importantes de su territorio, ver deteriorarse el resto y, en consecuencia, que atentan contra su forma de reproducción social y vulneran su capacidad de autodeterminación. Esta amenaza fue una razón poderosa para reunirse y tratar de organizarse, pero no bastaba.

Fue aquí que el componente identitario jugó un papel central para lograr aglutinar a las comunidades en torno a una institución nueva (CRADDT) que nace como un mecanismo de defensa de las comunidades. La condición común como pueblos originarios y la historia de organización que les ha permitido enfrentar de forma autogestiva las adversidades y el abandono institucional, fueron los componentes fundamentales para poder confluir. La existencia de liderazgos con experiencia y claridad política (Alberoni, 1984) y de ciertos aliados externos como coadyuvantes, fueron también factores importantes.

El papel central de la identidad como pueblos originarios y la existencia de liderazgos locales formados en sus propios procesos de lucha permite retomar el concepto de control cultural (Bonfil, 1983) ya que tomando como base su cultura fueron capaces de plantear un movimiento que reivindica su modo de ser y estar en el mundo, apropiándose de elementos culturales nuevos (apropiados por ejemplo mediante su historial de lucha), pero garantizando siempre la autonomía en sus procesos de toma de decisiones.

Sin embargo, la identidad común no se limita a su condición de pueblos indígenas, pues como afirman Escobar (2000) y Oslender (2002) las identidades son específicas de un lugar, ya que se construyen en un diálogo entre los sujetos y el territorio. Dichos autores plantean que para entender un movimiento constituido sobre la base de la identidad colectiva se deben entender los lugares específicos en los que se desenvuelve el movimiento, que es el lugar donde estas identidades están construidas y articuladas físicamente. Resulta evidente que las condiciones de cada lugar (como la pobreza, la marginación, el entorno natural) conjuntamente con las identidades que de él se desprenden, contribuyen o dificultan la participación social; o bien cómo la experiencia de lucha y las historias locales en este caso fueron importantes para que la gente se decidiera a involucrarse en el movimiento.

Capítulo 4. La Formación del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio

Como ya se ha venido comentando, la joven pero fuerte tradición organizativa en la región jugó un papel fundamental para que existiera una pronta respuesta ante la amenaza. Dado el papel que tuvo la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero en el estallamiento del conflicto, no es casual que el origen del movimiento fuera la parte alta de la Montaña, particularmente la comunidad de La Ciénega (en cuyo territorio se asienta la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero-UIEG), ni tampoco lo es que dicha institución se encontrara en el ojo del huracán.

Un factor determinante para el inicio del movimiento fue la existencia del Centro de Formación Permanente de la Montaña, un grupo de personas organizadas en torno al curato de Malinaltepec, que se habían venido reuniendo para reflexionar sobre la problemática de la región. Fue en una de las reuniones de este equipo, que se comentó originalmente sobre las notas que empezaban a ventilarse en la prensa sobre el proyecto de reserva de la biosfera (RBM) y el convenio ya citado. Este primer análisis permitió intuir riesgos para la región y motivó la realización de un par de asambleas en la comunidad de La Ciénega, para informar y tomar parecer a la población. Así lo narró Saúl Morán, Comisario suplente de La Ciénega, durante el IX Foro realizado en Malinaltepec:

> ¿Cómo surge la inconformidad de los pueblos? Un grupo de compañeros y compañeras de las localidades de Ojo de Agua, La Ciénega, Tapayoltepec, Paraje Montero, Malinaltepec, San Miguel del Progreso, La Magueyera, nos veníamos reuniendo mensualmente a mediados del año 2012, en la comunidad de Ojo de Agua a propuesta de las compañeras del Centro de Estudios Ecuménicos que por conducto del párroco Melitón Santillán, para desarrollar una escuela de formación permanente en la Montaña, para analizar los problemas que aquejan a nuestra realidad.
>
> (…) Con la firma de este convenio se pretendía despojar a los pueblos *Me'phaá* y *Na savi* de 157, 896.08 ha y desplazar a 153,023 habitantes de 207 comunidades de la Montaña Alta y Costa Montaña. Esta noticia consternó a los presentes, sin saber qué hacer al respecto. Inmediatamente la Comisaría de La Ciénega convocó a una asamblea general de vecinos, para informar sobre la firma del convenio, los principales del pueblo hablaron sin titubeo "es necesario hacer varias asambleas para que el pueblo tome las decisiones respecto a esta situación; de tal manera que en la tercera asamblea, los asistentes dijeron que para no cargar la responsabilidad ante tal arbitrariedad y porque en esta comunidad se encuentra la UIEG, es necesario llamar a los pueblos aledaños y que digan su palabra. De esa forma nos dimos a la tarea de integrar brigadas de señores y señoras de entregar el llamamiento al primer Foro Regional en Defensa del Territorio y Rechazo Total al proyecto federal de creación de Reserva de la Biosfera de la Montaña. (Testimonio Saúl Morán, junio 2013)

El primer Foro, del 6 de octubre de 2012, permitió reunir a diversos actores y, conjuntamente, corroborar las sospechas sobre los peligros que se ciernen sobre la

región. Entre las reflexiones vertidas tuvo gran relevancia la intervención de Manuel Gómez, de Ocosingo, Chiapas, quien narró la problemática que enfrentan los pueblos indígenas respecto de la reserva de la biosfera de Montes Azules; narró los tipos de desplazamiento que han sufrido las comunidades y cómo, poco a poco, han visto que individuos y empresas explotan la gran riqueza natural de este lugar, sin que ello represente ningún beneficio para los pueblos. Estas reflexiones se vieron reforzadas con la opinión de diversos asistentes, miembros de diversas instituciones con presencia en la región.

> Este primer encuentro de pueblos *Me'phaá* y *Na savi* que se llevó a cabo el 6 de octubre de 2012 fue muy nutrido y emotivo. Estuvo un compañero proveniente de Montes Azules Chiapas, quien compartió de la lucha que desde 1974 llevan a cabo contra la reserva de la biosfera Montes Azules. En este evento, junto con nuestras autoridades comunitarias –comisariados, comisarios y delegados municipales-, párrocos sobre todo, se destacó la figura del sacerdote Melitón Santillán Cantú, estudiantes y profesores de la UNISUR, organismos civiles como Tlachinollan, Centro de Estudios Ecuménicos, maestras y maestros, todos hermanamos nuestra palabra, nuestros corazones y nuestro coraje. (Testimonio Saúl Morán, junio 2013)

En el mismo sentido, la Profa. Maurina Cantú, originaria de La Ciénega, narra los preparativos para llegar a ese primer Foro y resalta la importancia de tener invitados que compartieran información sobre problemáticas similares:

> El acuerdo fue por unanimidad que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a tener más información y vamos a convocar a un Foro, que fue el 6 de octubre de 2012, y se repartieron las convocatorias comunidad por comunidad, mujeres, hombres, todos participamos para distribuir las convocatorias, sin distinción de color ni partido. Y aquí están compañeros de muchas comunidades que estuvieron ese día, y damos las gracias también al compañero de Montes Azules, Chiapas, quien orientó y amplió sobre cómo afectan los convenios que el gobierno impone sobre nuestros bosques, es lo que él regaló su experiencia, muy valiosa porque nos hizo reaccionar más. (Testimonio Profa. Maurina Cantú, agosto 2013)

En las intervenciones se pudo constatar no sólo la preocupación ante la posibilidad de perder parte del patrimonio comunitario y cómo esto podría afectar su estilo de vida, sino también la irritación por percatarse de las intenciones ocultas detrás del proyecto de la reserva y del papel que se pretendió que jugara la UIEG en el proceso. Diversas personas tomaron el micrófono para expresar su enojo ante el hecho de que el gobierno pretendiera que fueran los propios estudiantes de la UIEG, originarios de esta región, quienes se encargaran de garantizar la aceptación del proyecto en las comunidades. Padres y madres de familia preguntaban a la asamblea si para eso habían luchado por la instalación de la universidad, si mandaban a sus hijos a estudiar ahí para que aprendieran cómo traicionar a su familia y a su pueblo. Por ello, uno de los principales acuerdos fue exigir la renuncia del rector, por considerar que sus acciones iban en contra de los intereses comunitarios. Así lo narra lo sucedido Saúl Morán:

> En este foro de manera unánime se exigió la cancelación del convenio firmado entre la UIEG, SEMAREN Y CONANP, salida inmediata del rector y su personal de confianza, rechazo total del

> proyecto de reserva de la biosfera. En este magno evento se acuerda tomar las instalaciones de la UIEG, para exigir la cancelación del convenio firmado por el rector y que éste diera a los pueblos una explicación sobre tal situación. El día 10 de octubre, en las primeras horas de la mañana, los pueblos toman de manera pacífica y ordenada las instalaciones de la rectoría mientras el rector, atemorizado, brilló por su ausencia; en lugar de presentarse a atender la protesta pacífica, se dedicó a descalificar en los periódicos a los inconformes diciendo que era un grupito muy reducido de La Ciénega, encabezado por unos lidercillos, caciquillos; que detrás de este movimiento estaba el sacerdote retrógrada Melitón Santillán y sus compinches que llegaron armados de palos, machetes, piedras y otras armas de fabricación casera como resorteras.
>
> Esta acusación tendenciosa, grotesca y de muy mala fe no cabe en los labios de la máxima autoridad académica de la UIEG. Posterior a esta acción, los supuestos agraviados de sus derechos y garantías individuales interpusieron –por órdenes del señor Rafael Aréstegui- en la Agencia del Ministerio Público de Malinaltepec, demandas penales contra los representantes de los pueblos opositores al proyecto federal. (Testimonio Saúl Morán, junio de 2013)

Desde los primeros Foros hubo voces que claramente plantearon que el tema de la UIEG no terminaba con el cambio del rector, sino que el problema real es que estas instituciones promovidas por el gobierno foxista, se concibieron no para promover el desarrollo endógeno y el fortalecimiento de la cultura de los pueblos originarios, sino como caballos de Troya, para romper el tejido comunitario usando a los propios jóvenes, que serían formados desde una visión totalmente diferente a la de sus comunidades.

> También quiero dejar claro que no es asunto del rector, es un asunto más de fondo, tenemos que pensar nosotros como pueblos que tenemos que proteger nuestro territorio, tenemos que proteger nuestra tierra compañeros, y eso significa que nosotros tenemos que decidir cómo queremos nuestra institución, en este caso la universidad, cómo queremos que esta universidad eduque a nuestros hijos, pero nosotros como pueblo. Esto no es un asunto personal con el rector, es un asunto de más fondo. ¡Si entendemos la lucha por ese lado, que la debemos de dar nosotros, de donde estamos, entonces esa universidad la vamos a rescatar nosotros, no le vamos a rogar al gobierno, no! Nosotros tenemos que organizarnos, tomar un acuerdo firme, para empezar a proteger nuestros recursos, para empezar a proteger nuestra cultura. (Testimonio Ing. Sebastián Ramírez Hernández, octubre de 2012)[69]

Durante los siguientes foros, uno de los temas recurrentes siguió siendo el de la UIEG; se hicieron propuestas encaminadas a que las propias comunidades tomaran el control de la institución para garantizar que realmente les sirva a los pueblos, incluyendo revisar la currícula y la contratación del personal docente.

> Yo agradezco a los compañeros de La Ciénega, de Malinaltepec, fueron los que empezaron a darse cuenta de que había una escuela que en lugar de que a nuestros hijos los enseñen a cómo apoyar a la comunidad, ¡querían enseñar a nuestros hijos cómo destruir la comunidad, cómo acabar con su riqueza! Y gracias a esa comunidad que está cerca de la escuela, se dieron cuenta que ese era el trabajo que nuestros hijos iban a hacer, por eso hubo un problema con la escuela, porque ahí los culpables no eran los alumnos, el culpable era el proyecto que llega desde el gobierno hasta la dirección de la escuela, por eso nunca ponen un indígena que fuera de aquí, siempre ponen gente que viene de fuera, porque traen interés del

[69] El Ing. Sebastián Ramírez Hernández participó activamente en los diferentes foros y posteriormente fue electo como Presidente Municipal de Malinaltepec para el periodo 2015-2018.

> gobierno, de cómo destruir poco a poco o sacar riqueza de nuestros pueblos. (Testimonio del Prof. Teodoro Tomás Galeana, junio de 2013)[70]

Por eso no es de sorprender que la toma de las instalaciones universitarias por parte de las comunidades, desembocara en que algunos empleados de la UIEG presentaran demandas penales contra las autoridades que encabezaron el movimiento, como lo narra Saúl Morán: "A raíz de la toma de la universidad de entablaron averiguaciones previas, en contra de las autoridades agrarias, civiles, por personas que están jugando el triste papel de traidores, de dar la espalda a la lucha del pueblo." Naturalmente, estas demandas sólo vinieron a complicar más la situación y polarizar las posiciones entre los trabajadores de la institución y la población local, pero también a mirar con recelo a toda la comunidad universitaria pero también a muchos de los actores externos. Esto se evidencia en la participación del Regidor de Educación del Municipio de Iliatenco, durante el 2º Foro:

> Es necesario saber quiénes están con nosotros, porque a lo mejor aquí hay oyentes, orejas; para empezar que me disculpen los alumnos de la universidad intercultural de aquí de La Ciénega, no sabemos cómo están ellos, me gustaría que pasen a informar que si ellos están enterados de este asunto, no sea que sean ellos mismos los que nos están dando la espalda. (Testimonio de regidor municipal de Iliatenco, octubre de 2012)

Otro de los acuerdos importantes de este primer Foro fue reconocer la necesidad de volverse a reunir para seguir organizando a las comunidades. Se reconoció que, a pesar de la gran afluencia al Foro, había poca representación de comunidades de la parte baja, es decir de la porción sur de este territorio involucrado en el conflicto. Se fijó la fecha para dos semanas después y se nombraron comisiones para reforzar la convocatoria, enfatizando en la necesidad de tener representados a las autoridades agrarias. Se tomó protesta a una coordinadora provisional para organizar el siguiente Foro, asumiendo el reto de ampliar la convocatoria para garantizar que el evento realmente lograra tener una representación regional.

Los Foros Regionales en Defensa del Territorio

La información y las reflexiones vertidas en el evento del 6 de octubre rápidamente se difundieron en la región, generando dudas, incertidumbre y preocupación. Es así como el 20 de octubre de 2012, en el mismo auditorio municipal de La Ciénega, se realiza la segunda asamblea, denominada ya como Primer Foro Regional en Defensa del Territorio, esta vez con una mayor afluencia de ciudadanos y una importante representación de autoridades civiles y agrarias, quienes fueron presentados a los asistentes en medio de aplausos. Esta nutrida concurrencia, se debió en parte a la incorporación de otro actor colectivo, recientemente creado en la región pero que justo en ese momento gozaba de

[70] El Profr. Teodoro Tomás Galeana, era Comisariado Ejidal de Iliatenco y primer presidente del CRAADT.

mucha fuerza política, el Consejo de Autoridades por la Paz y la Reconciliación, que habiéndose conformado un mes antes habían logrado sentar las bases para resolver el viejo conflicto agrario entre las comunidades de Tilapa y Tierra Colorada. Su intensa actividad en varios núcleos agrarios vecinos coincidió con el inició de la movilización por la defensa del territorio, dándole resonancia y sumando autoridades comunitarias que ya se encontraban trabajando de forma coordinada.

> Ahora, esa gente que ya integraba el Consejo de Autoridades Comunitarias por la Paz, cuando convocan al 2º foro en La Ciénega el 20 de octubre, esas autoridades acudieron; es entonces cuando se aprueba conformar el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en contra de las mineras y la reserva de la biosfera; es así como ya nace este órgano a nivel región, de la Montaña y la Costa Chica, ya más grande, más fuerte.[71]

El Foro inicia con la participación de dos mujeres que acudieron en representación de los comuneros de San Salvador Atenco, Estado de México, quienes hicieron una reseña de su lucha con el proyecto del aeropuerto internacional, la represión de que fueron objeto y compartieron una reflexión sobre la importancia de mantenerse unidos y hacer valer sus derechos sobre la tierra. Enseguida se informó sobre lo ocurrido a raíz de la toma de las instalaciones de la UIEG, acordada en el Foro anterior.

> Como resultado de esta acción, se logró establecer una mesa de diálogo con el Lic. Humberto Salgado Gómez, Secretario General de Gobierno del Estado. A través de una minuta de acuerdos, se firmó la cancelación del convenio entre la UIEG y SEMAREN, más no el decreto federal de creación de la reserva de la biosfera. En esta mesa acudieron 32 compañeros que conformaron la comisión negociadora. Los representantes del gobierno del estado insistieron en las bondades y conveniencia del decreto, pero la posición de la comisión fue firme: "no a la reserva de la biosfera. (Testimonio Saúl Morán, junio de 2013)

Sobre el mismo punto abunda el Lic. Acacio Flores Guerrero, miembro de la comisión que se reunió en dos ocasiones con la representación del gobierno del estado:

> Una vez que fueron tomadas las instalaciones de la universidad se nombró una comisión para que fuera a la ciudad de Chilpancingo a entablar una mesa de diálogo con el gobierno del estado; fuimos 32 compañeros a la capital; asistió el Secretario General de Gobierno Humberto Salgado Gómez, también Filemón Navarro Aguilar Secretario de Asuntos Indígenas, Mtro. Carlos Toledo Manzur Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 10 de octubre. Después de expresar el planteamiento que llevábamos, hicimos nosotros cuatro planteamientos al gobierno del estado: 1. Cancelación total del proyecto de reserva de la biosfera; 2. Destitución del rector de la universidad intercultural, debido a que había firmado un convenio a espaldas del pueblo, a espaldas de las autoridades agrarias; 3. Desistimiento de las demandas que hayan entablado ya sean personas empleados de la autoridad o sean terceras personas afectadas; y por último, 4. Apoyo económico por parte del gobierno del estado para el pago de traslado de los compañeros que asistimos a Chilpancingo.
>
> Después del diálogo obtuvimos una minuta de la reunión entre la Comisión disidente del proyecto de reserva de la biosfera de la Montaña y el Secretario General de Gobierno, con los siguientes acuerdos: 1. Suspender el proceso de promoción de la reserva de la biosfera de la Montaña a través del convenio entre la SEMAREN y la UIEG, mismo que se cancela; 2. Se

[71] Entrevista al Profr. Apolonio Cruz Rosas, 25 de noviembre de 2015.

> liberan de manera inmediata las instalaciones de la UIEG, retirándose de inmediato todos los que en ella intervinieron. (Testimonio Lic. Acacio Flores Guerrero, octubre de 2012)

Sin embargo, hubo necesidad de acudir a una segunda reunión buscando resolver de forma definitiva el problema de las órdenes de aprehensión. Al respecto continúa narrando el Lic. Flores:

> Nos citaron de nuevo para el día 15 en la ciudad de Chilpancingo, ahí estuvimos una comisión de cuatro personas: Lic. Vidulfo Rosales, abogado asignado por Tlachinollan, Saúl Morán Oropeza, y Acacio Flores Guerrero. Ya estando en Chilpancingo nos comunican que teníamos que trasladarnos a la ciudad de Acapulco, donde nos atendió el Secretario y la Procuradora de Justicia; y finalmente se entabló la plática sobre el desistimiento de las demandas interpuestas en el ministerio público y textualmente dijo el Secretario que no había ningún problema, le pidió a la Procuradora de Justicia que ella le dé seguimiento personal a ese asunto, porque para él no había elementos suficientes para integrar una averiguación formal. (Testimonio Lic. Acacio Flores Guerrero, octubre de 2012)

Los acuerdos asentados en la minuta fueron recibidos con beneplácito pero también con desconfianza. Sobre las denuncias penales contra los representantes comunitarios se acordó mantener la presión hasta no lograr el desistimiento legal, pues se sabe que esas denuncias suelen mantenerse como medida de presión contra los movimientos sociales. También se analizó qué significa el acuerdo referente a la Reserva:

> El asunto de la reserva de la biosfera nada más se cancela el convenio pero no se cancela el proyecto, que les quede claro a ustedes. La reserva de la biosfera es un proyecto nacional, lo trae el gobierno federal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué propongo? A través de este Foro tomar el acuerdo de que como región Montaña no vamos a permitir la introducción de este proyecto. No sólo es la defensa de La Ciénega ni de la Montaña, es la defensa de todo el territorio de Guerrero. (…) lo rechazamos porque esconde intereses de cúpula, responde a una estrategia mundial de los países más ricos, de ahí se desprenden los programas ambientales que está empujando el gobierno federal (…) los países más ricos del mundo, ellos están contaminando, produciendo vehículos y tantos productos y nosotros los pobres que vivimos en la Montaña nos dicen "tienes que conservar tu montaña porque ahí es el que recicla el humo que yo produzco"; esos son los acuerdos de los países ricos. (Testimonio Sebastián Ramírez Hernández, octubre 2012)

Sin embargo, un punto que generó polémica fue el que la Comisión que acudió a negociar con el gobierno del Estado, haya exigido un apoyo económico para el pago de los gastos realizados en el traslado:

> Esta es una de las políticas del gobierno federal, que está impulsando políticas a favor de los grandes empresarios, por lo tanto la lucha va a ser con nuestros propios recursos, yo aquí quiero dejarlo claro, toda lucha social se debe de mover con sus propios recursos; si a la primer lucha vas corriendo y pides apoyo económico al gobierno quiere decir que no entendemos que es una lucha. (Testimonio Sebastián Ramírez Hernández, octubre 2012)

Después de varias participaciones al respecto, se acordó que la lucha debe mantenerse con los recursos propios de las comunidades, porque el gobierno nunca da recursos gratis, siempre vienen condicionados, y en este caso es claro que el propio gobierno tiene interés no sólo en establecer la reserva, sino en favorecer la entrada de las mineras, por lo que no es sano que el movimiento dependa de esos recursos. En una situación tan complicada y

con la tradición gubernamental de *maicear* a las dirigencias se entiende el recelo a recibir recursos. Sin embargo, no se puede obviar que en un contexto de pobreza extrema como el de esta región, la falta de recursos para movilizarse suele ser una de las limitantes, cosa que el gobierno utiliza para desgastar los movimientos, al no resolver y obligar a que la gente se desplace una y otra vez. En estas circunstancias y tratándose de un problema generado por el mismo gobierno, considero que se debería analizar la pertinencia de exigir que los gastos realizados para lograr su resolución sean con cargo al erario público y no a la economía familiar o comunitaria.



Figura 8. Manta de bienvenida al primer Foro en Defensa del Territorio, La Ciénega, Mpio. de Malinaltepec, 6 de octubre de 2012.

La información de otras regiones, tales como Montes Azules, San Salvador Atenco, Carrizalillo y varios otros vertidos por los asistentes, permitieron a la asamblea darse cuenta que este problema no era aislado y mucho menos una excepción; si no que, por el contrario, responde a procesos globales de acumulación del capital a través del despojo.

Fue precisamente la conciencia sobre la magnitud del problema, lo que permitió que en este 2º Foro se empezara a bosquejar una estrategia de resistencia, cuyo componente más importante es la información y concientización en las comunidades. Es así como se acuerda *crear una institución* regional cuya tarea central sea encabezar la defensa del territorio comunitario frente a los embates de agentes externos que los quieren despojar de su patrimonio. Al respecto, el Regidor de Educación de Iliatenco planteó:

> (…) quienes son los que verdaderamente tienen que encabezar el movimiento, necesitamos tener un equipo (…) por eso yo propongo que sean las autoridades de los pueblos donde verdaderamente está ese proyecto, si no no vamos a concluir nada, que sean autoridades; hay un punto del orden del día para definir la postura, pero cómo vamos a definir una postura

> si ni siquiera sabemos si hay autoridades agrarias que ya firmaron los convenios y si están de acuerdo y no sabemos quiénes son, quienes son los que verdaderamente están firmes y quiénes están tambaleando. (…) Hay que ir moviendo las sedes pues, no puede seguir puro La Ciénega, ahí es donde hay malos entendidos, aunque yo si agradezco a las personas que se organizaron para hacer esta lucha, esta iniciativa, pero que las sedes sean rotativas, entre los núcleos que si están afectados por este proyecto. (Testimonio del Regidor de Educación de Iliatenco, octubre 2012)

De esta manera, la asamblea precisa que se debe formar un Consejo Regional de Autoridades Agrarias, por ser ellos los inmediatamente responsables de salvaguardar el territorio en sus respectivos núcleos agrarios, pero también para que no hubiera jerarquías, sino una responsabilidad equitativa y respetuosa entre autoridades, pues deben involucrarse todas. De entre los comisariados asistentes, se eligieron quienes coordinarían este Consejo y se encargarían de involucrar a los demás que ese día no acudieron. De esta forma, el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), quedó integrado de la siguiente manera:

PROFR.TEODORO TOMAS GALEANA, COMISARIADO EJIDAL DE ILIATENCO, PRESIDENTE	PROFR.INOCENCIO NAVARRO SOLANO, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE MALINALTEPEC, VICEPRESIDENTE
PROFR.APOLONIO CRUZ ROSAS, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES SANTA CRUZ DEL RINCÓN, SECRETARIO	PROFR.FELIPE MARTÍNEZ EMILIANO, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE MIXTECAPA, VOCAL
C.SAMUEL ARRIAGA DE LA CRUZ, COMISARIO EJIDAL DE SAN JOSE VISTA HERMOSA, VOCAL	C.TOMAS GARCIA EVARISTO, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE ILIATENCO, VOCAL
PROFR.AGAPITO CANTU MANUEL, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES SAN MIGUEL DEL PROGRESO, VOCAL	C.SIMEON ARRIAGA GALEANA, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES SAN JOSE VISTA HERMOSA, VOCAL
C.JOSAFAT MEJIA LUJAN, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES COLOMBIA DE GUADALUPE, VOCAL	C.JOSE LOPEZ CARRASCO, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE PARAJE MONTERO, VOCAL
PROFR.PEDRO GALEANA HERNÁNDEZ, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES PUEBLO HIDALGO, VOCAL	C.CELERINO TIBURCIO RAMÓN, COMISARIADO DE BIENES COMUNALES COCHOAPA EL GRANDE, VOCAL
C.RAMON REYES BENITO, COMISARIADO EJIDAL DE HUEHUETEPEC, VOCAL	

Cuadro 8. Integración de la primera mesa directiva del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT). Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, hubo mucha insistencia en que la responsabilidad es de todos los ciudadanos, independientemente de cargos, ocupación o lugares de origen, pues se trata de defender el patrimonio colectivo:

> Tenemos claro que los que tienen que cuidar el territorio son los Comisariados, pero eso no significa que los Comisarios y Delegados no deban involucrarse, no significa que la gente no deba sumarse, porque también toman agua, también tienen su casa y tienen su terreno, también tienen sus animales; pero además en los territorios están nuestros camposantos,

nuestras iglesias, todo tenemos en el territorio. (Testimonio Pbro. Melitón Santillán Cantú, 1er Foro Regional, octubre de 2012)

A partir de este momento el Consejo será el encargado de organizar una serie de Foros que, convocados de forma mensual e itinerante por las diferentes comunidades de la región, sea el principal mecanismo para informar a las comunidades y abrir la discusión sobre el proyecto gubernamental de decreto, sobre la concesiones otorgadas y sus implicaciones para los núcleos agrarios involucrados.

La conformación de esta nueva institución comunitaria, como ya se ha venido comentando, abrevó no sólo de la tradición forjada por CAIN-CRAC, sino fortalecida y revitalizada por dos actores colectivos recientes: el Centro de Formación Permanente de la Montaña (con influencia en la parte norte y alta de la Montaña) y el Consejo de Autoridades Agrarias por la Reconciliación y la Paz (con influencia en el límite sur de la Montaña). Esto es evidente en la integración del naciente Consejo, en el que se incorporan las autoridades de cinco de los seis núcleos agrarios integrantes del Consejo por la Reconciliación y la Paz, con la sola excepción de Pascala del Oro, que no está incluido en el proyecto de la reserva de biosfera. Por eso no es casual que el Párroco Melitón Santillán enfatizara la importancia de esta nueva conformación de la asamblea y de su dirigencia durante el 2º Foro, realizado en Colombia de Guadalupe el 10 de noviembre de 2012.



Figura 9. Toma de protesta a la Mesa Directiva del CRAADT durante el Foro Regional en Defensa del Territorio, La Ciénega, Mpio. de Malinaltepec, 20 de octubre de 2012.

Es precisamente en este 2º Foro que la dinámica del movimiento da un giro, pues las asambleas empiezan a ventilar conjuntamente ambas problemáticas, la defensa del territorio y la resolución de los conflictos agrarios. En un principio el abordaje de este segundo aspecto ocurrió de manera un tanto casual, sin aclarar porqué se hacía de esta forma. El Foro de Colombia de Guadalupe dio inicio con el informe del Prof. Apolonio Cruz Rosas respecto de las reuniones del Consejo por la Reconciliación y la Paz -nuevamente no es casual que el Prof. Cruz Rosas, uno de los personajes más emblemáticos de la región, sea el Secretario de ambos Consejos-, comentando sobre los avances ante las instancias agrarias, pero también la decisión de que, ante la falta de voluntad de las instancias gubernamentales, este Consejo busque atender otros conflictos agrarios en la región para abonar al mejor entendimiento entre las comunidades.

La importancia de esta confluencia de actores y de agendas se hace explícita con la intervención de Melitón Santillán cuando afirma

> …no veamos los problemas separados, sino que es un problema integral (…) estamos viendo el conflicto acá encima, pero no sabemos que ellos están planeando cómo desplazar a la gente para llevarse el oro, la plata y todo lo que tenemos; ese es el punto y por eso provocan estos conflictos; orita se dan estos conflictos pero después serán otros en otra zona, ¿por qué? Porque lo que quieren es el oro y buscan estrategias de cómo dividir a las comunidades. Por eso invito a seguir fortaleciendo lo que nosotros llamamos cinco horcones[72]: fortalecimiento del territorio, trabajo comunitario, asamblea, autoridades y fiesta del pueblo. ¡Si se fortalecen esos cinco horcones de las comunidades nada nos van a hacer los ricos; si esos cinco horcones no se fortalecen ya estarían cayendo las comunidades! (Testimonio Pbro. Melitón Santillán Cantú, 2º Foro Regional, noviembre de 2012)

El papel del Consejo por la Reconciliación y la Paz para buscar la solución a este histórico conflicto agrario, se interpreta no sólo como la falta de voluntad del gobierno sino como la certeza de que es preciso defenderse del gobierno y que sólo la organización comunitaria puede promover el bienestar de los pueblos

> Quiero externar mi reconocimiento a las autoridades que hicieron posible que este conflicto entre Tierra Colorada y Tilapa, de una u otra forma, se calmara; (…) Hoy creo que es un momento muy importante para todos los pueblos, para los de la parte baja asimismo para los pueblos de la parte alta, hoy yo creo que va a haber una unificación de trabajo, una unificación de ideas, porque si un pueblo agarra por su lado, un solo pueblo camina, no nos van a hacer caso; la estrategia del gobierno del estado y del gobierno federal pues día a día nos quiere pisotear, tons es importante nosotros como pueblos que unifiquemos ideas para que al ratito no nos quieran pisotear; por ejemplo las demandas entabladas contra los compañeros que iniciaron este movimiento, pero si no hacemos frente, si no nos unificamos, esas demandas van a seguir y al ratito van a caer esos compañeros al bote y no vamos a poder defenderlos. (Testimonio Lic. Acacio Flores, 2º Foro Regional, noviembre de 2012)

Un punto central de reflexión y debate fue la naturaleza y dinámica de estas nacientes instituciones comunitarias. Sin dejar de reconocer ciertas diferencias en la agenda de

[72] En la región se conoce como horcón al madero vertical, con forma de Y, usado como columna para sostener una estructura, como el techo de una vivienda.

ambos Consejos, prevaleció el argumento que en el fondo ambos buscan proteger el territorio comunitario, por lo que se acordó fusionar ambos Consejos, lo que se formalizaría en el siguiente Foro. Uno de los puntos debatidos fue si mantener esta institución en el ámbito de la legitimidad comunitaria o buscar legalizarla en términos del derecho mexicano, dejando claro una diferencia política que ha permeado a todas las instituciones e iniciativas de la región, y que se expresa en dos posturas antagónicas: apelar a su condición de pueblos originarios y los derechos reconocidos en los tratados internacionales y en la propia Constitución, para regirse por usos y costumbres, con la legitimidad de ser avalado desde las comunidades; o bien buscar el reconocimiento legal por parte del estado mexicano, que le otorgue una figura jurídica –como podría ser una organización de la sociedad civil (OSC) o una asociación civil (AC)- para ser aceptado como intermediario entre las comunidades y el gobierno.

De esta segunda posición resulta elocuente la intervención de los hermanos Avilés Mendoza, miembros de una familia de tradición caciquil, opositores en su origen a la Policía Comunitaria y que tuvieron un papel protagónico en la fractura actual de la CRAC y el colapso de la UNISUR; sostiene Bulmaro Avilés que "…hay mucha razón cuando el gobierno nos rechaza porque no tenemos una legalidad de este Consejo, tons hay que registrarlo, hay que dar el seguimiento de un registro, para que también el gobierno lo reconozca, para que tenga un poder jurídico ante las dependencias de gobierno" y más tarde refuerza la postura Godofredo Avilés: "Propongo integrar ambos comités en uno sólo y protocolizar, formar una figura jurídica para poder exigir a las autoridades, porque es cierto que este Consejo no tiene mucha presencia, mucha figura…"

No hubo un acuerdo explícito en este Foro al respecto, pero sobre la marcha prevaleció la postura que se ampara en que la legitimidad la otorgan las asambleas y que consideran que responder a ellas y no al gobierno es un elemento central del llamado *proyecto comunitario*. Esta misma discusión, volvería a jugar un papel central a inicios de 2014, cuando un par de asambleas en Santa Cruz del Rincón definieron el destino de la UNISUR. En ellas, nuevamente los hermanos Avilés Mendoza y sus aliados tuvieron un papel protagónico al imponer la visión de que sin reconocimiento por parte del gobierno, las acciones comunitarias no tienen validez, son ilegales. Definir si la estrategia se basa en la *legalidad* del estado mexicano o en la *legitimidad* que les brinda su estatuto como pueblos originarios, ha sido una tensión constante a lo largo de los años en la región, que se expresa en diferentes momentos y en cada una de las luchas. A veces ha prevalecido una postura y a veces la otra, dependiendo la correlación de fuerzas y el momento político.

En el Foro, esta diferencia de opiniones volvió a expresarse cuando toma la palabra el diputado local Daniel Esteban González, Presidente de la Comisión Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, para proponer que citaría a Carlos Toledo a comparecer ante el

Congreso para que explique la iniciativa de la RBM, y que para inicio de año se estaría realizando, en coordinación con CDI y SAI, una consulta pública sobre la RBM, donde podrían decidir libremente y tendría carácter legal. Diversos asistentes se manifestaron en contra, cuestionando su pertinencia y que este tipo de instrumentos son amañados y sólo sirven para validar los proyectos; se insistió en que para el proyecto comunitario la verdadera consulta son las asambleas que se están realizando en cada núcleo agrario y que hacerlo de otra forma es caer en el juego del gobierno. Ante ello, el diputado tuvo que retirar su propuesta.

> …como pueblos originarios tenemos que organizarnos y tener nuestra propia estrategia para defendernos; no debemos retroceder, ¿para qué una consulta si los pueblos no lo quieren? La consulta debió hacerse antes de hacer el proyecto, porque nunca nos dijeron que iban a firmar el convenio. Todos tenemos una tarea que hacer en nuestra casa, el Consejo debe resolver, no el gobierno. El 30 de octubre [2012] se hizo asamblea y el 100% de la gente está por el rechazo a la reserva de la biosfera. (Testimonio del C. Felipe Martínez Emiliano, Comisariado de Bienes Comunales de Mixtecapa, 2º Foro Regional, noviembre de 2012)

Luego de informar y resolver las dudas concernientes al problema agrario ya referido, el Prof. Teodoro Tomás Galeana –recién nombrado presidente del CRAADT- informa sobre los trabajos realizados en los dos Foros de La Ciénega. Enseguida se acuerda dar la palabra a varias personas que el Consejo ha invitado para fungir como sus asesores, para informar sobre el proyecto de RBM, sus implicaciones y riesgos para las comunidades. En la primera ronda de participaciones tuve la oportunidad de hablar, entonces todavía a nombre de un conjunto de profesores de la UNISUR, para exponer algunos cuestionamientos al proyecto RBM:

a. Porqué justificar el decreto de RBM por su alta biodiversidad regional, negando que esa biodiversidad persiste justamente gracias a los instrumentos culturales de las propias comunidades, que ahora se pretenden restringir;
b. La minuta de acuerdo firmada con el gobierno del Estado, no suspende el proyecto RBM, sino sólo el convenio entre la UIEG, CONANP y SEMAREN;
c. El riesgo para las comunidades es la pérdida de su capacidad para decidir sobre su territorio, pues el decreto faculta a la CONANP para determinar los usos del suelo en el área decretada; esto se sustenta legalmente no sólo en las atribuciones que le confiere la LGEEPA, sino también porque la Ley Minera establece que el aprovechamiento minero es el uso prioritario del suelo, por lo que tiene prelación sobre otros tipos de uso; esto se refuerza aún más por el hecho de que las concesiones fueron otorgadas antes que el eventual decreto, por lo que éste último no puede proteger frente al aprovechamiento minero, que sería primero en derecho; finalmente el Reglamento de ANP's derivado de la LGEEPA, otorga atribuciones al director de la reserva para autorizar aprovechamiento de recursos naturales, incluidos los de minerales, lo que abre mecanismos legales para que las empresas tramiten directamente con dicho director, sin pasar por aprobación de las asambleas agrarias.
d. Finalmente se aclara que el posible Consejo Asesor de la Reserva es de naturaleza consultiva, por lo que sus decisiones no son vinculantes con el manejo de la Reserva, cerrando así la posibilidad de injerencia de las comunidades.

En su turno, el representante de Tlachinollan, Armando Campos, explicó que existen diversos tipos de ANP's, que forman parte de una política internacional para proteger los bosques y que existen diversas categorías, siendo las reservas de biosfera una de ellas. En el caso de la Montaña, comenta cómo con información poco clara la CONANP convenció a algunas autoridades o núcleos agrarios para certificar áreas voluntarias de conservación y que son esas las que ahora constituirían el área núcleo de la reserva, donde definitivamente las comunidades ya no podrán hacer uso de los recursos ahí existentes. También refiere los cinco pasos que deben cubrirse previo al decreto:

1. Elaborar el Estudio Previo Justificativo (EPJ) y que fue enviado a las autoridades agrarias acompañado de un oficio que debían firmar y devolver antes de 21 días avalando el proyecto;
2. Aviso en el Diario Oficial de la Federación;
3. Proceso de consulta y opiniones, aclarando que no se requiere la aprobación por asamblea;
4. Manifestación de Impacto Regulatorio;
5. Publicar el Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Vertida la información "técnica" se dio la palabra a los Comisariados presentes para informar sobre la situación en sus respectivos núcleos agrarios; cuatro de los núcleos disponen ya de actas de asamblea rechazando los proyectos de la RBM y minero (Iliatenco Ejidal y Comunal, Malinaltepec y San Miguel del Progreso); otros cuatro ya informaron y acordaron en asamblea pero aún no reúnen las firmas del acta respectiva (San José Vista Hermosa, Colombia de Guadalupe, Mixtecapa y Huehuetepec); tres núcleos aún no convocan a asamblea pero se comprometen a hacerlo a la brevedad (Paraje Montero, Santa Cruz del Rincón y Pueblo Hidalgo), mientras que otros tres no acudieron al foro (Atlamajalcingo del Monte, Zitlaltepec y Cochoapa el Grande).

Las intervenciones de los Comisariados permitieron ir aclarando algunas cosas. En primer lugar, que el proyecto tiene varios años preparándose, como se puede constatar en la intervención del Comisariado de Bienes Comunales de Iliatenco:

> El proyecto de reserva no es de ayer, Taurino [Hernández] tiene 10 años que lo viene trabajando; muchos comisariados saben las estrategias para llegar a donde estamos ahorita; lo que derramó el vaso fue la firma del convenio, pero hay muchas estrategias, pudieron haberse metido por la vía de los comisariados, por eso tal vez algunos no están aquí; pero pueden entrar por los presidentes municipales (…) (Testimonio del C. Tomás García Evaristo, Comisariado de Bienes Comunales de Iliatenco, 2º Foro Regional, noviembre de 2012)

Quedó claro también cómo usaron los programas públicos a manera de carnada para convencer a los comisariados o a las asambleas:

> Toledo el 21 de julio de 2011 fue a Iliatenco, regresó el 3 de agosto acompañado de Taurino [Hernández] y otros secretarios de estado, les propusieron que vendrían muchos programas: carreteras, salud, educación, vivienda, PESA y maíz por bosque, pero que apoyaran el proyecto de RBM; exhibieron un documento firmado por los alcaldes de Cochoapa y

> Metlatónoc apoyando la RBM. (Testimonio del C. Tomás García Evaristo, Comisariado de Bienes Comunales de Iliatenco, 2º Foro Regional, noviembre de 2012)

El tema de la educación y el papel de la UIEG dentro de este conflicto volvieron a aflorar, suscitando diversas participaciones. El Prof. Teodoro Tomás opinó al respecto: "Ese rector no es de la zona, no le interesa el aire que vamos a respirar en la Montaña ni el agua que vamos a tomar, lo que le interesa al rector es el dinero, es formar pobres para explotar a los pobres."

Melitón Santillán cita una nota del periódico en la que el Secretario de Asuntos Indígenas, Melitón Navarro, opina que las comunidades no aceptan la reserva porque no están informados; ante ello pide a la gente del gobierno "que no vengan a confundir, porque en el gobierno siempre tergiversan las cosas; así ocurrió cuando la gente por ignorancia pidió una universidad y ahora estudian sus hijos para salir a engañar a 250 comunidades, pagándoles 4 mil pesos y a los maestros 20 mil pesos." Por su parte, al intervenir sobre el punto, Joel Valdéz opinó:

> Paulo Freire plantea la educación emanada del pueblo, que viene contrapunteándose con la universidad intercultural que tenemos aquí en La Ciénega, es una universidad que está creando profesionistas que van a matar al pueblo, por ahí Zeferino Torreblanca Galindo hizo este planteamiento hace siete u ocho años, ya cuajó y ahora ahí están sus efectos. Yo invito que reflexionemos cuales con las consecuencias que trae esta universidad, la podemos transformar, podemos hacerla una universidad popular, que ese es el planteamiento original de La Ciénega. Sin embargo hoy está distorsionada para joder al pueblo. (Testimonio del C. Joel Valdéz, 2º Foro Regional, noviembre de 2012)

Se propuso exigir no sólo la salida de Aréstegui, sino también la fusión de la UIEG con la UNISUR bajo el modelo de esta última, para garantizar que la educación realmente esté al servicio de las comunidades, lo que generó un intenso debate; ante la diversidad de propuestas y opiniones se acordó seguir analizando el tema en un siguiente foro.

Este debate sobre el papel de las universidades en la región volvió a aflorar en el 4º Foro de Paraje Montero, por lo que se acordó dedicar el siguiente encuentro exclusivamente a discutir este tema. Se encargó a los representantes de Tlachinollan, UNISUR y Centro de Estudios Ecuménicos que prepararan la dinámica de trabajo para tal ocasión. Fue así como el 5º Foro Regional, realizado en la comunidad de Ojo de Agua, Malinaltepec, el 26 de enero de 2013, logró convocar a 39 autoridades civiles y agrarias, y 256 invitados. El foro se organizó en tres mesas de trabajo para reflexionar sobre la educación superior en la Montaña, a partir de tres preguntas generadoras: 1. ¿Qué es educación para los pueblos?, 2. ¿Cómo debe funcionar la universidad?, y 3. ¿Cómo participan las comunidades en el gobierno de la universidad?

Luego de algunas horas de reflexión, cada mesa hizo llegar sus resolutivos a la plenaria, donde se discutieron y se tomaron acuerdos. En las Mesas 1 y 2 ¿Qué es educación para los pueblos? Fueron coordinadas por los CC. Teodoro Tomás Galeana y Simeón Arriaga

Galeana, Comisariados de Iliatenco y San José Vista Hermosa, respectivamente, resaltan los planteamientos:

- La educación actual no está enfocada en las necesidades de los pueblos, porque el gobierno no le conviene que los estudiantes expresen lo que quieren, son sometidos nuestros pueblos. Nuestros hijos todo tiempo están en su dominación.
- Traen un aprendizaje de otros países, no son aprendizajes que realmente nuestros pueblos necesita. En la educación del occidente dijeron que ya no vamos valorar nuestras costumbres. Para ellos somos estorbo, lo que enseñan ellos es ganar dinero, en la UIEG los enseña cómo nos van acabar nuestra vida. A ellos no les importan las costumbres de los pueblos, Los estudiantes no olviden sus pueblos.
- Necesitamos una educación libre, que provenga de nuestras costumbres, para el campo, y para defender al pueblo. Una educación independiente del gobierno. Que parta de las necesidades del pueblo y que los jóvenes tengan una profesión y no lo que el gobierno imponga
- Pensar desde la lengua, los tres niveles básicos que se abra un espacio de materia de lengua de los pueblos.

En las Mesas 3 y 4 sobre cómo debe funcionar la Universidad, Coordinadas por Samuel Arriaga y Pedro Francisco Huerta, se acordó lo siguiente:

- La enseñanza debe partir desde la lengua originaria. Dejar el pensamiento capitalista para involucrarnos más al trabajo comunitario y no seguir reproduciendo el mismo modelo educativo del sistema. Promover la autonomía de los pueblos, tal como dice el Convenio 169 de la OIT.
- Debe ser un espacio con espíritu, donde egresen estudiantes comprometidos con el pueblo, que incidan en el desarrollo comunitario, que sepan cómo trabajar la tierra y cómo defender el territorio. Que atienda las necesidades del pueblo, que tenga carreras propias para la región.
- Que la educación sea sustentada por el pueblo, no esperar un salario del gobierno. Que haya profesiones que vayan a ayudar directamente a sus comunidades y no de irle a servir al gobierno.
- Los pueblos, las autoridades y padres de familia deben ser los vigilantes de la educación de sus hijos, deben interesarse y pedir información sobre los programas educativos que la escuela maneja. Los padres de familia también tienen la responsabilidad de verificar si se está enseñando en relación con los “usos y costumbres”, porque si no se hace de esta forma tendríamos el mismo problema de la universidad intercultural del estado de guerrero (UIEG).
- Las asambleas deben ser el espacio donde se discuta sobra la educación que queremos. Debe invitarse a los jóvenes a asistir a las asambleas para que conozcan los problemas de las comunidades. Enseñar desde la visión de los pueblos. Retomar la forma de vida de los ancianos y no copiar otros estilos de vida.
- Es urgente planear la educación de las dos universidades UIEG y UNISUR donde se involucren autoridades, estudiantes y maestros.

Por su parte, las Mesas 5 y 6, Coordinadas por los CC. Felipe Martínez y Apolonio Cruz Rosas, debatieron alrededor de la pregunta ¿Cómo participan las comunidades en el gobierno de la universidad?, siendo sus reflexiones:

- Actualmente la UIEG funciona con un Consejo de Administración integrado por tres personas del gobierno estatal, tres personas por el gobierno federal y cuatro personas representantes de los pueblos, que no sabemos quiénes son. Hasta hoy nunca ha habido

una coordinación de trabajo entre la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y los pueblos.

- Que la Asamblea Regional o un Congreso convocado para tal fin, integre a un Consejo Educativo o Rectoral para representar e informar a los pueblos. Este Consejo puede estar integrado por ancianos de las comunidades, autoridades, profesionistas y estudiantes, que estén en constante relación para vigilar y construir la educación que se necesita.
- Para toda acción que pretenda realizar el rector, deberá consultar a los pueblos para que no suceda lo de la firma del convenio de la reserva de la biosfera.
- Que sean los pueblos quienes propongan el nombramiento del rector y su planta docente y quienes vigilen el uso de los recursos financieros, materiales y académicos de la UIEG.

Una vez escuchados los resolutivos de las mesas de trabajo, la plenaria dio por aprobadas las propuestas y agrega las siguientes:

- Hay la necesidad de hacer una movilización masiva para buscar del dialogo con el gobernador para darle a conocer nuestras propuestas.
- Asumir una postura firme contra la reserva de la biosfera y contra las mineras.
- Realizar el Sexto Foro Regional para tratar los temas de: conservación de los recursos naturales frente a la reserva de la biosfera, defensa del territorio frente a la invasión y el despojo por las mineras; criminalización de las luchas sociales (DEMANDA) y organización de los pueblos indígenas (rescate histórico y poder de los pueblos).
- Organizar una movilización a nivel región de la Montaña para hacer presión hasta encontrar la solución a nuestros problemas.

La dinámica y resolutivos del Foro son por demás interesantes. Como se planteó en el primer capítulo, uno de los escenarios en que se ha peleado por un proyecto comunitario de largo aliento, ha sido justamente el de la educación superior. Entre 2005 y 2007, los esfuerzos del gobierno estatal y federal por mediatizar el proyecto comunitario que se venía gestando, los llevaron a impulsar el establecimiento de la UIEG en la parte alta, generando conflictos de interés y una profunda división entre las comunidades. Es precisamente el trabajo del CRAADT lo que permite que, luego de muchos años, las comunidades de la parte alta y la parte baja, así como miembros de la UIEG y la UNISUR, se sienten en un foro público a discutir el *proyecto educativo* para los pueblos originarios de la Montaña. Este proceso se había iniciado en los foros locales y regionales para la creación de la universidad (entre 1999 y 2005) y profundizado en los tres Congresos Estatales de Educación Intercultural (2003, 2005 y 2007), pero fue justamente la imposición del proyecto gubernamental, lo que rompió los acuerdos trabajosamente logrados en estos años.

El 5º Foro inauguró otra etapa en la estrategia de movilización del CRAADT, pues dejaron la lógica de sólo informar y pedir opinión a la población, para en su lugar tratar de profundizar la reflexión comunitaria sobre temas específicos, en la idea de abonar a la construcción de una estrategia de desarrollo, integral y participativa, para la región. En

este momento, la fuerza del consenso logrado en la región gracias a los foros previos, permite vislumbrar la posibilidad de tener no sólo una estrategia defensiva frente a las amenazas externas, sino una estrategia proactiva, a través de la cual se pueda ir gestando un modelo propio y alterno. Se intentó replicar la experiencia en el 6º Foro, cuyo espacio originalmente estaría destinado a reflexionar sobre la conservación de los recursos naturales y la organización frente a la criminalización de la lucha impulsada por el gobierno. No obstante, como se detalla a continuación, las circunstancias obligaron a cambiar la estrategia y trasladar esta reflexión para una ocasión posterior.

El 9 de marzo de 2013 se realiza el 6º Foro Regional, esta vez en Huehuetepec, mpio. de Atlamajalcingo del Monte, con la presencia de 46 autoridades civiles y agrarias, y más de 190 asistentes[73]. El desarrollo de la agenda propuesta se ve momentáneamente interrumpido por la inquietud que genera la presencia de Floriberto González González, nuevo rector de la UIEG; se escuchan voces cuestionando su presencia o, incluso, pidiendo su salida; durante varios minutos se debate al respecto y la Mesa Directiva informa que su presencia es un acuerdo del Foro anterior y los motivos por los que fue invitado. Finalmente es emplazado a fijar su postura personal y como representante institucional sobre la problemática, para en función de ello decidir su permanencia.

En medio de la tensión de la asamblea, con nerviosismo González toma el micrófono y empieza agradeciendo la oportunidad de hablar en el Foro. Informa que fue nombrado en diciembre (2012) y tomó posesión el 7 de enero de 2013, aunque desde 2009 participó en la convocatoria pública donde salió electo Aréstegui. Aclara que no quiso asistir antes porque no tenía nada que informar, pero ahora quiere informar sobre la demanda a pobladores de la Ciénega, sobre el agua y sobre el estado de la UIEG, que está muy confrontada.

Pide disculpas por la participación de la UIEG en el proyecto de Reserva de la Biosfera, por los agravios que pudiera haber ocasionado la institución, reconoce que la relación de la UIEG con las comunidades estaba rota por la participación en el proyecto de RB, pero que han ido avanzando en el diálogo, aunque aún no logran que se restablezca el suministro de agua para la UIEG.

Comenta que bajó el salario a profesores de 20 hrs que cobraban como tiempo completo, terminó la relación laboral con personal de confianza que habían presentado las demandas penales contra gente de la comunidad. Sobre las demandas informa que de los 11 demandantes sólo ratificaron la denuncia 3 de ellos; el contador Alejandro Castellanos Bolaños, fue rescindido pero se desistió de la demanda; los otros dos son Hermes Cantú

[73] Relatoría del Sexto Foro Regional de Defensa del Territorio y Contra la Reserva de la Biosfera en la Costa-Montaña de Guerrero, realizado en Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Gro., el 9 de marzo del 2013.

Ramírez e Israel Pinacho Morán, pobladores de la Ciénega, que también fueron rescindidos y se negaron a retirar la demanda.

Sobre la Reserva de la Biosfera lee un acta de la 2ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la UIEG, del 9 de octubre de 2012 donde se acuerda que el rector se desista de los compromisos que tienen con SEMAREN sobre la participación en el proyecto. El 9 de octubre, Aréstegui (aún rector en funciones) gira oficio a Carlos Toledo donde informa dicho acuerdo.

Luego de su intervención, el presidente del Consejo consultó a la asamblea si le permitirían al Rector permanecer en el resto del Foro; la respuesta fue positiva y ese hecho marcó el inicio de la normalización de las relaciones entre la UIEG y las comunidades. No obstante, el tema de la UIEG y su papel en el origen del conflicto siguió siendo recurrente durante el foro, como se observa en la intervención del Antrop. Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan:

> Por eso es muy importante y que bueno que aquí está el rector Floriberto, y ese fue el pleito para definir ¿Para qué está la universidad aquí en el corazón de la Montaña? ¿Para quién? O sea, los jóvenes, los estudiantes de esta región, ¿A quién van a servir? ¿A dónde van a ir a pedir trabajo? ¿Qué tipo de estudiante, de universitario se está formando? ¿Qué tipo de carreras se están ofreciendo? ¿Cuál es realmente la intención de una intercultural dentro de este proyecto? ¿Hasta dónde se va a vincular la universidad en la defensa del territorio, del agua, de los recursos estratégicos? ¿O hasta donde más bien se va a generar mano de obra barata, para que sean ellos, los mismos jóvenes que hablan *Me'pháá* o *Na savi* o *Náhuatl*, los que ayuden a abrir más la puerta para que se puedan privatizar los recursos naturales? Ese es el dilema, y ese fue precisamente el quiebre que hubo con el rector Aréstegui, porque sin consultar y sobre todo en contubernio con Carlos Toledo, que siempre ha estado aquí en la Montaña, según defendiendo a los pueblos, desde que llegó con el PAIR hace 25 años, bueno, firmaron ese convenio y vieron fácilmente que los estudiantes podrían hacer la chamba para convencer de las bondades de la RB.
>
> Entonces hasta dónde realmente hay un compromiso ético, más allá que académico, de parte de esta universidad, para poder fortalecer este patrimonio que tienen los pueblos de aquí de la región, que son los pueblos más pobres de México y de América Latina (…) pero a las autoridades no les interesa la pobreza de la gente ni el abandono, lo que les interesa es la inversión y de aquí que hay un sinnúmero de obras estratégicas que se están construyendo en la Montaña, pensando no tanto en romper el atraso de los pueblos, sino pensando en cómo abrir los caminos para las empresas, se trata de facilitarles infraestructura. (Testimonio Antrop. Abel Barrera, VI Foro, marzo 2013)

Al tomar la palabra, el Prof. Teodoro Tomás hace una exposición sobre los antecedentes del problema para que la gente que recién se incorpora esté informada. Al hablar sobre la estrategia que se ha seguido, informa que por lo menos ocho núcleos agrarios han levantado sus actas de rechazo a la RB y la minería: Malinaltepec, Santa Cruz del Rincón, San José Vista Hermosa, San Miguel del Progreso, Mixtecapa, Iliatenco Ejidal y Bienes Comunales, y Huehuetepec; pero aclara que aún falta hacerlo en Paraje Montero, Cochoapa y Metlatónoc.

En ese mismo tenor, al hacer uso de la palabra, Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, comenta que:

> Es claro que este modelo que se quiere implantar aquí en la Montaña está construido desde otra manera de entender la apropiación y explotación de los recursos naturales. El gran problema es que este proyecto no ha sido consultado ni tampoco analizado, ni explicado en la lengua materna, en asamblea, con los principales, con todos los habitantes, sobre lo que va a significar este proyecto.
>
> A través del pago de servicios ambientales se busca que las comunidades firmen convenios en el sentido de que puedan recibir recursos económicos para proteger, cuidar y sobre todo poder ofrecer recursos a las empresas y el propio gobierno. Ahí es donde está el punto central: hasta dónde las nuevas reformas y los nuevos programas están apuntalando un modelo empresarial de explotación de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas.
>
> El recurso de RB que se quiere implantar en la región está pensado más en cómo explotar los recursos hídricos, con las plantas medicinales y obviamente con la riqueza mineral, aunque han dicho ellos que con el decreto se impide la entrada de las empresas.
>
> Tiene que consultarse de acuerdo a los principios internacionales de los derechos de los pueblos, sobre qué exactamente quieren, porque si no se hace eso, va a pisotear nuevamente los territorios y la voluntad de estas comunidades. (Testimonio Antrop. Abel Barrera, VI Foro, marzo 2013)

Por su parte, Armando Campos, también de Tlachinollan, hace un balance de los avances en la estrategia legal. Entre otros puntos informó de los problemas que están teniendo algunos núcleos agrarios al intentar registrar sus actas de asamblea en las que rechazan el proyecto de RB y la minería, todo porque los empleados del RAN han asumido un papel burocrático para obstaculizar el avance de esta medida legal. En esa misma intervención alerta sobre los nuevos intentos del gobierno estatal por abrirle camino al proyecto RB de la Montaña.

> (…) hay una campaña para que las autoridades acepten el proyecto de RB: a Cochoapa el Grande le ofrecieron un proyecto de Guerrero Verde, "para sensibilizar a la gente de que tienen que cuidar el bosque, de las zonas que tienen captación de agua", por eso se debe ser más cuidadoso, sobre todo al momento de firmar documentos, porque están tratando de aparentar consenso, estos proyectos son ganchos para que la gente vaya cayendo en el juego.
>
> (…) Esto no va a terminar; acaban de entrar nuevas autoridades federales y no sabemos si esto lo dejen pausado un mes, un año, o cuánto tiempo vayan a tardar en retomar este proyecto. (Testimonio Prof. Armando Campos Ochoa, VI Foro, marzo 2013)

En la idea de seguir generando conciencia entre la población sobre los problemas que se enfrentan y su origen, Luisa Guzmán Directora del Centro de Estudios Ecuménicos y asesora del CRAADT, interviene para contextualizar la situación y enfatizar la importancia de estar informados:

> La economía verde es vender todo lo que tenga que vender con la naturaleza: es vender el agua, el aire, las plantas; hoy en día ya no hay estado nacional que pueda soportar la presión de las grandes corporaciones trasnacionales; esta presión va a ser insoportable para los gobiernos de los países ricos en recursos naturales, entre ellos el nuestro.

> Con el dinero que logramos juntar el Foro pasado, que fueron $366, se compraron los discos que ahora les vamos a distribuir, que traen nueve videos, uno que hicimos con los compañeros de Tlachinollan y que tiene que ver con la RB; los demás videos tiene información adicional para que todos estén bien informados; pero queremos que los vean y los compartan en sus comunidades, no se los lleven para guardarlos, recuerden que estamos en una situación de emergencia, donde hombres, mujeres, niños , la gente de todas las comunidades debe de involucrarse y por eso debemos tener todo este gran panorama de lo que está pasando. (Testimonio Lic. Luisa Guzmán, VI Foro, marzo 2013)

El 13 de abril de 2013, el Comité Directivo del CRAADT convocó al 7º Foro, en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande. Luego de un camino largo y difícil hasta el lugar, el Comité se encontró con el inconveniente de que no se habían tomado previsiones para desarrollar el Foro, por lo que se tuvo que desarrollar en el pasillo de la presidencia municipal, parcialmente ocupado con materiales para construcción y expuesto al intenso ruido de la calle y el mercado. Aunque el número de personas era sensiblemente menor al de los foros anteriores, se notaba el interés de los asistentes, por lo que se improvisó un presídium y dieron comienzo los trabajos.

Luego de las presentaciones, toma la palabra Saúl Morán, para empezar a informar:

> Les informo que el Comité Regional en Defensa del Territorio, sesionó en Mixtecapa el día 13 de abril para elaborar la Convocatoria y los puntos del orden del día, hay un punto de información sobre el proyecto federal de creación de reserva de la biósfera en la Montaña que los comuneros de Cochoapa el Grande conozcan los contras del proyecto, este tema de reserva de la biósfera y proyectos mineros lo van abordar las cuatro instituciones asesoras (Tlachinollan, UNISUR, CEE, UIEG), les pedimos su apoyo en la organización de la información. El otro asunto es la presentación del documento que recoja el sentir de rechazo que se manifestó en los foros anteriores este documento se llevará en Chilpancingo para que de una vez CONANP, SEMAREN, SEMARNAT escuchen el rechazo generalizado de los pueblos sobre el proyecto, les pedimos que nos apoyen a redactar un solo documento que se someterá a consideración de los presentes para que se analice se hagan las adecuaciones, en este mismo documento se manifieste la solidaridad y apoyo total al movimiento magisterial que se encuentra en lucha contra la reforma educativa, condena enérgica de la represión del día viernes al magisterio, respaldo a la crac-pc. Quedamos de plantear en el foro de pasar a las acciones que sea el último foro necesitamos salir a la capital dar a conocer nuestro rechazo ojala podamos empatar nuestras acciones en el marco de la jornada de lucha del magisterio. (Testimonio Prof. Saúl Morán, VII Foro Regional, abril 2013)

Le siguieron otras intervenciones, en las que resultó evidente que a la gente le faltaba información sobre la problemática, que había mucha confusión sobre si el proyecto de RB aún seguía o no. Tratando de aclarar el panorama, intervine para comentar que el secretario de Medio Ambiente Carlos Toledo Manzur, que fuera el principal promovente del proyecto de reserva de biosfera, convocó a una conferencia de prensa en Chilpancingo anunciando que: “El gobierno del estado se desistía del proyecto, salió eso en los periódicos publicado el día Miércoles, al día siguiente [el jueves] sale la noticia de que el gobernador le había pedido la renuncia. Ayer [viernes] se hizo oficial: Carlos Toledo entregó su cargo y tomó posesión un nuevo funcionario de ese mismo equipo. Traté de reflexionar en voz alta sobre el significado de estos hechos, interpretando que su salida

pudiera relacionarse con la entrega de firmas, con la presión política que han estado haciendo los núcleos agrarios, por eso probablemente fue la declaración de desistirse del proyecto de reserva. Pero al comentarlo con el padre Melitón Santillán, el profesor Teodoro Tomás y otros miembros del Consejo, coincidíamos en que no hay que confiarnos, probablemente como ha ocurrido en otras ocasiones cambian de nombre los proyectos, el que ahorita anuncien que lo paran no significa que necesariamente ya no lo van a intentar. Por eso el mensaje que vertí a la asamblea era en el sentido de mantenernos organizados, y que era necesario reforzar es la información en los núcleos agrarios y por eso se pidió nuevamente a todas las autoridades agrarias y municipales, que en las asambleas informen sobre este problema.

Lo más relevante del Foro, sin duda fue la lectura y aprobación de un documento que se había acordado preparar para esta ocasión. Redactado por los integrantes de la Mesa Directiva y sus asesores, el documento resume los planteamientos consensuados hasta el momento y los expone con argumentos jurídicos y políticos. Representantes de diversas comunidades, que suelen acudir a cada uno de los foros, debatieron y complementaron la propuesta hasta que fue consensuada la postura. Se acordó también formar una comisión, integrada por los comisariados de todos los núcleos agrarios, para ir a entregarlo ante los poderes ejecutivo y legislativo en la ciudad de México. La comisión sería acompañada por miembros de UNISUR y CEE, quienes buscarían facilitar condiciones de logística.

Este documento, referido como la “Declaración de Cochoapa” (ver anexo 1), establece con mucha claridad la postura comunitaria; algunos de los puntos centrales se resumen en: a) Rechazo al control gubernamental sobre los territorios ancestrales y sus formas de vida, b) Se exige respeto a sus territorios y derechos como pueblos originarios, c) Se rechaza el decreto de RB, la certificación de las supuestas áreas voluntarias de conservación y las concesiones mineras, pues en ninguno de los casos hubo consulta previa y eso violenta sus derechos como pueblos originarios, d) Se reivindica el derecho a disponer de sus propias instituciones educativas, para que respondan a sus necesidades y cultura.

De las diferentes comunidades involucradas en el movimiento, es justamente Cochoapa la que se encuentra más aislada de las demás, con un camino en pésimo estado que implica un reto para la mayoría de los vehículos y un recorrido de muchas horas. Por eso no es de extrañar la poca participación que habían tenido en los foros anteriores y la visible falta de información. Por ello el Foro siguió, tratando de recapitular la información que se había vertido en los eventos previos. Sin embargo, hubo necesidad de cortar la asamblea al ir avanzando la tarde, pues además de su mal estado, el camino es peligroso e inseguro. El diputado local por ese distrito y originario de esa comunidad, trató de explicar que la ausencia de autoridades y la poca asistencia tiene que ver con el conflicto político que se vive en ese municipio, que ha llegado al extremo de que existan dos personas que se

ostentan como comisariados de bienes comunales, cada uno de ellos respaldado por un diferente partido político (PRI y PRD); argumentó la importancia de la visita y pidió que el siguiente foro regresara a esta localidad, para lo cual se comprometió a ofrecer mejores condiciones en la siguiente ocasión; la petición fue aceptada, en un esfuerzo por involucrar al núcleo agrario con la mayor extensión territorial de toda la región. Ante la falta de autoridades locales que ofrecieran alimento a los visitantes, cada delegación tuvo que resolver de forma particular el conseguir alimento. Los temores sobre la inseguridad del camino se vieron confirmados cuando uno de los vehículos estuvo a punto de ser asaltado, lo que se frustró sólo por el hecho de viajar en caravana con el resto de visitantes foráneos.

Un mes después, en mayo, volvimos con toda la mesa directiva a sesionar nuevamente en esta localidad, sólo para encontrar un panorama aún más desalentador que la ocasión anterior: mucha menos gente y ninguna autoridad presente. Aparentemente los pocos asistentes pertenecían a un bando político diferente del que acudió en la primera ocasión, por lo que se procuró ofrecer nuevamente la información, esta vez de forma más breve, para poder regresar más temprano, ante el temor de tener que enfrentar de nuevo la posibilidad de un asalto. El enorme esfuerzo de acudir en dos ocasiones hasta esta localidad aunado al escaso provecho obtenido, fue muy desmotivante para los participantes y generó la impresión de que el movimiento se sumía en un bache.

Una coyuntura inesperada ayudaría a remontar este estado de ánimo. En un evento público al que acudió el recién nombrado Obispo de la Diócesis de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga, algunos párrocos y habitantes de la región se le acercaron para invitarlo al siguiente foro, que se realizaría en la cabecera municipal de Malinaltepec, a lo cual el Obispo accedió.

Este 9º Foro se realizó el 15 de junio de 2013 y logró convocar a gran cantidad de asistentes que llenaron el auditorio municipal, en buena medida por la expectativa que generó la presencia del Obispo. En sus palabras de bienvenida, el Lic. Acacio Flores Guerrero, Coordinador Municipal en Malinaltepec, planteó la relevancia y legitimidad el movimiento:

> Hoy estamos aquí para hablar sobre los daños que nos haría la minería y el proyecto de reserva de la biosfera, si lo permitimos (…) que los comentarios que hoy hagamos, sean comentarios que fortalezcan la cultura de nuestro pueblo, que fortalezcan la acción que estamos realizando en contra de las minerías, en contra de los proyectos donde quieren acaparar lo poco que tenemos hoy en día.
>
> Si no unificamos criterio y no unificamos idea créanme que ningún pueblo va a ser posible, sería un pueblo fantasma, como los pueblos que dejan las empresas mineras, cuando llegan y acaparan, explotan todo lo bueno y dejan todo lo malo para los pueblos, es más, los corren de sus pueblos. Ton's yo creo que no vamos a permitir eso, no vamos a dejar que eso realicen las empresas, no vamos a permitir que eso lo hagan los gobiernos estatales y federales, si no

> levantamos hoy la voz, creo que después vamos a dejarle puro desecho a nuestros hijos, y creo que no queremos eso para nuestros hijos; por eso es importante que dejemos una semilla que ellos nos agradezcan algún día, que defendimos nuestro territorio y defendimos nuestra naturaleza. ¡Eso nos van a agradecer nuestros hijos el día de mañana! Por eso agradezco a los vecinos por su aporte económico, en mano de obra y más tarde nos va a poder compartir una tortilla para todos nosotros. (Testimonio Lic. Acacio Flores Guerrero, IX Foro Regional, junio 2013)

Al hacer uso de la palabra, Monseñor Dagoberto Sosa Arriaga agradece la invitación al Foro y manifiesta su interés por conocer los trabajos de estos foros, pues él apenas tiene mes y medio en la región. Enseguida da lectura a un pasaje de la biblia que alude a la importancia de la conservación y valoración de la naturaleza, y posteriormente hace una reflexión sobre la responsabilidad humana para su conservación, para evitar la destrucción por avaricia, para promover una convivencia en equilibrio con la madre tierra que nos da de comer:

> Permítanme felicitarles por ese deseo de cuidar la naturaleza, de tener bien firmes sus propósitos; es tarea de ustedes como ciudadanos, como gente de esta comunidad de la montaña, conservar la Montaña, servirse de ella, conservarla, explotarla para su bien, nunca en contra de la naturaleza, si no siempre para bien de la naturaleza y bien de todos los habitantes. Quiero decirle que cuentan con mi bendición, con mi compañía en este día porque quiero saber bien cómo van trabajando y animarlos en esta tarea que tienen (…) hay muchas fuerzas que quieren destruir lo creado por dios, pero nosotros tenemos ese mandato desde la biblia de conservar y aprovechar la naturaleza, de sus bienes, para que crezcamos como personas (…) quiera dios que este foro tenga éxito y cada uno de nosotros sea consciente de la tarea que tenemos (…) (Testimonio Obispo Dagoberto Arriaga Sosa, IX Foro Regional, junio 2013).

La presencia del Obispo fue uno de los momentos políticos más importantes del movimiento. La fe católica tiene un papel central en la vida de las comunidades, por lo que la presencia del máximo jerarca de la iglesia en la región, en uno de los eventos más grandes organizado por el Consejo, representó un apoyo político y moral sin precedente. No se debe olvidad que los párrocos adscritos a la Pastoral Social de esta diócesis han sido elementos centrales en todos los procesos organizativos en la región, cosa que no es bien vista por algunos actores. En este proceso particular, el liderazgo ejercido por el Pbro. Melitón Santillán lo hizo acreedor a un fuerte golpeteo en la región y los medios de comunicación, pues las voces oficiales quisieron enfrentarlo con las comunidades y hacerlo responsable de la violencia que se pudiera generar. La presencia del obispo representó un respaldo fundamental al trabajo de Santillán y otros párrocos de la región.

Después de agradecer la intervención del Obispo, el Prof. Teodoro Tomás comenta sobre la entrega de la Declaración de Cochoapa al gobierno federal:

> ….Estos foros ya son muchos pero tienen fruto, que sí es difícil, que sí nos quita tiempo, pero tenemos que hacerlo porque es una necesidad. Nosotros en Cochoapa levantamos un manifiesto, en donde dejamos claro que no estamos de acuerdo en que el gobierno federal decrete una reserva de la biosfera en esta región de la Montaña. Los que estamos comisionados por el pueblo, como comisariados, llevamos el documento a México, a Los

> Pinos, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Tal parece que nuestra lucha no es inútil; el día de hoy el compañero Inocencio Navarro Solano, Comisariado Bienes Comunales de Malinaltepec, nos entregó ya una respuesta del gobierno federal. (Testimonio Prof. Teodoro Tomás, IX Foro Regional, junio 2013)

El Secretario del Consejo, Prof. Apolonio Cruz, toma el micrófono para dar a conocer a la concurrencia el Manifiesto y la respuesta de la CONANP, pero antes hace una reflexión sobre el simbolismo que para el movimiento representa la presencia del Obispo de la diócesis:

> Señor Dagoberto Sosa Arriaga, muchas gracias por venir a dar fé del trabajo que estamos realizando aquí en la Montaña y certificar los trabajos; esto quiere decir, es un indicador importante para todos nosotros, de que vamos por buen camino, porque al contar con su presencia quiere decir que aprueba lo que nosotros estamos haciendo; y lo estamos haciendo pues de buena fe, en defensa de nuestra naturaleza, que nuestros ancestros supieron cuidar, pero que nosotros estamos viendo el riesgo que corre por los proyectos del gobierno federal y estatal, y que también entendemos bien que nos toca defender lo nuestro; estamos en nuestro territorio y tenemos que defenderlo, tenemos muchas riquezas pero no es por tenerlas, sino porque nuestros ancestros supieron cuidarlas, así que también nosotros vamos a conservar. Más ahora nos anima, nos da valor con la presencia de ud. y quiero decirle que los sacerdotes que hoy están presentes y otros que no, también ya nos han estado acompañando, eso quiere decir que la iglesia ya también es incluyente, ya la iglesia también toma en sus manos la vida y el trabajo social de todos sus fieles. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz, IX Foro Regional, junio 2013)

El documento de respuesta de la SEMARNAT a la Declaración de Cochoapa el Grande, es un oficio fechado el 31 de mayo de 2013, firmado por David Gutiérrez Carbonell, Director General de Conservación para el Desarrollo, en el que dos terceras partes las dedica a transcribir el propio manifiesto de las comunidades, para luego intentar "responder" con una serie de supuestos y lugares comunes. En este documento tratando de tranquilizar se afirma que "Desde octubre de 2012 el personal de CONANP suspendió toda actividad relacionada con la RB" y que "El Gobierno de Guerrero en mayo de 2013 declaró que el proyecto se suspendía", aunque ninguna de las dos afirmaciones aludidas implica una cancelación definitiva del mismo.

Cuando se pasa al tema de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, se limita a repetir aspectos de la normatividad como si eso mismo garantizara su cumplimiento, vertiéndolos como si informara a un tercero y no fueran las propias autoridades comunitarias quienes estuvieran interpelando los procedimientos efectuados: "Las ADVC son instrumentos de buena fe establecidos a petición de parte", "Estas ADVC son resultado de un proceso amplio, con consenso de las comunidades, pues se requería de asambleas duras, se hicieron recorridos de campo con pobladores locales. Las actas que obran en los expedientes son la prueba", "El polígono de cada ADVC fue propuesto por cada comunidad y de ninguna manera se incluyen parcelas agrícolas pues la ley lo prohíbe", "No existe ninguna restricción de uso o manejo que no haya sido enviada por las comunidades en su respectiva propuesta", "El responsable de hacer valer el plan de

manejo, a propuesta de las comunidades, es el propio comisariado agrario", "La certificación como ADVC puede ser útil para resistir, negociar o atenuar la posibilidad de ser objeto de proyectos de minería". Como se puede observar, en ningún momento existe un atisbo de duda sobre el procedimiento seguido, no hay ninguna intención de diálogo para conocer la problemática y se asume una actitud como si las autoridades comunitarias estuvieran cometiendo una gran equivocación al rechazar el proyecto y la certificación.

El documento referido remata diciendo "Hay una contradicción radical, pues algunos firmantes de la declaración están trabajando en proyectos con subsidios de la CONANP y han dicho que si bien no aceptan la RB sí quieren participar en los programas de conservación", reconociendo implícitamente que los programas con subsidios que maneja la dependencia están de algún modo condicionados al establecimiento de la RB, y con la idea implícita de que la conservación sólo es tal desde la lógica de la CONANP. Finalmente, contesta la demanda central de las comunidades diciendo "Si deciden dar por terminada la certificación sólo deben hacer llegar un acta de asamblea dura registrada ante el RAN".

Leídos los documentos y para ir entrando en materia, interviene el Prof. Teodoro Tomás, presidente del CRAADT, para contextualizar la importancia de esta asamblea: "Creo el trabajo que estamos haciendo no es un trabajo en vano, no es trabajo donde nos reunimos para pelear, sino que estas reuniones, estos foros se han hecho para unificarnos, para defender nuestras tierras, para defender toda la diversidad biológica que hay en la Montaña", enfatizando el simbolismo de estar reunidos en el pueblo de Malinaltepec, que es "el origen, la madre de todo el pueblo *Me'pháá*".

Posteriormente Saúl Morán intervino para hacer una reseña histórica de los nueve foros previos (el foro local en La Ciénega y los ocho foros regionales), enfatizando el carácter de la lucha, el papel protagónico que ha jugado la mesa directiva del CRAADT y los resultados alcanzados hasta ese momento:

> Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas *Me'pháá* y *Na savi*, el único objetivo que nos ha movido a participar en esta lucha es la defensa de nuestra madre tierra, así como un principal de este pueblo lo decía con palabras sabias en el primer foro, me refiero al señor Félix Ramírez: "después de la conquista surgieron los encomenderos españoles que trataron de escriturar las tierras de los indígenas para después venderlas; los malinenses defendieron para no permitir que los españoles escrituraran la tierra. En aquel tiempo había mucha ignorancia pero aun así los *Me'pháá* defendieron sus tierras. Hoy vivimos un caso similar en el que nos vienen a arrebatar lo que es nuestro, el sistema capitalista nos engaña fácil pero nosotros vamos avanzando; hoy con mucha razón tenemos que defender lo nuestro, hoy los que ya estamos caducando venimos a dar un ejemplo a la juventud para que luche; nosotros no venimos a preguntar cuáles son los beneficios, sino que venimos a rechazar la reserva, venimos a rechazar rotundamente el decreto del gobierno, ya es hora que los indígenas levantemos la mano para decir No! Al gobierno.
>
> (…) A partir del Foro Regional en La Ciénega, el llamamiento y la conducción de los Foros que se llevaron a cabo en las comunidades de Mixtecapa, Paraje Montero, Ojo de Agua, Huehuetepec, y Cochoapa el Grande, quedó en manos del Consejo Regional. Es de reconocer

> que en estos eventos hubo posturas divergentes, relacionadas con temas como el papel de la UIEG y el tipo de educación intercultural que requieren los pueblos para su desarrollo, pero siempre el Comité, sin que se dejen de lado estos temas que se tienen que seguir analizando, exhortó a mantener la unidad de los pueblos por encima de posiciones individuales que nada fortalecen la unidad de los pueblos en defensa de su territorio.
>
> A estas alturas tenemos los siguientes logros: a) Cancelación del convenio firmado entre la UIEG, CONANP y SEMAREN, b) Salida de la UIEG de Rafael Aréstegui Ruíz y sus colaboradores, que demandaron penalmente a las autoridades comunitarias, c) Cancelación del proyecto federal de creación de la reserva de la biosfera de la Montaña. (Testimonio Prof. Saúl Morán, IX Foro Regional, junio 2013)

En representación de Tlachinollan, Armando Campos Ochoa, informa que hasta la fecha se tienen registrados 19 núcleos agrarios que han levantado actas en asambleas realizadas con las formalidades de la Ley Agraria, 11 núcleos agrarios han levantado actas rechazando la RB y se han inscrito en el RAN; 15 actas de rechazo a los proyectos mineros, y aparte Iliatenco, San José Vista Hermosa, Malinaltepec que levantaron en rechazo a ambos tipos de proyectos. Sólo tres actas han sido calificadas como legalmente inscritas en el RAN: rechazo minería de Zapotitlán Tablas, San Miguel del Progreso y Zitlaltepec, mientras que el resto ya fueron entregadas en el RAN y se está esperando la calificación. Hace también un informe detallado sobre las concesiones mineras, su ubicación, dueños, duración, superficie y núcleos agrarios afectados.

Al hacer uso de la palabra, la Lic. Luisa Guzmán, Directora del Centro de Estudios Ecuménicos, hace una reflexión sobre la coyuntura y no caer en engaños, a no confiarnos pensando que la lucha se ha ganado:

> Aunque en sus declaraciones de prensa Toledo afirma que no se impondrá ningún proyecto sin respaldo de las comunidades, pero también afirma que el gobierno del estado no quitará el dedo del renglón en el tema de la conservación y buscará crear una reserva comunitaria. A los pocos días fue destituido.
> Esto nos debe dejar claro que no hemos ganado, que la lucha será larga y es preciso estar atentos. Sabemos que la lucha no termina, que debemos seguir haciendo esfuerzo para que las comunidades tengan la información necesaria acerca de lo que es la defensa del territorio. (Testimonio Lic. Luisa Guzmán, IX Foro Regional, junio 2013)

Vertida la información, se invita a los presentes a manifestar sus puntos de vista. Algunas participaciones expresan dudas sobre la información, la mayoría muestran la determinación de mantenerse en la lucha por su territorio. Al usar el micrófono, el Prof. Apolonio Cruz alude en primer lugar al documento de la CONANP, reflexionando sobre lo impropio de la respuesta, para después referirse al tema de los programas gubernamentales y los compromisos que pueden implicar.

> Miren compañeros, en relación a la respuesta de la SEMARNAT, a mí me parece sólo como un documento de respuesta, no es un documento serio! Yo siento que quizá nos va a dar trabajo, va a costar sacrificio, tiempo, dinero, pero sería bueno ir pensando en un documento más serio, como un acta de acuerdos entre la comisión de aquí del Consejo y las autoridades que tienen que ver con esto, CONANP, SEMAREN, y que esa acta estuviera certificada ante notario público; entonces sí estaríamos hablando de una respuesta seria; ahorita es como cualquier

> funcionario, ahí les va un oficio nada más y no se preocupen, pero ¿quién nos puede garantizar que ese oficio es serio, que están hablando con la verdad? No sabemos.
>
> La otra cosa que quiero proponerles y que me va a apoyar aquí el maestro Lucio es que nosotros sigamos gestionando una solicitud de cancelación del proyecto de reserva de la biosfera y de las mineras; que cada núcleo agrario hiciéramos llegar esa solicitud ante el gobierno federal, para que también tengamos elementos, porque dice ahí que cada comisariado hizo su acta, se hicieron recorridos en las comunidades, pero ¿Será cierto que cada comisariado mandó sus documentos? ¿Solicitó traer el proyecto de la biosfera? ¿O nomás están contestando así? ¿Qué comisariado fue? Y hay que solicitarle a las dependencias que muestren esos documentos, si efectivamente los núcleos agrarios entregamos esa documentación.
>
> Luego, hay otra cosa que parece que no es delicada, pero yo sí lo veo delicado, cuando en el oficio dicen que los comisariados están recibiendo recursos de los programas, entonces quiere decir cuando uno recibe algo es que adquiere un compromiso, y si estamos comprometidos pues que se hable con la verdad. Eso es para poder exigirles a ellos, porque orita nada más fue un oficio, para mí no es un documento serio, o si estoy mal corríjanme compañeros. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz, IX Foro Regional, junio 2013)

El tema de la participación en los diferentes programas de gobierno, que ya había sido motivo de debate, volvió a aflorar con la respuesta de la CONANP y la idea que recibir estos recursos puede ser una contradicción, por lo que sería necesario discutir sobre los compromisos que ello implica. Al intervenir, el Comisariado de Pueblo Hidalgo argumentó que participar en dichos programas y aspirar a tener esquemas propios de conservación son cosas diferentes. Puso énfasis en el trabajo colectivo, en la necesidad de unificar esfuerzos, coincidiendo con la idea planteada en otros foros, de diseñar una estrategia comunitaria regional de cuidado del territorio.

> Por eso debemos ir analizando, porque de los pueblos que están aquí muchos tienen sus programas, varios están que si el ecoturismo, que la cañada, que la cascada…varios comisariados están ahí. Yo creo que una cosa es biosfera, como proyecto que se quiso hacer aquí en la punta de la Montaña, y otra cosa es cuidar nuestro medio ambiente nosotros. (Testimonio del Prof. Pedro Galeana Hernández, Comisariado de Pueblo Hidalgo, IX Foro, junio 2013)

El tema de los recursos provenientes del gobierno suele generar polémica, pues la gente sabe que siempre hay algún tipo de costo al recibirlos. En ocasiones existe algún condicionamiento explícito en las reglas de operación, diseñadas desde el escritorio de algún burócrata, por lo que pocas veces responden a la cultura de la gente o en ocasiones francamente lesionan la dinámica de las comunidades y terminan generando lógicas perversas de divisionismo, dependencia o clientelismo político. Otras ocasiones se establece una especie de *compromiso implícito* con el funcionario que intermedia o gestiona persiguiendo un interés diferente al del programa en cuestión. Se tiene tan normalizada esta situación que a veces se olvida que se trata de recursos públicos, que se debe luchar por recibirlos sin condicionamiento y con reglas de operación que verdaderamente impulsen la conservación ambiental y el fortalecimiento del tejido comunitario.

La asamblea se interrumpe un momento dado que el obispo debe retirarse, por lo que dirige un breve mensaje en el que reconoce que la situación es nueva para él pero que, como bien dijo Luisa Guzmán, los obispos en toda AL tienen bien conocido los problemas generados por el extractivismo impulsado por las empresas con la colusión de algunos gobiernos, que ésta no es una lucha ajena para la iglesia, por lo que invita a seguir con esos esfuerzos, siempre por la vía del diálogo, de la paz, de la conciliación, defendiendo lo que es suyo. Pide que los asistentes se pongan de pie para dar su bendición y que lo acompañen rezando el padre nuestro.

El décimo Foro fue convocado en Iliatenco[74], una de las comunidades emblemáticas por la importancia de sus yacimientos mineros, lo que se deduce porque las tres concesiones otorgadas en la región afectan alguna porción de su territorio, sea ejidal o comunal. Desde el inicio del evento Teodoro Tomás, autoridad de este lugar y uno de los principales impulsores del Consejo, propició un ambiente combativo y de mucha energía, retomando las palabras del Obispo en el foro anterior, para argumentar la necesidad de cuidar y proteger el territorio y para apuntalar la imagen del padre Melitón Santillán, que ha debido cargar diversos señalamientos y descalificaciones por su papel en el movimiento.

> …así lo dijo el Obispo "para que cuidemos el bosque, lo protejamos, porque del agua dependen nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos y los que vienen, y que sigan teniendo agua como nosotros, que sigan teniendo estos bosques", así decía, "para que no sufran, porque se considera que dentro de 30 años la guerra va a ser por el agua".
>
> (…) y eso no es mentira compañeros, eso es cierto, y todavía en Iliatenco tienen sus bosques, por eso aquí tajantemente el comisariado Tomas Casillas, y el otro maestro que era el ex comisariado, convocaron a la gente y dijeron, amigos mineros mejor váyanse antes de que los cuelguen, porque el pueblo esta enojadísimo, cuando vinieron a informar aquí al pueblo que tienen minas, ¿Cuándo?, ¡Nunca! simplemente se presentaron con un Oficio de autorización de la Secretaria de Economía y que somos de tal empresa y somos mexicanos, y somos de Chilpancingo y por eso venimos a trabajar, y ustedes también van a tener un buen sueldo, ahí está el comisariado, ¿Cuánto ofrecían de sueldo? $150 iba a ser nuestro sueldo miserable, pero gracias a que los comisariados se pusieron bien y nosotros que dijimos esos 150 no nos sirven, valen más nuestras tierras, (…) y gracias a dios que en ese tiempo, nadie estuvo a favor de los mineros, todos dijeron aquí no se permite la entrada de la minería.
>
> Por eso compañeros (…) vamos a agradecerle tanto a un hombre que no es perfecto, nadie es perfecto en esta vida, pero hacemos lo mejor que se puede, y entonces al padre Meli, el definitivamente es de aquí , a veces yo escucho "ese Meli está loco, anda provocando a la gente"; luego los periódicos en contra de Meli, ahí en Malina, ahí van unos a vender periódicos, porque esa gente está del lado del gobierno, porque a ellos no les gusta que estemos así de organizados, para ellos es un mal, es una enfermedad para el gobierno, el gobierno quiere que andemos todos los días con chinicuil, eso si quiere, aunque sea una bebida barata, adulterada, para que el pueblo este dormido, y ellos a explotar el país.

[74] Iliatenco es cabecera del municipio Iliatenco de Montes de Oca, uno de los últimos en constituirse. Se aprobó en la primera década de este siglo por el gobierno priista de René Juárez, escindiendo territorio al municipio de Malinaltepec después de que la oposición ganara aquí las elecciones municipales.

> Y yo con esto, con esta pequeña argumentación por los compañeros que están aquí, los que somos de la Coordinadora, hemos hecho lo que hemos podido, aquí cada comisariado se tienta de su bolsa, aquí nadie hemos pedido recurso y nunca hemos hecho una petición al gobierno, (…) Porque sería muy incongruente que yo vaya a gritarle al gobierno y todavía le diga "oye dame para mi pasaje", sería mucha vergüenza, como lo hacen algunos. Por eso les decimos compañeros, la salida a México fue de nuestro propio bolsillo, yo le dije a mi comisariado, "hermano si cayó por ahí un acta de posesión pues dame eso para llevar porque me voy a México", y le doy la gracias al Centro de Estudios Ecuménicos y UNISUR, ellos fueron los que nos ayudaron en México, nos pusieron un carrito para movernos de los Pinos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Aquí están los comisariados que se fueron a hacer esa entrega, para que vean que aquí quien sostiene esa lucha es el pueblo (…). (Testimonio del Prof. Teodoro Tomás, IX Foro, junio 2013).

Sobre los intentos de las mineras para entrar el territorio de Iliatenco, el Comisariado de Bienes Comunales aportó algunos detalles sobre la posición de la comunidad, las actas que han levantado y la respuesta del RAN que intenta obstaculizar el proceso.

> Yo voy a reforzar lo que ya se dijo sobre las empresas mineras que llegaron en Iliatenco. Primero llegaron a que se les diera permiso, pero llegaron con un oficio ya hecho, donde querían dos acompañantes o peones que ganarían 150 pesos y les dije que no. Recientemente había recibido el cargo de Comisariado, fue en octubre del 2010 cuando llegaron; reuní unos principales -porque aquí hay consejeros en este núcleo- y entonces platicamos que lo llevemos al rango de una asamblea de comuneros y ejidatarios. Y entonces se llevó la asamblea un 6 de Noviembre del 2010, en donde todas las personas, todo el pueblo dijo que no a las empresas, ningún voto a favor de ellos, aunque ellos ofertaban caminos, construcciones de escuelas, de todo tipo de infraestructura, de lo que haga falta, agua potable, drenaje.
>
> Desde entonces hicimos nuestra acta de asamblea de no a la minería, la enviamos al RAN y no la aceptaron, posteriormente hicimos otra acta el año pasado y nuevamente la rechazaron, por ahí tengo el oficio de que no, y entonces le pregunte a un abogado de la Procuraduría Agraria, bueno por ahí viene el asunto, y entonces él me dice "parece que está bien, aquí en el oficio dice que carece de artículos, pero no hay problema aunque no carezca de artículos, cuando el pueblo, la mayoría de los comuneros registrados dicen no a la minería, pues no, no hay necesidad" (Testimonio del C. Tomás García Evaristo, IX Foro, junio 2013)

En las páginas precedentes se ha intentado, dando voz a los propios actores, mostrar la riqueza de la participación ciudadana y la complejidad que implicó construir esta institución comunitaria. El epígrafe siguiente intenta hacer una valoración de conjunto que permita entender los logros y limitaciones de tipo organizativo de las comunidades a través de su Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.

El significado de los Foros Regionales

Obviamente, cada uno de estos Foros representó una nueva responsabilidad para cada uno de los Comisariados involucrados, cada uno con su correspondiente inversión de tiempo, recursos y esfuerzo. Por eso no se debe perder de vista que los movimientos son construcciones sociales. Más que sólo una consecuencia de crisis o disfunciones, más que una expresión de creencias, la acción colectiva es "construida" gracias a una inversión

organizativa. Aquí la "organización" no es una característica empírica, sino un nivel analítico. Mantener organizados a grupos de individuos y movilizar recursos para la acción significa distribuir valores, afrontar costos y enfrentar limitaciones y condicionantes a la acción, pero ni los recursos ni las constricciones pueden ser activados al margen de la acción en sí. En ese sentido, Tarrow afirma:

> Los movimientos afrontan un problema en lo que se refiere a la acción colectiva, pero es de carácter social: cómo coordinar a poblaciones desorganizadas, autónomas y dispersas de cara a una acción común y mantenida. Los movimientos resuelven el problema respondiendo a las oportunidades políticas a través del uso de formas conocidas, modulares, de acción colectiva, movilizando a la gente en el seno de redes sociales y a través de supuestos culturales compartidos (Tarrow, 1997: 33).

Por eso, ni la preocupación ante los peligros que se enfrentan, ni la experiencia y capacidad de convocatoria de los fundadores aseguran por si solos el pleno desarrollo del Consejo. La gran responsabilidad que ha debido asumir (nada menos que defender el futuro de todos los habitantes de la región), las difíciles condiciones materiales en que debe funcionar (pobreza extrema, necesidades no resueltas, desinformación, intentos de manipulación, criminalización de la lucha, divisionismo político, fenómenos meteorológicos extremos), así como la gran diversidad de intereses y expectativas que se deben conciliar en su seno, hacen que operar este Consejo sea un reto mayor.

Desde la perspectiva de los sujetos sociales, el actor se transforma se va transformando como parte de un proceso, en el cual mediante la acción los actores pueden devenir en sujetos sociales pero también pueden llegar a desarticularse o no llegar a constituirse como tales (Zemelman y Valencia, 1990). Ese es precisamente el reto que se enfrenta en este momento a tres años de iniciado el proceso de resistencia: las autoridades y líderes comunitarios que encabezan la lucha, además del desgaste físico y económico, deben enfrentar las difamaciones, acusaciones y amenazas a su integridad que, como parte de la pelea por la legitimidad simbólica, se ha desencadenado contra ellos; después de todo son ellos quienes se oponen al "desarrollo", a la "generación de empleos". Tales señalamientos dolosos suelen encontrar tierra fértil en un contexto regional de muy alta marginación y cercada por la inseguridad y la violencia, donde campean los que Zemelman denomina como *jinetes del apocalipsis:*

> El miedo que nace de la ignorancia, la ignorancia que genera apatía, la apatía que genera aislamiento, el aislamiento que lleva a las personas a replegarse en sí mismas y a exaltar (…) el repliegue a las relaciones primarias. (…..) Lo que importa es él y su familia y sus relaciones primarias, y lo demás es competencia de otros que tendrán que resolver el problema, aunque esos otros no existan, y si existiesen resolverían el problema para ellos no para los demás (Zemelman, 2004, p. 93).

Frente a ese repliegue, a ese ensimismamiento, desde el Consejo de Autoridades se plantea la apertura, la comunicación que genera conciencia social, la generosidad de

reivindicar el tejido social y ambiental como expresiones del derecho colectivo a existir con dignidad, de asumir responsablemente nuestro estar en el mundo. Esta invitación a pelear por otro mundo posible, se fundamenta en la idea que la realidad social, en la medida que es una construcción de sujetos múltiples, deviene en espacios de posibilidades, espacios que son ámbitos de sentido para determinados sujetos, para quienes la participación sólo es posible desde la "particular concepción del mundo y de la vida" (Lagarde, 1993, p. 302), es decir, desde su subjetividad, que "se estructura a partir del lugar que ocupa el sujeto en la sociedad y se organiza en torno a formas específicas de percibir, de sentir, de racionalizar, de abstraer y de accionar sobre la realidad (…) es la elaboración única que hace el sujeto de su experiencia vital." (Lagarde, 1993, p. 302). En el mismo sentido, afirma Melucci:

> Los actores colectivos "producen" entonces la acción colectiva porque son capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, disponibilidad de recursos, oportunidades y limitaciones). La definición que construye el actor no es lineal sino que es producida por interacción y negociaciones, y algunas veces por diferentes orientaciones opuestas. Los individuos crean un "nosotros" colectivo (más o menos estable e integrado de acuerdo con el tipo de acción), compartiendo y laboriosamente ajustando por lo menos tres clases de orientaciones: aquellas relacionadas con los fines de la acción (el sentido que tiene la acción para el actor); aquellas vinculadas con los medios (las posibilidades y límites de la acción) y, finalmente aquellas referidas a las relaciones con el ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción) (Melucci, 1999, p. 39).

Dicho de otra manera, si las propias personas no sienten la *necesidad radical* de movilizarse frente a los agentes que buscan expoliar sus tierras y sus recursos naturales, y se organizan y actúan en consecuencia, el poder de los recursos económicos, culturales y sociales de los que disponen estos agentes externos (sean del gobierno o de empresas privadas), terminarán avasallando a una población históricamente subalternizada; desde sus determinaciones como indios, pobres, marginados y sin estudios, lo único que puede dar un giro a la historia es una toma de conciencia colectiva que movilice las voluntades. Después de todo, como dicen en la región: "¿qué más podemos perder?"

Se trata de un sector de población que, en su mayor parte subsiste de los recursos que produce o recolecta directamente en los ecosistemas. Imponer restricciones al aprovechamiento que hacen de su territorio -sea de tipo jurídico por motivos de conservación o sea por el deterioro de los sistemas productivos debido a la contaminación y deforestación ocasionadas por la minería-, significaría comprometer seriamente su capacidad de reproducción social, por lo que oponerse al poder político y económico que los amenaza se convierte en una necesidad radical, en el sentido manejado por Heller al analizar la teoría de las necesidades en la obra de Marx.

Según Marx, una de las antinomias o contradicciones inherentes a la sociedad productora de mercancías y en particular del capitalismo, es la relación entre riqueza y pobreza. Al afirmar que el capitalismo es el sistema más ventajoso para la producción de riqueza,

desenmascara que esto sólo puede ocurrir a expensas del mayor número de individuos "el desarrollo del individuo particular (…) no se adquiere más que a través de un proceso histórico en el que los individuos son sacrificados" (Marx, Teorías sobre la plusvalía; Cit. por Heller, 1986, p. 99). En este caso particular, el sistema económico pretendía sacrificar a las comunidades al despojarlas de su territorio; anteponer los intereses de las personas y no de las empresas (medios de producción), se vuelve una necesidad radical.

> « (…) ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz para el hombre es el hombre mismo» [Marx, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel]. Marx mide el radicalismo de la teoría en base a la atribución de valor (premisa de valor): es radical la teoría para la cual el hombre representa el máximo valor. «En cualquier pueblo, la teoría se realiza sólo en la medida en que supone la realización de sus necesidades (...) Una revolución radical, sólo puede ser una revolución de necesidades radicales...» (Heller, 1986: 105).

Para Marx los portadores de dichas necesidades radicales son aquellos que pueden realizar la teoría radical, y los ubica en la clase trabajadora, ya que esta es una clase con "cadenas radicales". Prosigue Heller en su análisis afirmando que es la sociedad capitalista la que provoca la manifestación de estas necesidades produciendo así su propia amenaza, estas necesidades son parte orgánica del capitalismo, pero su satisfacción es imposible dentro del marco de esta sociedad y por ello motivan la praxis que la trasciende (Heller, 1986: 105).

> Es la sociedad capitalista la que provoca la manifestación de las necesidades radicales produciendo de este modo sus propios sepultureros; necesidades que son parte constitutiva orgánica del «cuerpo social» del capitalismo, pero de satisfacción imposible dentro de esta sociedad y que precisamente por ello motivan la praxis que trasciende la sociedad determinada (Heller, 1986: 106).

Bajo estas circunstancias, considero que a nivel del movimiento en su conjunto, existe poco margen para realizar análisis de costo-beneficio sobre la participación, pues lo que está en juego es la existencia misma de las comunidades tal como la conocen. Por supuesto, cuando el análisis baja al nivel de los actores individuales van apareciendo diferencias en el nivel de participación y compromiso de cada uno, se pueden observar flujos y reflujos que responden a coyunturas personales o al momento que vive el movimiento. Las autoridades que conforman el Consejo deben balancear entre las diferentes tareas que tienen encomendadas, y los ciudadanos también deben tomar decisiones para participar en uno y otro espacio, en medio de una agenda cívico-religiosa que ocupa muchas fechas: las fiestas de los santos patrones, las asambleas comunitarias, las asambleas de la CRAC, las reuniones de los partidos políticos, las asambleas convocados por los ayuntamientos, son algunas de los eventos que se deben considerar para no traslapar actividades y tratar de garantizar una mayor participación en el Foro.

Por otro lado, están las valoraciones que se relacionan con las expectativas individuales respecto del movimiento. Pero a tres años de creado el Consejo el camino no se vislumbra

fácil. En su interior existen tensiones y diversidad de opinión en algunos rubros, principalmente hay tres temas que han sido motivo de polémica y dividen la opinión de los miembros. El primero es el contrato firmado por la comunidad de Paraje Montero con la empresa minera para permitir la exploración.

> "…un amigo que se lleva bien con nosotros estuvo yendo algunas reuniones, pero luego empezó la "balacera" de aquí, o sea de nosotros mismos empezó la balacera en contra de Paraje Montero es una forma directa: "¡malvados, ustedes vendieron la mina!". No tuvimos la capacidad de sensibilizar a los compañeros y decirle exactamente lo que tenemos que hacer, si se equivocaron y firmaron pero ahora ya no lo hagan porque nos van a matar a todos o sea eso nos faltó la capacidad, y desde esa vez Leo me dijo, -oye mano yo me voy, yo no participo en estas reuniones, porque yo vengo aquí y nomas me fusilan. Y hay razón que alguien aquí lo fusiláramos pues la próxima ya no va a querer ir porque salieron algunos compañeros de Malina de por allí empezaron a fusilar y como de por si hay pequeñas riñas de tierras de hace años, por eso vino a relucir un poco, y entonces como que Paraje Montero dice: "pues yo mejor no participo"; fue un error, entonces Paraje Montero también me dijo, -la gente está dividida, una parte están en acuerdo de que entren las minas, porque va haber trabajo, pero otra parte dice no, y entonces compañeros que nos queda que hay que hacer, ahora si entrémosle con nuevas estrategias pero entrar buscando maneras de como dialogar con esos compañeros, yo diría que pudiéramos ir directamente a sus casas a Paraje, pero que hiciéramos una reunión ahí cerquita para que pueda ir y platiquemos, que nos digan realmente cuál es su situación, vuelven a firmar? o ya no? Porque según me comentaba este maestro que según iban a ir una asamblea para ver si mejor ellos daban por terminado ese convenio (…)." (Testimonio Prof. Teodoro Tomás Galeana, XIII Foro, 2014).

El contrato de exploración expiró y cuando la empresa intentó renovarlo, la comunidad ya no volvió a aceptar. La decisión fue motivo de fuerte polémica al interior de la comunidad, pero en asamblea ganó la posición de cerrar filas con el movimiento y volver a negociar con la minera. Este hecho abonó mucho a fortalecer al Consejo y distender el conflicto que había con dicha comunidad.

Un segundo frente de discusión es la construcción de infraestructura (p.e. ampliación de la carretera, instalación de una nueva subestación eléctrica), que es bien vista por algunos mientras que otros la interpretan como las facilidades que el gobierno otorga para la entrada y operación de las mineras. Algunas de las figuras importantes del movimiento, como el padre Melitón Santillán, consideran que una parte importante de la inversión en infraestructura está orientada a generar condiciones para el aprovechamiento minero y hacer la región más atractiva para la inversión extranjera, pero que se disfrazan de inversión social para cargar el costo a la ciudadanía. En tal sentido se interpretan las pretensiones de elevar la cortina de la presa El Guineo para convertirla en hidroeléctrica y de insistir en la construcción a sangre y fuero de la presa La Parota; se tiene proyectadas además la construcción de otras dos presa en la zona, una sobre el río Quetzala y otra cerca de Ometepec (ver mapa 8, pag. 60).

El tercer tema es la entrega de subsidios gubernamentales en programas de conservación, como el pago por servicios ambientales, pues mientras unos lo ven como una importante entrada de recursos a su comunidad, otros perciben el peligro de que la gente se acostumbre a recibir recursos y no se fije en las condiciones que se les imponen a cambio. Esto fue motivo de debate a los largo de varios foros, pero particularmente luego de la respuesta de la CONANP al Manifiesto de Cochoapa, en donde se intenta descalificar la posición de las comunidades afirmando que es una contradicción rechazar la RB pero seguir recibiendo recursos federales de programas de conservación, como si una cosa condicionara la otra. Al respecto, el Pbro. de Malinaltepec, Melitón Santillán comenta:

> "…por eso se ve que ya hay un plan, dicen [se está refiriendo al gobierno] por aquí no vamos a pasar porque esta gente está brava, pero vamos a darle la vuelta por Zitlaltepec, allá por Arroyo Prieto, donde la gente está durmiendo, San Miguel Amoltepec donde están más dormidos, por allá van a entrar, no van a entrar por aquí porque aquí hay gente brava…brava pero no tiene conocimiento, ¿verdad?, entonces ¿qué caso tiene que estemos bien bravos si no sabemos ni qué es áreas naturales protegidas ni qué es la Ley del Equilibrio Ecológico?, que es la ley que va a operar ahora, porque la reforma agraria ya la están echando abajo, eso ya nos lo dijeron en muchos foros, y que va a desaparecer a los Comisariados y que van por la certificación para que nadie organice al pueblo, ¿verdad? Y por eso también el plan de echar una lana para los comisariados, pero yo sé que los comisariados están firmes y no van a caer en la tentación del dinero" (Testimonio Pbro. Melitón Santillán Cantú, XIII Foro, 2014)

Hablando sobre el poder de las mineras, el Padre Melitón dice "…ellos mismos también tienen lana para las escuelas, para la pavimentación, para el drenaje, para todo, hasta para mandar matar a los líderes, tienen ellos todo el dinero del mundo…"

Fines, medios y ambiente continuamente generan posibilidades de tensión afirma Melucci (1999): los objetivos no se adecuan a los medios o viceversa (ante el clima electoral algunos sugieren acercarse a los candidatos y otros se oponen, argumentando que los partidos sólo han servido para dividir a las comunidades); el contexto político es poco favorable para la movilización (por ejemplo, por la inseguridad que priva, en la que cualquiera puede ser asesinado o desaparecido sin mayores consecuencias, lo que ha permitido la represión contra los movimientos sociales y cargar la responsabilidad al crimen organizado); los medios son más o menos congruentes con el campo de acción, etc. Estas son algunas de las líneas de reflexión en las que se profundiza en el siguiente capítulo.

A manera de cierre: mientras el Capítulo 3 se enfocó en el surgimiento del Consejo, este Capítulo 4 analizó las condiciones que le permitieron mantenerse funcionando y constituirse en un movimiento social y no sólo en una acción colectiva efímera.

Teniendo como premisa el conflicto y la identidad como factores que permitieron aglutinarse y movilizar a las comunidades, el siguiente gran reto era mantener dicha movilización y enfocarla a conseguir sus objetivos (Tarrow, 1997). Es a través de este proceso y mediante la acción que los actores pueden devenir en sujetos sociales o bien también pueden desarticularse y no llegar a constituirse como tales (Zemelman y Valencia, 1990)

En tal sentido, lo primero que se debe resaltar es que el movimiento es "construido" gracias a una fuerte inversión organizativa, económica y emocional. Las autoridades y líderes comunitarios que encabezaron la lucha, además del desgaste físico y económico, debieron enfrentar las difamaciones, acusaciones y amenazas a su integridad que, como parte de la pelea por la legitimidad simbólica, se desencadenaron contra ellos desde el gobierno federal y estatal.

Estos embates se resistieron en buena medida por las redes existentes en el territorio comunitario (como las familiares, comunitarias, religiosas y de organización política) y cuya movilización permitió absorber parte de los costos del proceso. Por ello Oslender (2002) plantea acertadamente que para entender un movimiento construido sobre las bases de identidad colectiva hay que estudiar el lugar en los que se desenvuelve la acción y donde estas identidades están construidas y articuladas.

Pensado desde el lugar, la otra condición central para mantener la movilización fueron los niveles de pobreza y la dependencia que la gente tiene respecto de su entorno ecológico para poder subsistir. Amenazar su territorio es amenazar su existencia misma, por lo que la defensa colectiva del entorno se constituyó en una necesidad radical (Heller, 1986). Por eso lejos de que esta condición los frene, el movimiento se ha mantenido bajo la lógica de resistencia del "¿qué más podemos perder?" que la gente suele expresar cuando se habla de los riesgos implícitos. Es así que en lugar de terminar siendo avasallados y a pesar de sus determinaciones como indígenas, pobres, marginados y sin estudios, lo que permitió dar un giro a la historia fue la toma de conciencia colectiva que llevó a movilizar voluntades. Aunque tienen claro que las estructuras sociales puedan representar obstáculos para movilizarse y reivindicar sus demandas, reconocen que dichas estructuras fueron creadas por otros actores, lo que implica que pueden ser ajustadas, cambiadas o inclusive derrotadas por los mismos actores sociales (Giddens, 1984, cit. por Oslender, 2002).

Considero que en más de un sentido, los líderes del movimiento tienen claro que su accionar desafía las estructuras de dominación y que por ello el Consejo de Autoridades se plantea como tarea prioritaria la comunicación que genere conciencia social, partiendo de la generosidad de reivindicar el tejido social y ambiental como expresiones del derecho colectivo a existir con dignidad, de asumir responsablemente nuestro estar en el mundo, peleando por hacer posible otro mundo en el que tengamos cabida.



Figura 10. 12º Foro Regional en Defensa del Territorio, San José Vista Hermosa, 29 de enero de 2014.

Capítulo 5. La defensa del territorio comunitario

En el presente capítulo se inicia el análisis de la estrategia de defensa del territorio seguida por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias, haciendo un balance de las acciones seguidas en los planos jurídico y político. Se hace el recuento de las cosas más relevantes ocurridas a lo largo de los Foros Regionales, permite distinguir desde: a) la conformación del CRAADT, b) su consolidación basada fundamentalmente en la convocatoria a las bases comunitarias hasta conformar un movimiento consistente, con una identidad propia que descansa en su condición como pueblos originarios y lo justo de sus demandas, y finalmente c) una etapa en la que buscan revertir de forma definitiva la situación adversa, lo que los lleva a cuestionar e interpelar el mismo marco jurídico federal, y exigir su transformación.

Para algunos autores, analizar la acción colectiva constituye el corazón mismo del estudio de los movimientos sociales. Al respecto, Giménez, siguiendo a Holzner, afirma:

> (…) no se trata de estudiar a los actores sociales en sí mismos, sino a través de su acción, en y por su interacción con otros actores sociales dentro de un determinado campo. En efecto, un actor social se define, no en sí mismo, como si fuera un organismo, sino en cuanto fuente de un modelo de acción (Holzner, 1978; cit. en Giménez, 2012, p. 4).

Sin embargo, tratar de entender al movimiento social en esa dimensión, como fuente generadora de sentidos, equivale a definirlo sobre todo por su dimensión subjetiva, es decir, como una condensación de las subjetividades que se reúnen en torno al movimiento.

> He aquí la primera dificultad. Por otra parte, nada más opaco, huidizo e inasible que la acción concreta, particularmente la acción colectiva. Las movilizaciones colectivas, por ejemplo, presentan tal diversidad fenomenológica cuando nos situamos en el terreno empírico, que parecen desafiar de entrada todo intento de clasificación o de sistematización (Giménez, 2012, p. 4).

Tanto Melucci (1989) como Tarrow (1997) coinciden en que probablemente la característica definitoria más ampliamente aceptada para un movimiento social, es que se trata de un tipo de acción colectiva orientada hacia el cambio. Tarrow (1997) resalta la importancia de la estrategia al afirmar que dentro del universo de posibilidades que implica la acción colectiva, sólo cuando se mantiene la interacción con los oponentes se puede hablar de un movimiento social. Muchas veces la acción colectiva termina en uno o pocos eventos, sin lograr mantener su postura, por lo que terminan disolviéndose o siendo reprimidos. A estas expresiones efímeras y coyunturales les denomina *campaña*.

Por ello el gran reto consiste precisamente en encontrar los mecanismos que mantengan la cohesión, la movilización que sostiene la confrontación, en este caso, con el gobierno.

Es precisamente esta orientación hacia el cambio lo que obliga a los fundadores u organizadores a actuar, por un lado, como actores estratégicos. Es decir, en su relación con el medio circundante político, deben orientarse hacia fines o metas y considerar las consecuencias de sus acciones. Deben encarnar, para usar la terminología de Max Weber, una *ética de responsabilidad* (Weber, 1946; citado por Munck, 1995, p. 31).

> La orientación hacia el cambio de un movimiento social sólo puede realizarse si afirma y mantiene la naturaleza no negociable de su identidad y si se rehúsa a actuar puramente como un actor estratégico. Por lo tanto, el análisis de la orientación hacia el cambio de un movimiento social no puede llevarse a cabo ni en términos de su habilidad para realizar una acción estratégica, ni en términos de la identidad con la cual un movimiento social surge, sino sólo en términos de la interacción entre estas dos dimensiones (Munck, 1995, p. 31).

Si se tratara de un mero grupo de interés –como intentó definir Olson a la acción colectiva-, la distribución de incentivos selectivos y la imposición de obligaciones mantendrían a los miembros unidos, y para ello se requiere básicamente organización. Sin embargo, movimientos como éste, por la defensa del territorio, no embonan en esta lógica, por lo que el reto es más complejo. Como ya se explicó anteriormente, ni las autoridades agrarias ni el CRAADT pueden ni es su intención distribuir incentivos selectivos o constreñimientos entre los participantes en el movimiento; por eso, además del conflicto que motivó la aglutinación original, los líderes del movimiento deben asumir una función creativa, deben inventar, adaptar y combinar distintas formas de acción colectiva para estimular el apoyo de la gente, principalmente de aquellos sectores de población menos propicios a la participación (Tarrow, 1997).

> Los líderes ofrecen formas de acción colectiva que son heredadas o infrecuentes, habituales o poco familiares, aisladas o que forman parte de campañas concertadas. Las vinculan a temas que, o bien están inscritos en la cultura o se inventan sobre la marcha, o —más comúnmente— fusionan elementos de las convenciones con nuevos marcos de significado. Según el politólogo Michael Lipsky (1968), la protesta es un recurso, y las formas de acción colectiva que escogen los movimientos un incentivo para la movilización. (Tarrow, 1997, p. 52)

Es precisamente aquí donde radica uno de los dilemas centrales en la definición de la estrategia política que deberá seguir el movimiento, pues debe estar orientada a conseguir los objetivos al mismo tiempo que fortalece la identidad de sus miembros; para ello, la demostración de fuerza numérica y solidaridad puede convocar a los indecisos para que se sumen, pero también convencer a los participantes de que son más fuertes de lo que realmente son, con el riesgo que, al exagerar su fuerza, los activistas del movimiento pueden forzar confrontaciones con las autoridades, que perderán casi con total seguridad, distanciando a simpatizantes y seguidores potenciales. Por otro lado, mientras las formas

más tradicionales de lucha pueden ofrecer certidumbre a muchos participantes, otros se sienten tentados por formas más extremas de acción colectiva, violencia y simbolismo para atraer la atención y radicalizar las confrontaciones con las autoridades. Según Tarrow (1997, p. 53) "el resultado final son los fraccionamientos y escisiones, endémicos en los movimientos, y la aceleración de su proceso de descomposición".

> (…) como descubrió Trigilia en el sector de pequeñas empresas del centro de Italia, la coordinación no depende tan sólo de rasgos estructurales de la sociedad, como las redes e instituciones sociales, sino de la confianza y cooperación que se generan entre los participantes merced a los presupuestos compartidos o, por emplear una categoría más amplia, de los marcos de: acción colectiva que justifican, dignifican, y animan la acción colectiva. La ideología, como escribió David Apter en su ya clásico ensayo, *Ideology and Discontent*, dignifica el descontento, identifica un blanco para los agravios y forma un paraguas sobre las reivindicaciones concretas de grupos solapados entre sí (Tarrow, 1997, p. 57).

Esto coincide también con el planteamiento de Melucci (1989) quien enfatiza el papel de las redes en los movimientos a la hora de definir la identidad colectiva. A diferencia de lo que postulaba Olson de que la acción colectiva en pos de bienes comunes nunca sería respaldada por grandes grupos. Tarrow y Melucci coinciden en que las redes e instituciones sociales juegan un papel fundamental para estimular la participación en los movimientos.

> La movilización de redes sociales preexistentes reduce los costos sociales transaccionales de la convocatoria de manifestaciones, y mantiene unidos a los participantes incluso una vez que el entusiasmo inicial de la confrontación se ha desvanecido. En términos humanos, esto es lo que hace posible la transformación de la acción colectiva episódica en movimientos sociales (Tarrow, 1997, p. 56).

En el caso de la Montaña, el movimiento de defensa del territorio se construyó y operó usando una preexistente y delicada red de interacciones sociales, tanto a nivel intra como intercomunitario. Desde los lazos generados por el CG 500 ARI, por el CAIN y luego por la CRAC-PC, la cohesión dentro de los territorios parroquiales y la participación en las festividades religiosas, las alianzas formadas en el proceso de creación de la UNISUR, relaciones gremiales dentro del magisterio, hasta el entonces recién creado Centro de Formación Permanente de la Montaña (que fueron quienes emitieron la primer alerta), el movimiento surgió y se mantuvo vigente gracias a un tejido comunitario en buena medida creado en los últimos 20 años, y sabiamente aprovechado por los líderes de la lucha.

> Los movimientos surgen cuando se amplían las oportunidades políticas, cuando se demuestra la existencia de aliados y cuando se pone de relieve la vulnerabilidad de los oponentes. Al convocar acciones colectivas, los organizadores se convierten en puntos focales que transforman las oportunidades, convenciones y recursos externos en movimientos. Los repertorios de confrontación, las redes sociales y los marcos culturales reducen los costes de inducir a la gente a la acción colectiva, creando una dinámica más amplia y más extensamente difundida en el movimiento.
>
> El poder de desencadenar secuencias de acción colectiva no es lo mismo que el poder de controlarlas o mantenerlas. Este dilema tiene tanto una dimensión interna como una externa. Internamente, buena parte del poder de los movimientos deriva del hecho de que activan a gente sobre la que no tienen el menor control. Este poder es una virtud, porque permite a los

> movimientos convocar acciones colectivas sin contar con los recursos que serían necesarios para integrar una base de apoyo (Tarrow, 1997, p. 58).

Por eso insisto en que la experiencia de algunos de los líderes fue fundamental, pues justamente al convocar a todas las comunidades, replicando de alguna manera la experiencia de la CRAC-PC y la más reciente del Consejo de Autoridades Agrarias por la Paz y la Reconciliación, permitió que el problema dejara de ser sólo de La Ciénega, Ojo de Agua y comunidades aledañas, para convertirse en un problema regional. El lograr comunicar esta preocupación a través de los mecanismos comunitarios y con un lenguaje adecuado, no solo logró hacer que la gente sintiera este problema como propio, sino también logró reactivar bases de apoyo que se encontraban aparentemente *desactivadas* o *latentes*. Porque en efecto los escasos recursos económicos con que contaban las autoridades comunitarias no hubieran sido suficientes para movilizar e informar a la gran cantidad de gente que se logró. Esto fue posible porque la gente asumió de forma personal los costos de los traslados a los diferentes foros, porque en cada comunidad sede de los foros la población local se organizó para ofrecer alimentos a los visitantes, porque cada uno de los líderes logró acercar a sus aliados –tanto internos como externos- para allegarse asesoría o financiamiento.

> … debido a que el problema de esta acción no es el de los compañeros de viaje, sino el de la coordinación de la actividad, necesaria para resolver el problema de los costes transaccionales del movimiento, debemos centrar nuestra atención en las estructuras de oportunidad que crean incentivos para que se formen los movimientos, en el repertorio de acciones colectivas que éstos usan, en las redes sociales en las que se basan y en los marcos culturales en torno a los cuales se movilizan sus seguidores. Estos factores hacen que el estudio de los movimientos sociales sea específico y complejo y esté arraigado en la historia (Tarrow, 1994, p. 63).

En este punto cobra relevancia el concepto de *estructura de oportunidad política* pues ayuda a identificar las opciones político-estratégicas a que se enfrentan los líderes de un movimiento social y que es un tema central en el análisis del problema de la estrategia política (Tarrow, 1997).

> Al hablar de estructura de las oportunidades políticas, me refiero a dimensiones consistentes —aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales— del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente. El concepto de oportunidad política pone el énfasis en los recursos exteriores al grupo —al contrario que el dinero o el poder—, que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o desorganizados. Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestra en qué son vulnerables las élites y las autoridades. (Tarrow, 1997: 49)

Obviamente, esta estructura de oportunidad política depende del contexto en que se desenvuelve el movimiento. Según Favela (2002), este contexto puede analizarse a partir de cuatro grandes aspectos: a) Número y tipo de puntos de acceso al gobierno, b) Importancia del proceso electoral como método de distribución del poder, c) Participación

de las organizaciones sociales en el proceso de toma de decisiones, y d) Definición y preservación del orden social, cada uno de los cuales posee un nivel estructural y otro coyuntural. Según dichas autoras, la forma particular que adopten las dimensiones estructural y coyuntural para cada uno de los cuatro aspectos, facilita o coarta las posibilidades de desarrollo y éxito del movimiento:

> Cada uno de los aspectos estables y permanentes (nivel estructural) del régimen político tiene una manera específica de influir en las posibilidades de los movimientos sociales. Y aun cuando dichos elementos están interconectados, la influencia que cada uno de ellos tiene en las posibilidades de la acción colectiva es independiente de la importancia que puedan tener los otros elementos. El hecho de que cada elemento pueda tener un valor positivo o negativo, dependiendo de su influjo favorable o coercitivo en los movimientos sociales, hace posibles múltiples combinaciones que pueden ser identificadas en los regímenes políticos. Puede suponerse que cada uno de los cuatro elementos antes mencionados es capaz de favorecer o constreñir las posibilidades de la acción colectiva. Existen 16 diferentes combinaciones posibles, pero sólo la situación extrema del régimen autoritario presenta el caso de que sus cuatro elementos limiten las posibilidades de dicha acción.
>
> (…) El resultado de estas combinaciones múltiples es que el efecto positivo de un elemento sobre los movimientos sociales puede ser contrarrestado por el efecto negativo de otro. Pero aun cuando el resultado global pudiera ser en una misma dirección, es importante para el análisis de casos particulares identificar la influencia de cada elemento estructural en torno a las posibilidades de la acción colectiva.
>
> Mientras que el nivel estructural define los ámbitos más estables del sistema político al fijar los principales factores de influencia en los movimientos sociales, los elementos coyunturales pueden reducir o ampliar las oportunidades para que tengan éxito, dentro de los límites establecidos por los elementos más permanentes. Los rasgos coyunturales están conformados por la disponibilidad de aliados poderosos, los alineamientos electorales, la cohesión de la élite y las estrategias predominantes para la resolución de conflictos. Aunque estos rasgos están limitados por el nivel estructural, pueden modificarse en relación con los virajes electorales, las decisiones políticas importantes, el escenario internacional y la interacción entre los movimientos sociales y el ambiente político, lo que conforma el análisis dinámico de la influencia de la política sobre la movilización (Favela, 2002, pp. 102-103).

En el texto referido, la autora define al mexicano como un régimen político autoritario, cuya estructura vertical y monopólica reduce los canales institucionales de los que la gente dispone para influir en el proceso de toma de decisiones, coartando así las posibilidades de participación política. Esto explica porqué los movimientos sociales se ven obligados en gran medida a recurrir a estrategias radicales para conseguir sus objetivos, a lo que normalmente el gobierno responde recurriendo a una gama de estrategias desarticuladoras o francamente represivas para manejar la movilización y el descontento social. Esto parece particularmente cierto en Guerrero, pues la historia está plagada de cruentos episodios de represión. Los gobiernos priistas de viejo y nuevo cuño, de un color y de otro, suelen utilizar mecanismos de cooptación, desligitimación, infiltración, desaparición, encarcelamiento y asesinato para mantener el *status quo* en un territorio marcado por la desigualdad, la inseguridad, la impunidad y el abandono institucional.

Para quien no conozca lo que ocurre en Guerrero y se pregunte a qué me refiero cuando digo que el CRAADT debió navegar en un contexto profundamente represor y autoritario, citaré algunos ejemplos de los más recientes:

- La masacre de Aguas Blancas (1995, diecisiete campesinos muertos y veintiún heridos; Rubén Figueroa Alcocer es gobernador y se ve obligado a renunciar);
- La masacre de El Charco (1998, once personas muertas, cinco heridas y 22 detenidas; Ángel Aguirre Rivero es gobernador sustituto);
- La detención y tortura de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores (1999, gobernador René Juárez Cisneros) quienes en prisión recibirían los premios Goldman, Chico Mendes y Sergio Méndez Arceo, y la medalla Roque Dalton. Son declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional en el año 2000, y ganarían un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la muerte de su abogada Digna Ochoa está muy probablemente relacionada con el caso;
- La represión policiaca contra el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), el asesinato de Tomás Cruz Zamora, opositor a la hidroeléctrica y de Miguel Ángel Mesino de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) (2005, gobernador Zeferino Torreblanca);
- El asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de la policía federal (2011, gobernador Ángel Aguirre Rivero);
- La desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, líderes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (2011, gobernador Ángel Aguirre Rivero);
- El encarcelamiento injustificado del líder de la CECOP Marco Antonio Suástegui (2014, gobernador Ángel Aguirre Rivero);
- La represión de policías federales a una manifestación contra la reforma educativa (2015, un muerto, siete manifestantes heridos y 106 detenidos; gobernador Rogelio Ortega);
- El lamentablemente famoso caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a manos de policías municipales, estatales, federales y miembros del ejército (2014, gobernador Ángel Aguirre Rivero).
- Asesinato de dos trabajadores de la mina Media Luna en huelga porque la empresa les impide formar su propio sindicato (noviembre 2017, gobernador Héctor Astudillo).

Fueron precisamente los procesos de CECOP, CETEG y Ayotzinapa, los que generaron profundas y violentas consecuencias en la entidad, produciendo en conjunto un sisma político de alcance nacional, que entre otros efectos provocó la salida de Ángel Aguirre y la llegada de Rogelio Ortega a la gubernatura. La debilidad de la clase política fue sin duda un factor que jugó a favor del CRAADT, ya que tanto el gobierno federal como estatal estaban más ocupados afrontando las consecuencias de los casos mencionados. Sin embargo, el creciente clima de inseguridad en la región provocado por la presencia de diferentes grupos armados, siguió siendo un elemento a considerar en la dinámica del movimiento.

La defensa legal

Para el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, los proyectos mineros y la reserva de la biosfera son dos caras de una misma moneda: el despojo de sus territorios ancestrales para imponer intereses que los son ajenos. Por ello, la defensa frente a ambas iniciativas ha sido conjunta y algunos de los mecanismos empleados son igualmente válidos frente a ambos casos. Sin embargo, en el plano del derecho positivo vigente en el país, los territorios son desarticulados en dimensiones "independientes", por lo que son tratados de forma separada por diferentes instrumentos jurídicos. Por ello y para ganar claridad en la exposición, los mecanismos legales de defensa empleados frente a uno u otro proyecto serán analizados por separado.

El proceso contra las concesiones mineras

En un principio, la defensa legal se pensó fundamentalmente desde los derechos como pueblos originarios, salvaguardados en el derecho internacional y de alguna manera reconocidos en el derecho mexicano, como es el caso de la Ley 701 del estado de Guerrero, sobre Derechos y Cultura Indígenas. Esto se tradujo en el acuerdo de realizar asambleas en cada núcleo agrario y, amparados en la Ley Agraria, levantar actas en las que explícitamente se rechacen tanto el proyecto de RB como las concesiones mineras.

En tal sentido, la comunidad *Me'phää* de San Miguel del Progreso ha venido marcando el paso en el proceso de defensa legal para evitar la minería y el proyecto de Reserva de la Biósfera. Desde el 17 de Abril del 2011, en pleno de una asamblea de comuneros rechazaron la exploración y explotación minera en su territorio, y dieron de alta esa acta en el Registro Agrario Nacional el 13 de septiembre de 2012, siendo una de las pocas que lograron ser aceptadas por el RAN. Otro de los núcleos agrarios fueron los Bienes

Comunales de Malinaltepec, al levantar en diciembre de 2012, su acta de rechazo a la minería y la RB, y registrarla ante el RAN.

No.	Núcleo Agrario	Acta de Rechazo a la Minería	Acta de Rechazo a RBM	Presentadas ante del RAN	Registradas por el RAN
Integrados al CRAADT					
1	Colombia de Guadalupe (Bienes Comunales)	✓	✓	✓	
2	Huehuetepec (Ejido)		✓	✓	
3	Iliatenco (Bienes Comunales)	✓	✓	✓	
4	Iliatenco de Montes de Oca (Ejido)	✓	✓	✓	
5	Malinaltepec (Bienes Comunales)	✓	✓	✓	
6	Mixtecapa (Ejido)				
7	Paraje Montero (Bienes Comunales)				
8	Pueblo Hidalgo (Bienes Comunales)		✓		
9	San José Vista Hermosa (Ejido)		✓	✓	
10	San Miguel del Progreso (Bienes Comunales)	✓	✓	✓	✓
11	Santa Cruz del Rincón (Bienes Comunales)		✓		
12	Tierra Colorada (Bienes Comunales)	✓		✓	
13	Zitlaltepec (Ejido)	✓		✓	✓
Núcleos Agrarios de la Región no Integrados al CRAADT					
1	Pascala del Oro (Bienes Comunales)	✓		✓	
2	Patlicha (Bienes Comunales)	✓		✓	
3	San Juan Bautista Copala (Bienes Comunales)	✓		✓	
4	San Miguel Totolapa (Bienes Comunales)	✓		✓	
5	Santa Cruz de Vista Hermosa (Ejido)	✓		✓	
6	Tenemazapa (Bienes Comunales)	✓			
7	Totomixtlahuaca (Bienes Comunales)	✓			
8	Zapotitlán Tablas (Bienes Comunales)	✓		✓	✓

Cuadro 9. Avance en la elaboración y registro de actas de rechazo a la minería y la reserva de la biosfera por los núcleos agrarios participantes en el proceso de defensa del territorio.

Sin embargo, la estrategia fue rápidamente descubierta por las autoridades del RAN, que comenzaron a poner obstáculos para el registro de nuevas actas, a pesar de que normalmente se trata sólo de un procedimiento administrativo. En junio de 2013, Teodoro Tomás, presidente del CRAADT, informaba que a esa fecha, todos los núcleos agrarios, con excepción de Cochoapa el Grande y Zitlaltepec, ya habían entregado al RAN sus actas de rechazo a la minería y la reserva. Más tarde se sabría que el RAN rechazó la mayoría de esas actas con argumentos poco claros, en algunos casos diciendo que había observaciones "de forma y fondo", pero sin especificar ninguna de ellas, tal como lo narra Armando Campos de Tlachinollan:

> Nos han informado los Comisariados, que antes tenían algunos abogados que les echaban la mano para registrar sus actas de asamblea, pero con todo este alzamiento, esta inconformidad en contra de la RB y con esta llegada de actas y actas al Registro Agrario Nacional, bueno pues ahora ya el RAN está poniendo ciertas trabas; una de ellas es que ya no

> puede ir ningún abogado en representación de una autoridad agraria, ahora tiene que ir forzosamente un miembro del Comisariado; caso contrario simplemente no la reciben (…) y esto es consecuencia de todo el movimiento que ustedes han empezado a realizar en contra de estos proyectos. Para llevar un acta al RAN hay que cuidar muchas cositas, muchos detalles, los nombres bien escritos, las fechas que marca la Ley Agraria, debe ir acompañada de la lista de todos los comuneros o ejidatarios que firmaron, que no vaya ninguna persona que no tenga derechos agrarios. (Testimonio Prof. Armando Campos Ochoa, VI Foro Regional, marzo de 2013)

Todos los núcleos agrarios se basaron en el mismo formato de documento, que gracias a la asesoría legal de Tlachinollan se había fundamentado de forma adecuada. Sin embargo, las actas empezaron a ser rechazadas sin dejar clara la razón, despertando la sospecha y el malestar de las comunidades. De forma paralela, se empezó a analizar la vía legal de ampararse contra las concesiones, como ya lo estaba promoviendo el núcleo agrario de San Miguel del Progreso (*Júba Wajíin*).

> Nosotros levantamos un acta y la llevamos al RAN, entonces lo aceptaron; eso fue en el periodo anterior; ora que estamos actualmente nosotros estamos metiendo ya amparo sobre eso, tiene poco, el día 29 de julio [2013] recibimos ya notificación, de manera provisional, todavía oficialmente no, posiblemente en la semana que viene vamos a recibir la notificación más formal, entonces hasta ahí vamos avanzando nosotros sobre la defensa del territorio, tanto los minerales tanto el área protegida compañeros. (Testimonio Prof. Agapito Cantú Manuel, Comisariado Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, X Foro Regional, agosto de 2013)

Esta comunidad interpuso en julio de 2013 esta demanda de amparo ante el Juez Primero de Distrito, argumentando que esa concesión contraviene lo establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales. Además, la comunidad pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determine la constitucionalidad de la Ley Minera, y revise si ésta se apega a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La comunidad enfatizó que dado su carácter indígena y agrario, el Estado debería proteger sus derechos, y afirma que las concesiones entregadas por la Secretaría de Economía "contravienen el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho constitucional a la protección integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la protección de las tierras comunales" (La Jornada Guerrero, noviembre 2013).

En febrero de 2014 el Juez resolvió que, efectivamente fueron violados sus derechos como pueblos originarios, por lo que ordenó la nulidad, cancelación, suspensión o insubsistencia de las tres concesiones que la Secretaría de Economía otorgó a la Minera Hochschild, Montero Minas y Vedome involucrando territorio agrario de esta comunidad. Para tal resolución, invocó estándares internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e invocó el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de pueblos indígenas.

El amparo ganado por San Miguel del Progreso marca un precedente importante, al ser el primer amparo que gana una comunidad indígena contra una concesión minera, con lo cual se prohíbe cualquier tipo de actividad ya sea de exploración o explotación minera en el territorio de la comunidad.

En su vigésimo informe anual de actividades, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan subraya la importancia del caso:

> La acción iniciada por San Miguel del Progreso constituye un intento inédito de exigencia judicial de los derechos colectivos indígenas, en la medida en que antes de que se inicien las actividades que causarán daños irreparables, retomando aprendizajes de comunidades y movimientos de todo México, se busca mediante esta herramienta legal que se examine la posible inconstitucionalidad e inconvencionalidad de una ley secundaria que permite el saqueo de la riqueza del país para el beneficio de unos cuantos: la Ley Minera, que hoy causa estragos en territorios indígenas y campesinos por todo el país (Tlachinollan, 2014b, pp. 69-70).

La importancia de la resolución del amparo otorgado a esta comunidad *Me'phää* sienta un importante precedente jurídico por varios motivos (Tlachinollan, 2014b):

a. Incorpora los estándares que emanan del derecho internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas, que según algunos funcionarios federales no son vinculantes;
b. Reconoce que la auto adscripción es el elemento fundamental para establecer la identidad indígena de la parte quejosa en un juicio de amparo, incluso en casos colectivos; este fue un punto a través del cual la Secretaría de Economía intentó apelar el fallo, argumentando que no se trata de una comunidad indígena sino de un núcleo agrario; parece que un elemento importante para reforzar el punto fue el peritaje antropológico realizado por Teresa Sierra, Yuri Escalante (ambas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) y Rubén Luna (del Instituto Nacional de Antropología e Historia);
c. Analiza las obligaciones especiales de los órganos jurisdiccionales para garantizar el acceso a la justicia por parte de las personas, comunidades y pueblos indígenas, aspecto que no cumplió cuando la Secretaría de Economía otorgó la concesión;
d. Al precisar los alcances del *interés legítimo* y encuadrar en esta figura el interés de San Miguel del Progreso en su calidad de Comunidad Agraria Indígena, la faculta para acudir al juicio de amparo al considerar que los actos controvertidos afectan su esfera jurídica al ubicarse parcialmente sobre su territorio comunal;
e. Establece como estándar de protección *la sola posibilidad de la afectación* a la comunidad, lo que hace necesario que se les deba respetar el derecho a audiencia previa a la expedición de dichos títulos;

f. Reconoce la integralidad de los territorios indígenas en el ordenamiento jurídico mexicano, y no meramente la de sus tierras, así como la pertenencia de los recursos naturales a estos;
g. Se invoca de forma explícita el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
h. La sentencia también estableció que previo a la expedición de los títulos de concesión, la Secretaría de Economía debió respetar a garantía de audiencia de la Comunidad *Me'phaá* de San Miguel del Progreso consagrada en el artículo 14 de la Constitución, y lo dispuesto en Convenio 169 de la OIT, ya que la finalidad de dichas concesiones implica la afectación al derecho que tienen sobre sus recursos naturales y su territorio, lo que pone en riesgo su supervivencia económica, social y cultural.

Pese al gran triunfo que significó este fallo, es preciso reconocer que la sentencia dejó pendientes algunos aspectos. El primero es que en la demanda presentada por la comunidad, se pide explícitamente se declaren inconstitucionales los artículos 6, 10, 15 y 19 fracción IV de la Ley Minera, el juez no se pronunció al respecto en su resolución, por lo que la comunidad interpuso en junio de 2014 un recurso de apelación para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina el particular. Sin embargo, resultado de esta resolución judicial, en octubre de 2015 las empresas Hochschild y Zalamera se desistieron de sus concesiones mineras y posteriormente la Secretaría de Economía las declaró canceladas. Con esta medida la Secretaría pretendió evitar que se mantuviera el cuestionamiento de fondo a la Ley Minera, al desaparecer la causal del juicio promovido por la comunidad.

Por otro lado, la resolución no declara la nulidad de las concesiones sino que el amparo se concedió para que sea la misma Secretaría de Economía "la que determine si procede la nulidad, cancelación, suspensión o insubsistencia de los derechos del concesionario, con lo que lamentablemente dicha Secretaría contará con un margen amplio de discrecionalidad para determinar la situación legal de las concesiones" (Tlachinollan, 2014a, p. 11). La cancelación de las concesiones otorgadas a esas empresas en particular, abrió la puerta a que cualquier otra compañía interesada pudiera solicitar concesiones sobre los lotes cancelados, manteniendo latente el peligro sobre estos territorios.

Es por ello que la comunidad de San Miguel del Progreso promovió y ganó (en junio de 2017) un segundo amparo, para que la Secretaría de Economía dejara sin efecto una declaratoria de libertad de terrenos que permitía otorgar nuevas concesiones mineras en el territorio de la comunidad (Cervantes, 2017). En la misma sentencia se ordenó a la autoridad que en este tipo de procedimiento debe consultar previamente a la comunidad

(Hernández, 2017). Además del acompañamiento jurídico de Tlachinollan, este proceso judicial contó con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso, que presentó ante la juez un *amicus curiae* (información que presenta un tercero en un juicio) buscando que se deseche la Declaratoria de Libertad de Territorio que hizo la SE (De Dios, 2016). Este fue el segundo amparo que San Miguel del Progreso ganó en los tribunales federales, constituyendo un hecho histórico en la defensa de los territorios comunitarios.

Finalmente, la otra batalla jurídica se peleó en la escala municipal. Desde 2013 se había analizado el papel crucial de los gobiernos municipales, por ser los que autorizan el cambio en el uso del suelo requerido para la explotación minera. Sin embargo, las autoridades municipales en funciones en aquel momento mostraron poco interés por el movimiento. Las elecciones de 2015 permitieron la llegada de dos ediles afines al movimiento, en Malinaltepec e Iliatenco, generando así las condiciones para que ambos cabildos, en sesión pública, acordaran en 2016 declararse como territorios libres de minería a cielo abierto. Esto representó una nueva victoria jurídica para el CRAADT y el movimiento en su conjunto.

El proceso contra la Reserva de la Biosfera

De forma paralela al de las concesiones mineras, el tema de la reserva de la biosfera de la Montaña (RBM) requirió su propio abordaje. Cuando se entendió que el proyecto de RBM tenía otro tipo de implicaciones legales, se vio la necesidad de analizar con mayor detalle cada una de las aristas. En primer lugar está el tema de que los certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) se habían fundamentado dolosamente en un supuesto proceso participativo y solicitado por las propias comunidades, de donde emanaban, según la CONANP, las especificaciones en el acceso a ciertas partes del territorio.

Esto se supo cuando, por instrucciones del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón, nos dedicamos a investigar y encontramos con que efectivamente existe un certificado como área voluntariamente dedicada a la conservación de este núcleo agrario. Al revisar el certificado con cuidado nos dimos cuenta de que, independientemente de que se decrete la RB, aquí había ya condicionamientos muy fuertes al aprovechamiento de recursos naturales dentro del área certificada, prohibiendo por ejemplo la caza, la agricultura de montaña y otras actividades extractivas de baja escala, excepto la colecta científica. Entonces nos percatamos que no bastaba con rechazar la RB, sino que había que echar abajo la certificación vigente en todos y cada uno de los núcleos agrarios que conforman esta Coordinadora.

Al informarse de esto en el VI Foro Regional realizado en Huehuetepec, el 9 de marzo de 2013, se generó gran inquietud entre los asistentes. El profesor Apolonio Cruz y un servidor propusimos a la asamblea que era necesario reunir estos certificados, conocer las condicionantes que le está poniendo el gobierno federal a las comunidades, para analizar cómo dar por terminados de manera anticipada estos compromisos, que en algunos casos son a 10, 30 y 50 años. Se hizo énfasis en que ese procedimiento era necesario e independiente de la modificación a los estatutos comunales y reglamentos ejidales que se encontraba en marcha en los diferentes núcleos agrarios.

El tema se volvió a abordar en el siguiente Foro, acordándose hacer un documento que posicionara a las comunidades frente a este proceso, dando lugar a la Declaración de Cochoapa (abril de 2013; ver anexo 1). Luego de que este pronunciamiento fue entregado al gobierno federal, vino la respuesta por parte de la CONANP, donde se afirma que los certificados fueron emitidos a petición de parte, pero que si las comunidades insisten en su error al rechazar los certificados y el proyecto de RB, dichas certificaciones pueden terminarse de forma anticipada "Si deciden dar por terminada la certificación sólo deben hacer llegar un acta de asamblea dura registrada ante el RAN."[75] Obviamente en esa postura como funcionario gubernamental, no cabe la posibilidad de que dichas actas sean indebidamente rechazadas por el RAN como ha venido ocurriendo, haciendo que ese procedimiento administrativo se vuelva muy difícil de operar. Queda entonces claro para el Consejo que se tienen que intentar nuevos caminos dentro de la vía legal.

Por eso se empezaron a manejar dos nuevas propuestas de tipo jurídico. Una buscaba apoyarse en el tercer nivel de gobierno, el municipal, para amparados en la Ley del Municipio Libre, promover acuerdos de cabildo de no aceptar la reserva de la biosfera y para decretar territorios libres de minería. Desafortunadamente esta vía resultó muy complicada, pues ninguno de los seis ayuntamientos involucrados aceptó participar en los foros y mucho menos manifestarse en tal sentido, probablemente porque son más los intereses en juego para tomar decisiones y porque a esa escala la lógica partidista parece predominar sobre la lógica de las comunidades que se supone representa. Como se comentó en el apartado previo, fue hasta 2016, con la llegada de nuevos ediles, que se lograron los acuerdos en sesiones de cabildo abierto, para declarar Malinaltepec e Iliatenco, como territorios libres de minería y en contra del proyecto de RBM.

La otra propuesta era apoyar la defensa, al igual que se hizo con la actividad minera, en el cuarto nivel de gobierno, el comunitario, y consiste en modificar los reglamentos ejidales y los estatutos comunales, según sea el caso, para prohibir explícitamente la minería a cielo

[75] Oficio de respuesta al CRAADT, fechado el 31 de mayo de 2013, firmado por David Gutiérrez Carbonell, Director General de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

abierto y los programas de conservación estricta, amparándose en la Ley Agraria. Esta propuesta se fundamenta en que en el artículo 10 de dicha Ley, se menciona que los ejidos operan de acuerdo a un reglamento interno, y se específica que este reglamento debe establecer las bases para la organización social y económica de la comunidad y las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común. En su artículo 101 se menciona que la comunidad posee el derecho para el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal (DOF, Ley Agraria, 2012). Se acordó entonces que las diferentes instancias que han estado acompañando el proceso, como Tlachinollan, UNISUR, UIEG y el Centro de Estudios Ecuménicos, se dividieran para asesorar a cada núcleo agrario con la finalidad de actualizar su estatuto comunal o su reglamento ejidal, según sea el caso.

Conforme avanzaron los foros, cada vez fue quedando más claro que la sola defensa legal tenía pocas probabilidades de éxito, no sólo porque el marco jurídico ha estado siendo transformado haciéndolo más adverso para las comunidades, sino también porque en nuestro país no es fácil hacer cumplir dicho marco jurídico. Comenta Armando Campos de Tlachinollan:

> (…) la RB no la podemos parar sólo con una asamblea, porque se sustenta en un decreto presidencial, por eso tenemos que seguir analizando las formas a las que podemos apelar para que no pase este proyecto. (Testimonio Armando Campos Ochoa, VI Foro Regional marzo de 2013)

Por ello, se llegó a la conclusión que la defensa legal tiene que ser acompañada con una fuerte estrategia política que empuje el cumplimiento de los derechos consagrados en nuestro país.

La defensa política

Sin duda la primera acción de presión política que tuvo este movimiento fue, luego del foro del 6 de octubre de 2012, tomar las instalaciones de la UIEG y cortarle el suministro de agua, en exigencia de la salida del rector Rafael Aréstegui; ambas medidas las mantuvieron hasta no lograr su propósito, tan es así que a Floriberto González designado para reemplazar a Aréstegui, le tocó negociar los términos para reanudar el suministro de agua a la universidad. Sin embargo esta medida se tomó de forma espontánea y con fines muy concretos, sin tocar el problema de fondo que estaba dando pie a la movilización. Las demandas se limitaron a salida de Rafael Aréstegui, la cancelación del convenio entre la UIEG y la SEMAREN y, posteriormente al desistimiento de las demandas que se presentaron contra los líderes comunitarios que encabezaron la toma, es decir, sólo temas de la coyuntura; como suele ocurrir en estos casos, el gobierno presiona por la vía judicial,

ejerciendo una acción intimidatoria y distractora, pues parte importante de las energías se canalizan a proteger a los compañeros demandados, y se tiende a dejar de lado el problema real. Esta estrategia forma parte de lo que Favela (2002) denominan como parte de los elementos estructurales del sistema político mexicano que le confieren su carácter autoritario. En este caso, las autoras se refieren a si las leyes e instituciones relacionadas con la vigilancia y control de las protestas facilitan la negociación con los movimientos sociales o son predominantemente represivas, que sería el caso, pues aunque el gobierno de Guerrero acepte reuniones de "negociación", no retira la amenaza de la acción penal y mantiene un campaña de difamación contra los líderes visibles en los medios de comunicación masiva.

> Las estrategias predominantes de tipo represivo suelen inhibir la movilización, incrementando los costos de la acción colectiva. El propósito de las estrategias represivas del gobierno (por ejemplo, desarticular la organización del grupo, desacreditar la protesta a través de los medios de comunicación, declarar ilegal a una organización, prohibir las asambleas, arrestar a los líderes, etc.) es incrementar el costo de la acción colectiva o reducir los recursos de que disponen los movimientos sociales. Su objetivo es neutralizar al actor así como a la acción y hacer que al actor le resulte menos posible actuar (Favela, 2002: 106).

En la coyuntura política actual, en gran medida derivada de las protestas contra la llamada reforma educativa, se ha venido exacerbando el nivel de autoritarismo gubernamental, recrudeciendo la frecuencia e intensidad de las acciones de represión directa y violenta sobre las movilizaciones sociales. Las repetidas represiones contra los profesores, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos del gobierno, o el asesinato de diversos líderes sociales, por supuesto jugaron un efecto importante para la definición de la estrategia que seguiría el movimiento.

Por ello una medida de carácter político que se tomó desde un inicio fue el tratar de hermanar el movimiento con otras luchas de defensa territorial, lo que se reflejó en los primeros foros en la presencia de representantes de la región Lacandona (Chiapas) y San Salvador Atenco (Estado de México). Aunque su presencia aportó información sobre esos procesos y tuvo impacto en el ánimo de la población que dimensionó la problemática a escala nacional, no logró cuajar en acciones coordinadas de mediano plazo y quedó sólo como un referente de que luchas similares se libran en diversas regiones del país.

Como ya se detalló con anterioridad, en el mismo momento en que inicia el descontento por el proyecto de RB, la región enfrentaba otro problema importante que era el conflicto agrario entre las comunidades de Tilapa y Tierra Colorada, que luego de años había desembocado en una escalada de violencia. La gravedad de la situación llevó a Santa Cruz del Rincón e inmediatamente a varias otras comunidades, a establecer un bloqueo carretero sobre la vía federal Tlapa-Marquelia, presionando políticamente a los gobiernos

estatal y federal para que acudieran a la región a asumir su responsabilidad en la resolución del conflicto agrario.

Reconocer que resolver los conflictos intercomunitarios era fundamental para poder defender el territorio común frente a los intentos de despojo, llevó a fusionar el Consejo por la Reconciliación y la Paz con el recién creado CRAADT; fusionar las luchas y unificar las comunidades de la parte baja y alta fue una decisión política fundamental para que el movimiento se fortaleciera y tuviera una mayor cobertura.

A lo largo de estos años el movimiento procuró generar interlocución con los gobiernos federal y sobre todo estatal. Desde el estallido del conflicto, con la toma de las instalaciones de la UIEG, hubo algunos primeros acercamientos. Más tarde, aprovechando la presión que ejercían las movilizaciones de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG), hubo oportunidad de reunirse un par de veces con el gobernador Ángel Aguirre, pero más allá de la destitución de Carlos Toledo como Secretario de Medio Ambiente y la declaración de que el gobierno estatal desistía del proyecto de reserva, no se lograron obtener otros compromisos.

> Ratificamos que como pueblos originarios de La Montaña rechazamos este proyecto que implica el control del gobierno federal sobre nuestros territorios ancestrales, la prohibición de actividades tradicionales y la imposición de reglas ajenas para el uso y disfrute de nuestros bienes naturales. (…)
> Exigimos el respeto a nuestros territorios y a nuestros derechos como pueblos indios. Rechazamos el decreto de Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero y demandamos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la revocación, o en su caso, la terminación por anticipado de los certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (…) Rechazamos todas las políticas y leyes que ponen en riesgo nuestra agricultura tradicional (…) Rechazamos la zonificación de nuestros territorios con criterios ajenos a nuestras formas de vida (…)
> Exigimos la cancelación de las concesiones mineras entregadas por el gobierno federal en nuestros territorios ancestrales, violando tratados internacionales como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. (…)
> Demandamos el derecho de nuestros pueblos de construir y conducir nuestras instituciones educativas. (…) Que los pueblos participen plenamente en el diseño e implementación de los programas educativos, para que respondan a nuestras necesidades y garantizar que se eduque según las formas de vida comunitaria (…)
> Frente a las amenazas que vienen, por la vida y el futuro de nuestras comunidades y de nuestros territorios como pueblos *Na savi* y *Me'phá*á, seguiremos caminando con nuestras comunidades, con nuestras asambleas y con nuestro Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa Territorio. Llamamos a los pueblos y organizaciones hermanos a estar pendientes y apoyar nuestro movimiento.[76]

Durante el IX Foro en Malinaltepec, se dio lectura tanto al manifiesto como a la respuesta emitida por la CONANP, para informar a todos los asistentes. En el oficio de respuesta, se

[76] Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. 13 de abril de 2013. Declaración de Cochoapa.

afirma que “Desde octubre de 2012 el personal de CONANP suspendió toda actividad relacionada con la RB” y que “El Gobierno de Guerrero en mayo de 2013 declaró que el proyecto se suspendía”, y aunque no se habla de una cancelación definitiva tuvo en efecto tranquilizador. En un contexto estatal de fuertes movilizaciones del magisterio en las principales ciudades del estado, en protesta contra la reforma educativa, la respuesta de CONANP fue interpretada por algunos como una victoria estratégica.

> El documento denominado Declaración de Cochoapa el Grande, que llevaron nuestras autoridades agrarias, encabezados por el Prof. Teodoro Tomás Galeana, Presidente del CRAADT, a la ciudad de México y Chilpancingo, y la situación política explosiva por la lucha del magisterio guerrerense contra la reforma educativa fueron los factores determinantes que los hizo recular en su intentona de imponer un director de la reserva nombrado por la SEMARNAT. Contra este decreto federal los pueblos originarios de la Montaña momentáneamente salimos victoriosos, desenmascaramos el disfraz de conservación de este proyecto, que de fondo pretende allanar el camino legal para la entrada de las empresas mineras y saquear los recursos naturales del subsuelo; más sin embargo, debemos estar alertas y seguir fortaleciendo las asambleas comunitarias que permitan tomar decisiones sobre la conservación de nuestros recursos naturales, como lo hemos venido haciendo. (Testimonio Prof. Saúl Morán, IX Foro Regional, junio de 2013).

En ese mismo IX Foro de Malinaltepec, la Directora del Centro de Estudios Ecuménicos, Lic. Luisa Guzmán compartía un par de notas de prensa recientes y reflexionaba sobre ellas; en primer lugar sobre la necesidad de no confiarse pensando que se ha ganado la lucha, pues aún falta mucho camino por recorrer; respecto de la segunda nota, en la que el nuevo Secretario de Medio Ambiente estatal, Tulio Ismael Estrada Apátiga, anunció que el gobernador está interesado en crear una industria para la explotación de los bosques, argumentando que no es posible tenerlos en una esfera de cristal y con la industrialización se generarían empleos para los campesinos. Al respecto, Guzmán hizo una elocuente descripción del proceso capitalista de mercantilización de la naturaleza, que se conoce como economía verde:

> Debemos tener claro que, lo que estamos viendo, es un fenómeno mundial que busca mercantilizar todos los bienes, que busca que el árbol tenga un precio, el río tenga un precio, que los animales de los bosques tengan precio, y ese precio tiene que ver con que para este sistema capitalista hoy día es posible vender todo lo que haya. Entonces se crea la economía verde, que se inserta dentro del sistema capitalista para poder vender la naturaleza y el primer gran paso que dan es a través del pago por servicios ambientales. Esto es necesario considerarlo porque la respuesta que da la SEMARNAT está diciendo que hay una contradicción, porque decimos no a la reserva de la biosfera pero queremos seguir teniendo dinero por el pago de los servicios del medio ambiente. Hay que tener mucho cuidado, porque tal vez lo que hay que ir trabajando es cómo eliminamos, con planes autónomos de conservación, estas contradicciones, que no significa que las comunidades se queden sin recursos, pero si ser congruentes entre el discurso en contra de la reserva y las acciones que las comunidades van haciendo. Tenemos mucho trabajo por delante y creemos que es necesario que se vaya generando esta lógica de crear un plan, un programa de conservación autónoma por parte de los pueblos (…) (Testimonio Lic. Luisa Guzmán, IX Foro Regional, junio de 2013)

El involucramiento o no de los alcaldes en el movimiento fue siempre un tema que generó honda polémica, pues entre los participantes había posturas encontradas, además de que las aristas del tema eran de por sí diversas. Si bien quedaba clara la importancia de ese nivel de gobierno, porque son los cabildos los que avalan el cambio en el uso del suelo que se requiere para la minería, la gente expresaba sus temores y desconfianza por considerar que la mayoría de las ocasiones los alcaldes responden a sus intereses particulares o de su fracción o partido político. Pero el temor y la certeza de que es preciso trabajar con los alcaldes crecieron con la información vertida por Miguel Mijangos, de Tlachinollan:

> (…) hay una reforma de mucho interés para los presidentes municipales, y por eso se están volviendo porristas. Porque ahora las empresas tienen que pagar el 7.5% de impuestos de lo que saquen al año y que esa cantidad se le pasa el 50% al municipio. Entonces los presidentes municipales, por ejemplo el de Eduardo Neri (Zumpango) va a recibir como 180 millones de pesos al año, entonces el presidente municipal está feliz de que se los den, aunque en Carrizalillo se esté muriendo la gente (…) por eso es importante trabajar con los presidentes, porque ya cuando les llevan lana también pues se van a volver otra fuerza, ¡entonces hay que pararlos antes! (Testimonio Miguel Mijangos, XIII Foro, 2014)

Como ya se comentó, las elecciones de 2015 permitieron la llegada de dos alcaldes afines al movimiento, lo que afortunadamente se pudo concretar en pronunciamientos muy claros de rechazo a la minería y la RBM. Sin embargo, este importante logro ha tenido un magro impacto político, en primer lugar porque el hecho poco se conoce fuera de la región; en segundo, porque dichos alcaldes no jugaron un liderazgo regional con sus homólogos que se pudiera traducir en nuevos pronunciamientos de otros municipios y tratar de blindar la región completa.

Por más de 20 años, los párrocos pertenecientes a la Pastoral Social de la Diócesis de Tlapa han sido actores centrales de los diferentes procesos sociales que ocurren en la región, desde la formación del Consejo Regional de Autoridades Indígenas (CRAI) a principios de los 90's, y este movimiento no podía ser la excepción. Desde su inició el párroco de Malinaltepec, Melitón Santillán Cantú, jugó un importante papel como animador y aglutinador, lo que le valió ser blanco de descalificaciones y ataques por parte de los funcionarios públicos que promovían la reserva de la biosfera, tanto en la región como en medios impresos. Esto llegó hasta el punto de ser erróneamente señalado de promover la vía armada (Riva Palacio, 2015). Por eso fue muy importante que se fueran sumando otros párrocos de la región: Santa Cruz del Rincón, Buenavista, Iliatenco, entre otros, y por eso fue un enorme respaldo político la presencia del Obispo de la Diócesis de Tlapa en el IX Foro Regional celebrado en Malinaltepec, en junio de 2013. La presencia y las palabras de aprobación y aliento expresadas por el Obispo hacia el movimiento, fueron capitalizadas por la dirigencia para rebatir las acusaciones que aún persistían en la región

contra los párrocos y comisariados. Un mes después, Teodoro Tomás lo platicaba así a los asistentes al X Foro en Iliatenco:

> Y dijo el padre Melitón "Le voy a explicar a mi jefe que es el Obispo, cual es la lucha que yo hago, al lado del pueblo"; dicho y hecho, en Malinaltepec llega el señor Obispo, y nos da sus bendiciones y con los ritos que guardan nuestro pueblo de la Región de la Montaña, como Malinaltepec, pueblo histórico, pueblo mágico de muchos años y tiene mucha cultura, y eso se hizo ahí compañeros. Para mí lo más maravilloso que dijo el Obispo fue "Hagan lo que hagan como pueblo y yo hago lo mío", y le dijo a sus sacerdotes, porque varios de ellos que están aquí participaron unos adelante y otros atrás, también dando bendición. Y ahí en lugar de que el Obispo dijera que el padre Meli es un guerrillero, ahí el señor se dio cuenta que viene a despertar al pueblo, que viene a decirle la verdad al pueblo, y el Obispo también dijo, "dios nos dio el mundo, tierra, animales, plantas, pero también nos lo dio para que lo cuidemos" (…) (Testimonio Prof. Teodoro Tomás Galeana, X Foro Regional, agosto de 2013).

Desafortunadamente el impulso que este hecho le estaba dando al movimiento, se vería drásticamente frenado en septiembre de 2013, con la llegada de la tormenta tropical Manuel, que en tres días dejó precipitaciones históricas en la región provocando a su paso enormes daños materiales y humanos, afectando severamente las vías de comunicación y ocasionando la pérdida de las cosechas. Esta catástrofe natural no sólo impidió la realización de varios foros de forma sucesiva, sino que ante la emergencia sanitaria y alimentaria, desmovilizó a la población que tuvo que atender aspectos más urgentes.

En estas condiciones tan adversas el Consejo tuvo que cerrar el año 2013, por lo que iniciando el siguiente, se procuró reagruparse para reforzar las acciones. En enero de 2014, la plenaria del XI Foro realizado en San José Vista Hermosa acordó emitir una declaración que en resumen planteaba:

> 1. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras; 2. Rechazamos las Áreas Naturales Protegidas y demandamos la revocación, o en su caso, la terminación por anticipado de los certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. La regulación, vigilancia y mantenimiento de las tierras ancestralmente conservadas quedarán a cargo de nuestras comunidades. No aceptaremos más certificados, ni inscribir bajo cualquier figura de conservación oficial nuestras tierras; 3. Denunciamos que la supuesta Cruzada Nacional Contra el Hambre ha sido una estrategia para militarizar nuestro territorio y darnos el mensaje de que debemos volvernos dependientes alimentariamente. Buscando someternos como pueblos originarios al romper nuestra cultura de autosuficiencia; 4. Rechazamos todas las políticas y leyes que ponen en riesgo nuestra agricultura tradicional, sea mediante dinero por dejar de sembrar con los programas de Pago por Servicios Ambientales o través de proyectos de reconversión productiva; 5. Rechazamos los intentos de acabar con el ejido y los bienes comunales, a través de la nueva iniciativa de reforma a la Ley Agraria. Exigimos el respeto a la propiedad colectiva de nuestras tierras conforme al espíritu original del Artículo 27 constitucional y a nuestros derechos como pueblos originarios; 6. Rechazamos las reformas que los malos gobiernos están imponiendo, en especial la reforma energética que termina de entregar nuestros territorios y los recursos del subsuelo, destruyendo la soberanía nacional y el futuro de nuestra patria, de nuestros hijos y de nuestros nietos; 7. Demandamos el derecho de nuestros pueblos de construir y conducir nuestras instituciones educativas. Las asambleas deben ser el espacio donde se discute la educación que queremos; 8. Exigimos

> respeto irrestricto a nuestros Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitaria, a nuestras Policías Comunitarias.
> Ratificamos que frente a la destrucción de nuestros territorios y de las formas de vida comunitarias, a la pobreza en que nos han dejado, es en el ejercicio pleno de nuestros derechos como pueblos que nos proponemos defender y recuperar el control de nuestros territorios. [77]

A lo largo de este proceso de resistencia, las comunidades de la región debieron enfrentar simultáneamente un problema de la mayor relevancia, la fractura de la CRAC. Como se comentó en el capítulo uno, la mayor parte de la región involucrada en este movimiento, corresponde al territorio de las comunidades que fundaron la CRAC-PC, por lo que dentro de dicha región se ubican las tres casas de justicia históricas: San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec. Esta fractura en primer lugar desarticuló la principal institución comunitaria, la que por muchos años había encabezado la salvaguarda del territorio y de su gente, dejándola a merced de la violencia generada por diferentes grupos. También provocó una fuerte tensión y división entre las comunidades y al interior de algunas de ellas, dificultando o impidiendo que el Consejo tomara más fuerza, además de generar mayor inestabilidad en la zona a consecuencia de los conflictos entre las facciones, que más de una vez llegaron al uso de las armas. Por si fuera poco, los testimonios de algunas autoridades señalan que miembros de alguna de las fracciones realizaron acciones para favorecer la entrada de las mineras.

Ante este escenario, parte esencial de la estrategia de resistencia pasaba por definir una posición respecto del conflicto en la CRAC. Algunos de los dirigentes optaron por no reconocer a los Coordinadores regionales de la CRAC, deslindarse de ellos y replegarse al territorio de las comunidades que originalmente la vieron nacer, para lo cual fundaron la casa de justicia de Santa Cruz del Rincón en junio de 2013. Otros miembros del Consejo se mantuvieron participando en torno a algunas de las tres casas de justicia originales y otros más se mantuvieron al margen. En medio de este panorama de profunda división en la CRAC y el papel ambiguo mostrado por algunos de sus dirigentes frente al proceso de defensa del territorio, el CRAADT tomó la decisión de no involucrarse en los conflictos de aquella otra institución y negar la entrada a dichas personas para impedir que la fractura los afectara.

El tema de los partidos políticos ha sido delicado al interior de los diversos esfuerzos organizativos, y este movimiento no podía ser la excepción. Por ello la coyuntura de las elecciones locales del 2015 representaron otro reto importante para el Consejo, no sólo por la interferencia que ocasionan las campañas, sino también porque al conformarse los diferentes bandos en busca del voto, cambia mucho la dinámica en toda la región. Al calor

[77] Declaración de San José Vista Hermosa, 25 de enero de 2014. Anexo 6.

de las elecciones, la defensa del territorio común pasó a segundo término para muchas personas, que votaron o apoyaron a uno u otro candidato aparentemente sin importar que las personas o los partidos hubieran dado la espalda a las comunidades favoreciendo los intereses mineros o de la RBM. Tal vez la única excepción fue la alcaldía de Malinaltepec, donde el candidato que resultó ganador, el Ing. Sebastián Ramírez, no fue postulado por ninguno de los dos partidos predominantes, y su triunfo aparentemente se relaciona con el activismo que tuvo dentro del movimiento de defensa territorial, lo que le habría permitido ganar suficiente respaldo como para remontar y vencer al voto duro de PRI y del PRD. Prueba fehaciente de la división generada por los partidos y su interferencia en este movimiento, es el caso de Cochoapa El Grande, en que la polarización entre partidos inmoviliza al núcleo agrario más grande la región impidiendo que participe activamente en la defensa de su territorio. Por ello no es casual que Taurino Carrasco (2017), presidente de la segunda mesa directiva del Consejo, afirme que uno de los mayores aciertos del movimiento ha sido el saber mantenerse lejos de cualquier dirigencia partidista y mantener interlocución con todos.

Balance de los logros

Desde el punto de vista de los resultados, lo importante es que, aunque los movimientos casi siempre se conciben a sí mismos como algo exterior y opuesto a las instituciones, la acción colectiva los inserta en complejas redes políticas, poniéndolos así al alcance del Estado. Aunque sólo sea eso, “los movimientos enuncian sus exigencias en términos de marcos de significado “que resultan comprensibles para un sector más amplio de la sociedad; emplean formas de acción colectiva extraídas de un amplio repertorio” (Tarrow, 1994, p. 61).

Ahora bien, desde el punto de vista del desenlace y resultados del movimiento social, Munck (1995) ofrece un acercamiento teórico basado en la relación dialéctica entre identidad y estrategia, así como una tipología que resultan de gran utilidad.

> El resultado es negativo cuando la conexión entre la identidad y la estrategia se rompe. Esto puede ocurrir, por un lado, cuando las consideraciones estratégicas sobrepasan y pervierten la identidad del movimiento social. Esta es una de las variantes de riesgo que Roberto Unger llama "el problema demoniaco de la política: la tendencia de los medios a crear sus propios fines” (Munck, 1995, pp. 31).

Según el planteamiento del autor, el movimiento social puede fracasar cuando el medio político circundante lo absorbe, y en vez de transformarlo es transformado por él. En esas condiciones la visión de cambio y la identidad características de ese movimiento social se pierden, convirtiéndose en parte del sistema al que

originalmente quería transformar y dejando así de representar una alternativa política.

Por el contrario –continúa Munck (1995)- el segundo riesgo es cuando el movimiento desatiende las consideraciones de tipo estratégico y se concentra sólo en sus aspectos identitarios. En este caso -sea por decisión o por inexperiencia- al rehusarse a dar la pelea en la arena política, en los hechos equivale a abandonar la búsqueda de medios adecuados para alcanzar los objetivos del movimiento, dejando nuevamente de ser una verdadera alternativa de cambio.

> El manejo exitoso del problema de la estrategia política depende, pues, de la habilidad de los organizadores de un movimiento social para confrontar el peligroso problema de los medios y los fines al llevar a cabo acciones estratégicas, de tal manera que los medios escogidos sean consistentes con la identidad y las metas del movimiento.
> Lo que distingue a un movimiento social, a fin de cuentas, es que promueve una lucha sobre cuestiones de principios de tal manera que su acción estratégica está siempre subsumida debajo de su identidad o, en otras palabras, lo que mantiene una relación "consistente" entre su identidad y su dimensión estratégica (Munck, 1995, pp. 32).

De acuerdo con este acercamiento teórico, el desafío asociado a la orientación hacia el cambio de un movimiento puede ser analizado a partir de cuatro amplias posibilidades que resultan de combinar dos factores: la consistencia de la relación entre la identidad y la dimensión estratégica del movimiento social, y la arena social o política en la cual opera (ver figura 11).

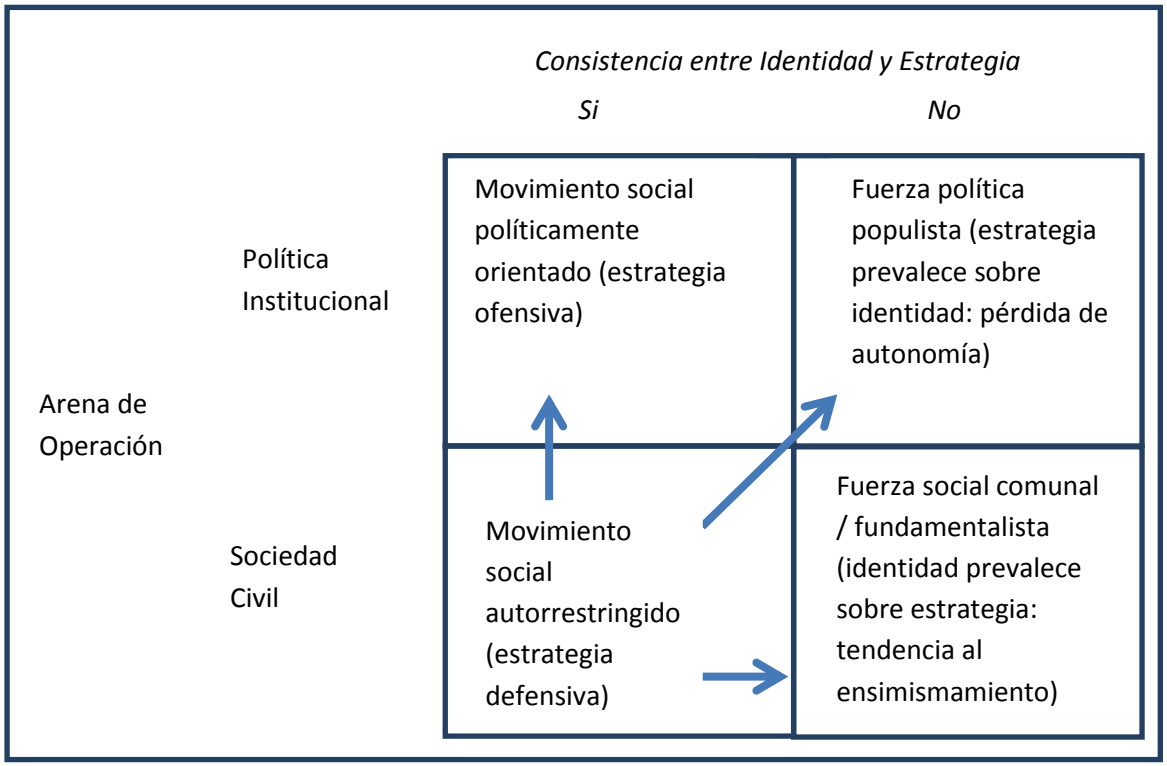


Figura 11. El problema de la estrategia política. Tomado de Munck (1995).

La figura 11 plantea una tipología en la que se puede clasificar la actuación de un movimiento social en cuatro escenarios generales, según la arena en que decidan operar, y dependiendo de la consistencia entre su identidad y la estrategia para lograr los objetivos que se han planteado. Según Munck (1995) la mayoría de los movimientos sociales eligen una estrategia defensiva (forma de acción autorrestringida), al buscar el cambio en el mundo de la sociedad civil, ponderando una política de identidad, y eludiendo en lo posible la arena político-institucional y sin una estrategia política clara. Esto suele ocurrir cuando al evaluar sus fuerzas y las de su contrincante, deciden no exponerse al riesgo de establecer compromisos y negociaciones. Esto puede ser visto como un fracaso parcial, pues evitar la confrontación restringe las posibilidades de transformación que el movimiento pudiera tener.

Asumir el reto de transformar la situación que lo aqueja y lograr los objetivos planteados por el movimiento implica "(…) desarrollarse como una fuerza capaz de desafiar el orden establecido por las instituciones políticas. Esto requiere una transición de una estrategia defensiva a una estrategia ofensiva, una transición que transforme al movimiento social en un movimiento social políticamente orientado" (Munck, 1995, pp. 34), y en buena medida esto se logra cuando logra traducir su energía y movilización social en poder político, pero cuidando siempre de mantener sus principios para no convertirse en una fuerza política populista, enteramente definida por su acción política.

Cuando empieza a predominar la lógica de la movilización y de mantener la confrontación en la arena política, perdiendo de vista la identidad que aglutinó en torno al movimiento, normalmente termina siendo cooptado "desde arriba convirtiéndose en una fuerza política populista. Aunque puede que haya continuidad en el componente organizacional, el movimiento social como tal deja de existir al perder su autonomía, "En vez de ser un movimiento orientado hacia el cambio, se convierte en un actor incorporado dentro de un sistema político-institucional, en una relación dependiente que pierde la capacidad de promover una lucha sobre cuestiones de principios".

Sin embargo, el otro gran peligro que debe sortear un movimiento es la inmovilidad que le impida avanzar hacia sus objetivos, que le haga perder su capacidad de cambio, como cuando "… se privilegian objetivos no negociables en detrimento de toda consideración estratégica, y se lleva a cabo una acción colectiva basada en una política pura de identidad, o lo que Weber llama una "ética de fines últimos" (Weber, 1946: 120; cit. Munck, 1995, pp. 35). Esto normalmente ocurre como una reacción a los riesgos de entrar en la negociación, de vencer la tentación de ser cooptados y evitar el populismo; en respuesta el movimiento social se vuelca sobre sí mismo y se transforma en una fuerza social fundamentalista, con tendencia al ensimismamiento (Munck, 1995)

Aparentemente, en la clasificación mostrada en los párrafos anteriores el movimiento de defensa del territorio en la Montaña de Guerrero podría verse como un movimiento social *autorrestringido*, porque dentro de su estrategia ha privilegiado las acciones que refuerzan su identidad y establece con claridad elementos que no son negociables (como la soberanía sobre su territorio). A pesar de esta tendencia al accionar *hacia adentro*, el Consejo está muy lejos de constituirse como una fuerza social *ensimismada y*

fundamentalista (*sensu* Munck, 1995), pues considero que el privilegiar la estrategia hacia adentro tiene sentido, justamente porque la mayor fortaleza del movimiento se ubica en los rasgos identitarios, en el tejido social, y los derechos que tienen como núcleos agrarios y como pueblos originarios.

Desde esta fortaleza ganada a través de la información y reflexión pública en asambleas, una vez habiendo reactivado las redes sociales (*sensu* Tarrow, 1997) el Consejo asumió, aunque con ciertas limitaciones, el reto de saltar al escenario de la política institucional, pasando con ello de una estrategia defensiva a otra ofensiva, es decir, de constituirse en un *movimiento social políticamente orientado* (*sensu* Munck, 1995), que busca incidir en el marco jurídico nacional, que usa las redes sociales y los medios masivos de comunicación, que cuestiona la legitimidad de ciertas acciones emprendidas desde el gobierno federal, que establece alianzas con otros actores y que participa en la elección de autoridades locales.

Para resumir lo abordado en el Capítulo 5, empezaré diciendo que probablemente la característica definitoria más ampliamente aceptada para un movimiento social, es que se trata de un tipo de acción colectiva orientada hacia el cambio (Melucci, 1989; Tarrow, 1997). Es esto lo que obliga a los fundadores o líderes a actuar, por un lado, como actores estratégicos, orientarse las acciones hacia fines o metas y considerar las consecuencias de sus acciones, pero encarnando una *ética de responsabilidad* (Munck, 1995).

En el caso del Consejo (CRAADT), el movimiento de defensa del territorio se construyó y operó usando una preexistente y delicada red de interacciones sociales, tanto a nivel intra como intercomunitario. Desde los lazos generados por el CG 500 ARI, por el CAIN y luego por la CRAC-PC, la cohesión dentro de los territorios parroquiales y la participación en las festividades religiosas, relaciones gremiales dentro del magisterio, el movimiento surgió y se mantuvo vigente gracias a un tejido comunitario en buena medida creado en los últimos 20 años, y sabiamente aprovechado por los líderes de la lucha.

Los líderes del movimiento deben asumir una función creativa, deben inventar, adaptar y combinar distintas formas de acción colectiva para estimular el apoyo de la gente (Tarrow, 1997), lo que en este caso permitió replicar de alguna manera la experiencia de la CRAC-PC y la más reciente del Consejo de Autoridades Agrarias por la Paz y la Reconciliación, permitió que el problema dejara de ser sólo de La Ciénega y comunidades aledañas, para

convertirse en un problema regional reactivando con ello bases de apoyo que se encontraban aparentemente *desactivadas* o *latentes*.

Reactivar y fortalecer esta base social fue fundamental para poder dar la lucha por la defensa de su territorio. Sobre todo si se considera que la estructura política de oportunidades (Tarrow, 1997) no resultaba muy favorable al tener que enfrentar a una poderosa trasnacional minera apoyada por el gobierno mexicano, que ha sido definido como un régimen político autoritario, cuya estructura vertical y monopólica reduce los canales institucionales de los que la gente dispone para influir en el proceso de toma de decisiones, coartando así las posibilidades de participación política (Favela, 2002). Esto es particularmente marcado en el contexto guerrerense, como lo muestran las estadísticas de represión policiaca, detención, tortura, asesinato e incluso masacre, perpetrados contra movimientos campesinos o ecologistas, profesores, estudiantes y, en general, opositores al régimen.

Para lograr su estrategia el CRAADT se orientó en primer lugar a reafirmar la naturaleza no negociable de su identidad (Munck, 1995) como pueblos indígenas, con un amplio y sostenido trabajo de comunicación y concientización entre las comunidades involucradas, pero se ha rehusado a quedarse sólo con una estrategia defensiva, en el ámbito de la sociedad civil; no es un movimiento autorrestringido (*sensu* Munck, 1995).

Por el contrario, el movimiento entendió bien que para lograr su objetivo no bastaba con fortalecerse al interior, sino que se debía incursionar en la dimensión de la política institucional propia del sistema, pero cuidando de mantener la coherencia con sus principios para no perder autonomía ni desviar el rumbo de sus acciones.

Apoyado en diversos aliados el CRAADT incursionó en el plano de la defensa legal y política, incidiendo dentro de sus limitaciones en las escalas estatal y nacional, donde tuvieron logros importantes, desde la salida del rector de la UIEG-IMA y del secretario de medio ambiente; la cancelación del proyecto de Reserva de la Biosfera; la cancelación de 22 de las 44 concesiones que existían en la región, con lo cual la superficie concesionada disminuía drásticamente de 142 mil 432 ha a sólo 32 mil 616 ha. Los amparos ganados por la comunidad de San Miguel del Progreso contra el otorgamiento de concesiones mineras sin haber sido consultados previamente, y contra la declaratoria de libertad de terrenos que había hecho la Secretaría de Economía, constituyen logros importantes, pues sientan jurisprudencia sobre el particular.

Las fuerzas e instrumentos que el Consejo –ayudado por sus aliados- logró movilizar, hasta el momento han alcanzado para estas victorias, pero muy probablemente no alcancen para una cancelación definitiva, pues ello requiere cambiar las reglas del juego. Sin embargo, el balance es positivo y el Consejo (CRAADT) podría calificarse como un

movimiento social exitoso, que supo moverse en el plano político sin perder de vista la esencia de su identidad y de su lucha.



Figura 12. Toma de acuerdos durante el Foro en Defensa del Territorio en La Ciénega, octubre de 2012.

Capítulo 6. Hacia un proyecto comunitario de futuro

Este último capítulo está destinado a abordar lo que podríamos llamar la dimensión filosófica y ambiental del movimiento. Se trata de una serie de reflexiones que fueron surgiendo a lo largo de estos años acompañando este y otros procesos en la región, platicando con diversidad de actores y escuchando en las asambleas y foros. He tratado de organizar estas reflexiones, que forman parte de la sabiduría de los pueblos de la Montaña, para ponerlas a dialogar con algunas propuestas teóricas provenientes de lo biocultural, lo etnoecológico, la teoría de los bienes comunes y de la acción colectiva.

Considero que la diversidad de influencias que se han puesto en juego durante estos años en los diferentes procesos constituyen un importante crisol que sigue alimentando el sueño de un proyecto autonómico para los pueblos *Me'phää* y *Na savi.* La puesta en práctica de algunas iniciativas permitieron vislumbrar escenarios menos inhóspitos e identificar elementos de lo que podría llegar a constituir un Proyecto Regional de Manejo y Conservación Comunitaria del Territorio, que forme parte de un sueño mucho mayor, como alguna vez fue el proyecto integral soñado por los fundadores del Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN).

La visión a ras de suelo: la restitución del derecho colectivo

El basamento fundamental de todo este movimiento ha sido la reivindicación de su cultura y filosofía como pueblos indígenas, como montañeros; no desde una posición esencialista, si no desde una actitud propositiva, con la convicción de que hay otras formas de hacer la política y que ellos tienen el pleno derecho de intentar la propia. Esta convicción se alimenta por un lado de reconocer que, como pueblos originarios, tienen una forma particular de proyectar su estar en el mundo; pero por el otro lado, porque están conscientes que la política gubernamental no está orientada a promover la equidad ni el desarrollo de sus comunidades, por el contrario está encaminada a acentuar las diferencias, de aquí que se hayan propuesto andar su propio camino, con la claridad que nadie hará por ellos lo que no sean capaces de impulsar por sí mismos. Cirino Plácido Valerio –uno de los fundadores de la CRAC-PC- lo explica de la siguiente forma:

> Hablar del proyecto comunitario es hablar de democracia participativa, donde la gente decide directamente los temas relevantes a través de su asamblea, que es la máxima autoridad. Es una forma de gobierno donde el pueblo manda y la autoridad obedece. Estamos tratando de recuperar el sentido de lo colectivo, el pensamiento comunitario, pienso primero en mi

> pueblo y luego estoy yo, no puede ser primero yo y después mi pueblo; primero el pueblo porque es la casa de todos. Recuperar lo colectivo significa que el poder lo tengan los pueblos, que ellos controlen al poder político y no los políticos controlen al pueblo, como sucede en el país, donde el gobierno ve a los mexicanos como borregos; en la democracia participativa o democracia directa no vemos a la gente como borrego ni como res, la vemos como sujeto de derecho, porque yo no soy borrego para que el dueño del rancho decida por mí; no, yo soy mexicano, dos veces mexicano porque soy *Na savi*, y como sujeto no estoy de acuerdo en que nadie decida mi destino, nosotros queremos ser actores de nuestro propio destino. El proyecto comunitario es reconstruir el territorio, reconstruir la comunidad para que vía asamblea se defina el rumbo político de la región o la comunidad (…) nosotros construimos poder para que prevalezca la razón, no la fuerza. (…) ¡Y todo este proyecto no es algo fuera de la ley, no! Porque es compatible con lo que dice el artículo 39 constitucional, que dice que la soberanía reside en el pueblo, es compatible con el artículo 2º, que reconoce la naturaleza multicultural de la nación, es compatible con el Convenio 169 de la OIT y también con la Ley 701 sobre derechos de los pueblos indígenas. (Testimonio del C. Cirino Plácido Valerio) [78]

Estas palabras contienen una gran profundidad, pues desde elementos de sentido común plantean con mucha claridad aspectos éticos que deberían ser pilares de la política pública. El derecho pleno a ser sujeto y decidir su futuro, la preeminencia de la colectividad sobre los individuos, la conciliación y la razón por encima de la fuerza, elementos todos que deberían estar presentes para restablecer un verdadero estado de derecho. Por eso, hablar de la restitución del derecho colectivo es una postura política de enorme validez, pues no sólo reclama el derecho que les corresponde a la autodeterminación, sino que asume la responsabilidad que inevitablemente trae aparejada, de construir activamente su opción de futuro. Esto nos remite al concepto del control cultural en el sentido de Bonfil (1983).

> Por control cultural se entiende la capacidad de decisión sobre los elementos culturales. Como la cultura es un fenómeno social, la capacidad de decisión que define al control cultural es también una capacidad social, lo que implica que, aunque las decisiones las tomen individuos, el conjunto social dispone, a su vez, de formas de control sobre ellas. El control cultural, por eso, no es absoluto ni abstracto, sino histórico. (Bonfil, 1983, p. 1)

Esta forma de concebir el control cultural que plantea Bonfil coincide plenamente con lo expresado por Cirino Plácido, en términos de que la comunidad dispone de mecanismos de control sobre la forma en que se toman las decisiones, y puede ser claramente ejemplificado también en el testimonio del Prof. Apolonio Cruz:

> Empezando desde la asamblea general de comuneros y avecindados, desde ahí empezamos a plantear este asunto cuando nos dicen que nosotros estamos incluidos en la reserva de la biosfera, se da a conocer a la asamblea general y la asamblea dice no, cómo es que yo que tengo parcela en el polígono del proyecto de la reserva ya no voy a sembrar, ya no voy a

[78] Cirino Plácido Valerio es indígena *Tun savi* originario de Buenavista, Mpio. de San Luis Acatlán, donde ha fungido como Comisario y Comisariado Ejidal. Es uno de los fundadores de la CRAC-PC, donde ha sido Coordinador Regional y Consejero. Actualmente promueve el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

> meter mis animales, ya no voy a sacar leña (…) entonces la asamblea dice no, tenemos que decirle al gobierno que no estamos de acuerdo, pero también hay que proponer algo (…) (Testimonio del Prof. Apolonio Cruz Rosas, diciembre de 2013) [79]

Es entonces cuando su condición de pueblos indígenas y su historial de lucha y organización les confieren una riqueza de herramientas para poner en juego en momentos de crisis como la que enfrentan, al disponer de una variedad de opciones para pensar y construir colectivamente el futuro. Pues como el propio Bonfil (1983) plantea, los elementos culturales son indispensables para todo proyecto social, para imaginarlo, para compartirlo y ponerlo en común, pero también para construirlo. Pero dichos elementos son dinámicos y cambian a lo largo del tiempo, razón por la que dicho proyecto social está condicionado históricamente. En el caso de las comunidades en la Costa-Montaña, esta gama está integrada tanto por elementos ancestrales provenientes de su matriz mesoamericana, como de otros aprendidos y apropiados en el devenir de las luchas.

> Por elementos culturales se entienden todos los recursos de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular y realizar un propósito social. Pueden distinguirse, al menos, las siguientes clases de elementos culturales:
>
> a. Materiales, tanto los naturales como los que han sido trasformados por el trabajo humano;
> b. De organización, que son las relaciones sociales sistematizadas a través de las cuales se realiza la participación; se incluyen la magnitud y las condiciones demográficas;
> c. De conocimiento, es decir, las experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades creativas;
> d. Simbólicos, códigos de comunicación y representación, signos y símbolos;
> e. Emotivos, sentimientos, valores y motivaciones compartidas; la subjetividad como recurso. (Bonfil, 1983, p. 1)

En este punto es relevante retomar otra reflexión de Bonfil, en el sentido de distinguir entre una clase subalterna y un pueblo colonizado, ambos en el seno de un mismo Estado, y la diferencia estriba justamente en la naturaleza y la condición de su propia cultura:

> a. La clase subalterna y dominante forman parte de una sola sociedad, es decir, de un mismo sistema socio-cultural. Pero la lucha se da dentro de un mismo horizonte civilizatorio y los proyectos se plantean como alternativas para el conjunto de la sociedad y no exclusivamente para una clase social, aunque tales proyectos sean diferentes y, en muchos sentidos, opuestos. Los elementos culturales cuyo control se disputa son, finalmente, los mismos.

[79] Profr. Apolonio Cruz Rosas, *Me'phää* originario de Santa Cruz El Rincón, mpio. de Malinaltepec, donde ha sido Comisario, Comisariado Bienes Comunales. Fue fundador de CAIN y la CRAC-PC, y miembro del CRAADT del 2012 a mayo de 2015, entrevista realizada en diciembre de 2013.

> b. Un pueblo colonizado posee una cultura diferente de la que posee la sociedad colonizadora. El proceso colonial la habrá mutilado, constreñido, modificado; pero no la habrá hecho desaparecer (si lo hubiera hecho, no habría más pueblo colonizado). La cultura autónoma que conserva presenta la continuidad histórica (no la permanencia estática, siempre fiel a su espejo mismo) de una cultura diferente, en torno a la cual se organiza un proyecto civilizatorio alternativo para el pueblo colonizado: proyecto de resistencia que se trasformará en proyecto de liberación.
>
> c. El pueblo colonizado lucha por su autonomía. La clase, subalterna lucha por el poder dentro de la sociedad (cultura, civilización) de la que forma parte. La clase es parte indisoluble de una sociedad mayor y como clase no tiene proyecto propio al margen de esa sociedad; el pueblo colonizado ha sido incluido en un sistema de dominación y tiene proyecto propio, aunque, por supuesto, su realización implique la trasformación de la sociedad en su conjunto.
>
> En términos de análisis del control cultural el problema consistiría en esclarecer cual es la cultura propia de las diversas unidades sociales que componen el mundo subalterno: pueblo, clases, comunidades. Porque es a partir de esa cultura autónoma, como se organiza la visión del mundo (su comprensión y los proyectos para transformarlo) y donde están, en cualquier momento del devenir histórico, los medios y los elementos culturales que el mundo subalterno e capaz de poner en juego. (Bonfil, 1983, p. 5-6)

Esta lucha en defensa del territorio, evidentemente es impulsada por comunidades que pertenecen a pueblos indígenas que han sido colonizados, poseedores de una cultura claramente distinta de la hegemónica dentro del estado mexicano. Hacerlo notorio, lejos de estar encaminado a fortalecer el racismo y la exclusión de que han sido objeto, tiene por objeto evidenciar la profundidad histórica y política del movimiento. El proceso de resistencia que están impulsando responde a un proyecto civilizatorio cualitativamente distinto del que subyace a los proyectos minero y de reserva de la biosfera. Aunque los siglos de negación y dominación hayan logrado invisibilizar en gran medida la cultura de estos pueblos originarios, ésta aún persiste y se manifiesta de formas diversas, como se evidencia no solo en los testimonios orales aquí presentados, sino en diversas expresiones cotidianas que terminan configurando el proceso mismo de resistencia ante los intentos de despojo y sojuzgamiento y, más aún, en la construcción paulatina de un proyecto propio, alterno al que se les pretende imponer. Este proyecto propio se fundamenta en la matriz cultural indígena, que ante la adversidad emerge y se reconfigura para enfrentar la amenaza, pues en palabras de Bonfil (1983, p. 7) “La afirmación de la cultura propia es, por eso, un componente central, no sólo de cualquier proyecto democrático, sino de toda acción que descanse en la convicción de que los hombres lo son por su capacidad creadora”.

La dimensión ambiental-territorial dentro del proyecto comunitario

En diferentes partes a lo largo del documento, me he referido a los esfuerzos de distintos actores por construir una visión de futuro digno para los pobladores de la región. Para ello ha sido preciso trascender la posición reactiva frente a los problemas y pasar a una fase propositiva, en la que asumen su capacidad de transformar la realidad para el beneficio colectivo. Se han hecho intentos en los ámbitos de la seguridad, la justicia, la educación y la salud. Los proyectos de reserva de la biosfera y mineros, hicieron aflorar una serie de aspectos sobre la relación que establecen los pueblos de la Montaña con su territorio.

La configuración paulatina de este proyecto comunitario de futuro, alterno al modelo hegemónico dominado por la acumulación del capital, tiene en la dimensión ambiental-territorial un componente de primordial importancia, que condensa parte fundamental de la cultura propia. La relación ancestral entre la gente y su entorno, como producto y producente recíprocos, ha generado un vasto conocimiento y ha cargado el territorio de simbolismos, haciéndolo mucho más que un mero espacio. Por ello no es casual que en diversas regiones del país se ha podido documentar que, cuando los dependencias de gobierno comenzaron a abordar estos temas, las organizaciones o autoridades comunitarias ya estaban promoviendo prácticas sustentables, milenarias algunas y nuevas otras, aunque muchas veces el impacto de estos esfuerzos se haya visto reducido por factores externos, como las políticas públicas desordenadas y el caos institucional (Moguel y Toledo, 1999; Toledo *et al*., 2002; Merino, 2004; Cortéz y Paré, 2006; Merino, 2008).

Dejar claro esto es muy importante para desmantelar el mito del indígena destructor que manejan algunos funcionarios de gobierno para justificar la creación de la RBM. Para la región de estudio, si bien pueden documentarse impactos generados por los pobladores locales, resulta evidente que los mayores impactos ambientales fueron generados por acciones del propio gobierno: la destrucción de los bosques está fuertemente asociada con el saqueo que realizó la paraestatal Forestal Vicente Guerrero en décadas pasadas; los procesos erosivos de mayor magnitud han sido generados por la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia que debido a su mal diseño y deficiente construcción continuamente tiene deslizamientos; los programas de "fomento agrícola" basados en el uso intensivo de plaguicidas ha contaminado los cuerpos de agua; los programas de ganaderización en las partes medias y bajas de las cuencas provocaron altos índices de deforestación. En un testimonio recogido por Mora (2014) es evidente que la gente identifica al gobierno y sus programas como los principales causantes del deterioro ambiental en la región, no sólo en impactos directos como los enunciados renglones arriba, sino también al romper o debilitar el tejido social:

> (…) la gente se ha dividido y ha talado porque también nos han llegado enfermedades, enfermarnos por el dinero, como los programas del gobierno, Oportunidades, PROCAMPO y

> todos los programas, hay Probosque, entonces han metido a la zona la idea de comprar, de vender, de ver todo meramente por la parte económica pero no con la idea de compartir lo nuestro con el hermano. (Mora, 2014: 159)

En algunas comunidades, la posibilidad de que las empresas mineras entren de la mano de algún proyecto gubernamental, ha llevado a la decisión de rechazar todos los programas gubernamentales, dejando únicamente los que ya estaban en operación desde hace tiempo y poniendo condiciones muy claras para su establecimiento:

> Si aceptamos programas que vengan a apoyarnos, a mantener el medio ambiente, pero sin condicionar, que no nos diga el gobierno, te doy este programa pero a cambio de tu territorio, eso es lo que queremos que la gente vea, si el gobierno mexicano es su obligación... Sin que nos pongan condiciones, entonces es lo que queremos que la gente se vaya despertando, que vaya aprendiendo también a manejar su medio ambiente (Mora, 2014: 159).

Es de esta forma, compartiendo información y reflexionando en colectivo en las asambleas, se fue clarificando lo que pasaba y acordando la posición, tal como lo narra el Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso:

> (…) Entonces vieron los grandes empresarios que existen recursos de legalidad en la Montaña de Guerrero, donde ya mencionaron algunos compañeros que existen diferentes tipos de minerales. Entonces tan pronto llegó el comisariado convocó a una asamblea y ahí se determinó dejar de recibir cualquier tipo de apoyo económico que estén dando el gobierno federal y estatal, como servicios ambientales, servicios hidrológicos, guardarraya, todo ese tipo lo cancelamos, con el apoyo de Tlachinollan, le pedimos asesoría para poder salir de ese atolladero. De igual manera sobre el área protegida, así lo llamaron primeramente, el Dr. Taurino bajaba cada vez a San Miguel informando que eso no les va a afectar, y varios de los principales manifestaron que ellos lo tienen porque lo saben cuidar, no hay necesidad que venga tal oficina, tal dependencia, que les oriente, ellos lo saben cuidar sus recursos naturales, por eso lo conservan, tanto su flora y su fauna. (Testimonio Prof. Agapito Cantú Manuel, X Foro en Defensa del Territorio, agosto de 2013) [80]

La certeza de que la riqueza natural existente en la región está estrechamente relacionada con la riqueza cultural de los pueblos originarios dueños del territorio coincide con estudios recientes, que muestran claramente que los núcleos agrarios de la región mantienen muy alto porcentaje de su territorio con cubierta forestal. Tal sería el caso del ejido Tlaxcalixtlahuaca, con una superficie forestal del 77% (Córdoba y Quintana, 2012); los Bienes Comunales de Santa Cruz el Rincón, que mantiene bosques en un 82% del territorio (Martínez y Domínguez, 2014); o del municipio de Iliatenco (integrado por el ejido y bienes comunales de Iliatenco, además de los bienes comunales de San José Vista Hermosa), donde los ecosistemas forestales aún cubren el 92% (Maradiaga *et al.,* 2007).

Obviamente estas cifras no son producto de la casualidad. La gente en las comunidades tiene claro que si aún existen esos bosques, que si hay sitios bien conservados, no es

[80] Profr. Agapito Cantú Manuel, Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso y miembro del Consejo del 2012 a mayo de 2015, durante el X Foro en Defensa del Territorio, Iliatenco 9 de agosto de 2013.

porque alguna dependencia lo haya promovido, sino porque ellos han hecho un buen manejo de su territorio, aunque el gobierno no les reconozca ese papel y aunque muchas veces a ellos mismos les cueste valorarlo: “la reserva de la biosfera es algo que ellos lo han seguido de toda la vida y que lo han sabido, conservar…el gobierno sabe que nosotros como esta región somos gente que le damos agua, le damos aire, le damos todo lo demás…¿Y quién nos dice gracias por tu agua? ¿Gracias porque tú apagas tu incendio?, ¿Gracias por no talar muchos árboles?” (Mora, 2014: 158).

Esto es posible porque, como ya se dijo, ni la preocupación por la protección y conservación ambiental y ni el desarrollo de acciones concretas son nuevas en la región. Por el contrario, varias de ellas tienen sustento en elementos de su propia cosmovisión, que permite a las comunidades de la Costa-Montaña (y de muchas otras regiones indígenas y campesinas del país), disponer de mecanismos para promover el acceso equitativo y sustentable a los recursos (Toledo y Barrera-Bassols, 2008), que son concebidos como bienes comunes dentro del núcleo agrario. A continuación se detallan algunos conocimientos y prácticas fundamentales para el usufructo y conservación de los bienes comunes, que se han podido documentar dentro del territorio comunitario:

- Todas estas comunidades reconocen sitios sagrados a los que se acude en fechas particulares (año nuevo, san marcos, santa cruz, san isidro labrador) para realizar ceremonias propiciatorias, donde las autoridades civiles, agrarias y religiosas, en representación de toda la comunidad, piden por un buen año de lluvias, por la protección ante fenómenos adversos o se agradece lo recibido en el ciclo anterior. Estos eventos constituyen espacios para refrendar el sentido de comunalidad, de pertenencia a un colectivo, de reconocer la preeminencia de lo colectivo sobre lo individual.
- Existe y se reconoce una autoridad colegiada que regula el acceso a los bienes colectivos, y sanciona las acciones que dañan o los ponen en riesgo. Esta autoridad debe rendir cuentas ante la asamblea, que es la máxima instancia de decisión. Actividades como el aprovechamiento de madera o la cacería suelen requerir de un permiso explícito.
- A pesar de la insistente labor del PROCEDE y del FANAR, más allá de los solares urbanos y las parcelas de cultivo, la mayor parte dentro de los núcleos agrarios sigue siendo reconocido como propiedad colectiva.
- Existe un sistema de cargos que promueve la participación de la gente; el estatus como ciudadano con pleno goce de derechos dentro de la comunidad depende en gran medida de su participación en las tareas colectivas, varias de las cuales pueden ser de protección o conservación ambiental: reforestación, vigilancia, combate de incendios.

En muchos casos los elementos culturales ancestrales se combinan con elementos nuevos que se han venido apropiando. Esta combinación entre lo ancestral y lo nuevo ha permitido, por ejemplo, que los periodos de veda a la cacería durante la reproducción de las especies, se vea reflejado en reglamentos o estatutos; o bien, que los sitios sagrados, ceremoniales y/o de importancia estratégica para los recursos hídricos, se vieran plasmados como áreas de conservación comunitaria en diversos trabajos de ordenamiento territorial comunitario realizados en la zona (Maradiaga *et al.,* 2007; Urbán y Díaz, 2011; Méndez *et al.*, 2011; Maradiaga *et al.,* 2011), lo cual no significa necesariamente la certificación por parte de alguna autoridad externa.

La acumulación de datos derivados de las investigaciones etnobiológicas y etnoecológicas de las últimas décadas, han permitido ofrecer una explicación coherente de la importancia conservacionista de las prácticas realizadas por los pueblos indígenas, al descubrirse que éstas obedecen a una cierta lógica productiva diferente a la del mundo industrial, y al revelarse que en ellos existe una forma particular de conocer y de concebir el universo natural. Es decir, ha sido mediante el estudio comparativo del complejo kosmos -corpus-praxis de esos pueblos que se ha logrado explicar el papel conservacionista de sus actitudes, conocimientos y prácticas (Toledo, 2003).

Los primeros pasos para un Proyecto regional de manejo y conservación comunitaria

Para iniciar este epígrafe es necesario tener claro que lo descrito en el apartado previo constituía la *normalidad* antes del inicio del conflicto. A lo largo de este proceso fue muy interesante descubrir los discursos y prácticas de re-creación y re-apropiación del territorio, en buena medida provocados por la amenaza del despojo, lo que condujo a una re-valoración del mismo y a la explicitación del lugar que ocupa dicho territorio dentro del imaginario colectivo. El territorio es mucho más que el espacio geográfico, como bien argumenta Raffestin:

> Es esencial comprender que el espacio es anterior al territorio, que este se generó a partir del aquel y que el resultado de la acción de un actor sintagmático (aquel que realiza un programa) en algún nivel. Al apropiarse, concreta o abstractamente (mediante la representación por ejemplo), de un espacio, el actor "territorializa" el espacio (…) el territorio es un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e información y que, en consecuencia, revela relaciones marcadas por el poder. El espacio es la 'prisión original': el territorio es la prisión que los hombres se dan a sí mismos (Raffestin, 2013, p. 102).

En este sentido, la amenaza y el proceso de lucha han venido reconfigurando la relación de las comunidades con su territorio, poniendo en un primer plano la preocupación por el manejo de los recursos y la conservación del territorio como patrimonio comunitario. Es precisamente este reto lo que ha llevado a que en las comunidades se revaloren las

formas ancestrales de conservación, sin dejar de reconocer que se requiere también de recurrir a nuevos conocimientos. Las propuestas e iniciativas que se han planteado o impulsado son diversas, por lo que sólo se comentarán algunas.

A lo largo de los foros realizados se ha remarcado la necesidad de hacer reservas comunitarias sin ninguna intervención del gobierno, también la necesidad de revalorar los bienes y servicios obtenidos de la naturaleza y el conocimiento tradicional. Al respecto, algunas comunidades están intentando formas para usar de mejor manera sus bienes comunes y garantizar su conservación, con el apoyo de algunas ONG´s y académicos: Muchas comunidades han realizado trabajos de ordenamiento territorial; en Santa Cruz el Rincón (Mpio. de Malinaltepec) no se echó a andar un permiso para aprovechar el bosque por diez años; en Ojo de Agua (Mpio. de Malinaltepec) se cerró un aserradero, que fue un proyecto que no tenía consenso de la comunidad; algunos párrocos realizan "misas ecológicas", en las que promueven reflexiones por el medio ambiente y se promueve la siembra de árboles en caminos y laderas donde hay deslaves en tiempos de lluvias.

La discusión colectiva generada en los foros alrededor de temas como el territorio, sus recursos y su importancia para la vida comunitaria, dio pie a reflexiones sobre la necesidad de revisar prácticas que deterioran el patrimonio natural de la región, como se aprecia en la intervención del Prof. Pedro Galeana Hernández Comisariado de Pueblo Hidalgo:

> Creo que aquí tenemos que ir clasificando las cosas, de qué estamos hablando y de qué no podemos hablar. Porque también yo quiero decirles que muchos de nosotros no cuidamos nuestros recursos naturales, ahí tenemos los ríos y arroyos contaminados, hay muchos animales que hoy ya no existen, ¿Quiénes fueron los culpables? ¡Nosotros mismos! Ahora tenemos que impulsar proyectos para que esos animales vuelvan otra vez a su lugar, para eso tenemos que ir trabajando de manera conjunta para que así veamos lo que de verdad queremos proteger, porque no vamos a hacer una filosofía así en vano, sino una filosofía de que sí nos vamos a apoyar en el futuro. ¡Nosotros como comisariados, podemos impulsar ese proyecto!
>
> Debemos ver como cada comisariado está trabajando con sus comuneros, porque estamos hablando de conservar, pero tomamos agua y tiramos el bote por todos los caminos y ahí estamos contaminando, el aire, el agua, la tierra; ¿entonces qué estamos haciendo? Porque no hay que rechazar esto por rechazar, sino que vamos a protegerla, porque es nuestra madre tierra; por eso debemos ponernos de acuerdo, porque no un solo núcleo agrario lo va a hacer, sino que tenemos que ayudarnos, porque tenemos que respetar, porque hay pueblos que sí cuidan su tierra. (Testimonio del Prof. Pedro Galeana Hernández, Comisariado de Pueblo Hidalgo, IX Foro, junio 2013)

Caso particular es lo que se logró impulsar dentro del núcleo agrario de Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, donde la confluencia de liderazgos locales y la presencia de diversos actores que confluían alrededor de la UNISUR, permitieron generar una interesante sinergia. Como ya se abordó en el capítulo 1, un largo proceso de lucha desembocó en la creación de la UNISUR, cuya sede principal se instaló en esta comunidad del Rincón. De los

diferentes programas educativos que ofreció en ese momento la UNISUR, en esta sede se impulsó el programa de Gestión Ambiental Comunitaria, por lo que no fue casualidad que las preocupaciones ambientales y territoriales de las comunidades encontraran eco y fueron abordadas de formas diversas.

Durante los años que operó este programa (2007-2013), de forma conjunta las autoridades comunitarias, profesores y estudiantes de UNISUR y miembros del Grupo de Estudios Ambientales A.C., gestionaron y operaron los trabajos de ordenamiento comunitario en El Rincón, Pascala del Oro y Tlaxcalixtlahuaca; gestionaron y supervisaron la realización de obras de conservación del suelo y agua en Arroyo San Pedro y Potrerillo Cuapinole (Mpio. de San Luis Acatlán), El Rincón y Potrerillo del Rincón (Mpio. de Malinaltepec); promovieron la construcción de baños secos y estufas ahorradoras de leña; capacitaron para realizar inventarios forestales; promovieron el rescate y sistematización de los saberes ambientales tradicionales; promovieron la adopción de técnicas agroecológicas; investigaron la problemática en los cultivos del maíz, café y plátano; y, por supuesto, se participó activamente en el proceso de defensa del territorio; entre otras acciones.

Una de las acciones más emblemáticas y representativas de la relación que se estaba buscando establecer entre la UNISUR y las comunidades fue un conjunto de actividades realizadas a lo largo de siete meses y que culminaron con la realización del Festival del Árbol, el Agua y la Vida Comunitaria, convocado del 10 al 14 de junio de 2013. Esta iniciativa nació al calor de las fuertes discusiones en la asamblea del Rincón, alrededor del tema de la minería y la reserva de la biosfera. A la par que se reflexionaba en el papel que han jugado las comunidades para conservar la biodiversidad, también se reconocía que existen problemas que deben ser atendidos, que no todo está bien. El Comisariado de Santa Cruz del Rincón lo platica de la siguiente manera:

> Para nosotros aquí (…) seguir el ejemplo de nuestros antepasados, que supieron administrar sus tierras, sin necesidad de la asesoría de algún técnico (…) pero cuando se nos dice que ahora viene el proyecto de la reserva de la biosfera y que ningún campesino va a tener derecho a meter mano ora sí de su parcela, pues como que no nos parece bien esa propuesta por parte del gobierno, porque si es que existen estos bosques actualmente acá en la Montaña, es porque hemos sabido cuidar, no es necesariamente hasta que el gobierno nos enseñe, nosotros ya sabemos cuidar nuestros bosques.
>
> Llegamos al punto en que la toda la gente estuvo de acuerdo en que debíamos hacer cosas para ayudar al ambiente, para que nuestro pueblo estuviera más bonito, pero no teníamos muy claro qué era lo que podíamos hacer. Y como parte de esa asamblea realizada en 29 de noviembre de 2012, entonces esa inquietud la dirigimos a la UNISUR para que los maestros y alumnos nos apoyaran, y sí nos apoyaron: se hizo ese trabajo que se llamó el Festival del Árbol, el Agua y la Vida Comunitaria que terminó del 11 al 14 de junio, cuando se hizo la reforestación, y fue una maravilla porque nuestro pueblo si respondió, las escuelas primaria, secundaria, preparatoria y universidades si trabajaron, sembraron esas plantas, así que si se cumplió con ese objetivo. Pero el Comisariado, el Comisario, los maestros no toman ellos

> solos las decisiones, sino que es en una asamblea, es una propuesta colectiva, democrática. (Testimonio Prof. Apolonio Cruz Rosas, diciembre de 2013)

El Festival al que alude el Prof. Apolonio Cruz en su testimonio, inició cuando profesores y estudiantes fuimos convocados a la asamblea del pueblo para plantearnos sus preocupaciones sobre el deterioro ambiental dentro de su territorio comunal y la petición explícita de ayudar a generar propuestas de solución. Habiendo aceptado la responsabilidad, la comunidad universitaria dialogó al respecto y generó una propuesta que tanto en lo técnico como en lo organizativo está muy lejos de la típica campaña de reforestación impulsada desde el gobierno: plantas de pocas especies, producidas como negocio por algunos favorecidos con el contrato, con germoplasma exótico a la región, entregadas en mal estado y con pocas probabilidades de sobrevivencia, pagando jornales para realizar el trabajo, y con poco o ningún seguimiento.

Por el contrario, la iniciativa planteó desde el principio que más importante aún que los resultados que se pudieran obtener, era el proceso formativo y organizativo que se podría impulsar a raíz de esta inquietud de la gente y del momento político que vivía la región por el proceso de defensa del territorio. De manera colectiva se diseñaron los objetivos de este programa comunitario, se especificaron los responsables de la comunidad, de la UNISUR y del Grupo de Estudios Ambientales A.C., priorizando tres tareas: 1. Restauración de los ríos lastimados por el azolve generado durante la construcción de la carretera, que alteró los ecosistemas, dañó zonas de esparcimiento y afectó áreas productivas de ribera; 2. Cancelación del drenaje por los daños que genera a las comunidades aguas abajo y la construcción de alternativas de saneamiento; 3. Impulsar un proyecto comunitario de embellecimiento urbano y recuperación de árboles y arbustos de importancia.

La propuesta se planteó en asamblea para promover la participación comunitaria encabezada por las autoridades (agrarias y civiles) y respaldada por las diferentes instituciones. Se visitaron las escuelas en todos los niveles para solicitar su participación y dar capacitación, de forma que sirviera como estrategia formativa en los diferentes planteles escolares; se logró la participación de cinco escuelas de nivel preescolar, cuatro de primaria, dos secundarias y dos de media superior, además de jefes de sector, supervisores, párroco, centro de salud y policías comunitarios. Las jornadas del Festival incluyeron:

- Cuatro días de reforestación en escuelas, calles, carretera, plazas y ribera del río;
- Cuatro días de limpieza y recolección de basura en todos los espacios públicos;
- Cine comunitario;
- Recorridos temáticos por la comunidad y sus alrededores: Montes y biodiversidad, Alimentando la tierra, Salud comunitaria, y La vida del agua.
- Acto cultural con la participación de todas las escuelas.

Para cumplir con las metas se instaló un vivero comunitario con especies nativas seleccionadas en base a las necesidades y conocimiento local, y se instalaron módulos de composta y lombricomposta para producir el sustrato para las plantas. Luego de atender el proyecto solicitado por El Rincón, se pensó que estas instalaciones deberían dar servicio y capacitación a las comunidades aledañas.

> La asamblea de núcleos agrarios, en vez de que el gobierno nos venga a enseñar a cuidar nuestros bosques pues nosotros mismos hay que hacerlo por iniciativa propia y que nos apoye la UNISUR y no sólo cuidar el bosque, sino también embellecer, poner arboles de ornato, hay que sembrar árboles que sirvan de alimento, medicinales (Mora, 2014: 159).
>
> Fomentar una cultura de aprecio de valor a los árboles, porque no namás por querer árboles, sino que beneficio nos dan los árboles, empezando de que el árbol transforma el dióxido de carbono, nos da oxígeno, las plantas nos dan oxígeno; si vamos desolados, aspiramos a llegar a donde haya una plantita aunque sea pequeñita para que nos de sombra, nadie quiere sentar en el sol, buscamos la sombra y entonces y que tal si tenemos muchos árboles pues vamos a tener muchos lugares a donde descansar, otro cuando venga, nos visiten de todas partes y vean una comunidad llena de vida, de todos colores, entonces dirán por lo menos arreglaron donde vivir (Mora, 2014: 160).



Figura 13. Vivero de la UNISUR para reproducir plantas nativas, frutales y de ornato con miras al Festival del Árbol, el Agua y la Vida Comunitaria, realizado del 10 al 14 de junio de 2013.

Cuando llegó la fecha para las jornadas de reforestación, participaron todas las escuelas, grupos de productores, madres y padres de familia, todos encabezados por las autoridades comunitarias. Se invitaron autoridades y representantes de comunidades vecinas para que el evento sirviera también para generar inquietudes similares en esos lugares.

Por ello, se hizo un esfuerzo por sistematizar toda la experiencia en un documento que fue entregado a las autoridades del Rincón y presentado en uno de los Foros de Defensa del Territorio. En la presentación del documento se dice:

> El Festival del Árbol, el Agua y la Vida Comunitaria nos permite comenzar a hacer realidad el plan comunitario para el embellecimiento urbano y la recuperación de árboles de importancia cultural, ecológica y económica, así como la concientización y propuestas sobre el problema de la basura. Las tareas que quedan pendientes son continuar con el plan de embellecimiento urbano, alternativas domésticas para la cancelación del drenaje y alternativas de manejo integral de basura.[81]



Figura 14. Presentación de la propuesta agroecológica de la UNISUR a las autoridades agrarias y participantes en el Foro de San José Vista Hermosa, enero de 2014.

Como parte del balance de este enorme esfuerzo, se puede afirmar que la actividad concreta de mejoramiento ambiental sirvió para potenciar las capacidades locales y promover la responsabilidad ciudadana en una lógica de desarrollo endógeno. Esta misma lógica es la que subyace en los diferentes proyectos autonómicos impulsados en la región, se parte de rescatar la sabiduría y la cosmovisión, se apela a la fuerza que se genera desde la colectividad, y se procura avanzar sobre la base de los recursos propios o que ellos mismos pueden gestionar, para no depender de otros.

[81] Bitácora del Festival del Árbol, el Agua y la Vida Comunitaria. Santa Cruz del Rincón, 10-14 de junio de 2013. Julio 2013. Malinaltepec, Guerrero, México. 63 p.

De manera paralela, los estudiantes de UNISUR habían venido desarrollando sus temas particulares de investigación en pequeños equipos que compartían intereses: unos alrededor de la producción en la milpa, otros sobre la problemática de los cafetales, unos más sobre alternativas para reducir la contaminación del río por las descargas, algunos inventariando la diversidad de especies silvestres útiles en el monte. Con la motivación del éxito alcanzado en el Festival, se redoblaron los esfuerzos en los equipos temáticos, lo que permitió presentar su informe a las autoridades comunitarias en diciembre de 2013, en un evento público convocado para tal fin, y al que fueron invitadas las autoridades agrarias y civiles de diferentes comunidades, para que conocieran y evaluaran su trabajo.

En la presentación oral se trató de mostrar el tipo de cosas que estos jóvenes habían aprendido a hacer, para lo cual mostraron los resultados del Festival y narraron cómo esas tareas se habían realizado a petición de la comunidad y por acuerdo de su asamblea, pero también se contaron sobre sus investigaciones temáticas, dejando claro que parte fundamental de su motivación derivaba del proceso de organización del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, por lo que querían hacer propuestas para la conservación, la defensa y el manejo sustentable del territorio y los recursos naturales, desde la cosmovisión de los propios pueblos. En su informe explican:

> Nos organizamos en el colectivo "Hijos del Campo" para unir nuestros temas de investigación en un solo trabajo que busca ver nuestro Territorio Comunitario en su conjunto para devolverle a nuestras comunidades, una mirada como estudiantes egresados de una universidad de los pueblos, donde vemos los dolores y las fortalezas de nuestro territorio comunitario y como seguir defendiendo y disfrutando nuestras tierras, montes y aguas como pueblos *Me'pháá* y *Na savi* de estas montañas.
>
> Con la devolución de este trabajo de investigación se cierra nuestro proceso de formación en la UNISUR y comienza otra etapa de hacer conciencia y echar abajo todas esas certificaciones, contratos, decretos que vienen a limitar nuestros derechos agrarios y como pueblos originarios al uso y disfrute de nuestro territorio. A la invasión de semillas híbridas y herbicidas que vienen a destruir la agricultura campesina volviéndonos esclavos de las grandes empresas que fabrican esos productos y además contaminan nuestros suelos y el agua sagrada.
>
> Los principios que guiaron esta investigación:
>
> 1. El reconocimiento de la ciencia campesina y del manejo comunitario del territorio.
> 2. El respeto a las instituciones y los sistemas normativos de los pueblos.
> 3. El fortalecimiento de la comunidad para afianzar el control de los pueblos sobre sus territorios y recursos.
> 4. El diálogo de saberes como proceso de aprendizaje mutuo y de búsqueda de alternativas sustentables. (Colectivo Hijos del Campo, 2013) [82]

[82] Propuestas hacia un Plan de los Pueblos para la Conservación, la Defensa y el Manejo Sustentable del Territorio Comunitario. (Borrador). Devolución del trabajo de investigación y de servicio comunitario que presenta el Colectivo "Hijos del Campo", para concluir su programa de Formación Profesional de Gestión Ambiental Comunitaria de la Universidad de los Pueblos del Sur. Diciembre de 2013. Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, Guerrero, México.

Para quienes veníamos acompañando estos diferentes procesos, del CRAADT, de la formación de los jóvenes, del Festival y el resto del proyecto en el Rincón, y de todos los demás proyectos comunitarios ya enunciados, este acto en el que formalmente se informaba a las autoridades de todas estas comunidades lo que veníamos haciendo, era también una invitación, pues tenía la intención de mostrar todo lo que se podía lograr si lográbamos articular todos estos procesos y hacerlos confluir en un gran esfuerzo regional, si se lograba que las comunidades consensaran algunas ideas centrales que nos permitieran articular un Proyecto regional de manejo y conservación comunitaria del territorio y los bienes comunes, susceptible de ejecutarse en los diferentes núcleos agrarios.

Para quienes participábamos de este esfuerzo sentíamos que era una forma de promover la autonomía de las comunidades, al articular de forma creativa y propositiva la resistencia frente a los proyectos de despojo, los conocimientos ancestrales, el tejido comunitario, la soberanía alimentaria y la conservación de los bienes comunes. Desafortunadamente los mismos actores que influyeron en la fractura de la CRAC, en el fracaso de UNISUR, impidieron que este equipo se mantuviera operando y obligaron a que diversos actores tuviéramos que salir de la región, con lo cual la iniciativa se vio truncada, por lo menos temporalmente.

Propuestas para fortalecer un buen manejo de los bienes comunes

El conflicto territorial en la Montaña se puede describir como la lucha de las comunidades porque se respete la preeminencia de la propiedad social y los derechos colectivos, frente a quienes buscan despojarlos para favorecer el interés privado (expresado en las concesiones mineras) o un supuesto interés público conservacionista (expresado en el proyecto RBM). A lo largo de esta investigación ha quedado claro que el conflicto se origina por la disputa entre diferentes expectativas e intereses, que reclaman derechos sobre el territorio de interés aludiendo a diferentes marcos normativos.

Si se analiza el discurso de quienes impulsaban la reserva de la biosfera, existe coincidencia en reconocer la relevancia que tiene la región en términos de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ofrece, y la necesidad de disponer de acciones claras para garantizar su conservación, no se debe olvidar que "los territorios comunales de interés para la conservación (…) son territorios de propiedad comunitaria sobre los que existen intereses públicos, comunitarios y privados" (Merino, 2008, p. 39), por lo que resulta fundamental buscar armonizar los derechos existentes con los intereses proyectados en la región o partes de ella.

Parte importante del enojo entre la población ante el proyecto de RBM, se produjo precisamente al percibir que los programas de gobierno ponderan los supuestos intereses

públicos por la conservación (aludiendo por ejemplo a una estrategia nacional por la conservación, o los servicios hidrológicos a las comunidades de las partes bajas) en detrimento de los intereses comunitarios por su reproducción social. Esta ponderación resulta más agresiva si se recuerda que la tenencia de la tierra es, en su inmensa mayoría ejidal y comunal, lo cual significa que la gente tiene derechos tradicionales y constitucionales a su tierra, pero que al igual que en otros casos, esos "derechos parecen ser negados por la posición conservacionista, la cual afirma la necesidad de conservar los recursos naturales que quedan en las regiones sin dialogar con la población local [83]" (Cortéz y Paré, 2007, p. 216), a pesar de que, en este y muchos casos, el estado de los bosques demuestra que ambos intereses no tendrían por qué ser incompatibles, si lo que realmente importa es la conservación de los ecosistemas y los servicios que proveen. Está claro que el gobierno federal prioriza cumplir ciertos compromisos internacionales de superficie destinada a la conservación, ante cuya relevancia se invisibilizan las necesidades y derechos de las comunidades en cuestión.

> Los sistemas y recursos naturales son percibidos y valorados de diversas formas, según los actores y grupos sociales. Ya sean rurales o urbanos, poseen diferentes tipos y niveles de conocimientos sobre estos recursos, así como distintos niveles y formas de dependencia de ellos, o de acceso al poder. Lo que implica distintas posibilidades de incidir en la formulación de las reglas y políticas sobre su manejo. Es común que quienes enfatizan el interés púbico de la conservación propongan opciones de control estatal centralizado, mientras que quienes enfatizan el valor privado de los bienes y servicios naturales, reclamen opciones que privilegian su privatización (Merino, 2008, p. 39).

Las comunidades han manifestado en diferentes momentos y formas el interés de refrendar su compromiso con la conservación del territorio, asumen que es su responsabilidad y reconocen que hay aspectos por cambiar o mejorar. Si concedemos que en el sector ambiental existiera un interés genuino por apoyar este tipo de iniciativas, pero reconociendo la existencia de distintas percepciones, valoraciones y derechos al respecto, que dificultan el entendimiento y la confluencia, es que decidí dedicar este epígrafe a intentar bosquejar lo que podría ser una política pública que tenga mayores posibilidades de garantizar la conservación y el manejo sustentable en el largo plazo, asumiéndolo como un ejercicio local y autonómico, respaldado y fortalecido por las instancias del sector ambiental.

Para ello, me apoyo en reflexiones planteadas por diferentes autores, varios de ellos identificados con la Teoría de la Acción Colectiva y la Teoría de los Bienes Comunes, otros más con un enfoque Etnoecológico y Biocultural.

Desde la postura de los bienes comunes y la acción colectiva, un punto de partida fundamental es que las políticas y las estrategias de conservación deben partir de

[83] Los autores de este trabajo estudiaron los casos particulares de las reservas de la biósfera de Los Tuxtlas (Veracruz) y Montes Azules (Chiapas), pero consideré válida la afirmación para la Montaña de Guerrero.

reconocer los tipos de propiedad (privada, social o pública) a que están sujetos los territorios y recursos, y los distintos derechos de propiedad que sobre ellos existen, que se expresan en derechos de exclusión, acceso, uso, regulación y enajenación (Agrawal y Ostrom, 2001; cit. por Merino, 2008, p. 39).

Si además de reconocer los derechos mencionados, se reconoce también que la experiencia en el manejo del territorio y sus recursos confiere a los dueños conocimiento sobre la dinámica y comportamiento del sistema, resulta crucial que participen en la formulación de la reglas de uso de los recursos es una de las condiciones de su manejo sostenido. (McCay y Acheson, 1987; Berkes, 1989; Agrawal, 1999; Gibson et al., 1999; Ostrom, 2000; cits. por Merino, 2008, p. 39).

La experiencia de distintas regiones del país y del mundo (Alatorre, 2000; Ostrom, 2000; Merino, 2004), hace evidente que, en la medida en que estas comunidades cuentan con incentivos adecuados y derechos a organizarse y regular el uso de los recursos que utilizan, son los sujetos idóneos para promover la conservación de los sistemas naturales (Merino, 2008:40).

Algunas de las características comunes en las comunidades indígenas es la existencia de un sistema de cargos, la costumbre de realizar tequio, el manejo del territorio comunal como recurso común. Para diversos autores constituyen factores centrales del capital social comunitario, entendido como el conjunto de condiciones que permiten resolver los problemas que surgen en torno a la acción colectiva (Harris y de Renzio, 1997; Jackman y Miller, 1998; Ostrom y Ahn, 2003; cits. por Merino, 2008, p. 45), desde el acceso a los recursos, hasta el monitoreo de su estado.

Ahora bien, desde la Etnoecología y el enfoque Biocultural, se ha planteado que la discusión sobre la conservación debe enfocarse de una forma diferente, que permita percibir y valorar de manera no reduccionista la idea de diversidad. Por ello, acuñaron el concepto de diversidad, riqueza o legado biocultural con base en tres criterios: la biodiversidad (riqueza de flora, fauna, diversidad de ecosistemas), la etnodiversidad (asociado al número de lenguas) y la agrodiversidad (áreas de domesticación y diversificación de plantas y animales manejados por el ser humano) (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Ello ha permitido identificar regiones del mundo de excepcional riqueza biocultural; para el caso de México, Boege (2008) realizó un análisis muy detallado.

Esta perspectiva obliga a ampliar la mirada para entender las distintas dimensiones de la diversidad, y que todas ellas precisan ser valoradas y conservadas. Si se tiene claro que una de las principales motivaciones para conducir esfuerzos de conservación, es tratar de garantizar la persistencia de la humanidad, entonces nuestro concepto de diversidad no se

puede limitar a los meros elementos biológicos, si no a un complejo entramado en el que lo social no se puede separar de lo natural.

Por ello, autores como Toledo (2003) afirman que pensar en la conservación supone reconocer al menos tres principales postulados: a) el bio-social; b) el bio-cultural ; y c) el bio-productivo.

El postulado bio-social, supone una concepción de la conservación en íntima reciprocidad con el desarrollo social a diferentes escalas (local, regional, nacional, internacional, global), buscando armonizar el metabolismo entre los procesos sociales y naturales. La conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales es concebida como parte de esta tarea.

El postulado bio-cultural, plantea la imposibilidad de preservar la biodiversidad sin proteger la diversidad cultural y viceversa (Maffi, 2001; Toledo, 2001a). Se fundamenta en cuatro principales conjuntos de evidencias:

- El traslape geográfico entre la riqueza biológica y la diversidad lingüística;
- El traslape entre los territorios indígenas y las regiones de alto valor biológico (actuales y proyectadas);
- La importancia de los pueblos indígenas como principales pobladores y manejadores de hábitats bien conservados;
- Un comportamiento orientado al conservacionismo entre los pueblos indígenas, derivado de su complejo de creencias-conocimientos-prácticas, de carácter pre-moderno.

Por último, el postulado bio-productivo se basa en el principio de “producir conservando y conservar produciendo”. Se fundamente en propuestas como el manejo autorregulable de los recursos naturales (Holling, 2001), el manejo participativo (UICN, 1997), o el manejo sustentable de los recursos naturales (Goodland, 1995; Masera *et al*., 1999).

Desde esta perspectiva, la conservación de la biodiversidad no tendría que limitarse a las áreas libres de la acción humana y de sus procesos productivos, permitiendo superar la idea subyacente de que la conservación sólo se logra sin la gente. Por el contrario, se podrían incorporar otros tipo de espacios, como áreas agrícolas, pecuarias, de pesca, de recolección, caza y de manejo forestal y agro-forestal, fragmentos o islas de vegetación, o zonas de “barbecho” con hábitats en diferentes estados de regeneración ecológica. A esto Rosenzweig (2003; cit. por Toledo, 2003) denominó como “ecología de la reconciliación” donde el uso ecológicamente adecuado de los recursos naturales supone el mantenimiento y la salvaguarda de la biodiversidad en sus cuatro dimensiones (como variedad de paisajes, hábitats, especies y genes). Desde las experiencias conocidas en la

Montaña a lo largo de varios años y los testimonios recogidos, pareciera que esto coincide muy bien con el manejo del territorio que realizan las comunidades *Me'phá́á* y *Na savi*.

El sistema de creencias (kosmos), de conocimientos (corpus) y de prácticas (praxis) de los pueblos indígenas de la Montaña constituyen la base fundamental para pensar en un modelo de buen vivir para los habitantes de la región, alterno al discurso del desarrollo sustentable que no ha impedido la mercantilización de la naturaleza y el avasallamiento de los pueblos. Existe la voluntad local para allegarse los enfoques y tecnologías que complementen sus elementos culturales en aras de mejorar sus sistemas normativos y productivos. Se requiere mantener la concurrencia de los diferentes aliados que han convocado y de otros nuevos que estén dispuestos a aprender juntos. Se requiere la participación respetuosa de las diferentes instancias de gobierno, en el marco de los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, reconociendo que como dueños del territorio y sus recursos son ellos los que deben tomar las decisiones. El apoyo de iniciativas de conservación y buen manejo desde la cultura y gobierno locales producirá efectos positivos que trascenderán por mucho los límites territoriales beneficiando al resto de la población estatal.

Para cerrar este capítulo, considero relevante puntualizar algunos temas aquí abordados. La implantación del modelo extractivista en los países subdesarrollados, está generando numerosos y diversos procesos de resistencia que movilizan a la gente alrededor de la defensa de sus territorialidades, y tienen como elemento común la reivindicación de derechos sobre dicho territorio, no sólo a la apropiación del espacio material y físico que está al centro de sus actividades productivas, sino también es una lucha por la apropiación simbólica, es decir la lucha por la tierra es al mismo tiempo una lucha por el espacio y sus interpretaciones y representaciones (*sensu* Lefebvre, 1991), lo que desde el enfoque etnoecológico se conceptualiza como *praxis*, *corpus* y *kosmos*, respectivamente (Toledo, 1992).

Por ello, cuando se habla del *territorio comunitario*, no se alude solamente al espacio geográfico, sino también a un imaginario que se ha venido construyendo-reconstruyendo, en el que se proyectan no sólo las relaciones entre la gente y el lugar, sino entre las propias gentes y con formas de vida no humanas, incluidas las espirituales. Es así como a lo largo de más de 20 años, se ha venido configurando lo que se podría nombrar como *proyecto comunitario*, que en algunas de sus expresiones mejor logradas plantea el

derecho pleno a ser sujeto y decidir su futuro, la preeminencia de la colectividad sobre los individuos, la conciliación y la razón por encima de la fuerza, la defensa irrestricta de los bienes comunes como patrimonio colectivo y el respeto hacia los sitios sagrados, elementos todos que deberían estar presentes para restablecer un verdadero estado de derecho y una sociedad con visión de largo plazo.

Hablar de la restitución del derecho colectivo es una postura política de enorme validez, pues no sólo reclama el derecho que les corresponde a la autodeterminación, sino que asume la responsabilidad que inevitablemente trae aparejada, de construir activamente su opción de futuro. Esto nos remite al concepto del control cultural en el sentido de Bonfil (1983), como una capacidad social para poner en juego los elementos culturales disponibles, no solo para pensar un proyecto de futuro, sino para compartirlo y construirlo colectivamente. Como se ha podido mostrar en los últimos 25 años las comunidades de la región han podido identificar problemas, imaginar opciones y construirlas paulatinamente, todo ello de forma colectiva, sea en proyectos de seguridad, justicia, salud, educación, reconciliación, y ahora, de defensa de su territorio y su modo de vida.

Intentos de construcción de opciones desde lo local, como estos que se han producido en la Costa Montaña de Guerrero, pueden ser mucho más que pequeños esfuerzos aislados, pueden ser rutas para enfrentar la profunda y creciente crisis planetaria, que en su facetas alimentaria, climática, energética o económica, evidencian una crisis de civilización y de modelo económico, que compromete la existencia misma de la humanidad.

Por eso considero pertinente retomar y redimensionar el concepto de *Bien común de la humanidad* (Houtart, 2013), por su potencial para promover la confluencia y articulación de muy diversas luchas, demandas y reivindicaciones que se posicionan desde algunas de las múltiples aristas de la problemática. La perspectiva integradora y sistémica que el concepto tiene sobre los fundamentos de la vida colectiva de la humanidad en el planeta, incluyen cuatro aspectos: a) la relación con la naturaleza, b) la producción de la base material de la vida (física, cultural y espiritual), c) la organización colectiva, es decir, la política; y d) la lectura, evaluación y expresión de lo real, es decir, la cultura. Estas cuatro dimensiones al ser pensadas como un estado resultante del conjunto de condiciones de vida de los seres humanos -*estar bien*, *vivir bien*-, nos convocan de manera amplia a la reflexión y la lucha, a no permitir que una élite comprometa nuestras opciones de vida y de futuro.

Esta perspectiva sistémica puede abonar a la confluencia entre las propuestas empíricas de lucha y resistencia de numerosos movimientos a los que se ha denominado como el giro ecoterritorial, con una amplia gama de propuestas desde la academia y la investigación participativa, tales como el gobierno de los bienes comunes, la teoría de la

acción colectiva, las perspectivas etnoecológicas, bioculturales y de antropología ecológica.

Aunque los puntos de convergencia cada vez son más evidentes, se requiere aún de un arduo trabajo, tanto desde la academia como desde los movimientos de base. En opinión de diversos autores (Wallerstein, 2001; Houtart, 2013), estamos viviendo una era de transición en la que el capitalismo está destruyendo la base misma para garantizar la reproducción de la vida y la existencia de la humanidad; bajo la dinámica actual cada vez hay menos margen para propuestas reformistas, se requiere de cambios profundos y de largo aliento, en un proceso que ha empezado ya y que en más de un sentido son las propias comunidades quienes van marcando el camino.

Conclusiones

El conflicto por el territorio en la Costa-Montaña de Guerrero, se origina por la disputa entre diferentes sectores de la sociedad, cada uno de los cuales posee un imaginario diferente de futuro. Esto deriva que cada uno tenga expectativas e intereses propios, que buscan concretarse territorialmente en forma de diferentes proyectos, invocando derechos sobre el territorio de acuerdo a diferentes marcos normativos (Ley Minera, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, Ley Agraria, entre otras). Algunos de estos marcos normativos fueron modificados en los últimos 25 años favoreciendo a ciertos grupos de interés, en un proceso que no es exclusivo de México, si no que por el contrario, se ha podido demostrar que es muy similar en casi toda América Latina.

De esta manera, el conflicto territorial en la Montaña puede describirse brevemente como la lucha de las comunidades porque se respete la preeminencia de la propiedad social y los derechos colectivos, frente a quienes buscan despojarlos para favorecer el interés privado, que en este caso se expresa en las concesiones mineras otorgadas a empresas mineras trasnacionales por periodos de hasta 50 años, o bien favoreciendo un supuesto interés público conservacionista, expresado en el proyecto RBM y justificado desde el argumento de proteger el patrimonio y/o el bienestar de los mexicanos.

El caso resulta muy adecuado para ejemplificar uno de los componentes centrales en las políticas gubernamentales a lo largo de todo el llamado tercer mundo, y que se deriva de un supuesto teórico conocido como *la tragedia de los bienes comunes*, el cual plantea la imposibilidad de los grupos sociales para administrar de forma colectiva y eficiente los recursos naturales, afirmando que hay una tendencia a sobreexplotar dichos recursos provocando su paulatina degradación (Hardin, 1968).

Desde una postura malthusiana, Hardin señala que los factores causantes del deterioro ambiental son la creciente demanda de recursos naturales debida al crecimiento poblacional, y las formas de organización para extraer los recursos del ambiente. Aún sin demostrar su validez empírica, desde esta concepción, se plantea que sólo existen dos fuerzas capaces de imponer una correcta administración; dichas fuerzas son el mercado y el gobierno, constituyéndose así en un dogma de las políticas neoliberales: la propiedad comunal se concibe como la causante de la degradación ambiental y del estancamiento económico. La solución consiste, por un lado en privatizar esos bienes comunes para hacerlos productivos y, por el otro, que estos pasen a ser controlados de manera centralizada por el gobierno para garantizar su conservación. Esto es justamente lo que se

pretendió hacer en la Montaña de Guerrero: privatizar vía concesiones y estatizar vía decreto federal como reserva de la biosfera.

Esta concepción cierra cualquier posibilidad de autorregulación exitosa por parte de las comunidades dueñas del territorio, y constituye la justificación a los procesos de despojo que son indispensables para la acumulación del capital, pues el sistema capitalista requiere como premisa el crecimiento económico, condición que lleva a crisis cíclicas que sólo se superan temporalmente a través de la expansión geográfica (Harvey, 2014).

Queda claro que el conflicto en la Montaña no constituye un hecho aislado. El análisis de numerosos casos -actuales y pasados- permite comprobar que la historia del capitalismo está ligada con intensas fases de reorganización territorial, trayendo como resultado el desplazamiento, la expulsión o la aniquilación de la población local, además de intensos –a veces irreversibles- procesos de deterioro ambiental.

Por ello no es de extrañar que la lucha social por todo el mundo esté reivindicando de forma importante el componente eco-territorial. Se puede tratar de explotación minera, siembra de granos para alimentar ganado, monocultivos de frutales para exportación o de palma africana para producir biocombustible, el desarrollo de un nuevo enclave turístico, la construcción de una presa hidroeléctrica o de un aeropuerto, la lección es la misma, las personas y los ecosistemas son reemplazables, y su valor se restringe al aporte que puedan hacer para alimentar la voracidad del sistema. Estamos siendo testigos de una cruenta batalla en la que, en múltiples frentes, se pelea palmo a palmo por el territorio, que para unos es el mecanismo para mantener el ciclo capitalista de acumulación, y para otros, es simplemente la posibilidad de seguir existiendo en la forma particular en que entienden el mundo.

Por esta razón, el componente identitario jugó un papel central para aglutinar a las comunidades. El movimiento que se articula en torno a una instancia (CRADDT) que nace como un mecanismo de defensa de las comunidades ante dos proyectos que, de una forma u otra, amenazaban su modo de vida al intentar imponerles modalidades de uso del territorio que atentan contra su forma de reproducción social y vulneran su capacidad de autodeterminación. El tamaño y gravedad de la amenaza que se cernía sobre ellos motivó una respuesta enérgica; lo que estaba en juego era su propia permanencia.

Sin embargo, más allá de la amenaza como detonante, la condición común como pueblos originarios y la historia de organización que les ha permitido enfrentar de forma autogestiva las adversidades y el abandono institucional, fueron los componentes fundamentales para poder confluir. La existencia de liderazgos con experiencia y claridad política y de ciertos aliados externos como coadyuvantes, fueron también factores importantes.

El papel central de la identidad como pueblos originarios y la existencia de liderazgos locales formados en sus propios procesos de lucha hace pertinente retomar las reflexiones de Bonfil (1983) sobre el control cultural, ya que tomando como base su cultura fueron capaces de plantear un movimiento que reivindica su modo de ser y estar en el mundo, apropiándose de elementos culturales, pero garantizando siempre la autonomía en sus procesos de toma de decisiones. Esa riqueza de elementos culturales propios - integrada tanto por elementos ancestrales provenientes de su matriz mesoamericana- se ve incrementada por los que se han venido apropiando en su historial de lucha, y les confiere una diversidad de herramientas para enfrentar la coyuntura, ya que todo proyecto social requiere la puesta en acción de elementos culturales, desde su formulación hasta su realización.

Es precisamente esta condición como pueblos indígenas, poseedores de una cultura autónoma, aunque subalternos y colonizados, pero con su propia visión del mundo que aún subsiste, lo que les confiere los elementos para pensar el mundo y las opciones de futuro desde otros referentes, diferentes a lo que pueden imaginar quienes consideran inviable lo colectivo, y conciben lo privado y lo estatal como únicas opciones; diferentes de lo que pueden concebir quienes no entienden más que la dimensión material y económica del mundo.

Diversos autores, desde ámbitos diferentes del conocimiento, consideran que las culturas indígenas del mundo pueden aportar elementos invaluables para transformar el mundo, pues para lograrlo es preciso pensarlo desde otros referentes. Frente a la lógica avasallante del cientificismo que invisibiliza la sabiduría de los pueblos originarios, y del mercado global que busca extraer las riquezas sin importar los costos, a contracorriente se ha venido perfilando una visión del mundo que incorpora otro tipo de valores, construye otro tipo de conocimiento, y promueve relaciones –sociales y productivas- menos depredadoras. Eso que de forma amplia se le ha llamado el buen vivir, pareciera ser un componente sustancial de las culturas tradicionales del mundo; para los tzeltales de Chiapas se entendería: a partir de cuatro componentes: estar en armonía con uno mismo, con los seres humanos, con el mundo de la naturaleza y con lo trascendente (Toledo, 2013).

Esta afirmación parte de considerar a las regiones campesinas e indígenas como zonas de resistencia cultural, zonas que resisten los modelos de modernización dominantes y han logrado conservar sistemas productivos, cognitivos y económicos diferentes a los hegemónicos. Además existe un claro traslape entre las zonas de mayor diversidad lingüística y las de mayor diversidad biológica en el mundo. En nuestro país trabajos como lo de Toledo, Boege, Barrera-Bassols, Merino, entre muchos otros, han podido documentar que las principales zonas forestales, las reservas de biodiversidad, las fábricas

de agua, los recursos fitogenéticos, los mosaicos de heterogeneidad ecológica, están en esas regiones; donde también persisten la producción a pequeña escala, el uso múltiple del paisaje y la autosuficiencia alimentaria.

Frente al modelo agroindustrial, sea para producir alimentos transgénicos, forrajes o agrocombustibles; frente a la ganadería extensiva, a los enormes proyectos de infraestructura, a la minería a cielo abierto y frente a la especulación de bienes raíces, las regiones campesinas e indígenas se deben estudiar, entender y defender, pues en ellas existen elementos invaluables para revertir la crisis actual.

Aunque reciente, la región tiene una intensa historia de organización, que los ha llevado a explorar diferentes opciones organizativas encaminadas a solventar problemas de seguridad, justicia, comunicación, educación, salud, ambiente, producción, agrarios. Todas ellas han abonado al momento actual, mejorando las condiciones de vida, ganando experiencia y formando liderazgos, ganando confianza en sí mismos, potenciando sus capacidades, reforzando el sentido de comunidad. La lógica que subyace en los diferentes proyectos autonómicos impulsados en la región parte de rescatar la sabiduría y la cosmovisión, apela a la fuerza que se genera desde la colectividad, se procura avanzar sobre la base de los recursos propios o que ellos mismos pueden gestionar, para no depender de otros ni frenar los procesos, aunque buscan allegarse aliados que se incorporen y potencien sus luchas. Algunos de ellos acompañan de forma respetuosa las luchas, otros terminan usurpando la voz y haciéndose protagónicos o buscan capitalizar otro tipo de intereses. Corresponde al propio movimiento escoger los aliados que requieren, aprovechar los apoyos pero saber poner límites, mantener la identidad y la claridad de los objetivos. Corresponde a quienes podamos acompañar ser respetuosos de los procesos, cuidando siempre no generar división, respetar los tiempos y los modos, no imponer, saber cuándo retirarse, y de forma muy importante evitar el mesianismo.

El CRAADT no ha perdido de vista que un movimiento social se define por su orientación hacia el cambio (Melucci, 1989; Tarrow, 1994), en este caso el objetivo para el que fue creado, que es la defensa del territorio frente a las amenazas de despojo. Para lograrlo su estrategia se orientó en primer lugar a reafirmar la naturaleza no negociable de su identidad (Munck, 1995) como pueblos indígenas, con un amplio y sostenido trabajo de comunicación y concientización entre las comunidades involucradas, pero se ha rehusado a quedarse sólo con una estrategia defensiva, en el ámbito de la sociedad civil; no es un movimiento autorrestringido (sensu Munck, 1995).

Por el contrario, el movimiento entendió bien que para lograr su objetivo no bastaba con fortalecerse al interior, sino que se debía incursionar en la dimensión de la política institucional propia del sistema, pero cuidando de mantener la coherencia con sus principios para no perder autonomía ni desviar el rumbo de sus acciones. Así que a pesar

de la desconfianza que han desarrollado hacia los actores externos, seleccionaron una serie de aliados cuya experiencia en la defensa de los derechos humanos, de participación en diferentes movimientos de resistencia a nivel nacional, en la organización social de base, y/o en aspectos técnicos y organizativos relativos a temas ecoterritoriales, permitió identificar las amenazas con mayor claridad y ampliar las redes de solidaridad, ayudaron a generar conciencia y fortalecer la base social, así como a clarificar la estrategia legal.

Apoyado en estos aliados el CRAADT incursionó en el plano de la defensa legal y política, incidiendo dentro de sus limitaciones en las escalas estatal y nacional, donde tuvieron algunos logros importantes. En primer lugar, lograron la salida del rector de la UIEG-IMA generando condiciones para modificar un poco la relación con dicha institución y la cancelación del convenio, aunque sigue pendiente la discusión de fondo sobre el derecho a tener sus propias instituciones educativas y que éstas sean financiadas por el Estado; se logró no sólo la salida del secretario de medio ambiente sino la cancelación del proyecto de reserva de la biosfera; finalmente, en enero de 2017, se anunciaba públicamente por el CRAADT que se había logrado la cancelación de 22 de las 44 concesiones que existían en la región, con lo cual la superficie concesionada disminuía drásticamente de 142 mil 432 ha a sólo 32 mil 616 ha. Los amparos ganados por la comunidad de San Miguel del Progreso contra el otorgamiento de concesiones mineras sin haber sido consultados previamente, y contra la declaratoria de libertad de terrenos que había hecho la Secretaría de Economía, constituyen logros importantes, pues sientan jurisprudencia sobre el particular.

No obstante, el movimiento debe tener claro que esas victorias son parciales y, probablemente temporales. Como ya se ha visto el despojo de bienes comunes a manos de empresas trasnacionales constituye uno de los pilares en el avance de capitalismo, y que dicho proceso está siendo facilitado por el gobierno federal de diferentes maneras. Las concesiones se otorgan hasta por 50 años; el que una empresa se “retire” no garantiza que no vuelva luego, esperando encontrar condiciones más propicias; el que se cancele una concesión no impide que se vuelva a otorgar. Si ahora se canceló el proyecto de reserva de biosfera, eso no garantiza que no regrese otro funcionario, nombrado por otra administración federal o estatal, y que presionado por cumplir los compromisos internacionales quiera revivir la idea. Por ello, también se debe estar consiente que hasta ahora sólo se ha logrado detener o frenar este tipo de procesos, pero no cancelarlos.

Las fuerzas e instrumentos que el Consejo –ayudado por sus aliados- logró movilizar, hasta el momento han alcanzado para estas victorias, pero muy probablemente no alcancen para una cancelación definitiva, pues ello requiere cambiar las reglas del juego. Revertir los cambios jurídicos que quitan derechos a la propiedad social y se los amplían a las empresas, construir o reconstruir los programas sociales que se orienten a elevar la calidad de vida o establecer mecanismos que permitan a los productos de las

comunidades encontrar mercados a precios justos, son retos a otra escala, fuera del alcance del Consejo luchando solo.

Al igual que la gran mayoría de los movimientos surgidos por la defensa de sus territorios, el Consejo centró parte importante de su estrategia en fortalecerse internamente. Como se ha comentado, los elementos culturales de que dispusieron les permitieron poner en juego una diversidad de herramientas, logrando así agrupar a varios sectores de la población. Las convocatorias para la movilización regional como la toma de la UIEG-IMA o los bloqueos carreteros, las reuniones de organización, los foros itinerantes por todo el territorio involucrado en la lucha, los talleres de formación para las autoridades, la elaboración de documentos para la defensa legal, el reforzamiento de las asambleas agrarias o de vecinos, el trabajo en las misas y otros grupos ligados a la iglesia, los encuentros para compartir experiencias, la promoción de las técnicas de cultivo y formas de aprovechamiento de los bienes comunes, todo ello sirvió para revalorar la cultura local, para fortalecer el tejido comunitario e intercomunitario, para la creación de redes y, generar la confianza necesaria, tanto respecto a lo legítimo de su lucha como en términos de la fuerza que estaban logrando movilizar.

Este tipo de procesos organizativos alrededor de la lucha abren perspectivas importantes. Los pueblos que se levantan para luchar por su territorio, sobre todo si logran frenar el proceso de despojo que los amenazaba, ya no vuelven a ser los mismos. La necesidad radical de defender su tierra, ante la posibilidad de perderlo todo, conduce a una profunda revaloración del territorio, de la cultura y de la propia comunidad, por lo que puede constituirse en punto de partida para nuevos procesos de construcción social y territorial, para enfrentar otros retos y soñar nuevos imaginarios.

Sin embargo debe reconocerse que, esto que por un lado es su mayor fuerza, por otro lado puede representar cierta debilidad, cuando la ponderación de lo local no permite ver desde una perspectiva más amplia, si esto impide generar estrategias que trasciendan lo local; no en balde una de las características de este tipo de luchas es su localismo y casi siempre su dispersión.

Las comunidades integradas al CRAADT deben tener claro que oponerse a estos procesos las enfrenta no solo al sistema político mexicano, sino al sistema económico global. Los oponentes son formidables y la lucha larga. Para poder cumplir su objetivo de evitar el despojo, no sólo frenarlo temporalmente y a nivel local, sino realmente impedir que continúe el despojo impune hacia las comunidades, en la Costa-Montaña y el resto del país, se requiere complementar estas estrategias con otras que permitan encontrar nuevos y numerosos aliados frente al enemigo común. Al respecto, Bartra (2014) menciona: “la lucha es contra los capitales predadores y contra el modelo privatizador que

se impulsa desde el poder, la lucha es a todas luces política y los movimientos más estructurados y participantes en redes lo tienen cada vez más claro".

Pareciera que el llamado giro ecoterritorial que están teniendo muchos de los movimientos sociales, evidencia que existen numerosos pueblos y regiones enfrentando problemáticas similares, porque las causas que las originan son estructurales. Campesinos, pueblos originarios, afectados por la construcción de obras de infraestructura, desplazados por la violencia y/o por el aumento en la plusvalía de sus terrenos, y próximamente los afectados a consecuencia de la reforma energética y sus leyes secundarias que legalizan la "ocupación temporal" por parte de las trasnacionales, todas estas luchas parecen converger en torno al mismo planteamiento básico, la defensa de sus territorios y sus modos de vida. Por ello es necesario que dentro de cada movimiento vaya creciendo la idea de que la lucha no es aislada, esto significa ir generando la conciencia de clase que empiece a reunir a los afectados por los diferentes procesos locales en torno a una lucha común por defender su territorio y su derecho a vivir de la forma que ellos decidan.

Sin embargo, la reflexión no debe ser solamente para quienes actualmente participan en este u otros movimientos similares; es preciso promover la reflexión masiva en otros sectores de población. La profunda y creciente crisis planetaria, en su facetas alimentaria, climática, energética o económica, evidencian una crisis civilizatoria que compromete la existencia misma de la humanidad y la reproducción de la vida en sus diferentes facetas y escalas. Por eso considero pertinente retomar y redimensionar el concepto de *Bien común de la humanidad* (Houtart, 2013), por su potencial para promover la confluencia y articulación de muy diversas luchas, demandas y reivindicaciones que se posicionan desde algunas de las múltiples aristas de la problemática.

La perspectiva integradora y sistémica que el concepto tiene sobre los fundamentos de la vida colectiva de la humanidad en el planeta, incluyen cuatro aspectos: a) la relación con la naturaleza, b) la producción de la base material de la vida (física, cultural y espiritual), c) la organización colectiva, es decir, la política; y d) la lectura, evaluación y expresión de lo real, es decir, la cultura.

Estas cuatro dimensiones al ser pensadas no como un patrimonio –de personas, grupos o naciones-, sino como un estado resultante del conjunto de condiciones de vida de los seres humanos -*estar bien*, *vivir bien*-, nos convocan de manera amplia a la reflexión y la lucha, a no permitir que una élite comprometa nuestras opciones de vida y de futuro. Esta perspectiva requiere aún de un arduo trabajo, no sólo desde la academia si no desde los movimientos de base. En opinión de diversos autores (Wallerstein, 2001; Houtart, 2013), estamos viviendo una era de transición en la que el capitalismo está destruyendo la base misma de su éxito – que eran la explotación de la naturaleza y el trabajo- generando así

enormes contradicciones que se expresan en luchas y resistencias en todo el planeta: cambiar el sistema se está convirtiendo en una *necesidad radical* (*sensu* Heller, 1986) para garantizar la reproducción de la vida y la existencia de la humanidad; bajo la dinámica actual cada vez hay menos margen para propuestas reformistas, se requiere de cambios profundos y de largo aliento, en un proceso que ha empezado ya.

Muchos son los pueblos y organizaciones en todo el mundo que han iniciado esta lucha; en Guerrero la movilización y logros alcanzados por los pueblos *Na savi* y *Me'phää* en la defensa de su territorio, su cultura y su vida abren luces esperanzadoras, en medio de un contexto estatal y nacional por demás oscuro. Su experiencia muestra claramente que con una visión intercultural, que enraíza en la identidad pero evita caer en fundamentalismos, es posible combinar lo mejor del conocimiento ancestral y moderno, tejiendo la palabra y la acción para volver a hilvanar el tejido de la vida, ya sea mediante el cuidado el monte que haciendo comunidad en las asambleas y foros; al final de cuentas estos pueblos tienen claro que la vida en la comunidad y en el monte son sólo caras de una misma moneda, que no se pueden separar, pues la vida sólo produce y se conserva dentro sí misma, en un proceso que Morin (2002) define como un gran *bucle retroactivo* y que Maturana y Varela (2003) denominan como *autopoiesis*.

La certeza de que la vida sólo se conserva dentro de sí misma, a pesar de su aparente simpleza es profundamente antisistémica, pues implica el reto de superar la racionalidad instrumental del mercado como fin último. Sin importar que algunos le nombren como *sumak kawsay*, buen vivir, o bien común de la humanidad, lo fundamental es el elemento común de rescatar y subrayar la preeminencia de la vida y el ser humano; lo fundamental es el llamado de todas estas luchas y movimientos a transformar el mundo para hacerlo más humano.

Referencias

Fuentes Bibliográficas

- Aguilar, Jasmín; Illsley, Catarina; Acosta, Jorge; Gómez, Tonantzin y Quintanar, Eduardo. 1996. **La palma y el monte. Hacia un mejor uso comunitario**. Grupo de Estudios Ambientales y Sociales A.C. / SSS Sanzekan Tinemi. México. 42 p.
- Alatorre, Gerardo. 2000. **La construcción de una cultura gerencial democrática en las empresas forestales comunitarias**. Procuraduría Agraria / Juan Pablos Editor. México. 431 p.
- Alberoni, Alberto. 1984. **Movimiento e institución. Teoría general**. Editora Nacional. España. 561 p.
- Barreda, Andrés. y Ceceña, Ana Esther. 1995. **Producción estratégica y hegemonía mundial**. Siglo XXI. México.
- Bartra, Armando. 1996. **Guerrero Bronco**. Editorial Era. México.
- Bartra, Armando. 2006. **El capital en su laberinto**. UACM / Itaca / CEDRSSA. México. 382 p.
- Bartra, Armando. 2014. **La defensa del patrimonio y del territorio, signo de los tiempos**. En: La Jornada del Campo. No. 82.
- Boege, Eckart. 2008. **El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México**. Instituto Nacional de Antropología e Historia / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México. 344 p.
- Bonfil, Guillermo. 1983. **Lo propio y lo ajeno: una aproximación al problema del control cultural**. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 27:181-191.
- Bray David; Merino, Leticia y Barry, Deborah. (Eds.) 2007. **Los Bosques Comunitarios de México. Manejo Sustentable de Paisajes Forestales**. INE-SEMARNAT, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Instituto de Geografía UNAM, Florida International University. México. 443 pp.
- CONANP. 2012. **Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera —Montaña de Guerrero en el Estado de Guerrero**. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas México, 71 páginas + 4 anexos, total 102 páginas.
- CONEVAL. 2016. **Informe de pobreza 2016 a nivel nacional y por entidades federativas**. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México. http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
- Contreras, Cuauhtémoc. 2011. **Violencia política y movimientos antisistémicos en Guerrero. El caso de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) 1968-**

1972. Tesis de Licenciatura. Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, UAGro. 110 p.

- Córdoba, Abril y Quintana, Lissette. 2012. **Vegetación y uso del suelo del ejido Tlaxcalixtlahuaca, Municipio. San Luis Acatlán, Guerrero**. Tesis de Licenciatura en Biología. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas, U.A Guerrero. 68 pp.
- Cortéz, C. y Paré, L. 2006. **Conflicting rights, environmental agendas and the challenges of accountability: social mobilization and protected natural areas in México.** En: Newell & Wheeler (Eds.). Rights, resources and the politics of accountability. Zed Books. England. Pp. 101-121.
- Cortéz, Carlos. 2014. **Investigación y acción social. Formas de trabajo, experiencias y reflexiones.** Universidad Autónoma Metropolitana. México.
- De Ita, Ana; López, Pilar y Schmidt, Gerold. 2012. **REDD+ y los territorios indígenas y campesinos**. Centro de Estudios para el Cambio en el campo Mexicano. México. 31 p.
- Delgado, Gian Carlo. 2010. **La gran minería en América Latina**. *Acta Sociológica.* 54:(17-47).
- Delgado, Gian Carlo. 2011. **Minando a México a principios del siglo XXI. Despojo, saqueo y criminalización social**. Memoria. 249: 5-11.
- Delgado, Gian Carlo. 2014. **Extractivismo, ecología política y construcción de alternativas en América Latina.** ALASRU. Análisis latinoamericano del medio rural. 8: 18-45.
- Diario Oficial de la Federación. 2006. **Ley Minera**. Última modificación publicada el 26 de junio de 2006.
- Diario Oficial de la Federación. 2008. **Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente**. Última modificación 2008.
- Diario Oficial de la Federación. 2012. **Ley Agraria**. Última modificación publicada el 09 de abril de 2012.
- Diario Oficial de la Federación. 2014a. **Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos**. Última modificación publicada el 10 de febrero de 2014.
- Diario Oficial de la Federación. 2014b. **Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas**. Última reforma publicada DOF 21-05-2014.
- Diario Oficial de la Federación. 2014c. **Ley de Energía Eléctrica**. Última modificación publicada el 11 de agosto de 2014.
- Diario Oficial de la Federación. 2016a. **Ley de Hidrocarburos**. Última modificación publicada el 15 de noviembre de 2016.
- Diario Oficial de la Federación. 2016b. **Ley Federal de Derechos**. Última modificación publicada el 7 de diciembre de 2016.
- Domínguez, A. 2015. **Resistencia, poder y conflicto en la construcción de la UNISUR y la Policía Comunitaria. Problemas en torno a la educación comunitaria en la Montaña de Guerrero.** Tesis de licenciatura en Antropología Social. ENAH—INAH, México.

- Edwards, Victoria. 2006. **El manejo de los recursos de uso común: la conservación de la biodiversidad.** Pp. 16-21. En: L. Merino y J. Robson (Comps). El manejo de los recursos de uso común: la conservación de la biodiversidad. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C./ The Christensen Fund / Fundación Ford/Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Instituto Nacional de Ecología. México.
- Escobar, Arturo. 2000. **El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?.** En Edgardo Lander (comp.): La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Argentina. 246 p.
- Espinosa, Rolando. 2010. **Recursos naturales estratégicos y desarrollo económico en Guerrero: el caso de la región de la Montaña**. Tesis profesional. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. México. 294 p.
- Fals Borda, Orlando. 1979. **El problema de cómo investigar la realidad para transformarla**. CLACSO. Colombia. 300 p.
- Favela, D.M. 2002. **La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano**. *Estudios Sociológicos*.20 (58): 91-121.
- Flores, J. 2007. **Reinventando la democracia. El sistema de la Policía Comunitaria y las luchas indias en el estado de Guerrero**. Plaza y Valdéz / El Colegio de Guerrero. México. 114 p.
- Flores, J. y Méndez, A. 2012. **Batallas desde la cultura por la cultura. La Universidad de los pueblos del Sur en el estado de Guerrero, México**. En: Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui. 120:28-32.
- Giménez, Gilberto. 1994. **Los movimientos sociales. Problemas teórico - metodológicos.** Revista Mexicana de Sociología. 56 (2): 3-14.
- Gudynas, Eduardo. 2011. **Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo**. América Latina en Movimiento. XXXV(462): 1-19.
- Hardin, Garrett. 1968. **The tragedy of the commons**. Science. 162: 1243-1248.
- Harvey, David. 2010. **Del espacio al lugar y de regreso**. En: Berenzon, B. y Calderón, G. (Coords.) Pp. 19-67. El tiempo como espacio y su imaginario. Reflexiones y fundamentos teóricos. UNAM. México.
- Harvey, David. 2014. **Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo**. Instituto de Altos Estudios del Ecuador. Ecuador. 294 p.
- Houtart, François. 2013. **El bien común de la humanidad**. Serie Cuadernos Subversivos. Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ecuador. 115 p.
- Heller, A. 1986. **Teoría de las necesidades en Marx**. 2ª edición. España. 182 p.
- Hernández, A. 2016. **La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar.** Grijalbo. México. 372 p.
- INEGI. 2010. **Censo Nacional de Población y Vivienda 2010**. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.

- Lauriola, V. y Moreira, E. 2006. **Los derechos indígenas y los recursos de uso común: tierra, gobernanza, desarrollo e identidad**. En: L. Merino y J. Robson (Comps.) El manejo de los recursos de uso común: derechos indígenas, desarrollo económico e identidad. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible / The Christensen Fund/ Fundación Ford/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/ Instituto Nacional de Ecología. México. Pp. 16-24.
- Lagarde, Marcela. 1993. **Los cautiverios de las mujeres**. UNAM. México.
- López, Francisco y Eslava, Mayra. 2013. El mineral o la vida. Legislación y políticas mineras en México. Itaca. México. 128 p.
- Lozada, L. Santiago, R. y Rojas, J. 2016. **Diversidad florística en Malinaltepec, región de la Montaña, Sierra Madre del Sur de Guerrero**. En: Biodiversidad de la Sierra Madre del Sur. Una síntesis preliminar. I. Luna-Vega, D. Espinosa y R. Contreras-Medina (Eds.). Pp. 209-227. Universidad Nacional Autónoma de México. México.
- ManÇano, Bernardo. 2009. **Territorio, teoría y política**. En: Lozado y Ferro (Eds.) *Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI*. Pp. 35-62. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia.
- Maradiaga, Francisco; Urbán, Germán; Hernández, Taurino y Candela, Martín. 2007. **Ordenamiento ecológico para el desarrollo sustentable del municipio de Iliatenco, Montaña de Guerrero.** Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México. 96 p.
- Maradiaga, Francisco; Noguez, Selene; Díaz, Elizabeth y Zepeda, Alejandro. 2011. **Ordenamiento territorial comunitario. Bienes Comunales de Pascala del Oro, Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero**. Informe Final de la Segunda Fase, presentado a la Comisión Nacional Forestal. Chilpancingo, Guerrero, México. 47 pp. + anexos.
- Marradi, Alberto, Archenti, Nélida. y Piovani, Juan Ignacio. 2011. **Metodología de las ciencias sociales**. Cengage Learning. Argentina. 303 pp.
- Martínez, A. y Domínguez, M.A. 2014. **Cambio en el uso del suelo y vegetación de los bienes comunales de Santa Cruz del Rincón, Municipio. Malinaltepec, Guerrero**. Tesis de Licenciatura en Biología. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas, U.A Guerrero. 81 pp.
- Maturana, H. y Varela, F. 2003. **De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo**. Lumen. Argentina. 136 p.
- Melucci, Alberto. 1991. **La acción colectiva como construcción social**. Estudios Sociológicos. 9 (26): 357-364.
- Melucci, Alberto. 1999. **Acción colectiva, vida cotidiana y democracia**. El Colegio de México. México. pp. 9-159.
- Méndez, Alfredo; Urbán, Germán; Díaz Elizabeth y Maradiaga, Francisco. 2009. **Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en las Regiones Indígenas**. En:

Estado del Desarrollo de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero. Programa Universitario México Nación Multicultural, UNAM. Pp. 105-149. México.

- Méndez, Alfredo y Méndez, Rosa Isela. 2011. **Plan de Estudios de la Licenciatura en Gestión Ambiental Comunitari**a. Universidad de los Pueblos del Sur. México. 20 p.
- Méndez, Alfredo; Zepeda, Alejandro y Pérez, Luis. 2011. **Ordenamiento territorial comunitario. Ejido de Tlaxcalixtlahuaca, Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero**. Informe Final presentado a la Comisión Nacional Forestal. Chilpancingo, Guerrero, México. 119 pp. + anexos.
- Méndez, Benjamín; Méndez, Alfredo y Plácido, Cirino. 2015. **Innovando en la gestión de la seguridad ciudadana: la Policía Comunitaria de la Costa Montaña de Guerrero, México**. En: R. Bañón y R. Tamboleo (Dirs.) Ideas para la gobernanza. Pp. 557-594. Editorial Fragua / Universidad Complutense de Madrid / Fundación Complutense. España.
- Merino, Leticia. 2004. **Conservación o deterioro. El impacto de las políticas públicas en las instituciones comunitarias y los bosques de México**. Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales / Instituto Nacional de Ecología / Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible A.C. México.
- Merino, Leticia. 2008. **Conservación comunitaria en la cuenca alta del Papaloapan, Sierra Norte de Oaxaca**. *Nueva Antropología*, XXI (68): 37-49.
- Moguel, Patricia. y Toledo, Víctor. 1999. **Biodiversity conservation in traditional coffee systems in Mexico**. *Conservation Biology*. 13: 1-11.
- Mora, Eloisa. 2014. **La lucha ecosocial contra la minería en la Montaña de Guerrero: defendiendo el territorio en tiempos de despojo**. Tesis de maestría en ciencias. Departamento de Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. México. 204 p.
- Mijangos, Miguel. 2001. **Sociedad y naturaleza en la Montaña de Guerrero**. En: T. Bustamante y S. Sarmiento (Coords.). El sur en movimiento. La reinvención del Guerrero del siglo XXI. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero / Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social / Universidad Autónoma de Guerrero / Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri" del H. Congreso del Estado de Guerrero. Pp. 361-382. México.
- Moreno-Calles, Ana Isabel; Toledo, Víctor y Casas, Alejandro. 2013. **Los sistemas agroforestales tradicionales de México: una aproximación biocultural**. *Botanical Sciences*. 91 (4): 375-398.
- Morin, Edgar. 2002. **El Método II. La vida de la vida**. Ed. Cátedra. España. 543 p.
- Munck, Gerardo. 1995. **Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales**. Revista Mexicana de Sociología (57) 3: 17-40.
- Oslender, Ulrich. 2002. Espacio, lugar y movimientos sociales: Hacia una "espacialidad de resistencia". Scripta Nova Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales. VI (115): 20 p.

- Ostrom, Elinor. 2000. **El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva**. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 403 p.
- Ostrom, Elinor. 2001. **Reformulating the commons**. En J. Burger, E. Ostrom, R. Norgaard , D. Policansky y B. Goldstein (eds.) Protecting the commons: a framework for resource management in the Americas, Washington, D. C., Island Press. pp. 17-41.
- Pérez, Juan Carlos. 2007. **La propiedad agraria y el desarrollo rural**. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados. México. 128 p.
- Raffestin, Claude. 2011. **Por una geografía del poder**. Colegio de Michoacán. México. 190 p.
- Rappaport, Joanne. 2007. **Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en colaboración**. Revista Colombiana de Antropología, vol. 43, enero-diciembre, pp. 197-229. Colombia.
- Rivera, Silvia. 1990. **El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la**
- **lógica instrumental a la descolonización de la historia**. En: Rivera Cusicanqui, Silvia y Rossana Barragán (eds.) Temas Sociales 11. Debates poscoloniales. Una introducción a los estudios de la subalternizada, La Paz, Sephis-Aruwiyiri. Pp. 49-75.
- Rodríguez, Carlos; Bastida, Mindahi; Grajales, Sergio; Lima, Marco; Meza, Alejandra; Moreno, Víctor y Nieves, Mayra. (2010). **Escudriñar los enfoques teóricos sobre el territorio**. pp. 19-30. En: Carlos Rodríguez (coord.) Defensa comunitaria del territorio en la zona central de México. Enfoques teóricos y análisis de experiencias. México, Juan Pablos Editores.
- Sánchez-Vázquez, Adolfo. 2007. **Filosofía de la Praxis**. Siglo XXI Editores. México. 520 p.
- Santos, Yoame. 2014. **La territorialidad de los conflictos en torno a la minería: defensa del territorio en la Montaña-Costa Chica de Guerrero**. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. México. 188 p.
- Sautu. Ruth. 2003. **Todo es teoría**. Lumiere. Argentina. 98 p.
- Secretaría de Economía. S/F. **Guía de ocupación superficial. Alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano**. Secretaría de Economía, Gobierno de México. México. 33 p.
- Sierra, Teresa. 2013. **Desafíos al Estado desde los márgenes: justicia y seguridad en la experiencia de la policía comunitaria de Guerrero**. En: Teresa Sierra, Rosalva Hernández y Rachel Sieder (eds.) Justicia indígenas y Estado. Violencias contemporáneas. CIESAS/ FLACSO. México. pp.159-193
- Svampa, Maristela. 2012. **Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina**. Revista del Observatorio Social de América Latina. XIII (32): 15-38.

- Svampa, Maristela. 2013. **Consenso de los »Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina**. Nueva Sociedad. No 244.
- Tarrés, María Luisa. 1992. **Perspectivas analíticas en la Sociología de la acción colectiva**. Estudios Sociológicos. 10 (30): 735-757.
- Tarrow, Sidney. 1997. **El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política**. Alianza Editorial. España. 369 p.
- Tecla, Alfredo. 2001. **El método ante la incertidumbre**. Ediciones Taller Abierto. México. p. 53-55.
- Tlachinollan. 2014a. **La defensa del territorio de San Miguel Del Progreso – Juba Wajiín, comunidad *Me'phaá* de la Montaña de Guerrero, frente a la entrega de concesiones mineras sin consulta (Ficha Informativa**). Centro de Derechos Humanos de la Montaña. 13 pp.
- Tlachinollan. 2014b. **La Montaña de Guerrero: destellos de justicia y esperanza. 20 informe anual de actividades**. Centro de Derechos Humanos de la Montaña. 249 pp.
- Toledo, Victor. 1992. **What is ethnoecology?: origins, scope and implications of a rising discipline**. Etnoecológica. I (1):5-22.
- Toledo, Victor. 2003. **Hacia un modelo de conservación bio-regional en las regiones tropicales de México: Biodiversidad, sustentabilidad y pueblos indígenas**. Menorías de la Reunión: Hacia una Evaluación de las Áreas Naturales Protegidas del Trópico. Veracruz, México Pp. 193-211.
- Toledo, Víctor, Alarcón-Chaires, Pablo; Moguel, Patricia; M. Olivo, A. Cabrera & A. Rodríguez-Aldabe. 2002. **Biodiversidad y pueblos indios en México y Centroamérica**. Biodiversitas 43: 1-8.
- Toledo, Víctor y Barrera-Bassols, Narciso. 2008. **La Memoria Biocultural: la importancia ecológica de los saberes tradicionales**. Icaria Editorial. España. 232 p.
- Toledo, Víctor. 2013**. El paradigma biocultural: crisis ecológica, modernidad y culturas tradicionales**. Sociedad y Ambiente, 1 (1): 50-60.
- Touraine, Alain. 1995. **Producción de la sociedad**. México. UNAM /IFAL. pp. 239-296.
- Urbán, Germán y Díaz, Elizabeth. 2011. **Ordenamiento territorial comunitario. Bienes Comunales de Santa Cruz el Rincón, Municipio de Malinaltepec, Guerrero**. Informe Final de la Segunda Fase, presentado a la Comisión Nacional Forestal. Chilpancingo, Guerrero, México. 53 pp. + anexos.
- Vasilachis, Irene. 2006. **La investigación cualitativa**. En: Irene Vasilachis (coord.). Estrategias de investigación cualitativa. pp. 23-64. Gedisa. España.
- Vizer, Eduardo. 2002. **Metodología de intervención en la práctica comunitaria: investigación-acción, capital y cultivo social**. Ciberleyenda 10: 25-36.
- Wallerstein, Immanuel. 2001. **Conocer el mundo, saber el mundo. El fin de lo aprendido**. Siglo XXI / UNAM. México. 306 p.
- Zemelman, H. y Valencia, G. 1990. **Los sujetos sociales, una propuesta de análisis**. En: Nuevos sujetos sociales. Acta Sociológica. Mayo-Agosto. UNAM.

- Zemelman, Hugo. 2004. **En torno a la potenciación del sujeto como constructor de la historia**. En: Laverde, Daza y Zuleta (Eds.) Debates sobre el sujeto. Perspectivas contemporáneas. Pp. 91-104. Universidad Central / Siglo del Hombre Editores. Colombia.
- Zemelman, Hugo. 2011. **Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente**. Oxfam / Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia / IPECAL. Bolivia. 167 p.

Fuentes Hemerográficas

- Ricardo González Rodríguez. **Inauguran sin González de la Vega en La Ciénega la Universidad Intercultural**. La Jornada Guerrero. 20 de agosto de 2007.
- Aurora Harrison. **Pretenden declarar área natural protegida 157 mil hectáreas de La Montaña y Costa Chica.** El Sur, jueves 6 de septiembre de 2012.
- **Inician Semaren y la UIEG consulta a 250 comunidades indígenas para crear Reserva de la Biósfera en la Montaña.** ZihuacostaS, martes, 25 de septiembre de 2012.
- Ricardo González y Eduardo Añorve. **Designan a antropólogo como rector de la UIEG; Anisar imparte curso a profesores**. La Jornada 27 de septiembre de 2007.
- Jesús Rodríguez Montes. **Sale provisionalmente rector de la Universidad Intercultural por denuncias de discriminación**. La Jornada 16 de enero de 2009.
- Sergio Ferrer. **Convocan en Malinaltepec a un foro contra el proyecto de reserva de la biosfera de la Semaren.** El Sur, miércoles 3 de octubre de 2012.
- Sergio Ferrer. **Rechazan el proyecto de Reserva de la Biosfera en la Montaña y exigen la salida del Rector de la UIEG.** El Sur, lunes 8 de octubre de 2012.
- Carlos Toledo Manzur. **Un nuevo tipo de reserva de la biosfera para La Montaña de Guerrero**. El Sur, 9 de octubre de 2012.
- Zacarías Cervantes. **No se pretende expropiar tierras para crear reserva de la biosfera, informa la Semaren.** El Sur, 9 de octubre de 2012.
- Sergio Ferrer. **Entregan actas de rechazo a reserva de la biosfera seis comunidades de La Montaña**. El Sur. Martes 4 de diciembre de 2012.
- Ericka Ramírez. **En 2 años, Calderón otorgó 5 mil nuevas concesiones mineras**. Revista Contralínea. 23 de abril de 2013.
- Redacción. **Aumenta Guerrero 100% de recursos a la CRAC**. 24 horas Diario sin Límites. 16 de mayo de 2013.
- Sergio Ocampo. **Expulsa la CRAC-PC de sus filas a los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio**. La Jornada Guerrero. 29 de mayo de 2013.
- Ericka Ramírez. **México, <<paraíso>> para extractivistas mineros**. Revista Contralínea. 11 de Junio de 2013. Disponible en: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/06/11/mexico-paraiso-para-extractivistas-mineros/

- Zacarías Cervantes. **Retienen ciudadanos y la autodefensa a 100 militares; los vinculan con el crimen organizado**. El Sur. 6 de agosto de 2013.
- Margena de la O. 2013a**. Detienen en operativo a la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado**. La Jornada Guerrero. 22 de agosto de 2013.
- Roberto Ramírez. **La división de la CRAC**. La Jornada Guerrero. 23 de Agosto de 2013.
- Redacción. **Gobierno estatal y la CRAC desconocen a los coordinadores de Tixtla y Ayutla**. Agencia Irza. 3 de septiembre de 2013.
- Lourdes Chávez. **Expulsa la CRAC de Eliseo Villar a ocho dirigentes de la Casa de Justicia de El Paraíso**. El Sur. 17 de octubre de 2013.
- Margena de la O. 2013b. **Detiene la Policía Ministerial al promotor de la CRAC, Gonzalo Molina, en Tixtla**. La Jornada Guerrero. 7 de noviembre de 2013.
- Redacción. **Ampara el juez a San Miguel El Progreso contra empresas mineras.** La Jornada Guerrero. 15 de noviembre de 2013. Disponible en: *http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/11/15/index.php?section=sociedad&article=005n1soc*
- Andrea Meráz. **Autodefensas dominan el territorio de Guerrero**. Excélsior. 18 de diciembre de 2013.
- José Juan Reyes. **Ángel Aguirre les da armas y financiamiento**. El Economista. 18 de diciembre de 2013.
- Claudia Gómez Godoy. **Implicaciones de la reforma energética en la propiedad social.** La Jornada de Oriente, 7 de octubre de 2014.
- Raymundo Riva Palacio. **Sacerdotes guerrilleros**. El Sur. 19 de febrero de 2015.
- Carlos Fernández-Vega. **México SA: Minería, asalto a la nación.** La Jornada, 25 de febrero de 2015.
- Lourdes Chávez. **Eliseo Villar no es un luchador social y debe de ser castigado, dice la casa matriz de la CRAC**. El Sur. 6 de mayo de 2015.
- Redacción. 2015. **Ofensivo el despliegue de policías y el derroche multimillonario para imponer evaluación: maestros de Guerrero.** Revolución 3.0. diciembre 3 de 2015. https://revoluciontrespuntocero.mx/ofensivo-el-despliegue-de-policias-y-el-derroche-multimillonario-para-imponer-evaluacion-maestros-de-guerrero/
- Lourdes Chávez. **Cancelan mineras 22 de las 44 concesiones registras hasta diciembre de 2016 en la Costa Chica-Montaña. El Sur.** 13 de enero de 2017.

Fuentes Documentales

- Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Mesa Directiva LXI Legislatura. Oficio No. D.G.P.L.61-II-3-1793. Exp. No. 2865. **Exhorto al Lic. Ángel Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero, a reconocer a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur como un organismo público de educación superior y brindarle el apoyo económico correspondiente**. 14 de septiembre de 2011.

- Certificado CONANP-256 2011. **Certificado por el que se reconoce como, Área Natural Protegida, con la categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación "Área De Conservación Ecológica De Santa Cruz Del Rincón"**
- Constancia que expide el Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, de que **se presentó el proyecto de creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES),** logrando obtener por unanimidad el aval de la comisión. 13 de diciembre de 2011.
- Maradiaga, F.S.; Noguez, S.; Díaz, B.E. y Zepeda, A. 2011. **Ordenamiento territorial comunitario. Bienes Comunales de Pascala del Oro, Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero**. Informe Final de la Segunda Fase, presentado a la Comisión Nacional Forestal. Chilpancingo, Guerrero, México. 47 pp. + anexos.
- Méndez, A.; Zepeda, A. y Pérez, L.F. 2011. . **Ordenamiento territorial comunitario. Ejido de Tlaxcalixtlahuaca, Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero**. Informe Final presentado a la Comisión Nacional Forestal. Chilpancingo, Guerrero, México. 119 pp. + anexos.
- Urbán, G. y Díaz, B.E. 2011. **Ordenamiento territorial comunitario. Bienes Comunales de Santa Cruz el Rincón, Municipio de Malinaltepec, Guerrero**. Informe Final de la Segunda Fase, presentado a la Comisión Nacional Forestal. Chilpancingo, Guerrero, México. 53 pp. + anexos.
- Acta del **Tercer Foro en Defensa del Territorio**. 1o de diciembre de 2012. Mixtecapa, Mpio. de San Luis Acatlán, Guerrero.
- Acta del **Sexto Foro en Defensa del Territorio**. 09 de marzo de 2013. Huehuetepec, Mpio. de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero.
- **Declaración de Cochoapa el Grande en Defensa del Territorio Comunitario**. 13 de abril del 2013.
- Boletín de Prensa: El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio dice no a la Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero y a la explotación minera. México D.F., 29 de abril de 2013.
- **Oficio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas** dirigido al Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. 31 de mayo de 2013.
- **Bitácora del Festival del Árbol, el Agua y la Vida Comunitaria. Santa Cruz del Rincón, 10-14 de junio de 2013**. Julio 2013. Malinaltepec, Guerrero, México. 63 p.
- **Propuestas hacia un Plan de los Pueblos para la Conservación, la Defensa y el Manejo Sustentable del Territorio Comunitario**. (Borrador). Devolución del trabajo de investigación y de servicio comunitario que presenta el Colectivo “Hijos del Campo”, para concluir su programa de Formación Profesional de Gestión Ambiental Comunitaria de la Universidad de los Pueblos del Sur. Diciembre de 2013. Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, Guerrero, México.
- Comunicado de prensa del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. 23 de agosto del 2014.

- **Declaración de San José Vista Hermosa, en Defensa del Territorio Comunitario**. 25 de enero de 2014.
- Acta de la **asamblea celebrada en la comunidad de Santa Cruz del Rincón**, Mpio. de Malinaltepec, el día 9 de marzo de 2014. 7 fojas + firmas de asistencia.
- **Pronunciamiento del colectivo "Nosotros Aprendiendo"**, ex profesores de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR). 1º de septiembre de 2014. 6 fojas + firmas.

Entrevistas

- Prof. Apolonio Cruz Rosas, *Me´pháá* originario de Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, donde ha sido Comisario y Comisariado de Bienes Comunales. Uno de los principales fundadores de la CRAC-PC, en su momento fungió como Secretario del Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN). Fue el primer Presidente Municipal de Malinaltepec no postulado por el PRI. Miembro del Consejo Intercultural de la Universidad De los Pueblos del Sur de 2007 a 2014. Fungió como Secretario del Consejo Regional de Autoridades en Defensa del Territorio de 2012 a 2015.
- M.C. Carlos Toledo Manzur. Biólogo egresado de la UNAM. Llegó a Guerrero como parte del equipo del Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales (PAIR), que colaboraba en la región de Alcozauca. Fue Director de Programas de Desarrollo Regional en la recién creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en la última década del siglo pasado. En el gobierno del estado de Guerrero fue Subsecretario de Desarrollo Rural y, se desempeñaba como Secretario de Medio Ambiente al momento en que inicia el conflicto por el proyecto de reserva de la biosfera. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la UAGro.
- C. Cirino Plácido Valerio, *Na savi* originario de Buenavista, Mpio. de San Luis Acatlán, donde ha sido Comisario Municipal y Comisariado Ejidal. Fue Coordinador Regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores. Fundador de la CRAC-PC y del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia India, Negra y Popular. Fundador del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
- Lic. Luisa Guzmán. Directora del Centro de Estudios Ecuménicos A.C. Desde principios de esta década acompaña diversos procesos sociales en la región: el Centro de Formación Permanente de la Montaña, la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG), Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), Casa de la Mujer Indígena San Luis Acatlán y el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

- Pbro. Melitón Santillán Cantú. Durante muchos años fungió como párroco de Malinaltepec, donde tuvo un papel central en la conformación del Centro de Formación Permanente de la Montaña y posteriormente del Consejo Regional de Autoridades en Defensa del Territorio. En la actualidad fue trasladado a la parroquia de Atlamajalcingo del Monte.
- Prof. Saúl Morán Cantú. *Me´pháá* originario de La Ciénega, Malinaltepec, donde fungía como Comisario Municipal suplente al momento de iniciar el conflicto; miembro del Centro de Formación Permanente de la Montaña, ha sido uno de los principales impulsores del CRAADT.

Fuentes Electrónicas

Página oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Gubernamental

- http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades

Página de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)

- http://anad1991.wordpress.com/2010/06/05/el-pueblo-indigena-cucapa-presenta-queja-ante-la-cidh/; http://anad1991.wordpress.com/2010/06/05/boletin-de-prensa-del-pueblo-indigena-cucapa/;

Página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.

- http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/071010_informe_seguimiento_montes_azules_frayba.pdf

Portal de la revista Emeequis

- http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=2941

Portal de la Revista Corresponsales Indígenas. La agencia de noticias hecha por y para los pueblos indígenas y originarios de México.

- http://corresponsalesindigenas.blogspot.mx/2009/02/el-conflicto-en-la-universidad.html

Página oficial de la compañía minera Vedome Resources Corp.

- www.vedomeresourcescorp.com/

Página oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

Página oficial del Registro Agrario Nacional, donde se definen los objetivos y alcances del FANAR:

- http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/programas/fanar

CONANP sobre las áreas destinadas voluntariamente a la conservación

- http://www.gob.mx/conanp/prensa/areas-destinadas-voluntariamente-a-la-conservacion-otra-forma-de-proteger

Respecto al Convenio sobre la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica:

- https://www.cbd.int/sp/targets/

Organización de las Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales:

- http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

ANEXOS

Anexo 1. Declaración de Cochoapa el Grande

Declaración en Defensa del Territorio Comunitario

A los gobiernos federal y estatal

A los pueblos indios de México

A la opinión pública nacional e internacional

Considerando que en julio de 2012 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó el estudio para establecer la Reserva de la Biosfera Montaña de Guerrero en 157 mil 896.08 hectáreas de nuestros territorios ancestrales, proyecto que viola nuestros derechos como pueblos *Na savi* y *Me´phá*á, afectando los núcleos agrarios de Cochoapa el Grande, San José Vista Hermosa, Iliatenco, Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Paraje Montero, San Miguel del Progreso, Santa Cruz del Rincón, Mixtecapa, Pueblo Hidalgo, Huehuetepec y Zitlaltepec.

Que en septiembre del mismo año, el titular de SEMAREN Carlos Toledo Manzur, el entonces Rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) Rafael Aréstegui y el Coordinador Regional de la CONANP, Taurino Hernández, firmaron un convenio para que la UIEG llevara a cabo la promoción de dicho proyecto en nuestras comunidades, lo que para nosotros representó una traición de esta institución universitaria por la que los pueblos hemos luchado, con el sueño de formar a nuestros hijos para que puedan hacer frentes a los problemas, necesidades y anhelos de nuestras comunidades, no para que los manden a engañar a su propia gente. Por eso decidimos tomar las instalaciones universitarias y reflexionar como pueblos sobre la educación y la universidad que realmente merecemos y necesitamos.

Ratificamos que como pueblos originarios de La Montaña rechazamos este proyecto que implica el control del gobierno federal sobre nuestros territorios ancestrales, la prohibición de actividades tradicionales y la imposición de reglas ajenas para el uso y disfrute de nuestros bienes naturales. Nuestras preocupaciones sobre las consecuencias

de los proyectos conservacionistas y de los proyectos mineros que el gobierno está impulsando en nuestras tierras son serias, legítimas e informadas.

Tenemos conocimiento de que han sido certificadas, hasta por 30 años, 25,991.46 hectáreas en 12 núcleos agrarios bajo la figura de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación que, según la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 2008, son reconocidas como áreas naturales protegidas consideradas "áreas productivas dedicadas a una función de interés público". Tanto la Reserva de la Biosfera como las certificaciones afectan nuestro derecho a decidir sobre el uso y disfrute de nuestros territorios ancestralmente cuidados y criminaliza nuestras formas de hacer agricultura y aprovechar nuestros bienes naturales.

También tenemos conocimiento de proyectos mineros en nuestros territorios donde diversas concesiones para exploración y explotación minera han sido otorgadas por el gobierno federal a empresas extranjeras hasta por cincuenta años. Estos proyectos también son promovidos por el gobierno del estado. Las inversiones realizadas y los intereses económicos de los concesionarios se encuentran protegidos por la Ley de Minería que declara esta actividad como preferente a cualquier otro uso del terreno.

Hacemos del conocimiento público que desde el 6 de octubre de 2012 nos convocamos y reunimos en el Foro Regional en Defensa de Nuestros Territorios, hemos nombrado nuestro Consejo Regional de Autoridades en Defensa del Territorio, conformado por comisariados de los núcleos agrarios afectados. Hemos realizado desde entonces a la fecha siete asambleas regionales analizando toda esta problemática de crisis agraria que nos afecta y amenaza. Hemos realizado asambleas en cada núcleo agrario levantando actas de rechazo al decreto de Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero, mismas que fueron entregadas por nuestras autoridades al Registro Agrario Nacional.

Consecuentes con todo lo expresado arriba

1. Exigimos el respeto a nuestros territorios y a nuestros derechos como pueblos indios. Rechazamos el decreto de Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero y demandamos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la revocación, o en su caso, la terminación por anticipado de los certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, por no haberse dado la información adecuada a las comunidades sobre sus implicaciones y porque en muchos casos impide el uso y disfrute de parcelas, afectándonos como pueblos que vivimos de nuestra siembra.

Rechazamos todas las políticas y leyes que ponen en riesgo nuestra agricultura tradicional, sea mediante dinero por dejar de sembrar con los programas de Pago por Servicios Ambientales, mediante la certificación de reservas y a través de proyectos de reconversión productiva que vienen a cambiar nuestra milpa por monocultivos perennes.

Rechazamos la zonificación de nuestros territorios con criterios ajenos a nuestras formas de vida, así como la imposición de cualquier forma de conservación que pueda cancelar prácticas tradicionales de cuidado y aprovechamiento de nuestros bienes naturales y sobre todo sistemas de cultivo que son la base de nuestra alimentación.

2. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras entregadas por el gobierno federal en nuestros territorios ancestrales, violando tratados internacionales como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Han sido documentados proyectos mineros en etapa de exploración: La Diana, con una superficie de 15,000 hectáreas, entregada a la empresa Casmin (Canadiense), que afectaría los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Iliatenco, Paraje Montero y Malinaltepec; y Corazón de Tinieblas, con una superficie de 50,000 hectáreas, entregada a la empresa Hochschild Mining (Inglesa), que afectaría los núcleos agrarios de Totomixtlahuaca, Acatepec, Tenemazapa, Pascala del Oro, Colombia de Guadalupe, Iliatenco, Tierra Colorada, Tilapa y San Miguel del Progreso. Se trata de los mismos territorios que ahora el gobierno federal quiere administrar con su proyecto de Reserva de la Biósfera.

3. Demandamos el derecho de nuestros pueblos de construir y conducir nuestras instituciones educativas. Las asambleas deben ser el espacio donde se discuta sobra la educación que queremos. Que los pueblos participen plenamente en el diseño e implementación de los programas educativos, para que respondan a nuestras necesidades y garantizar que se eduque según las formas de vida comunitaria, para no seguir reproduciendo el mismo modelo educativo del sistema, de lo contrario seguirán ocurriendo los problemas que han tenido las universidades interculturales desde su creación.

Lucharemos por formar un consejo rector integrado por ancianos, autoridades, profesores y estudiantes, que estén en constante relación para vigilar y construir la educación que se necesita.

Finalmente, frente a la destrucción de las formas de vida comunitarias, a la pobreza en que nos han dejado, a la dependencia alimentaria y al agotamiento de nuestra Madre Tierra, es en el ejercicio de nuestros derechos como pueblos que podemos defender y reconstruir nuestros territorios.

En estos encuentros estamos juntando nuestros pensamientos y nuestros sueños para defender, fortalecer y recuperar nuestros sistemas de producción de alimentos, nuestros manantiales, nuestros montes, y sobre todo resguardar y sembrar año con año nuestras semillas criollas. Estamos levantando propuestas propias para cuidar nuestros territorios y sostener una vida digna en nuestras comunidades.

Frente a las amenazas que vienen, por la vida y el futuro de nuestras comunidades y de nuestros territorios como pueblos *Na savi* y *Me´pháá*, seguiremos caminando con nuestras comunidades, con nuestras asambleas y con nuestro Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa Territorio. Llamamos a los pueblos y organizaciones hermanos a estar pendientes y apoyar nuestro movimiento.

Cochoapa el Grande, Guerrero, a 13 de abril del 2013

Anexo 2. Boletín de Prensa CRAADT. Abril 2013.

El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio dice no a la Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero y a la explotación minera.

México D.F., 29 de abril de 2013

Boletín de Prensa

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) impulsa el proyecto de la Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero que abarcaría 157 mil 896.08 hectáreas.

Las autoridades agrarias nos oponemos a los intentos de acabar con el ejido y los bienes comunales y exigimos respeto a la propiedad colectiva de nuestras tierras conforme al espíritu original del Artículo 27 constitucional.

Tomando en cuenta que en el mes de Julio de 2012 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó un estudio para que el ejecutivo federal emitiera un decreto de la Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero que abarca 157 mil 896.08 hectáreas que forma parte del núcleo sagrado de nuestros pueblos *Na Savi* y *Me'Phá á*. Sin pedir la autorización de pueblos que son los verdaderos dueños de esta riqueza natural, denunciamos públicamente otra acción más que pone en riesgo la integridad de nuestros territorios y viola nuestros derechos como pueblos originarios de la Montaña.

Esta propuesta afectaría a los núcleos agrarios de Cochoapa el Grande, San José Vista Hermosa, Iliatenco, Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Paraje Montero, San Miguel del Progreso, Santa Cruz del Rincón, Mixtecapa, Pueblo Hidalgo, Huehuetepec y Zitlaltepec; en los municipios de Cochoapa el Grande, Iliatenco, Malinaltepec, San Luis Acatlán, Atlamajalcingo del Monte y Metlatónoc.

Como pueblos originarios de la Montaña reiteramos públicamente nuestro rechazo a la creación de una reserva de la biosfera en esta región olvidada por las autoridades de Guerrero, porque implica que el gobierno federal tome el control de nuestros territorios ancestrales; nos someta a normatividades ajenas a nuestras formas de organización comunitaria, prohibiendo realizar nuestras actividades tradicionales relacionadas con el usos y disfrute de nuestros bienes naturales. Nuestras preocupaciones sobre las consecuencias de los proyectos conservacionistas y de los proyectos mineros que el gobierno está impulsando en nuestras tierras son serias, legítimas e informadas.

Tenemos conocimiento de que han sido certificadas, hasta por 30 años, 25,991.46 hectáreas en 12 núcleos agrarios bajo la figura de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación que, según la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección

al Ambiente de 2008, son reconocidas como áreas naturales protegidas. Consideradas "áreas productivas dedicadas a una función de interés público".

También sabemos que el gobierno federal ha otorgado concesiones mineras a empresas extranjeras hasta por cincuenta años. Son proyectos que tienen todo el respaldo del gobierno del estado por la derrama económica que supuestamente generarían con la extracción depredadora de nuestras riquezas. Las inversiones que realizan estas empresas extractivas y los mismos intereses económicos de los concesionarios están protegidas por la Ley de Minería que considera esta actividad como preferente a cualquier otro uso del terreno.

Ante estos agravios causados por las autoridades federales y estatales, como pueblos nos organizamos para hacer frente a esta amenaza que violenta nuestros derechos colectivos. El 6 de octubre de 2012 realizamos el primer Foro Regional para informar y analizar estas nuevas formas de despojo promovidas por varias instituciones gubernamentales en este proceso de articulación comunitaria hemos nombrado nuestro Consejo Regional de Autoridades en Defensa del Territorio, conformado por comisariados de los núcleos agrarios afectados. Desde entonces hemos realizado siete asambleas regionales para analizar esta problemática que violenta las formas sagradas que como pueblo hemos establecido con nuestra madre tierra. Hemos realizado asambleas en cada núcleo agrario levantando actas de rechazo al decreto de Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero, y nuestras autoridades se han encargado de entregar estos documentos al Registro Agrario Nacional.

Con la fuerza y la sabiduría de nuestros pueblos que han sabido cuidar y proteger los bienes naturales y que hoy están en peligro de quedar en manos de gobiernos depredadores que han promovido el saqueo y la destrucción de nuestro hábitat, alzamos nuestras voces para decir:

¡NO A LA CREACIÓN DE UNA RESERVA DE LA BIOSFERA EN LA MONTAÑA DE GUERRERO!

1. Exigimos el respeto a nuestros territorios y a nuestros derechos como pueblos indígenas. Rechazamos el decreto de Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero y demandamos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la revocación, o en su caso, la terminación por anticipado de los certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, por no haber cumplido con los normas internacionales sobre el derecho a la información. Estas certificaciones inducidas de manera perversa por las autoridades impiden el uso y disfrute de parcelas, afectando a la población que sobrevive del trabajo agrícola.

La regulación, vigilancia y mantenimiento de las tierras ancestralmente conservadas quedarán a cargo de nuestras comunidades. No aceptaremos más certificados, ni inscribir bajo cualquier figura de conservación oficial nuestras tierras ancestralmente conservadas. Los recursos económicos que se gestionen o se propongan otorgar a las comunidades con

la finalidad de mantener la conservación de las tierras ancestralmente cuidadas se recibirán sin condicionamiento alguno.

2. Rechazamos los intentos de acabar con el ejido y los bienes comunales, a través de la nueva iniciativa de reforma a la Ley Agraria, así como de las ya aprobadas reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Amparo. Exigimos el respeto a la propiedad colectiva de nuestras tierras conforme al espíritu original del Artículo 27 constitucional. Ningún programa de gobierno puede estar condicionado a ningún tipo de certificación, regularización o cualquier otro tipo de condicionamiento para que los pueblos indígenas y campesinos accedan a los recursos públicos destinados al campo.

3. Exigimos la cancelación inmediata de las averiguaciones previas en contra compañeros que integran este movimiento en defensa de nuestros territorios, contra el proyecto de Reserva de la Biósfera de La Montaña y contra los proyectos mineros y privatizadores.

4. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras entregadas por el gobierno federal en nuestros territorios ancestrales, violando tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Han sido documentados proyectos mineros en etapa de exploración: La Diana, con una superficie de 15,000 hectáreas, entregada a la empresa Casmin (Canadiense), que afectaría los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Iliatenco, Paraje Montero y Malinaltepec; y Corazón de Tinieblas, con una superficie de 50,000 hectáreas, entregada a la empresa Hochschild Mining (Inglesa), que afectaría los núcleos agrarios de Totomixtlahuaca, Acatepec, Tenemazapa, Pascala del Oro, Colombia de Guadalupe, Iliatenco, Tierra Colorada, Tilapa y San Miguel del Progreso. Se trata de los mismos territorios que ahora el gobierno federal quiere administrar con su proyecto de Reserva de la Biósfera.

5. Demandamos el derecho de nuestros pueblos de construir y conducir nuestras instituciones educativas. Las asambleas deben ser el espacio donde se discuta sobre la educación que queremos. Que los pueblos participen plenamente en el diseño e implementación de los programas educativos, para que respondan a nuestras necesidades y garantizar que se eduque según las formas de vida comunitaria, para no seguir reproduciendo el mismo modelo educativo del sistema. Lucharemos por formar consejos integrados por ancianos, autoridades, profesores y estudiantes, para vigilar y construir la educación que se necesita, siempre consultando e informando a nuestras asambleas.

Atentamente

Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio

Anexo 3. Respuesta de la CONANP a la Declaración de Cochoapa

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
Camino al Ajusco No. 200, Piso 3, Ala Norte.
Colonia Jardines en la Montaña.
C.P. 14210, México, D.F.

Oficio Número FOO.DGCD.- 207/13

Ciudad de México, a 31 de Mayo de 2013.

CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES
EN DEFENSA DEL TERRITORIO
MONTAÑA DE GUERRERO.

Hago referencia a su oficio s/n con fecha 13 de abril de 2013, mediante el cual informa a la Presidencia de la Republica, su rechazo total para el establecimiento de un área natural protegida denominada "Reserva de la Biosfera de La Montaña de Guerrero" afectando a los núcleos agrarios de Cochoapa El Grande, San José Vista Hermosa, Iliatenco, Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Paraje Montero, San Miguel del Progreso, Santa Cruz del Rincón, Mixtecapa, Pueblo Hidalgo, Huehuetepec y Zitlaltepec.

Asimismo, en el citado escrito mencionan los motivos que originaron la inconformidad de los núcleos agrarios y que a continuación hago referencia:

"...(CONANP) presento un Estudio para que el Ejecutivo Federal emitiera Un Decreto de La Reserva de La Biosfera de la Montaña de Guerrero. Que abarca 157,896.08 Hectáreas, que forma parte del Núcleo Sagrado de Nuestros Pueblos Na'a Savi y Me'phaaa. Sin pedir la Autorización de Pueblos que son los verdaderos dueños de esta Riqueza Natural..."

"Como Pueblos Originarios de La Costa-Montaña Reiteramos Públicamente Nuestro Rechazo a La Creación de Una Reserva de Biosfera, en esta Región olvidada por Las Autoridades porque implica que el Gobierno Federal tome el Control de Nuestros Territorios ancestrales y nos sometan a Normatividades ajenas a nuestra forma de organización comunitaria, prohibiendo realizar nuestras actividades tradicionales, relacionadas con el uso y disfrute de nuestros bienes naturales..."

"Tenemos conocimientos de que han sido certificadas hasta por 30 años, 25, 991.46 hectáreas en 12 Núcleos agrarios bajo la Figura de Áreas destinadas voluntariamente a La Conservación que, según La Reforma de La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 2008, son reconocidas como Áreas Naturales Protegidas consideradas "Áreas Productivas Dedicadas a una Función de Interés Pública" tanto la Reserva de La Biosfera como Las Certificaciones afectan nuestro derecho a decidir sobre el uso y disfrute de nuestros Territorios Ancestralmente, criminalizando nuestras Prácticas Agrícolas Tradicionales y el Aprovechamiento Colectivos de Nuestros Bienes Naturales."

"Ante estos agravios causados por Autoridades Federales y Estatales. Como Pueblos nos Organizamos para hacer frente a esta amenaza que violenta nuestros derechos colectivos. El 6 de Octubre de 2012 realizamos el Primer Foro Regional para Informar y Analizar estas nuevas Formas de despojos promovidas por varias Instituciones Gubernamentales, que cuentan con Recursos Financieros y diversidad de Programas enmarcados en lo que ahora pomposamente llaman Áreas Naturales Protegidas..."

"...En este proceso de articulación comunitaria hemos nombrado a Nuestro Consejo Regional de Autoridades en Defensa del Territorio, conformado por Comisariados de Los Núcleos Agrarios afectados..."

"...Rechazamos El Decreto de Reserva de La Biósfera de La Costa-Montaña de Guerrero y demandamos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la Revocación, en su caso, La Terminación por anticipado de Los Certificados como Áreas destinadas voluntariamente a La Conservación, por no haber cumplido con Las Normas Internacionales sobre El Derecho a La Información..."

"...Estas Certificaciones inducidas de manera perversa por Las Autoridades, impiden el uso y disfrute de Parcelas, afectando a La Población que sobrevive del Trabajo Agrícola..."

De acuerdo a lo anterior, esta Dirección General en coordinación con la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico, ponemos a su consideración los siguientes elementos que tienen como finalidad el aclarar la inconformidad y desacuerdo por los trabajos realizados para el establecimiento de un área natural protegida denominada "Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero", y su intención de descertificar los predios destinados a la conservación.

1.- Desde octubre de 2012 el personal de la CONANP suspendió toda actividad relacionada con la promoción del proyecto de la Reserva en la Montaña de Guerrero.
2.- El Gobierno del estado de Guerrero, en mayo de 2013, en voz del ex secretario de Medio Ambiente y recursos naturales, también declaró que el proyecto se suspendía por parte del gobierno del estado.
3.- Las áreas dedicadas voluntariamente a la conservación son un instrumento de buena fe que se maneja directamente por las personas, comunidades o ejidos que envían la propuesta.
4.- Las áreas de conservación voluntaria fueron resultado de un proceso amplio consenso de las comunidades, se requería de asamblea "dura", es decir con el porcentaje más alto de participación, se hicieron recorridos con comité de cada pueblo. Las actas de asamblea disponible en cada expediente del área es la evidencia más clara de la participación de la comunidad.
5.- La delimitación del polígono de cada área fue la propuesta de la comunidad, y, como lo establece la ley, en ningún caso se incluye parcelas agrícolas y ningún otro tipo de aprovechamiento, para que se certifiquen las parcelas se tiene que recibir la solicitud expresa del propietario, de tal modo, que esta Comisión

Nacional no tiene registrada ninguna parcela de la montaña de Guerrero como área certificada, lo cual se puede comprobar en la página de internet de esta institución, donde se tiene un listado de las áreas certificadas de 2002 al 2013.

6.- No existe ninguna restricción de uso o actividades de manejo que no haya sido enviada por Ustedes en su respectiva propuesta.

7.- La autoridad encargada de hacer valer el manejo de los predios certificados es la que Ustedes eligieron y nos hicieron conocer por medio de su propuesta, y que en todos los casos el responsable de dicho manejo es el comisariado de bienes comunales.

8.- El estar considerados como Áreas Dedicadas Voluntariamente a la Conservación y mantener el certificado, es una ayuda que puede ser útil para resistir, negociar o atenuar, en favor de Ustedes, la posibilidad de ser objeto de proyectos de minería. Esto se debe a que se les va a tratar como Área Natural Protegida de Competencia de la Federación y que tendrán los mismos mecanismos de defensa y apoyo que pudiera tener cualquier área establecida mediante decreto.

9.- No obstante la contradicción radical de la Declaración presentada, en este año 2013, es que algunos de los opositores que firman ese documento están trabajando con proyectos financiados con programas de subsidios de la CONANP. Han dicho que si bien no hay aceptación de la reserva, ellos quieren participar en los programas de conservación.

10.-En caso de que decidan dar por terminada la vigencia de sus predios como áreas certificadas, sólo tendrán que hacernos llegar un acta de asamblea, dura, registrada ante el Registro Agrario Nacional (RAN), haciéndonos saber su decisión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
EL DIRECTOR GENERAL

DAVID GUTIERREZ CARBONELL

c.c.p.- Lic. Carlos Eduardo Romero Castro.- Director General de Atención Ciudadana de la Oficina de la Presidencia de la República.- seguimiento_ac@presidencia.gob.mx. núm. de folio. GR-2200024153-6.
c.c.p.- Lic. Jorge Legorreta Ordorica.- Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT. Atención.ciudadana@semarnat.gob.mx.
c.c.p.- Ing. Guillermo Ramirez Filippini.- Director Regional de Centro y Eje Neovolcanico.- Presente.
c.c.p.- M.V.Z Roberto de la Maza Elvira.-Encargado de la Dirección de Certificación.- Presente.
c.c.p.- Archivo.
VG.-2701

RME/GJGV*

Anexo 4. Respuesta de la Secretaría de Economía a la Declaración de Cochoapa

COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO

SE

Oficio No. 422.01/ 079 /2013
Asunto: Declaración en defensa del Territorio Comunitario Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero

México D.F. a 4 de julio del 2013.

CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES EN DEFENSA DEL TERRITORIO, ORGANIZACIONES SOCIALES Y PUEBLO EN GENERAL COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO.

Presentes.

En atención a su escrito de fecha 13 de abril del presente año, presentado en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República el 29 de abril de 2013, mediante el cual expresan su total rechazo a la minería y solicitan la cancelación de las concesiones otorgadas en su territorio en razón de que se otorgaron sin consultárseles, me permito hacerles los siguientes comentarios:

Las concesiones mineras son otorgadas en apego al procedimiento establecido en la ley aplicable a la materia, sin embargo este otorgamiento por sí solo no implica la inminente extracción de los minerales, ya que los concesionarios mineros deben cumplir con los requerimientos estipulados en el marco normativo de nuestro país y obtener los permisos necesarios, tanto de orden federal como de orden estatal y hasta municipal. Deben también establecer contacto con los dueños de los terrenos superficiales del área comprendida en la concesión minera a fin de realizar los trabajos previos de prospección y exploración para, si es el caso, elaborar un proyecto concreto.

Por lo que respecta al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al que hacen referencia, es necesario señalar que aunque México ha suscrito dicho Convenio, la legislación secundaria para su aplicación aún no se expide. Así mismo, las regulaciones ambientales existentes suplen la falta de reglamentación del Convenio.

La protección al ambiente es una obligación de todas las industrias, por ello en la normatividad ambiental se contemplan obligaciones específicas para los concesionarios que pretendan llevar a cabo actividades de exploración, explotación o aprovechamiento. Tales obligaciones están encaminadas a determinar que las actividades que se realizarán no tienen repercusiones graves en el medio ambiente y que, en todo caso, se cuenta con la capacidad técnica y económica para llevar a cabo la explotación de recursos sin deteriorar el equilibrio ecológico.

En la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su artículo 34, se prevé la realización de consultas públicas respecto de los proyectos, entre éstos los mineros, sometidos a consideración de la autoridad federal en materia de medio ambiente para la obtención, en su caso, de la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA), que es requisito indispensable para que un concesionario minero pueda iniciar sus trabajos.

Av. Puente de Tecamachalco No. 26 Edif. 3, Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11000 México, D.F.
Tel. 5729 9100 Ext. 46200.

En tal virtud, una vez que los concesionarios mineros presenten ante la autoridad ambiental la manifestación de impacto ambiental, y a solicitud de cualquier persona de la comunidad podrá llevarse a cabo una consulta pública, en la que las comunidades que pudieran ser afectadas con dicha actividad tienen la posibilidad de manifestar sus comentarios, argumentos y consideraciones, a fin de que se les tome en cuenta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Director General

JUAN JOSÉ CAMACHO LÓPEZ

C.c.p.- Mario Alfonso Cantú Suárez, Coordinador General de Minería, para conocimiento.- Presente
Ref. Vol.4201300390-01; 4221300111

Anexo 5. Comunicado de Prensa CRAADT. Agosto de 2014

COMUNICADO DE PRENSA

23 de agosto del 2014

A TODOS LOS NÚCLEOS AGRARIOS EJIDALES Y COMUNALES DEL PAÍS

A LOS GRUPOS EN RESISTENCIA EN CONTRA DE LAS REFORMAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL

AL PÚBLICO EN GENERAL

El Consejo de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica de Guerrero en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera, reunidos en la comunidad de La Ciénega y en el marco de nuestros encuentros mensuales en donde revisamos las estrategias de trabajo en contra de la minería y de la reserva de la biósfera, así como de la revisión de las actuales reformas constitucionales y de sus leyes y reglamentos, denunciamos que en la Montaña-Costa Chica la Procuraduría Agraria a nombre del Ing. Cruz López Aguilar, procurador agrario nacional, ha iniciado una nueva andanada de iniciativas y estrategias que continúan en la misma lógica del despojo de la tierra, el territorio y nuestros bienes naturales tal como lo plantean las actuales reformas estructurales.

El día de hoy en plenaria realizamos la lectura del oficio #RTG-450/2014 que el procurador agrario dirige a las autoridades de uno de los núcleos agrarios integrantes del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña, en el cual de manera burda, con total falta de respeto y burlándose de nuestra autonomía y autodeterminación hizo la siguiente solicitud:

"En seguimiento a las instrucciones dadas por el procurador agrario Ing. Cruz López Aguilar, me permito dirigirme antes ustedes, con la finalidad de solicitar que en su asamblea general de ejidatarios y o comuneros próxima a realizarse, se someta a consideración de sus representados, la firma de la hoja denominada ***"Declaración de Hombres y Mujeres Campesinos, Productores de Alimentos*** *a través de sus órganos de representación, la cual será firmada por los cargos de representación y vigilancia" .* En el mismo oficio solicita la firma de recibido de un par de libros: ***"Marcos Legales Agrarios",*** que son un compendio de todas las leyes que se acaban de aprobar y que giran en torno a las nuevas disposiciones que derivarán en el despojo de los territorios de millones de indígenas y campesinos.

Posteriormente dimos lectura a una indignante declaración prefabricada y anexa al oficio con título: ***"Declaración de Hombres y Mujeres Campesinos, Productores de Alimentos,*** en la cual literalmente, a nombre de los campesinos y campesinas, nos quieren hacer responsables, *"partidarios y de estar de acuerdo con las actuales políticas"*, además de mencionar que nosotros buscamos con urgencia una reforma de ley agraria y para el campo, la cual hoy sabemos será parte del colofón de la ofensiva que el estado mexicano se ha planteado para desaparecernos.

No obstante lo anterior, esa infame declaratoria también menciona que nosotras y nosotros le solicitamos al Presidente Peña Nieta firme un nuevo acuerdo con nosotros y nuestras organizaciones para ***"Transformar de Fondo el Destino de los Recursos Público de Nuestro Sector"***.

Esa falsa declaratoria prefabricada por el Ing. Cruz López que habla a nombre de nosotros como campesinos y campesinas, la cual están entregando en todos los núcleos agrarios pidiéndonos la firmemos, es una gravísima falta de respeto que nos soliciten la firma de esa Declaratoria sin que ninguno de nosotros haya participado y opinado en su elaboración, lo cual demuestra la total ausencia de una política democrática e inclusiva para todos los mexicanos y mexicanas, por parte del gobierno federal.

Nos ofende de sobremanera que violen nuestros derecho a la palabra, a la autonomía y a la autodeterminación que como pueblos campesinos e indígenas tenemos. Nos ofende que piensen que no nos daremos cuenta de sus argucias que apuntalan a nuestro despojo y aniquilamiento. Nos ofende que estén entregando todo nuestro territorio a nombre de La Nación, cuando a ésta no se le ha considerado en la toma de opiniones y decisiones.

Invitamos a todos los pueblos que integramos los núcleos agrarios en todo el país a que no caigan en esta falsa firma de la Declaratoria que intenta legitimar el despojo que ya han establecido con las reformas constitucionales, sus leyes y reglamentos.

Llamamos a que todas y todos estemos pendientes de estas argucias que desde el actual sistema de poder se imponen y se implementan con un falso sentido de progreso y desarrollo.

Hacemos un fuerte llamado para que cese el hostigamiento e intimidación del cual somos objetos todos y todas los que nos sumamos a estos esfuerzos colectivos.

Exigimos que la PA retire inmediatamente su *"Declaración de Hombres y Mujeres Campesinos, Productores de Alimentos"*, a la vez que exigimos un alto a las estrategias de engaño, desinformación y para el despojo de nuestros territorio y sus bienes naturales.

¡LOS GOBERNANTES TIENEN QUE APRENDER A RESPETAR NUESTRO SISTEMA NORMATIVO, NUESTROS USOS Y COSTUMBRES Y NUESTRA TOMA DE DECISIONES!

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y DE RESERVAS DE LA BIOSFERA!

¡EL TERRITORIO Y SUS BIENES NATURALES SON NUESTROS!

EL CONSEJO DE AUTORIDADES AGRARIAS POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO EN CONTRA DE LA MINERÍA Y DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA

Se anexan a este comunicado lista de firmantes y fotografías que dan fe de esa burda declaratoria.

Anexo 6. Declaración de San José Vista Hermosa

A las comunidades de la región Costa Montaña de Guerrero,
A los pueblos de México y del mundo,
A la opinión pública nacional e internacional,
A los medios de comunicación nacional e internacional.

¡El Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio seguimos organizados y en pie de lucha!

En nuestro décimo primer foro declaramos:

1. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras entregadas por el gobierno federal en nuestros territorios ancestrales, violando tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si no respetan nuestros derechos y nuestra tierra tendremos que defenderla con la fuerza y el corazón de nuestros pueblos.

2. Rechazamos las Áreas Naturales Protegidas y demandamos la revocación, o en su caso, la terminación por anticipado de los certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. Estas certificaciones imponen nuevas reglas ajenas a nuestros usos y costumbres, en especial amenazan nuestra milenaria agricultura de montaña, afectando a la población que sobrevive del trabajo agrícola.

La regulación, vigilancia y mantenimiento de las tierras ancestralmente conservadas quedarán a cargo de nuestras comunidades. No aceptaremos más certificados, ni inscribir bajo cualquier figura de conservación oficial nuestras tierras. Los recursos económicos que se gestionen o se propongan otorgar a las comunidades con la finalidad de mantener la conservación de las tierras ancestralmente cuidadas deben entregarse sin condicionamiento alguno.

3. Denunciamos que la supuesta Cruzada Nacional Contra el Hambre ha sido una estrategia para militarizar nuestro territorio y darnos el mensaje de que debemos volvernos dependientes alimentariamente. Buscando someternos como pueblos originarios al romper nuestra cultura de autosuficiencia. Denunciamos que los militares han llegado disfrazados de cocineros, instalando comedores y regalando colchonetas, sin embargo se han dedicado a cercar el territorio comunitario, contratando informantes, entrevistando niños y realizando tareas de exploración nocturna. Marcando puntos clandestinamente, con placas metálicas y varillas enterradas, acompañados por geólogos.

4. Rechazamos todas las políticas y leyes que ponen en riesgo nuestra agricultura tradicional, sea mediante dinero por dejar de sembrar con los programas de Pago por Servicios Ambientales o través de proyectos de reconversión productiva que vienen a cambiar nuestra milpa por monocultivos perennes o de programas como maíz por bosque, las semillas mejoradas y los paquetes tecnológicos que son un peligro de contaminación que se mete directo al corazón de la vida campesina: nuestras semillas y la vida en la milpa. Decimos que defenderemos nuestra agricultura y

nuestras semillas criollas que son la base de nuestra alimentación y de nuestra sobrevivencia.

5. Rechazamos los intentos de acabar con el ejido y los bienes comunales, a través de la nueva iniciativa de reforma a la Ley Agraria, así como de las ya aprobadas reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Amparo. Exigimos el respeto a la propiedad colectiva de nuestras tierras conforme al espíritu original del Artículo 27 constitucional y a nuestros derechos como pueblos originarios. Repudiamos la reforma para el campo recién anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto.

6. Rechazamos las reformas que los malos gobiernos están imponiendo, en especial la reforma energética que termina de entregar nuestros territorios y los recursos del subsuelo, destruyendo la soberanía nacional y el futuro de nuestra patria, de nuestros hijos y de nuestros nietos.

7. Demandamos el derecho de nuestros pueblos de construir y conducir nuestras instituciones educativas. Las asambleas deben ser el espacio donde se discute la educación que queremos. Que los pueblos participen plenamente en el diseño e implementación de los programas educativos, para que respondan a nuestras necesidades y garantizar que se eduque según las formas de vida comunitaria, para no seguir reproduciendo el mismo modelo educativo del sistema.

8. Exigimos respeto irrestricto a nuestros Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitaria, a nuestras Policías Comunitarias, amparadas por las leyes nacionales e internacionales en materia de derecho indígena. Nuestros Policías Comunitarios son un cargo honorífico de servicio al pueblo y son parte de nuestros sistemas normativos como pueblos originarios.

Ratificamos que frente a la destrucción de nuestros territorios y de las formas de vida comunitarias, a la pobreza en que nos han dejado, es en el ejercicio pleno de nuestros derechos como pueblos que nos proponemos defender y recuperar el control de nuestros territorios.

San José Vista Hermosa, 25 de enero de 2014

Atentamente

Consejo de Autoridades Agrarias de la Costa Montaña de Guerrero en Defensa del Territorio Comunitario